



MINISTERIO DE DEFENSA



**PANORAMA ESTRATÉGICO
2002/2003**

INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS



MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

**PANORAMA ESTRATÉGICO
2002/2003**

Febrero 2003

FICHA CATALOGRÁFICA DEL CENTRO DE PUBLICACIONES

PANORAMA estratégico 2002/2003 / Instituto Español de Estudios Estratégicos. — [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2003.— 238 p. ; 24 cm.

NIPO 076-03-047-9.— D.L. M 10548-2003.

ISBN 84-7823-969-3

I. Instituto Español de Estudios Estratégicos II. España. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica, ed. III. Serie

Relaciones internacionales / Seguridad internacional / Política exterior / Estudios estratégicos / Conferencias / Convención Europea / Unión Europea / Asia / Africa / Iberoamérica / Estados Unidos / Europa Central / Europa Oriental / Países bálticos / Países mediterráneos / Rusia / España / Bruselas / Barcelona / Sevilla / 2002

Edita:



NIPO: 076-03-047-9

ISBN: 84-7823-969-3

Depósito Legal: M-10548-2003

Imprime: Imprenta Ministerio de Defensa

Tirada: 1.100 ejemplares

Fecha de edición: Febrero, 2003

**SECRETARÍA GENERAL DE
POLÍTICA DE DEFENSA**

**Dirección General de Relaciones
Institucionales de la Defensa
Instituto Español de
Estudios Estratégicos**

Grupo de Trabajo número 5/02

PANORAMA ESTRATÉGICO 2002/2003

Las ideas contenidas en este trabajo son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IIEE, que patrocina su publicación.

CARTA DEL DIRECTOR

El pasado mes de noviembre de 2002 he sido nombrado Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), dependiente de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa, cargo del que, como es lógico, me siento más que orgulloso.

A lo largo de estos últimos años, nuestro querido IEEE ha elaborado, en el seno de los Cuadernos de Estrategia, diversos Panoramas Estratégicos, contando para ello con las personas destinadas en este Instituto y de valiosos colaboradores.

Creo, sin embargo, llegado el momento de iniciar una nueva andadura con nuestro querido Panorama modificando, no sólo su aspecto externo, sino también la forma de elaborar su contenido.

Para poder llevar a cabo este cometido, comenzaremos este año a trabajar conjuntamente con el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos que, aunque de reciente creación, ya tiene acreditado un alto prestigio en el campo de la investigación y análisis de estudios estratégicos. Creo que esta nueva orientación, e importante colaboración, le va a proporcionar un mayor interés y difusión en los medios, instituciones y organismos nacionales y extranjeros especializados en dichos temas.

Quisiera, finalmente, expresar mi mayor agradecimiento a todas aquellas personas que, en los últimos años, han colaborado eficazmente con nosotros y que, gracias a su esfuerzo y dedicación, han hecho posible que el Panorama Estratégico haya salido adelante y sea un trabajo de reconocido prestigio dentro y fuera de España.

JAIME RODRÍGUEZ-TOUBES NÚÑEZ
Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

Por Javier Pardo de Santayana y Coloma

Capítulo I

PANORAMA ESTRATÉGICO MUNDIAL 2002/2003

Por Ramón Armengod López

Capítulo II

LA CONTRUCCIÓN DE EUROPA

Por Javier Pardo de Santayana y Coloma

Capítulo III

EUROPA CENTRO-ORIENTAL Y EUROASIA

Por María Angustias Caracuel Raya

Capítulo IV

EL MEDITERRÁNEO

Por María Dolores Algora Weber

Capítulo V

IBEROAMÉRICA

Por Marcelino Dueñas Fontán

Capítulo VI

ÁFRICA

Por Alejandro Cuerda Ortega

Capítulo VII

ASIA

Por Fernando Delage Carretero

EPÍLOGO

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El año 2002 se abrió entre los ecos del Once de Septiembre, que puso a la seguridad en el frontispicio de la política mundial, y se cerró con la incógnita de Irak y con el desafío de Corea del Norte. Estados Unidos, en pie de guerra contra el terrorismo, hizo valer su condición de única gran potencia mundial y no mostró gran interés por contar con el apoyo europeo. Cuando se esperaba que Norteamérica impulsara una movilización general para abordar los grandes problemas de fondo, su actitud en el campo económico y en relación con determinadas iniciativas judiciales y sociales de ámbito internacional causó cierta decepción, deteriorando considerablemente su imagen de nación líder. Sin embargo, a finales de año la cumbre de la OTAN registró un cambio muy positivo en esta tendencia, al recuperarse la acción colectiva de Estados Unidos con sus socios europeos gracias a la decisión de crear una fuerza de respuesta para la lucha antiterrorista. En esta cumbre la Alianza Atlántica pasó de ser una organización para la defensa de Europa a constituirse en una organización para la seguridad global.

Hitos muy importantes en el haber de 2002 fueron las decisiones tomadas en orden a la ampliación de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea. Moscú las aceptó pese a que ambas incluían la incorporación de los países Bálticos, posibilidad que siempre había sido rechazada por el gobierno ruso en lo que se refiere a la eventual entrada de estos países en la OTAN.

Otro acontecimiento importante fue el acuerdo unánime alcanzado respecto a Irak por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya eficacia resolutive se vio habitualmente anulada como consecuencia de la reproducción en su seno de la pugna entre los intereses de las potencias y por el uso que éstas solían hacer del derecho de veto.

Las relaciones entre Europa y Estados Unidos con Rusia progresaron en una línea muy constructiva de buen entendimiento, y en China comen-

zó a institucionalizarse la repercusión política de la apertura económica, mientras, en Japón, el escaso vigor de la economía condenaba a este país a un tono político menor. Por su parte, India y Pakistán mantuvieron en vilo a la comunidad internacional con reiterados enfrentamientos que no pasaron a mayores.

El proceso de consolidación del nuevo régimen afgano pasó por duras pruebas que revelaron su fragilidad. Arabia Saudí, que acabó por autorizar el empleo de sus bases en el caso de una acción contra Irak, se debatió entre sus propias contradicciones, que hacen más interesante la posibilidad de forzar un cambio de régimen en Bagdad. La visión norteamericana parece incluir la idea de que este cambio repercutiría favorablemente en Oriente Próximo y en la evolución del conflicto palestino israelí, que entró en una espiral de violencia con muy difícil salida.

El terrorismo siguió mostrando sus dientes en repetidas ocasiones, aun sin repetir ningún ataque de la envergadura del perpetrado el 11-S. La mayor preocupación se centró en la posibilidad de aquella amenaza se combine con la de la proliferación de armas de destrucción masiva. Europa progresó en el desarrollo de sistemas y mecanismos eficaces, sobre todo en los ámbitos policial y judicial, orientados a contener éstas y otras amenazas que, como el crimen organizado y el narcotráfico, se ven favorecidas por el fenómeno de la inmigración y por la inminente ampliación de la Unión Europea.

En el ámbito de la construcción de Europa, el año se abrió con la instauración definitiva del euro, que culminaba la primera fase de creación de una unión económica y monetaria, y con los trabajos de la Convención, que han de orientar el futuro del proceso europeo y preparar a la Unión para asumir la ampliación sin excesiva pérdida de cohesión y eficacia.

El hecho de que la Alianza Atlántica haya roto los límites que se había impuesto, extendiendo ahora su alcance a cualquier lugar del mundo, no hace sino confirmar el acierto que tuvimos al ampliar el año pasado el ámbito de interés de este "Panorama Estratégico" a todo el continente asiático, en correspondencia con el creciente interés mostrado por el Gobierno español hacia aquella vasta región del mundo. Indudablemente, la ampliación del radio de acción de la Alianza Atlántica refuerza la supremacía norteamericana pero también exige a Europa un esfuerzo suplementario que justifica doblemente nuestro empeño editorial.

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO

CAPÍTULO PRIMERO

PANORAMA ESTRATÉGICO MUNDIAL
2002/2003

PANORAMA ESTRATÉGICO MUNDIAL 2002/2003

Por Ramón Armengod López

PREÁMBULO

En septiembre de este año el presidente George Bush Jr. hizo público un documento que pasará a la historia del siglo XXI. “La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos”, cuyos capítulos dedicados a la *estrategia internacional de EE.UU.* constituyen un programa para la construcción de un orden internacional nuevo, esta vez con más visos de realización que el “New order”, de su padre el presidente Bush Sr., en 1991.

Su lectura transmite, como la mayor parte de las declaraciones del Presidente norteamericano, un sentido de autoafirmación, de totalidad, una proclama imperial, una convocatoria generosa e imperativa a los otros pueblos y potencias de este mundo que impresiona, se esté o no de acuerdo con ella.

“Las grandes luchas del siglo XX entre la libertad y el totalitarismo terminaron con una victoria decisiva de las fuerzas de la libertad y un solo modelo sostenible de éxito nacional: libertad, democracia y libre empresa” exactamente el éxito y valores norteamericanos. “Hoy Estados Unidos disfruta de una fuerza militar sin paralelo y de gran influencia económica y política”, que utiliza para establecer la “Pax Americana”: “defendemos la paz al luchar contra los terroristas y los tiranos”.

De esta manera el Panorama Estratégico Mundial se ha convertido en Seguridad Nacional de Estados Unidos.

LA GRANDEZA DE NORTEAMÉRICA

En marzo de 1999, el profesor Huntington en un artículo titulado “La superpotencia solitaria” afirmó que Washington no se daba cuenta de la antipatía que levanta; el presidente Clinton hizo suyas las recomendaciones de Huntington (menos arrogancia y más colaboración) para contrarrestar la envidia, incompreensión y rechazo que la democracia imperial suscita.

En un brillante artículo el Embajador y Profesor italiano Sergio Romano señala que la potencia imperial de nuevo cuño “ha vivido los cien años del siglo XX peligrosamente”, ofreciendo tres caras. Potencia hegemónica, defensora de la democracia liberal y un modelo social y económico encarnado en la modernización, el progreso, la innovación tecnológica, el libre-cambio y las leyes del mercado, concluyendo que: “el intenso materialismo norteamericano es a la vez un idealismo que le empuja hacia lo grande, y esta grandeza es inseparable de ambos”.

Otro rasgo característico norteamericano es el “espíritu de frontera”, con el que se sacrifica todo a nuevas metas: la nueva frontera en este caso es la tecnología de la información (el Internet “made in USA”), la base de la tercera revolución industrial, que no sólo modifica el proceso productivo sino que cambia el modo de pensar y el comportamiento de los humanos, al tiempo que origina un crecimiento sin precedentes en la historia del capitalismo, vertebrando a la vez la estructura y la ideología de las sociedades. Por ello la globalización y la americanización del mundo actúan conjuntamente, como también su rechazo.

El ex-presidente de Italia Francesco Cossiga dice a este respecto: “La hegemonía americana se mantiene por su poder militar y por un sistema de formación único en el mundo. En las universidades americanas se están formando los grupos de dirigentes de todo el mundo. De esta manera Norteamérica ha implantado un liderazgo intelectual y político ante la falta de ideas y de programas alternativos en los otros países, ya avanzados, ya en vía de desarrollo”.

El resto del mundo, pues, copia de un modo u otro el modelo americano, modelo basado en lo económico; paradójicamente Occidente ha derrotado la interpretación materialista de la historia, el marxismo, justo cuando la afirma en la práctica.

Los factores económicos determinan los políticos sobre todo en lo exterior y no al revés: la geoeconomía ha suplantado a la geopolítica y la conquista de los espacios económicos es más importante que la de los físicos; en las actuales relaciones de fuerza del mercado mundial, resulta difícil escapar a la supremacía de Estados Unidos.

La economía es, por tanto, la piedra angular del sistema: no son ya ni la ética ni la política las que dirigen la sociedad interna o internacional, sino la economía, porque se cree que sólo respetando sus reglas, se alcanza lo que se considera el bien común y fin último de una democracia: el mayor bienestar posible y en cantidad tal que permita su distribución general.

Estos principios crean conflictos entre Estados Unidos y la periferia de este mundo, Norteamérica es imitada porque ofrece ideas y ventajas al resto del mundo, pero también es envidiada por su poder y bienestar. Lo primero facilita la hegemonía americana, lo segundo provoca reacciones políticas y culturales, a veces de corte religioso, y ambos factores alimentan el terrorismo en sus distintas formas pues la mezcla de irritación y envidia varía según las regiones.

La identificación entre americanización y globalización lleva además a hacer responsable a EE.UU. de las fortalezas y debilidades del sistema, del crecimiento de la riqueza o de la miseria, de muchos de los desequilibrios y marginaciones. Y sin embargo como dicen grandes expertos: “Hoy el mundo necesita a América más que nunca”.

Pero a una Norteamérica que escuchase al Papa Juan Pablo II, cuya exhortación apostólica *Ecclesia in America* señala que la globalización puede ser negativa, “si se rige por las meras leyes de mercado aplicadas según las conveniencias de los poderosos y atribuyéndole un valor absoluto a la economía”. En tal caso los resultados son: “el desempleo, la disminución y deterioro de ciertos servicios públicos, la destrucción del medio ambiente y de la naturaleza, el aumento de las diferencias entre ricos y pobres y la competencia injusta (por el proteccionismo de los ricos), que coloca a las naciones pobres en situación de inferioridad cada vez más acentuada”. El Papa propone “un orden económico en el que no domine únicamente el criterio de beneficio y una cultura globalizada de la solidaridad”, y denuncia entre otras cosas la corrupción y la “globalización cultural” “impuesta por medios de comunicación que promueven valores materialistas”.

Consecuencias del 11 de septiembre de 2001

El 11 de septiembre de 2001 ha obligado a solventar las dudas que pudiera tener el propio liderazgo norteamericano sobre el modo de ejercerlo: el brutal atentado contra los símbolos de su poder, la revelación ante el mundo entero de la vulnerabilidad del imperio, ha obligado a repensar casi todo, a dar rienda rápida a transformaciones que de otra forma hubieran sido paulatinas y, en lo posible, consensuadas en lo internacional.

Como ha dicho el embajador Richard N. Haass, Jefe de Planificación del Departamento de Estado, en la conferencia anual del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres: “El 11 de septiembre de 2001 ha configurado la conducta que Estados Unidos va a tener tanto en temas internos como internacionales, aunque esa conducta no está aún del todo definida” pues hay lecciones del 11 de septiembre de 2001 que aún no han sido incorporadas a la reflexión de Washington.

Entre las primeras conclusiones se encuentra la necesidad de volver a examinar la globalización desde el terrorismo: “la globalización en sí no es ni un bien ni un mal. Es una descripción del estado del mundo y un proceso dinámico evolutivo, que crea nuevas vulnerabilidades, junto con nuevas oportunidades”, y conduce a que los problemas transnacionales tengan respuestas multilaterales. Por tanto, “por muy poderosos que sean los EE.UU., sin sus aliados no pueden fácil y eficientemente enfrentarse con problemas que trasciendan sus fronteras”: tampoco Norteamérica debe cerrar los ojos ante ciertas realidades molestas en nombre de la lucha contra el terrorismo “como hicimos durante la guerra fría en nombre del anticomunismo”, es decir no puede olvidarse de promover reformas políticas y económicas en ese mundo exterior, antiguo aliado contra el marxismo y ahora hogar de la amenaza terrorista.

Washington debe también examinar de nuevo el conjunto de sus relaciones internacionales incorporando a las conclusiones nuevos datos, por ejemplo, las actitudes actuales de Rusia y China. Por último, la estrategia para garantizar la seguridad del territorio nacional tiene que ser forzosamente internacional, sin limitarse como hasta ahora a que el sistema defensivo se orientase a amenazas exteriores, y también que esta nueva estrategia no cierre Estados Unidos al mundo ni que su seguridad colectiva dañe a los derechos individuales.

Estas reflexiones de una personalidad tan cercana al Secretario de Estado Colin Powell pueden equilibrar las sucesivas declaraciones del otro sector de la administración americana, los duros, e incluso el alcance de las hechas por el propio Presidente (nunca hay que olvidar que habla “urbi et orbe”, es decir, primero para su electorado nacional y luego para los amigos y enemigos mundiales de Norteamérica) separando la retórica presidencial para uso interno de las declaraciones de principio y de los propósitos para disuadir a los adversarios y convencer a los aliados.

En este año 2002 se han definido unas líneas, principios o reglas de actuación de la administración norteamericana la “Doctrina Bush” que suponen también nuevas condiciones para las opciones y perspectivas de los otros países, potencias o no.

El documento citado en el preámbulo de este “Panorama”, *El manifiesto estratégico internacional de EE.UU.* es un resumen de los análisis, intenciones y compromisos públicos de Washington después del 11 de septiembre de 2001, partiendo de su convicción de que las grandes potencias del mundo están de su lado contra el terrorismo, lo que permite a Estados Unidos “extender los beneficios de la libertad al mundo entero” y convertir “este tiempo americano del mundo” en “décadas de paz, prosperidad y libertad”. Estados Unidos se erige en “paladín de los anhelos de dignidad humana” para lo que cuenta con su experiencia: “Estados Unidos no es sólo una sociedad más fuerte, sino una sociedad más libre y justa”. Por tanto puede fortalecer las alianzas para derrotar el terrorismo; además es “una nación pacífica pero terrible cuando se provoca su ira” y su responsabilidad ante la historia es “liberar al mundo del mal”, “o construimos un mundo de justicia o viviremos en un mundo de coerción”.

Aquí el Presidente Bush desliza un párrafo que merece toda la atención: “no existe ninguna doctrina que pueda prever todas las circunstancias en las que esté justificada la acción directa o indirecta de Estados Unidos.” Mas existen algunos principios estratégicos para ello: “establecer relaciones e instituciones internacionales que puedan ayudar a gestionar las crisis locales”; “EE.UU. ha de ser realista sobre su capacidad de ayudar a quienes no desean ayudarse a sí mismos”, pasando a hablar del conflicto entre Israel y Palestina, para acabar enfocando a los Estados “al margen de la ley” o malhechores “cuyos dirigentes maltratan a sus pueblos, malgastan sus recursos nacionales en beneficio propio, amenazan a sus vecinos, y no respetan el Derecho Internacional, quieren obtener

armas de destrucción masiva para lograr sus fines agresivos, protegen al terrorismo, rechazan los valores humanos básicos y detestan a EE.UU. y todo lo que representan”: se trata sin duda de un retrato del régimen iraquí.

Continúa el documento afirmando que para combatir las armas de destrucción masiva se luchará contra su proliferación. Aunque durante la guerra fría las armas de destrucción masiva eran el último recurso, “hoy nuestros enemigos las consideran armas de preferencia” por lo que Estados Unidos, en caso de amenaza, no esperará para reaccionar porque “la magnitud del daño potencial no permite tal opción”. “No podemos dejar que nuestros enemigos den el primer golpe”.

“Durante siglos el Derecho Internacional ha reconocido que no es necesario que los países sufran un ataque antes de que puedan legalmente defenderse del peligro inminente de ataque”; además hay que adaptar “el concepto de amenazas inminentes a las amenazas y objetivos de los adversarios de hoy” cuyo blanco no son sólo las fuerzas militares sino también la población civil. Así pues, “para impedir o evitar tales actos hostiles de nuestros adversarios, EE.UU. actuará preventivamente si es necesario”.

Añade el presidente norteamericano que “los países no deben usar la prevención para la agresión”, lo cual deja perplejo al lector, si no fuera porque concluye afirmando que las razones de las acciones norteamericanas, incluidas naturalmente las preventivas “serán claras, la fuerza mesurada y la causa justa...”

Otras partes del discurso están dedicadas a definir objetivos no bélicos: “al crecimiento económico y a la libertad mundial por medio del mercado y del comercio libre” a fin de “expandir el desarrollo, abrir sociedades y construir la infraestructura de la democracia”.

Después se lleva a cabo una extensa revisión de las relaciones de Washington con los otros centros principales del poder mundial, empezando por Europa y la OTAN (que adelanta los resultados de la Cumbre de Praga) Asia y Pacífico, Japón incluido, Rusia, India y China, y las expectativas que merecen su apoyo.

Termina el importante documento con el *plan de transformación de la estructura e instituciones de la seguridad nacional* de Norteamérica, de alcance global, ya que para defender a Estados Unidos “sus fuerzas armadas deben dar seguridad a aliados y amigos y disuadir a los demás

de entrar en competencia militar con Estados Unidos y derrotar al adversario si fracasa la disuasión”. Defensa y seguridad, pues, se identifican.

Dado el carácter global de la guerra contra el terrorismo “Estados Unidos necesitará bases y estaciones dentro y más allá de Europa occidental y el nordeste de Asia así como también facilidades para el despliegue de sus fuerzas a gran distancia”.

“Hemos aprendido de la historia que la disuasión puede fallar, y de la experiencia, que a algunos enemigos no les puede disuadir otro argumento que acudir a la prevención”.

Habla luego largamente de los servicios de información, de diplomacia, con especial mención al esfuerzo para que las intenciones de Norteamérica sean entendidas en todo el mundo y para combatir “la lucha de ideas”, dando el interesante ejemplo de que “la guerra al terrorismo no es un choque de civilizaciones, sino que revela un choque dentro de una civilización, una batalla por el futuro del mundo islámico”.

Dos últimas afirmaciones cierran el documento: “hoy en día la diferencia entre asuntos internos y exteriores va disminuyendo”, lo que significa el fin del espléndido aislamiento y la confirmación de la americanización mundial, y otro párrafo que consagra el unilateralismo: “en el ejercicio de nuestro liderazgo respetaremos los valores, juicios e intereses de nuestros amigos y socios, pero estaremos preparados para actuar separadamente cuando lo requieran nuestros intereses y nuestras responsabilidades exclusivas”.

Hay que agradecer, sin duda, al presidente Bush Jr., su claridad en la definición de unos objetivos, en los que la seguridad nacional de la democracia imperial se convierte en estrategia internacional.

LA RELACIÓN EUROPA-NORTEAMÉRICA EN 2002

Durante el año 2002 la “relación trasatlántica” ha sido intensa pero no siempre armoniosa. Como dice el General Pardo de Santayana: “a lo largo de 2002 se fue constatando que los norteamericanos tendían a la acción unilateral y daban muestras evidentes de que estaban dispuestos a prescindir incluso de sus socios y amigos. Así, la esperada acción solidaria de los países occidentales frente a los grandes problemas quedaba diluida y al arbitrio de la visión norteamericana, que, de este modo, perdía la posi-

bilidad de enriquecerse con las aportaciones bien intencionadas de los europeos”.

Los preparativos de Washington para emprender una acción militar contra el régimen iraquí, abrió otro debate entre Estados Unidos y sus aliados europeos, que denunciaban la tendencia al unilateralismo norteamericano en la ONU y su impaciencia ante las posiciones europeas, mientras que “los norteamericanos denunciaban, con razón, la escasa disposición europea para asumir las cargas de seguridad”.

El desacuerdo entre las dos orillas del Atlántico continúa en todos los grandes temas mundiales: ecología (negativa norteamericana al firmar el protocolo de Kioto), cooperación al desarrollo y lucha contra el hambre y las enfermedades (“Cumbre de la Tierra” de Johannesburgo), rechazo de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, proteccionismo económico para los sectores productivos propios en contra de la liberalización exigida por el mercado global, etc. “La actividad norteamericana en estos asuntos restó credibilidad y autoridad moral al liderazgo de Washington, porque fue interpretada como falta de sensibilidad respecto a algunos de los grandes problemas que afectan al conjunto de la humanidad” (Pardo de Santayana): la administración norteamericana de 2002 primaba sus intereses y su jurisdicción privada a expensas de la solidaridad mundial, es decir, mostraba una tendencia a utilizar su poder, no sólo para garantizar un orden nuevo, sino para incluir sus privilegios hegemónicos.

En realidad, lo que se debate es el papel de Europa en ese equilibrio o desequilibrio mundial intensificado por los atentados del 11 de septiembre de 2001, es decir, la reevaluación de su relación con la democracia imperial con la que comparte, pese a todo, valores e historia comunes.

Consumida la tradición aislacionista norteamericana a la que aún parecía inclinarse el electo presidente Bush Jr. en 2000, el intervencionismo es la única filosofía que queda, sancionada por la “Estrategia de Seguridad nacional” del presidente Bush, antes citada: el unilateralismo o el multilateralismo serán sus formas, dependiendo de las ocasiones, de la evolución del orden nuevo, de las orientaciones político-económicas e ideológicas en que se basen las sucesivas administraciones norteamericanas, del grado de adaptación de la legalidad internacional a los nuevos equilibrios de fuerza, del grado de éxito de las globalizaciones, económica, tecnológica, cultural, etc..., de los resultados de la “estrategia de seguridad” y de las intervenciones bélicas que comporte, de la emergencia de nuevas potencias rivales, regionales o totales, etc.

Por tanto, el debate debería escapar de esa dicotomía entre unilateralismo y multilateralismo y centrarse en el papel mundial de Europa en la globalización; en cuál debería ser éste en el futuro, en los medios a poner y la voluntad para ello, y lo que es más difícil, en cuál sería la aportación indiscutible de Europa a ese orden internacional que se está construyendo, y que está centrado en la hegemonía norteamericana. Dicho de otro modo: ¿cómo podría Europa completar y equilibrar a la democracia imperial y ser socio activo de ésta, precisamente para la aplicación universal de los valores democráticos?

Las percepciones contrapuestas mutuas

Desde hace poco tiempo, pero ya antes del 11 de septiembre de 2001, las tradicionales discrepancias entre Europa y Norteamérica sobre sus respectivos papeles se han intensificado como consecuencia, no sólo de los intereses en competencia, sino de sus distintas percepciones de los riesgos mundiales compartidos, con puntos de especial distanciamiento como la valoración de la situación en el mundo árabo-islámico, frontera sur de Europa así como objetivo prioritario norteamericano por su especial relación con Israel, el tratamiento de las otras civilizaciones y, por último, una distinta actitud ante la legalidad internacional trabajosamente creada en el siglo XX, con tantas lagunas e imperfecciones y en parte superada por la desaparición de la bipolaridad y por el impacto de la globalización.

Este distanciamiento, y una cierta crispación, se han producido por una mutua percepción negativa, alentada en la Unión Europea por el temor a la deriva actual de Washington y por los efectos en el modelo socioeconómico propio de una globalización identificada con la americanización y de su absolutización como necesidad histórica; y, por el lado norteamericano, por una escuela de pensamiento neoconservador, basado en una concepción de la democracia y la economía que aparca, cuando es preciso para el progreso, los aspectos políticos y éticos de aquéllas, con la certeza de la necesidad de imponerla por la fuerza, en su caso. Fuerza que sólo poseería Norteamérica, y al servicio del “destino manifiesto” de tan grande y virtuoso pueblo que encierra en sí las últimas y mejores posibilidades humanas.

Dichos supuestos ideológicos, sostenidos por grupos oligárquicos económicos y fundamentalistas cristianos y judaicos, han sacado a la luz,

tras los perversos ataques terroristas del 11 de septiembre, tales teorías, que se han ido fraguando a lo largo de la década de los 90. El Profesor Robert Kagan, que participa de esta ideología, señala que este alejamiento de percepciones se debe a:

- El enorme cambio en la relación de poder entre Estados Unidos y la Unión Europea desde la II Guerra Mundial, intensificado en la década de los 90 y coronado ahora.

Como subraya el Teniente General Pardo de Santayana, “el espectacular aumento de los presupuestos norteamericanos dedicados a la defensa, ha disuadido a los europeos de cualquier esperanza de cerrar el “gap” de capacidades militares, aunque sea parcialmente”.

Europa, para Kagan, se confía a “una red de leyes, reglas y negociaciones internacionales”, base de un mundo en el que la fuerza no cuenta mucho, “donde se prohíbe la acción unilateral a los poderosos, donde todas las naciones, cualquiera que sea su fuerza, se ven protegidas por reglas comunes, consensuadas, de conducta”, mientras que Estados Unidos no teme a un mundo real, basado en la lucha general y en las políticas del poder.

- Esta actitud de Europa es consecuencia de las experiencias negativas de sus conflictos del pasado y de la protección norteamericana durante la “guerra fría”, que le ha permitido constituirse como un área pacífica: la seguridad colectiva se le garantizaba desde el exterior, a través de la OTAN. Por ello Europa es un éxito económico, una realidad política en desarrollo con una política exterior deficiente y, según el Secretario General de la Alianza Atlántica, Lord Robertson, “un pigmeo militar” que no tiene voluntad de dejar de serlo.
- Europa, como consecuencia de lo anterior, cree que su misión es llevar al mundo su experiencia de negociación y de paz, mientras que Norteamérica no tiene esta experiencia: en el siglo XX, sólo su fuerza garantizó el triunfo de la democracia frente al comunismo.
- Sin embargo, Europa debe desarrollar sus capacidades militares de acuerdo con Norteamérica, cuya fortaleza sigue necesitando tanto o más que antes.

Por su parte, Estados Unidos debe “mostrar más comprensión para las sensibilidades ajenas y cuidar más lo que los padres de la Patria llamaban “un decente respeto por la opinión de la humanidad”.

La expresión en Europa de esta disparidad (dejando a un lado los

parciales y sistemáticos ataques de los grupos antiglobalización, de los restos del marxismo y del tercermundismo, y también de ciertos rencores históricos de las derechas nacionalistas), se manifiesta en un pensamiento legalista y negociador, que existe, con diversos matices, en todas las grandes naciones europeas:

- a) Estados Unidos merece la comprensión, la amistad y el reconocimiento europeo, pero ello no quita el que la interpretación europea de los valores democráticos comunes y, sobre todo, su aplicación a la cambiante realidad internacional, pueda estar en mayor o menor sintonía con las políticas de los grupos que ostentan el poder en Washington.
- b) Europa es un competidor económico de Estados Unidos, pero ello no le convierte en adversario político. Cree en el proceso de globalización actual y en el libre mercado.
- c) Europa respeta a todas las culturas existentes en el mundo y cree que todas ellas puedan compartir ciertos valores, que Europa trata de extender por el consenso y con la legalidad internacional.

Defiende un mundo plural, regido por el derecho internacional, encaminado a la paz, al desarrollo y a la solidaridad.

- d) Está dispuesta a enfrentarse, junto con Estados Unidos y todas las naciones amantes de la paz, no sólo contra el terrorismo, sino contra las otras amenazas mundiales ecológicas, tráfico de armas y drogas, luchas regionales, catástrofes naturales y hambre, etc.
- e) Prefiere la acción multilateral para la lucha contra todos estos enemigos, y el respeto a las reglas jurídicas internacionales, aún cuando éstas puedan ser modificadas.

Por último, Europa no puede aceptar el uso de la fuerza unilateral y del ataque preventivo, incluso para conseguir el alumbramiento de un orden mejor internacional, como tampoco que la actual opción por los medios consensuados y pacíficos sea fruto de la debilidad militar antes que de una madurez moral en el comportamiento internacional.

Es decir, Europa trata de aplicar a un mundo global los mismos criterios éticos y democráticos que rigen ahora en su interior las relaciones entre las propias naciones europeas.

CONCLUSIÓN

Europa debe hacer un doble esfuerzo: dialogar continuamente con las sucesivas administraciones norteamericanas, negociar los conflictos de intereses y de políticas en otras áreas tratando de comprender cada momento político e ideológico de su poderoso aliado, e influir en la opinión y decisiones norteamericanas a través de la participación y la persuasión informativa, igual que los medios norteamericanos lo hacen ante su propia opinión pública, mostrando en todo momento su decisión y esfuerzo en la defensa de los valores e intereses comunes.

Un buen ejemplo de lo anterior han sido los resultados de la reciente cumbre de Praga, al recuperarse la acción colectiva de Estados Unidos y sus socios europeos, y convertir la Alianza Atlántica, de una organización para la defensa de Europa y del espacio atlántico, en otra organización para la seguridad global.

ACONTECIMIENTOS EN EL AÑO 2002

La lucha contra el terrorismo internacional ha sido el gran tema del año 2002. Desde el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos está en guerra, una guerra muy larga y difícil, y espera que todo el mundo civilizado esté también en guerra contra ese enemigo impreciso, difuso, sin territorio y sin una sola cabeza visible localizada, que puede combatir y ser combatido desde cualquier punto del planeta.

Sin embargo, hay pruebas que indican cuál es el peligro inminente y dónde está, que, según Washington, es en los componentes del eje del mal: Irak, Corea del Norte e Irán (una vez que Afganistan quedó atrás, rodeado por una nueva red de alianzas y por la presencia norteamericana en Asia Central).

La lucha contra el terrorismo ha extendido el despliegue militar norteamericano a ochenta países y ha facilitado que Rusia y China se alineen con la posición norteamericana para ajustar cuentas con sus propios rebeldes islámicos.

Al Qaeda sigue actuando en atentados puntuales (Túnez, Bali, Kenia) pero Washington puede intervenir en cualquier rincón del planeta para la defensa de sus ciudadanos, intereses y seguridad, y ha proclamado su disposición a utilizar la guerra preventiva.

En Europa, la opinión pública, a pesar de sus discrepancias con Estados Unidos, también ha reaccionado ante la inseguridad planetaria, no tanto contra el terrorismo como contra la inmigración, entendida como causa de inseguridad.

La Alianza Atlántica y la Unión Europea, en las cumbres de Praga y Copenhague, han decidido proceder a una ampliación que hace retroceder las pretensiones rusas y acentúa la influencia norteamericana, cuya mayor baza es la posible adhesión de Turquía a la Unión Europea, con lo que Europa lindaría directamente con el mundo islámico y sería más dependiente de la “paz americana”, cualquiera que ésta sea, como antes lo estuvo por su frontera con el marxismo; por tanto, la política euromediterránea sufriría grandes cambios o quedaría reducida al Magreb y al Mediterráneo occidental.

Aunque la guerra contra el terrorismo afecta a todos, en primera línea del frente está el mundo islámico desde Marruecos a Indonesia. En 2002 el desencuentro entre este mundo y Occidente se ha agrandado; en primer lugar, por la destrucción mutua y creciente del proceso de paz por israelíes y palestinos, que Washington no ha sabido detener a pesar de sus deseos de congraciarse con el mundo árabe para involucrarlo en la solución bélica del problema iraquí.

En el caso de Irak se dan todas las condiciones de la política norteamericana actual para intervenir: la tipificación como régimen del mal, la prioridad de los criterios económicos sobre los políticos, y el consenso, dentro de la propia administración norteamericana, de utilizar la acción multilateral con mantenimiento de las formas legales internacionales (la resolución 1441 lo prueba) siempre que estas no cierren el paso a la acción unilateral, si ésta es precisa.

Todo ello enmarcado por la promesa de democratizar a la sociedad iraquí, esta vez en profundidad, por medio de la educación y del liberalismo económico: el objetivo sería hacer de Irak un ejemplo para la región, como primer paso para la homologación del mundo árabe a Occidente.

Otra de las preocupaciones norteamericanas es el extremo asiático del mundo islámico, junto con otro miembro del eje del mal, Corea del Norte, que últimamente está dispuesta a reanudar sus planes de desarrollo nuclear.

En cambio, América del Sur y África no son prioritarias en este momento para Washington; la primera, porque su violencia no se integra

en el terrorismo islámico y su proceso de liberalización económica y de norteamericanización cultural siguen adelante, mientras que África subsahariana, con sus conflictos, hambruna y desequilibrios socioeconómicos, no forma parte de las huestes del mal y en ella no se discuten los intereses norteamericanos (obtención de petróleo y otras materias primas).

POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA EN EL AÑO 2002

En principio, la política exterior de España ha sido continuación de la establecida por el gobierno Aznar al iniciar su segunda legislatura (véanse los Panoramas Estratégicos de 2001 y 2002), basada en aumentar el peso internacional de España en un sistema mundial en evolución, contando con el dinamismo interno de la sociedad española y con su integración en los procesos de globalización en marcha. El marco de planeamiento general está recogido en el “Plan Estratégico de Acción Exterior 2000-2004”, adaptándolo a la dirección y aceleración que en los flujos internacionales ha ocasionado el 11 de septiembre, especialmente en las dos organizaciones a las que España pertenece (Unión Europea y Alianza Atlántica), y en las que realiza buena parte de su acción internacional.

Dividiremos este capítulo en dos temas: la presidencia europea desempeñada por nuestro país en el primer semestre de 2002, y la formulación actualizada de sus prioridades básicas por la presente ministra de Asuntos Exteriores como consecuencia de los nuevos equilibrios actuales.

La presidencia española de la U.E.

España, que asumía a comienzos de este año su tercera presidencia europea en un complejo entorno internacional, ha demostrado su capacidad para gestionar con eficacia la mayor empresa colectiva internacional, generando consenso y diseñando posiciones comunes, ya que Europa — con una voz unificada— puede tener un importante papel en la escena internacional por sus esfuerzos por la paz para Oriente Medio y por su interlocución privilegiada con Estados Unidos, Rusia e Iberoamérica.

Recordemos que los principales objetivos que se marcó el gobierno español en el programa “Más Europa”, para el semestre de presidencia española de la Unión Europea fueron: actuar de forma coordinada en la lucha contra el terrorismo, potenciar la visibilidad exterior de la Unión

Europea con una labor intensa en el ámbito de la Política Exterior; garantizar el éxito en la introducción del euro y profundizar en las reformas económicas, reforzar la política común de asilo e inmigración, que ha entrado ya en su fase final, y avanzar en la reforma de las instituciones.

Veamos el desarrollo de estos puntos:

Lucha contra el terrorismo

En la construcción del “tercer pilar” de la Unión Europea (un espacio común de libertad, seguridad y justicia), España siempre ha desempeñado un papel pionero, como en Tampere, consciente de la necesidad de un planteamiento de mayor colaboración y armonización legislativa y judicial entre los Estados miembros para luchar contra una lacra que afecta a todos.

Por ello, la presidencia española hizo de la lucha contra el terrorismo su prioridad desde el primer momento y logró que se aprobaran y se pusieran en marcha nuevos instrumentos que suponen la materialización de los acuerdos políticos adoptados durante la presidencia belga.

Las medidas adoptadas durante el semestre de presidencia española se centraron en cuatro objetivos básicos: el reforzamiento de los instrumentos del Estado de Derecho, el fortalecimiento de la colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, el establecimiento de una mayor cooperación internacional y la lucha contra las estructuras de apoyo al terrorismo, y el impulso a aquellas medidas que evitan que los terroristas se aprovechen del “espacio común” europeo. También se decidió potenciar el papel de Europol en la lucha contra el terrorismo, aumentando sus recursos, tanto humanos como materiales, y se ha actualizado la lista de organizaciones, entidades y personas vinculadas al terrorismo.

Igualmente, en el marco del Plan de Acción de lucha contra el terrorismo, aprobado por los Quince en septiembre del pasado año 2001, se pusieron en marcha medidas orientadas a combatir las estructuras de apoyo al terrorismo en aspectos tales como el intercambio de información, control de fronteras, cooperación de las unidades de inteligencia financiera y congelación de cuentas.

Con todo ello, el consejo Europeo de Sevilla ha reconocido la importancia de la lucha contra el terrorismo en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común y de la Política Común de Defensa.

El euro y las reformas económicas

El éxito en la introducción del euro, y la reactivación del espíritu de Lisboa, son dos grandes temas que ocuparon también a la presidencia española.

España ha seguido muy de cerca el proceso de puesta en circulación de la nueva moneda común, en estrecha colaboración con la Comisión y con el Banco Central Europeo. El euro es ya hoy sinónimo de estabilidad y crecimiento en una economía que ha recuperado el espíritu modernizador de Lisboa a fin de convertir la U.E. en un área más dinámica con vistas al pleno empleo en el horizonte de esta década, y para ello, el Consejo Europeo de Barcelona, en el mes de marzo, marcó un punto de no retorno en el proceso de liberalización y apertura económica, con un ambicioso calendario de realizaciones en materias clave como la *energía, los transportes y el empleo*.

“Más Europa” ha significado también un avance considerable en materia energética. La interconexión del 10% de las redes eléctricas, que será realidad en 2005, sacará a España de su condición de “isla energética”. Además, las pequeñas y medianas empresas y los grandes consumidores podrán beneficiarse de la apertura del 70% de los mercados de gas y electricidad en 2004.

En el sector del transporte se han puesto en marcha proyectos conjuntos como el Programa Galileo y el Cielo Único Europeo, que se prevé entre en funcionamiento en un par de años.

Por último, la reactivación económica ha estado también muy presente en el Consejo Europeo de Sevilla, donde se adoptaron las grandes orientaciones de política económica (GOPES), que se centran en dos objetivos: estabilidad macroeconómica y crecimiento, basados a su vez en las reformas de los mercados de trabajo, bienes y servicios, lo que supone la reafirmación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento del programa de Lisboa.

Política Exterior

El semestre de la presidencia española estuvo marcado por un escenario internacional convulso, tras los sucesos del 11 de septiembre, con tensiones permanentes en Oriente Medio y una crisis económica internacional que ha afectado a las economías más desarrolladas.

La identidad europea de criterios en la Política Exterior y de Seguridad Común se ha plasmado en el conflicto de Oriente Próximo, con las Declaraciones de Barcelona y Madrid y las iniciativas del “Cuarteto”, grupo formado por la Unión junto a Rusia, Estados Unidos y el Secretario General de Naciones Unidas, destinadas a alcanzar la paz en la zona.

En la *Cumbre Unión Europea-Estados Unidos* se pudo constatar la identidad de valores que preside las relaciones trasatlánticas y el compromiso mutuo en la lucha contra el terrorismo, con avances concretos como el convenio de cooperación judicial en materia penal, extradición y asistencia mutua.

La *Cumbre Unión Europea-Rusia* ha afianzado una relación estratégica, reforzando el diálogo político y la cooperación en materia de seguridad y de gestión de crisis.

Asimismo, en la *Cumbre Unión Europea-Canadá* se avanzó en la cooperación en materia de investigación científica y tecnológica, medio ambiente y desarrollo sostenible.

Las relaciones europeas con Iberoamérica se siguen estrechando, en gran parte gracias a España. A los tradicionales vínculos culturales y económicos hay que unir ahora una cooperación privilegiada, que se plasma en acuerdos concretos, como los firmados con México y Chile, y que implican un status especial de relación en materia política, financiera y comercial; no en vano, Europa es el mayor inversor mundial en la zona.

Con la Declaración de Madrid se ha desarrollado un nuevo marco de relaciones con la región, basado en la plena igualdad y en los esfuerzos compartidos, reiterando el compromiso europeo con la democracia y con el desarrollo institucional pleno de todos los países iberoamericanos.

En cuanto al Mediterráneo, se ha continuado el Proceso de Barcelona, iniciado en 1995 para mejorar las relaciones entre las dos riberas del Mediterráneo.

En la cumbre de Valencia se fijaron objetivos concretos culturales, comerciales y económicos, muy importantes para la estabilidad y el desarrollo de la región. También se firmó un acuerdo de asociación con Argelia; se puso en marcha la Fundación Euromediterránea para el diálogo cultural, y se decidió que el Banco Europeo de Inversiones duplique sus fondos en la región.

Política común de asilo e inmigración

Este tema ha sido abordado con detalle en el Consejo Europeo de Sevilla, donde se constató la necesidad de gestionar los flujos migratorios con una política en común que permita la integración de las personas legalmente establecidas en Europa y, al mismo tiempo, luche contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. Europa necesita la inmigración y se beneficia de ella, pero su capacidad de acogida es limitada. Para ello, en Sevilla se aprobó un paquete equilibrado de medidas globales, que giran en torno a cuatro ejes de actuación:

- En primer lugar, la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos.
- En segundo lugar, la gestión coordinada de las fronteras exteriores de la Unión Europea, primer paso hacia una política de fronteras.
- En tercer lugar, la integración de la política de inmigración en las relaciones de la Unión con terceros países. Europa ofrece cooperar técnica y financieramente con los países de origen del tránsito de la inmigración ilegal, tanto en la gestión conjunta de los flujos migratorios como en el control de fronteras, y en la readmisión de inmigrantes ilegales por parte de esos países.
- En cuarto lugar, se han adoptado medidas para acelerar los trabajos legislativos en marcha orientados a la definición de una política común de asilo e inmigración.

Ampliación de la Unión Europea

Se ha realizado un intenso trabajo para alcanzar el consenso de los Quince en este punto. España, más allá de intereses particulares o visiones parciales, ha reafirmado su compromiso con la que será la mayor transformación de la historia europea: la ampliación hacia el Este.

Se ha cumplido el calendario previsto en Estocolmo, de tal forma que los tratados de adhesión podrán firmarse en el primer trimestre del próximo año, y los diez candidatos actuales podrán ya participar en las elecciones de 2004 al Parlamento Europeo.

El esfuerzo ha sido objeto de reconocimiento por la Comisión Europea, pues se ha conseguido cerrar un total de ochenta y tres capítulos, es decir, más que en ninguna otra presidencia.

También se ha respetado el plan de trabajo de Niza, con la adopción de posiciones comunes en los capítulos de agricultura, política regional y coordinación de los instrumentos estructurales, disposiciones financieras y presupuestarias e instituciones, por lo que se puede afirmar que el proceso ha entrado en su fase final.

Reformas institucionales

El Consejo Europeo de Sevilla supuso un avance notable en el ámbito de las reformas institucionales, de acuerdo con las propuestas presentadas por la Presidencia y por el Secretario General del Consejo, y con los trabajos realizados por la Convención para el futuro de Europa.

Se han aprobado medidas que no requieren modificación alguna en los Tratados y cuya efectividad y operatividad es por tanto inmediata, permitiendo agilizar y simplificar los mecanismos comunitarios. Las mejoras afectan al Consejo Europeo y al Consejo, en cuyo caso se han aplicado tres principios: coordinación, simplificación y transparencia.

Existe una voluntad general en la Unión para profundizar en el debate actual sobre la Presidencia de la Unión. En Sevilla, se constató la necesidad de buscar entre todos mecanismos que hagan más eficaz el actual sistema de rotación semestral, respetando, al mismo tiempo, el principio de igualdad entre los Estados miembros.

Por último, ha quedado claro que hay que construir una Europa cercana y próxima a sus ciudadanos.

Formulación actual de la política exterior de España

Para esta formulación nos referiremos a las distintas comparecencias realizadas por la ministra de Asuntos Exteriores en otoño de este año para exponer las líneas generales de la política de su departamento. He aquí una enumeración de sus prioridades:

- Objetivo prioritario de dimensión total de la política exterior española en la lucha contra el terrorismo, que pone en peligro “la pervivencia de nuestros principios, nuestros valores y las normas fundamentales de convivencia”.
- Relaciones con Estados Unidos. Los eventos del 11 de septiembre “han otorgado, si cabe, una mayor importancia al estrechamiento de la cooperación con Estados Unidos”, a la política militar y a la

lucha contra el terrorismo. Consecuencia de lo anterior es la apuesta por “la intensificación del diálogo entre la Unión Europea y los Estados Unidos y el fortalecimiento de las relaciones trasatlánticas”. “Nuestra presencia e influencia (la de España) en los diversos foros requiere la profundización de las consultas y la cooperación con Estados Unidos; además, en otro plano, “prestaremos una atención preferente a la comunidad hispana” en el interior de aquel país.

- España se considera radicalmente parte de Europa y por ello quiere “una Europa unida y fuerte, capaz de defender sus principios y sus intereses, que por ello ha de tener una política exterior y de seguridad más eficaz y visible”; además el componente comunitario de nuestra política exterior le da fuerza y la completa.

España apoya el compromiso internacional europeo contra el terrorismo y la ampliación de la Unión, “aunque es consciente de los esfuerzos que tendrá que hacer para superar las carencias en sus relaciones con la mayoría de los futuros miembros”.

- España prestará atención especial a las relaciones con la Federación Rusa.
- “La dimensión iberoamericana de España” que “es su principal activo en el mundo y también su mayor responsabilidad, que comparte con el resto de las naciones que integran la Comunidad iberoamericana a un lado y al otro del Atlántico”, debe ser fortalecida como ámbito de democracia y libertad, que son los valores de Occidente.

España se esfuerza para que ese compromiso con Iberoamérica sea asumido por los otros socios de la Unión Europea; una asociación estratégica entre ambas regiones resulta imprescindible en un mundo globalizado. Iberoamérica, gracias a España, está hoy más vinculada que nunca a Europa.

Las inversiones españolas en Iberoamérica, como las demás europeas, le ayudan a “su definitiva integración en la economía mundial, al tiempo que son un imprescindible factor de modernización y crecimiento”.

- En cuanto al Mediterráneo, el marco general lo constituye el llamado “diálogo euromediterráneo”, impulsado desde 1995 por las distintas presidencias españolas, y cuyo resultado es el proceso de

Barcelona, que, como vió el mes de abril en la Conferencia de Valencia, sigue aún activo a pesar de la situación en Oriente Próximo.

Pero la prioridad de la acción exterior de España es el norte de África (especialmente nuestras inevitables relaciones con Marruecos), cuyo carácter estratégico para España obliga a un enfoque global. Puntos destacados del mismo son la regulación de la inmigración, la lucha contra la pobreza y el apoyo a las reformas políticas y sociales, clave de la estabilidad futura del Magreb, lo que incluye cambios sociales: la integración de la mujer, la promoción de los derechos humanos, etc. y, por último, una lucha compartida contra el terrorismo.

En cuanto a Oriente Próximo, nuestra política exterior “reposa en tres ejes, fortalecimiento de las relaciones bilaterales, un diálogo activo y cooperativo con las organizaciones de la región y el seguimiento continuo del proceso negociador arabo-israelí para conseguir una paz justa, global y duradera. España seguirá esforzándose en mantener la coordinación de la Unión Europea con Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas, favoreciendo siempre la vía de la negociación frente a la actual tensión bélica”.

En lo que se refiere a Iraq, España contribuirá a que se encuentre una solución diplomática a la situación actual del país, solución que exige su pleno sometimiento a la legalidad internacional encarnada en la ONU.

España favorece también el diálogo político con Irán.

- Respecto a Asia, se ha desarrollado el plan marco Asia-Pacífico 2000-2002 y se ha creado la Casa de Asia en Barcelona.
- En cuanto a África, se elaboró el plan de acción para África subsahariana 2001-2002, en el plano bilateral. Además, se apoyan los propios esfuerzos africanos para estabilizar la región, tanto en Naciones Unidas como en las conferencias mundiales sectoriales.

Los intereses de España en África se centran en la pesca, en ciertas materias primas y en la regulación de la inmigración.

- En cuestiones de seguridad, España ayuda a los planes de adaptación de la OTAN a los nuevos tiempos: “una OTAN que, al tiempo que se abre a los nuevos miembros del este y sur de Europa, se

prepara mejor para hacer frente a los nuevos retos y amenazas del siglo XXI, en especial a la lucha contra el terrorismo". No es, por tanto, de extrañar que se hayan acogido plenamente y con satisfacción los resultados de la Cumbre de Praga.

- Protección de los derechos humanos y cooperación al desarrollo.
- Promoción de la cultura y lengua españolas y puesta al día de la red consular para cubrir no sólo las colonias españolas, sino los movimientos de los españoles en el exterior (turismo, negocios) y para cooperar al control de los movimientos humanos no comunitarios.

Esta enumeración recoge todos los temas habituales de la política exterior española, pero el orden de prioridades ha sido alterado al colocar como objetivo primario y de dimensión total la lucha contra el terrorismo y unirlo al estrechamiento de la cooperación con Estados Unidos, lo que supone apostar por la concertación con Washington en los foros internacionales y por el fortalecimiento de las relaciones trasatlánticas, es decir, por el diálogo entre Europa y Estados Unidos, lo que no es nada fácil en este momento.

En cambio, la relación con la Unión Europea continúa siendo parte y elemento esencial de nuestra política exterior. Por ello, las otras prioridades (Rusia, Iberoamérica y Mediterráneo) están vistas desde esa pertenencia europea; España puede actuar en solitario en aquellas regiones en las que no existe una política conjunta europea, como son los casos de África y de Asia.

La política exterior española propia, y a veces aislada, aparece en los contenciosos: Gibraltar, Sahara, relaciones con Marruecos, etc.

Entretanto, la diplomacia española, que ha desempeñado con realismo y competencia la presidencia de la Unión Europea en circunstancias menos fáciles que en las anteriores, se enfrenta en 2003 con otro desafío: el de ser miembro electo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, labor que va a poner a prueba, no sólo esa competencia, sino también la trabazón interna de sus prioridades en política exterior, especialmente cuando no se dé una posición común europea en los grandes temas internacionales.

Porque nuestro país (potencia media con una creciente conexión con los centros de poder mundiales, y con una posición geoestratégica que lo hace cauce de acciones en la frontera mediterránea con el mundo arabo-islámico y con el problema del terrorismo) va a ser actor obligado en los

debates del Consejo de Seguridad de la ONU en tiempo de conflictos y de una cambiante formulación de la legalidad internacional.

Este estar en las candilejas es una oportunidad ambivalente: de un lado le obligará a definirse en temas como la descolonización del Sahara y la intervención en Irak, y de otro, le facilitará el defenderse en sus propios contenciosos.

De cualquier modo, la dinámica actual internacional, expuesta en la primera parte de este capítulo, ha de reflejarse en la política exterior española. Esperemos que no la desoriente sino que sirva a esta décima potencia económica mundial, con una rica cultura y una historia perfectamente homologada en democracia y libertades, para dar a la construcción de esa globalización que nos arrastra una aportación específica que sirva para la paz y el orden moral internacionales.

CAPÍTULO SEGUNDO
LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA

LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA

Por JAVIER PARDO DE SANTAYANA Y COLOMA

IMPRESIÓN GENERAL

El año 2002 se abrió con la conmoción, aún reciente, del 11-S, que puso a la seguridad en el frontispicio de la política mundial, y se inauguró con dos acontecimientos sumamente importantes: la instauración definitiva del euro como moneda única y el inicio de los trabajos de la Convención que ha de preparar la Conferencia Intergubernamental de 2004. Con el primero de estos hechos culminaba la primera fase de la construcción de la Unión Europea; el segundo deberá marcar las bases de su futuro.

La entrada en vigor del euro se produjo con una naturalidad sorprendente y vino a demostrar que el proceso seguido por la Unión había tenido el acierto de calar en la opinión pública de los países europeos hasta el punto de no provocar una confusión ni un rechazo significativos. Se cumplieron los plazos sin incidentes y comenzó un periodo de adaptación que con el tiempo debe consolidar nuestra moneda y contribuir a la credibilidad y a la fortaleza del proyecto europeo.

Este hecho, unido a la evolución del clima económico, con sucesivos vaticinios que retrasaban la futura recuperación, y los problemas surgidos en Estados Unidos, donde salieron a la luz importantes escándalos financieros, contribuyeron a que cambiase la permanente tendencia a la baja que había mostrado el valor de la nueva moneda europea respecto al dólar, y ya a mediados del año éste llegó incluso a ser superado en cotización por aquélla, pese a que la recesión en Alemania y el apunte de

recesión en Francia habían hecho bajar aún más la cotización de la nueva moneda europea coincidiendo con su entrada en vigor.

La Convención que ha de preparar la Conferencia Intergubernamental de 2004 inició sus trabajos en marzo, espoleada por la necesidad de perfeccionar las instituciones y así preservar y mejorar su eficacia, que la futura ampliación hace más difícil de conseguir. Esta especie de “refundación” debe asegurar el equilibrio institucional y acercar la Unión a los ciudadanos haciéndola más comprensible. Para lograr estos objetivos se planteó la redacción de una especie de “Constitución” europea. Tan ingente tarea, en la que se armonizará la construcción de una arquitectura común con el respeto y aprovechamiento de la profunda diversidad de Europa, se abrió con un debate al que fueron invitadas las organizaciones sociales y particulares. Se temía que las dificultades de un proceso tan complejo se vieran aún más complicadas por los recelos, tanto de la Comisión, preocupada por la posible adopción de fórmulas intergubernamentales, como de los estados “pequeños” hacia el protagonismo de los “grandes”.

Sin embargo, la presentación hecha en octubre por el presidente de la Convención, Valéry Giscard d’Estaing, transmitió la impresión de que, no sólo se estaban superando algunos desacuerdos iniciales, sino que se producían avances importantes que nos aproximaban al consenso en determinadas definiciones básicas, lo que permite aventurar que pueda llegarse a la Conferencia Intergubernamental habiendo desarrollado algunas propuestas bastantes sólidas.

Los grandes éxitos, como el de la aceptación de una moneda única europea, y las grandes esperanzas, como la suscitada por el inicio de los trabajos de la Convención, no llegaron a ocultar una cierta sensación de decepción respecto al futuro papel político de la Unión. Tras los acontecimientos del 11-S se confiaba en que la comunidad internacional se orientaría hacia una acción multilateral más acusada a la que Europa podía aportar su conocimiento y sus propias cualidades específicas, siquiera fuese dentro de una acción complementaria de la ejercida con su liderazgo por la única gran potencia mundial en el terreno político y militar: los Estados Unidos de Norteamérica.

Motivos había para ello, pues Washington había reaccionado inicialmente ante la nueva situación saldando parte de la deuda con las Naciones Unidas y parecía reconocer la necesidad que tenía del apoyo de los demás, a quienes invitó a adoptar una actitud solidaria de ámbito mun-

dial contra el terrorismo. Pero a lo largo de 2002 se fue constatando que los norteamericanos tendían a la acción unilateral y daban muestras evidentes de que estaban dispuestos a prescindir incluso de sus socios y amigos. Así, la esperada acción solidaria de los países razonables frente a los grandes problemas de fondo quedaba diluida y al arbitrio de la visión norteamericana, que de este modo perdía la posibilidad de enriquecerse con las aportaciones bienintencionadas de los europeos. Incluso la lucha antiterrorista de la Unión Europea, que había empezado ya a dar pasos importantes desde la cumbre de Tampere, era percibida como carente del necesario vigor desde el otro lado del Atlántico, donde se considera parte de una auténtica “guerra”.

La anunciada intención norteamericana de realizar una acción militar contra Irak animó el debate sobre las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Si éstos reprochaban a aquél no ya sólo su tendencia al unilateralismo, sino incluso su escaso aprecio a las opiniones y a la capacidad de Europa, los norteamericanos denunciaban con razón la escasa disposición europea para asumir las cargas de la seguridad. La decisión norteamericana de llevar la cuestión de Irak a las Naciones Unidas y el sorprendente consenso alcanzado a este respecto por el Consejo de Seguridad tranquilizaron la conciencia de los europeos, que apuntaron en su haber la posible influencia de la presión que habían ejercido.

En el terreno económico, la Unión Europea manifestó su indignación por el comportamiento del gobierno de Washington, dispuesto a aplicar una tasa arancelaria de hasta el treinta por ciento al acero importado. También fue objeto de críticas la postura de Estados Unidos respecto al protocolo de Kioto, al Tribunal Penal Internacional y a la “Cumbre de la Tierra” celebrada en Johannesburgo. La actitud norteamericana en relación con estos asuntos restó credibilidad y autoridad moral al liderazgo de Washington, porque fue interpretada como indicativa de falta de sensibilidad respecto a algunos de los grandes problemas que afectan al conjunto de la humanidad y que están demandando urgentemente una solución solidaria.

Alemania y Francia, llamadas a constituir el “motor de Europa”, siguieron sumidas en grandes dificultades, hasta el punto de que los problemas económicos les hicieron merecer sendas amonestaciones por incumplimiento del Pacto de Estabilidad, y forzaron el relajamiento de dicho Pacto con una moratoria de dos años precisamente cuando, por haberse revi-

sado a la baja las previsiones de la zona euro, se hacía imprescindible elevar el potencial de crecimiento de ésta mediante la adopción de reformas estructurales. La “flexibilidad” mostrada a la hora de interpretar el significado del Pacto dio lugar a cierta turbulencia política y puso en duda las intenciones del gobierno germano, que había sido su principal impulsor histórico. También se beneficiaron de la moratoria Francia, Italia y Portugal. Por otra parte, la presión electoral impulsó a Schroeder a proclamar su negativa a apoyar una acción militar contra Irak, con lo cual Berlín renunciaba a ejercer cualquier tipo de liderazgo en el campo de la seguridad y la defensa y establecía una clamorosa diferencia con la actitud del gobierno británico. El aumento de peso adquirido por los Verdes en el gobierno alemán no hará sino inclinar algo más la balanza en el mismo sentido.

La perplejidad a que dio lugar el escaso entusiasmo norteamericano por la acción multilateral hizo que se plantease el futuro del vínculo transatlántico. Y es que, en efecto, el futuro de las relaciones entre Norteamérica y Europa se ha convertido en uno de los grandes debates del momento. Un efecto colateral de este problema, la especial relación de Londres con Washington en materia de seguridad y defensa, también planteó algunas dudas acerca del futuro papel del Reino Unido en la construcción de esta dimensión europea. Recordemos que, aunque desde la cumbre franco-británica de Saint Malo de diciembre de 1998 el primer ministro Tony Blair se había erigido en líder para propiciar el impulso que condujo al establecimiento de un objetivo de fuerza (el “Headline Goal”) que dotará a Europa de una capacidad militar adecuada para desarrollar las misiones tipo Petersberg, de un tiempo a esta parte, y especialmente desde la crisis de Afganistán, el Reino Unido forma equipo con Estados Unidos y parece desvincularse bastante de sus socios de la Unión Europea, quizá porque la visión británica de la Europa de la defensa se limite a una Identidad Europea concebida dentro de la OTAN y a una Política Exterior y de Seguridad y Defensa en el seno de la Unión. Para contrarrestar estas tendencias y dar un nuevo impulso a la defensa europea se habló de la conveniencia de revivir el “espíritu de Saint Malo”, pero el Reino Unido no se mostró muy dispuesto a ello.

El espectacular aumento de los presupuestos norteamericanos dedicados a la defensa disuadió a los europeos de cualquier esperanza de cerrar el diferencial de capacidades militares aunque sea parcialmente, hasta el punto de que no es probable que suponga siquiera un acicate para incrementar los gastos de defensa o asumir actitudes más decididas.

Existe la impresión de que la Unión Europea progresa hacia un objetivo limitado como es el de responder adecuadamente a las misiones tipo Petersberg, pero sin el compromiso y el impulso que vemos producirse en Norteamérica como respuesta a los nuevos retos que le plantea su propia seguridad. El camino que llevaba el desarrollo de la Iniciativa de Capacidades de Defensa de la OTAN (DCI), avanzando razonablemente en los aspectos doctrinales y estructurales pero mostrando escasos progresos en aquellos aspectos que demandan nuevos recursos, suscitó dudas sobre las posibilidades de éxito de un esfuerzo que, como el Plan de Acción Europeo de Capacidades, está esencialmente basado en la voluntariedad, e hizo que el secretario general de la Alianza, Lord Robertson, redujese el número de programas de la citada DCI a unos cuarenta englobados en cuatro bloques, y asignase a cada país unas peticiones concretas. Este nuevo enfoque, que establece compromisos concretos dentro del “espíritu de Praga” (al que nos referiremos inmediatamente), y la inevitable relación que existe entre los avances que puedan realizarse en el ámbito de la OTAN y en el de la Unión Europea, abren una nueva oportunidad para que los europeos reaccionen y se decidan a hacer un esfuerzo a tono con la prioridad que hoy se asigna a los problemas de la seguridad.

Efectivamente, Praga conmovió los fundamentos de la Alianza, cuando ésta parecía plantearse la posibilidad de convertirse en un foro de gestación de misiones ad-hoc porque la respuesta militar tendía a orientarse hacia las operaciones nacionales con apoyo OTAN. La evolución, que podía ser interpretada como una renacionalización, era en sí peligrosa, porque uno de los principales orígenes de la fuerza de la Alianza estriba precisamente en la acción colectiva, y en este sentido cualquier “vuelta a la nacionalización” supondría un retroceso. Pero la decisión tomada por la Alianza en la capital checa en el sentido de crear una Fuerza de Respuesta para afrontar colectivamente la lucha antiterrorista cambia radicalmente la situación.

Realmente, la cumbre de Praga es un acontecimiento histórico en el que la Alianza muestra de nuevo su capacidad de renovación. Venciendo la cortedad europea en materia de seguridad y defensa, el liderazgo norteamericano, además de reincorporar la acción multilateral a la organización atlántica, ha situado a ésta en lo que Washington considera que es la realidad de un mundo amenazado en el que es preciso actuar con gran coraje, ya que los cambios pueden requerir operaciones traumáticas. Con ello, la OTAN culmina su salto desde la defensa de Europa a la seguridad

global. En cambio, en lo que se refiere al contencioso de Irak, prevaleció la postura de Europa, que aunque lealmente alineada con su socio norteamericano, se mantuvo en una línea de cuidadoso respeto a la “legalidad internacional” y logró que el comunicado mantuviese como constante referencia a las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad.

El salto de Praga se hizo también patente en la ampliación del ámbito de actuación militar nada menos que a “cualquier parte” y en la decisión de realizar la mayor ampliación de la historia de la OTAN, que adelanta sus fronteras hasta llegar a compartirlas con Rusia, e incorpora a siete nuevos países (Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia y Eslovaquia) al tiempo que deja abierta la puerta a futuras nuevas adhesiones. Sorprendentemente, la entrada de los tres países bálticos fue aceptada con bastante naturalidad por Moscú, que siempre había considerado que tal operación sería poco menos que un “casus belli”. El problema de la comunicación con Rusia del enclave de Kaliningrado fue tratado separadamente en términos técnicos.

En curiosa sintonía, la Unión Europea también decidió en noviembre su ampliación para 2004 con la incorporación efectiva de otros diez países (Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta), confirmando así la orientación que ya se señalara en la cumbre de Sevilla, donde se perfiló un acceso en bloque de candidatos con muy limitadas ausencias. Sin embargo, esta voluntad común podía verse afectada por varias causas. Se temían dificultades respecto a la financiación de los fondos de cohesión y estructurales, y singularmente, de la Política Agrícola Común (PAC), ámbitos donde se libra una batalla entre los países que más aportan y los países que más se benefician de ellos. El hecho de que España sea beneficiaria de unos y otros planes había aconsejado no abordar abiertamente la solución durante el semestre de su presidencia. Sin embargo, la sorprendente reaparición del deteriorado eje franco-alemán, forzada por la necesidad de un acuerdo entre estos dos países, que eran precisamente los que mejor encarnaban las dos posiciones opuestas, sentó las bases para la posible superación de este obstáculo. Otra de las dificultades que se presentaban era la posibilidad de que el nuevo referéndum que había de celebrarse en Irlanda durante el mes de octubre confirmase la negativa de aquel país a la ampliación, pero, con gran alivio para todos, los resultados de la consulta favorecieron mayoritariamente la aprobación del tratado de Niza.

Por ahora, la ampliación de la Unión Europea deja fuera a algunos países candidatos. La espera de Rumanía y Bulgaria hasta 2007 se alivia con la satisfacción de saber que su plena incorporación a la OTAN se producirá en 2004. En cambio, Turquía siguió sin fecha pese al paquete de reformas aprobado en agosto por su Parlamento de acuerdo con las exigencias establecidas por los criterios fijados en Copenhague en 1993. La Unión Europea, probablemente sorprendida, acogió las reformas con cierta reserva, felicitándose por ellas, sin duda, pero sin aventurarse a adelantar su efecto concreto.

La arrolladora victoria en las elecciones turcas de un partido islámico (el “de la Justicia y el Desarrollo” o AKP), sobre el que hay abierto un proceso de ilegalización y cuyo líder Tayyip Erdogan está inhabilitado por la Justicia, acabó por complicar aún más la situación. La reacción de la Unión fue cauta: por una parte, era preciso evitar una interpretación en “clave religiosa” o “cultural”; por otra, convenía que las aspiraciones turcas al acceso a Europa actuaran como factor moderador ante la temida posibilidad de eventuales excesos. Por todo ello, conocidas las declaraciones del vencedor en el sentido de afirmar su prioridad europea y su fidelidad a la OTAN, y de desmarcar al partido en el poder de su condición religiosa para calificarlo de “nuevo partido de centro”, la Unión Europea adoptó una actitud de gran serenidad y se limitó a la constatación de los futuros hechos, sin atender al efecto de las palabras pronunciadas en el calor de la victoria.

Esta nueva situación, complicada por la desaparición en el parlamento turco de los partidos tradicionales como consecuencia del efecto “boomerang” de una ley electoral que pretendía lo contrario de lo acontecido, arroja dudas sobre el futuro y hace temer que surjan nuevos problemas y puedan complicarse aún más otros ya existentes, como los conflictos greco-turcos en el Egeo y en Chipre o las dificultades para el empleo por la Unión de los medios militares de la OTAN. Lo que es seguro es que los militares turcos vigilarán estrechamente que no se viole el espíritu de la revolución de Atatürk y que las repercusiones estratégicas de lo que algunos han calificado de “terremoto político” no conviertan a éste en una catástrofe. En un ambiente como el actual, en el que el peligro de posibles conflictos de raíz o de pretexto cultural planea sobre nuestras cabezas, queda por ver si Turquía es de ahora en adelante una pesadilla o un oportuno ejemplo.

La evolución de la situación en los Balcanes prosiguió sin demasiados sobresaltos. Bosnia-Herzegovina demostró encontrarse bastante estabili-

zada y en proceso de normalización. En Kosovo, aunque el progreso fue menor, también se observó una tendencia a la pacificación desde la llegada de Ibrahim Rugova a la presidencia. Si estos avances se consolidaran en el futuro, ofrecerían a la opinión pública la constatación de que la oportuna aplicación de la fuerza militar es útil para la gestión de las crisis y facilita el establecimiento de un orden de paz. De aquí la trascendencia que tiene para el futuro el éxito de la acción militar y política que se está desarrollando en aquella región.

En la cumbre de Barcelona se planteó la posibilidad de convertir en una operación europea la denominada “Amber Fox”, desarrollada en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, donde se sitúan efectivos de reserva para Kosovo. Sin embargo, el intento se vio frustrado por la imposibilidad de conseguir un acuerdo completo sobre “Berlín Plus” (es decir, un arreglo permanente para tener acceso a los medios de la OTAN), y la primera operación puramente europea acabaría por ser una operación de policía, y por tanto de carácter estrictamente civil. La propuesta hecha por Francia en el sentido de que se optase por una fórmula tipo “Operación Alba”, es decir, con una nación líder, fue desechada porque suponía renunciar a una Fuerza propiamente “europea” y debilitaba la presión que este asunto ejercía para la solución definitiva del problema al que ya nos hemos referido como “Berlín Plus”, que pone en peligro la consecución del objetivo de operatividad de la Fuerza europea para 2003. Como era de temer, la presidencia griega no registró avance alguno en este aspecto.

En Oriente Próximo, Europa luchó denodadamente, pero con escaso éxito, por moderar la postura pro-israelí de los norteamericanos y empujar a estos últimos a una acción multilateral. Entre los escasos logros obtenidos por la Unión Europea pueden contabilizarse el de haber mantenido a Arafat como interlocutor palestino y la creación del “Cuarteto” formado por la Organización de Naciones Unidas, Estados Unidos y Rusia y ella misma como instrumento de presión sobre las partes en conflicto. Lo cierto es que la situación general empeoró hasta el punto de malograr los esfuerzos promovidos por el interés europeo en impulsar el decaído espíritu de diálogo en el ámbito del Mediterráneo.

En la conferencia Euromediterránea, celebrada en Valencia los días 22 y 23 de abril, se reflejaron claramente las enemistades y las divisiones existentes. La nota más positiva fue el acuerdo establecido entre la Unión Europea y Argelia. En lo que se refiere a la seguridad, la conferencia expresó la necesidad de reforzar el diálogo en materia de defensa, pero encon-

tró unos interlocutores que estaban escasamente motivados como consecuencia de los habituales recelos de los países norteafricanos y de su visión de la Unión Europea como una exclusiva fuente potencial de financiación. En mayo, la presidencia española organizó un seminario generosamente dotado y concienzudamente preparado, pero al cual solamente acudieron segundos espadas por parte de los países árabes. Indudablemente, dos no bailan si uno no quiere, aunque Europa siga dispuesta a practicar la meritoria virtud de la paciencia.

La Unión Europea, que ya se había adelantado en la adopción de medidas contra el terrorismo internacional, abordó en el primer semestre de 2002, durante la presidencia española, uno de los problemas que más ha de influir en su futuro: el de la inmigración. Este fenómeno, que puede calificarse de histórico, estaba demandando soluciones comunes, ya que cualquier disfunción puede ser causa de grandes perturbaciones en los flujos migratorios, como es el caso del posible efecto “llamada”, es decir, de la orientación de dichos flujos hacia los países más permisivos. La urgencia por abordar decididamente este asunto aumentó durante la primera mitad del año cuando se conocieron los resultados de las elecciones francesas y danesas, que permitieron detectar el crecimiento de los sentimientos de rechazo a la inmigración y su traducción en términos políticos a favor de los radicalismos políticos. Singularmente significativo fue el caso de Francia, donde el partido de Jean Marie Le Pen obtuvo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales unos resultados tan sorprendentes que dieron lugar a una segunda vuelta, en la que se produjo una reacción de tintes patrióticos, y encaminada a la salvación de la democracia, en la que se unieron las fuerzas políticas afines al gobierno y a la oposición.

Otro de los objetivos abordados por la presidencia española fue el de recuperar el impulso liberalizador propugnado por Blair y Aznar y acordado en la cumbre europea de Lisboa. Aunque el gobierno francés planteó dificultades que frenaron el ritmo de su avance, pudieron romperse algunas barreras e iniciarse procesos significativos. A lo largo del año hubo ocasión de constatar hasta qué punto los periodos electorales interfieren el desarrollo de los procesos europeos evitando que los gobiernos se signifiquen cuando se trata de materias sensibles para las respectivas opiniones públicas. La continuidad de la acción se ve perturbada por la articulación de los avances en impulsos semestrales cuya responsabilidad principal queda en manos de presidencias de carácter nacional que tienden a buscar éxitos a plazo fijo. El aumento del número de miembros de

la Unión complicará aún más el mecanismo y acentuará la asimetría ya existente.

Tampoco es de desdeñar el problema del elevado costo de las cumbres y del enorme esfuerzo de seguridad que exigen. Como consecuencia de todo ello, en la de Sevilla se presentaron algunas sugerencias encaminadas a modificar el sistema actualmente vigente. Las propuestas anunciadas, que pueden ser clasificadas en dos categorías (la de aquellas que requieren modificación de tratados y la de los que no necesitan tal modificación), apuntan a turnos más largos e incluso a la futura designación de un presidente europeo.

La Cumbre Unión Europea-Latinoamérica-Caribe (17 y 18 de mayo en Madrid) registró como su logro más importante el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Chile, considerado como de “segunda generación” y por ello posible futuro modelo y acicate para que otros países de aquella región sigan los pasos de Santiago. La Unión firmó también un acuerdo con Rusia para coordinar la lucha antiterrorista, presidido por el creciente espíritu de cooperación que observamos entre Moscú y el mundo occidental, cuyas relaciones atraviesan un periodo muy constructivo.

Una de las mejores noticias del año fue la aprobación del proyecto “Galileo” en la cumbre de Barcelona. En este “Panorama Estratégico” reflejábamos el pasado año una impresión sumamente pesimista, teniendo en cuenta la resistencia casi insalvable que ofrecían algunos países, como era el caso de Alemania, cuyos problemas económicos la sitúan en actitudes defensivas frente a cualquier amenaza de nuevo desembolso. El consenso alcanzado respecto al programa “Galileo” supone nada menos que no tirar la toalla en el esfuerzo tecnológico y que Europa no quede definitivamente subordinada a Estados Unidos en este aspecto.

LA CUMBRE DE BARCELONA (15 Y 16 DE MARZO)

Sobre la presidencia española se habían acumulado muchos asuntos importantes, una buena parte de los cuales venían arrastrados de presidencias anteriores. Esta responsabilidad se enmarcaba en un contexto bastante desfavorable, caracterizado sobre todo por la invisible presencia de futuras elecciones en varios países, y entre ellos Francia y Alemania. Aun así, la cumbre de Barcelona logró derribar obstáculos y avanzar significativamente en algunos asuntos de extraordinaria trascendencia y carácter emblemático. Sobre todo, gran parte de los acuerdos tomados

incluyeron un calendario para su puesta en práctica, lo que siempre supone un plus de garantía.

José María Aznar, de acuerdo con Tony Blair, deseaba hacer avanzar el proceso de liberalización iniciado en Lisboa como trampolín para impulsar la economía de los países de la Unión con un salto cualitativo. Lo más importante se consiguió con la aceptación, incluso por parte francesa, de que se inicie una liberalización del sector energético que debe promover un aumento de la competitividad. El acuerdo generalizado se orientaba a una liberalización más radical, pero la resistente postura de Francia, defensora a ultranza del servicio público, obligó a adoptar una fórmula según la cual los mercados del gas y la electricidad quedarían abiertos a los clientes no domésticos el año 2004, lo que representa ya a más de un sesenta por ciento del sector. Éste es sin duda un buen resultado, si se tiene en cuenta que se partía simplemente de cero. Además, la decisión tomada fue acompañada por un acuerdo sobre la adopción de una directiva sobre fiscalidad de la energía en diciembre de 2002 como muy tarde. También se decidió que en la primavera de 2003 se estudie la posibilidad de abrir el mercado a los consumidores domésticos y se estableció un calendario para el incremento de las interconexiones eléctricas, que deben alcanzar el diez por ciento de la generación en 2005. Para España esto supone triplicar las conexiones actualmente existentes y hacer que la península Ibérica deje de ser una especie de isla energética. También liberará a los ciudadanos de la amenaza de cortes de luz por saturación de las líneas.

Otro paso dado en Barcelona, fundamental para culminar la unión económica y monetaria, fue la integración definitiva para el año 2005 de los mercados financieros, que habrían de dotarse ya de directrices sobre garantías financieras, intermediarios, abusos y fondos de pensiones de empleo durante 2002. El sector de los transportes recibió un fuerte impulso gracias a la potenciación del desarrollo de las redes transeuropeas, la aceleración de los movimientos de mercancías por ferrocarril, la liberalización de los servicios portuarios y el establecimiento de un cielo único europeo, que aliviará a los ciudadanos de retrasos y esperas.

Inesperadamente, la Unión llegó a un consenso respecto a la puesta en marcha del programa “Galileo” de satélites de localización, que permitirá a Europa desarrollar su propia tecnología, orientada al uso civil con extrapolación al militar, al contrario del GPS norteamericano del cual hasta ahora dependemos. Las consecuencias en cuanto a impulso a la investi-

gación y desarrollo se suman a las económicas y al efecto estratégico de esta decisión sobre la relación de poder entre Estados Unidos y la Unión Europea, así como sobre el futuro papel de esta última en el ámbito mundial. Durante 2002 deberá aprobarse la financiación del proyecto, proceder a su lanzamiento y crear una empresa conjunta. También se llegó a otros compromisos concretos en materia de educación e investigación para avanzar hacia una Europa moderna, y por tanto basada en el conocimiento.

En el Consejo Europeo de Barcelona se apostó por forzar una solución al contencioso greco-turco que pone en peligro la operatividad de la Fuerza europea en 2003. Para ello se decidió que no habría operación de la Unión Europea en Macedonia si no se llegaba a un acuerdo total sobre “Berlín Plus”. Pero esta presión no consiguió vencer la decidida voluntad de unos y de otros por bloquear el proceso.

Además de los resultados ya expuestos es preciso citar algunos logros concretos de carácter social, como la aprobación de la tarjeta única sanitaria, la decisión de proceder a un aumento gradual de la edad de jubilación o el acuerdo de acabar paulatinamente con la práctica de las prejubilaciones y orientarse hacia un sistema de jubilaciones flexible. La consecución del pleno empleo, que se ha considerado tema absolutamente prioritario para la Unión, se aborda con la aplicación de este tipo de medidas sociales y también con otras a las que ya se ha aludido y que conforman un paquete de reformas económicas en la línea de una liberalización orientada a un crecimiento basado fundamentalmente en el aumento de la competitividad. Ciertamente, el Consejo de Barcelona tuvo un carácter bastante más social de lo esperado por algunos.

LA CUMBRE DE SEVILLA (21 Y 22 DE JUNIO)

El tema estrella del Consejo Europeo de Sevilla fue la inmigración, cuyo volumen y cuyos efectos sociales y políticos estaban exigiendo el establecimiento de una política común que deberá desarrollarse en el plazo de dos años y tendrá carácter prioritario. No se trata de hacer de Europa una “fortaleza”, pero tampoco un “coladero”. Para ello se distinguirá, fundamentalmente, entre la inmigración “legal” y la “ilegal”.

El compromiso adquirido, que huye de la demagogia con que a veces se aborda este asunto y pretende ser lo más realista posible, comprende el establecimiento de unas reglas comunes para la política de asilo e inmi-

gración, la integración de la política de inmigración en las relaciones exteriores, la lucha contra las mafias que trafican con los inmigrantes, y el control común de las fronteras. Las reglas comunes deben elaborarse a lo largo de 2003, fijándose en ellas las condiciones para el estatuto de refugiado y residente permanente, así como para la reagrupación familiar, las normas de procedimiento y las responsabilidades de cada Estado. En futuros pactos de cooperación con terceros países se incluirá una cláusula que comprometa a éstos a combatir la inmigración ilegal y a negociar acuerdos de readmisión. Para la lucha contra la inmigración ilegal se activará un sistema de identificación de visados y un programa coordinado de readmisión de inmigrantes clandestinos con diversos países orígenes de la inmigración.

En cuanto al control común de las fronteras, se acordó crear con carácter inmediato un cuerpo de expertos que lo coordine. Esto implica la formación de oficiales de enlace y una reglamentación común, así como disposiciones compensatorias de carácter económico que tengan en cuenta la diferente presión migratoria y la extensión de las fronteras de cada país. Sería interesante que, más adelante, se ampliasen los acuerdos para señalar líneas comunes respecto al enfoque que conviene dar a la integración de los inmigrantes legales, cuya necesidad es reconocida desde el punto de vista económico y social.

España, con el apoyo de países como Alemania e Italia, se mostró partidaria de incluir en estos acuerdos otro respecto a la posibilidad de imponer sanciones a aquellos terceros países que no mostrasen una disposición adecuada para cooperar contra la inmigración ilegal en su origen o en su tránsito. La oposición de Francia, que sólo contó con el apoyo sueco, obligó a adoptar una fórmula algo más blanda consistente en un estímulo positivo para quienes readmitan a los expulsados, aunque en todo caso se evaluará el grado de cooperación de cada país, pudiendo la Unión adoptar las “medidas de respuesta necesarias”. De esta forma se mantiene la intención primera en forma de advertencia que convendrá tener en consideración.

La cumbre de Sevilla tranquilizó a los países candidatos a la ampliación manteniendo el calendario de adhesión pese a las amenazas que sobre él se cernían como consecuencia de la indefinición actual respecto al futuro de la Política Agrícola Común y de los fondos estructurales y de cohesión, tan fundamentales para los futuros miembros.

En relación con la lucha antiterrorista, la presidencia española propuso e impulsó su inclusión dentro de la Política Exterior y de Seguridad Común europea. En el ámbito de la defensa también la lucha antiterrorista fue un tema estrella. En realidad, aunque este asunto se estudió durante la presidencia belga, el breve tiempo disponible puso prácticamente sobre las espaldas españolas la responsabilidad de dar los primeros pasos concretos, que dieron como resultado un documento casi conceptual de alcance limitado. Un enfoque más ambicioso de este asunto, que a partir de la experiencia del conflicto de Afganistán pudiera llevarnos a debatir la posibilidad de ir hacia algo así como un “Petersberg Plus”, fue inmediatamente descartado, como si tal propuesta no encajara en el ambiente. En realidad, cualquier movimiento considerado “revolucionario” sería remitido a la Convención, que se convierte de esta forma en un pretexto para no abordar los temas más espinosos y difíciles. Sin embargo, en algunos países las encuestas registraron un incremento del interés de la opinión pública por la seguridad, lo que con el tiempo puede llegar a inducir actitudes más decididas en los políticos. De todas formas queda por ver cuál sería el impacto sobre esta tendencia de una eventual intervención militar en Irak.

En el documento aprobado en relación con la lucha antiterrorista que, como se ha señalado, se mantiene en un plano conceptual, los efectos sobre la defensa se limitan a la necesidad de aumentar la protección de las fuerzas desplegadas, al intercambio de inteligencia, a la colaboración militar con las autoridades civiles y a asuntos relacionados con el “cielo único europeo”, esto último por la especial preocupación provocada por la forma en que se desarrollaron los atentados de septiembre de 2001 contra Estados Unidos. Como consecuencia de este trabajo los daneses incluirían el tema en su agenda.

La instauración de un Consejo formal de ministros de Defensa, planteada ya durante la presidencia belga y considerada del mayor interés por la presidencia española, volvió a encontrar muchas reticencias en febrero, sobre todo por parte de los países “neutrales” y de los países nórdicos. Sin embargo, se consiguió dar un paso inicial que puede tener repercusión para el futuro, pues durante el Consejo de Asuntos Generales de mayo los ministros de Defensa fueron autorizados a discutir determinados asuntos de su incumbencia en solitario, creándose así un interesante precedente que se mantuvo durante la presidencia griega.

En cuanto al desarrollo del “Headline Goal” u Objetivo Principal, merecen resaltarse dos hechos importantes. Uno de ellos fue el lanzamiento del “Plan de Acción Europeo de Capacidades” (PAEC), concebido durante la presidencia belga, y que hubo de concretarse en una serie de paneles que han de formular propuestas para subsanar las carencias apreciadas como consecuencia del proceso de definición de necesidades y de medios disponibles. Conviene recordar que los resultados de este Plan de Acción, como los de los esfuerzos realizados para alcanzar el “Headline Goal”, están basados en la voluntariedad, por lo que dependen casi enteramente del interés que muestren las naciones.

El otro hecho se refiere al proyecto de creación de un sistema de planeamiento que supere la fase, ya agotada, de las “Conferencias de Capacidades” desarrolladas para el establecimiento del “Headline Goal”. La instauración de este sistema supondría la adopción por la Unión Europea de un procedimiento denominado “Capabilities Development Mechanism”, parecido al utilizado por la OTAN, y que debería estar listo a partir de 2003. Su desarrollo exigirá mucho empeño y habilidad, pues requiere contar con la OTAN, y por tanto con países ajenos a la Unión Europea, como Turquía y Estados Unidos. Algunas observaciones hechas a última hora por Grecia hicieron encallar el documento correspondiente, que se hallaba ya consensuado y listo para su aprobación. De esta forma se perdió una excelente ocasión de culminar el esfuerzo, pues, tal como se suponía, no experimentó avance alguno durante la presidencia griega, que sustituyó a la danesa en los asuntos relativos a la defensa.

Una vez más, el conflicto greco-turco interfirió también en los esfuerzos realizados para dotar a la Unión Europea de una capacidad militar adecuada, para lo cual es imprescindible poder contar con cierta facilidad con algunos medios de los que sólo la OTAN dispone. El proceso de bloqueos sucesivos en los que vienen turnándose alternativamente Ankara y Atenas llegó hasta la cumbre de Sevilla.

Conviene señalar que, tanto en esta cumbre como en la de Barcelona, los movimientos antiglobalización se limitaron a poco más que a realizar las habituales exhibiciones, lo que supone una evolución interesante si comparamos este comportamiento con otros anteriores, aunque no debe dejar de tenerse en cuenta la influencia ejercida en este cambio por la presencia de un costoso despliegue de fuerzas de seguridad. En cualquier caso, los Consejos Europeos de la presidencia española marcaron un punto de inflexión en este aspecto.

LA CUMBRE DE BRUSELAS (24 Y 25 DE OCTUBRE) Y LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA CONVENCION

En la cumbre de Bruselas se planteó el espinoso asunto de cómo financiar la ampliación de la Unión Europea, a sabiendas de que los problemas surgidos podrían poner en cuestión esta operación. Sorprendentemente, el desacreditado eje franco-alemán volvió a funcionar como motor del proceso europeo y se produjo un acuerdo entre ambos países, pese a que partían de posiciones bastante dispares. Francia quería que se encontrase financiación sin reducir las ayudas a la agricultura, mientras que Alemania pretendía pagar cuanto menos mejor, a cuyo fin habría de revisarse la Política Agrícola Común. Pues bien, según el acuerdo alcanzado entre París y Berlín, desde 2006 a 2013 se congelarán los gastos de dicha política. Como contrapartida, el acuerdo apuntó a una revisión del “cheque británico”, idea ésta que fue acogida con el natural desagrado por el Reino Unido, que además de ser partidario de una reforma radical de la política agrícola se veía como el país verdaderamente perjudicado por la transacción.

Aunque el acuerdo suponga la futura pérdida de ciertos apoyos, muchos países se alinearon a su favor, y entre ellos España, consciente de que a partir de 2007 ya será inevitable una reforma de los subsidios, pero satisfecha por el escaso impacto negativo de esta reforma sobre los agricultores, ya que la reducción resultante sólo alcanzará el valor de un dos por ciento, cantidad que resulta perfectamente asumible. España también se dio por satisfecha por el tratamiento dado a los fondos estructurales y de cohesión, dado el extraordinario avance hacia la convergencia que ya se ha experimentado y porque, en principio, estos fondos están garantizados hasta 2007 en su cuantía actual, aunque pendientes de una propuesta de reforma que ha de ser presentada en 2003 por la Comisión Europea.

Escasos días después de finalizar la cumbre, Valéry Giscard d'Estaing presentó los ambiciosos trabajos realizados por la Convención. Estos apuntan a la redacción de una Constitución propiamente dicha, que sería aceptada incluso por los británicos. Una vez más se tiene la impresión de que los europeos serán capaces de ponerse de acuerdo a la hora de la verdad, hasta el punto de que parece darse por seguro que las decisiones más importantes no quedarán pendientes del último minuto de la Conferencia Intergubernamental.

También se aborda la posibilidad de crear una ciudadanía europea y de incorporar la figura de un presidente, idea ésta última que parecen apoyar Francia, España y el Reino Unido, países a los que podría unirse Alemania si se aceptase la garantía de que la Comisión tenga un poder relevante, tal como es el deseo de los “pequeños países”.

Otras importantes propuestas que van tomando forma son la definición de una personalidad jurídica única de la Unión, cuya denominación final queda aún pendiente, y la incorporación a la Constitución de la Carta de los Derechos Fundamentales de los europeos, dando así a este documento ya aprobado una ubicación eficaz y un carácter de mayor entidad jurídica como garante de estos derechos.

EL AÑO ESTRATÉGICO ESPAÑOL

Según era de prever, España resultó elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cargo que ocupará durante dos años a partir del 1º de enero de 2003, es decir, en un momento especialmente delicado en que están en juego importantes decisiones relacionadas con Irak, el Sahara, Oriente Próximo y la lucha contra el terrorismo.

El año comenzó con el despliegue de fuerzas españolas en Afganistán. La proyección de potencial militar hacia Asia central y, simultáneamente, hacia varias regiones de la península Balcánica, constituye un reto operativo y logístico más en el desarrollo de la capacidad militar de España dentro del nuevo marco estratégico característico de la Post-Guerra Fría, afectado en sus fundamentos por la fecha del 11-S.

Dentro del espacio más inmediato, Marruecos se esforzó por deteriorar sus relaciones con España en respuesta, según parece, a la postura de Madrid respecto al conflicto del Sahara: una postura que se ha mantenido invariable y que siempre fue respetuosa con las resoluciones de las Naciones Unidas. No sería de descartar que, una vez más, el gobierno de aquel país intentase desviar la atención de sus problemas internos creando otros externos y también enmascarar su insuficiente control de la inmigración ilegal. Este esfuerzo por enturbiar una relación que España desea buena y constructiva no parece tener en cuenta hechos tan evidentes como el ya elevado número de inmigrantes marroquíes en España, siempre creciente, las cerca de ochocientas empresas españolas que están contribuyendo al avance económico del país vecino, el hecho de que

nuestro país es el segundo (y a veces primer) inversor extranjero en territorio marroquí y la importancia que para Marruecos y España tienen los actuales niveles de las transacciones comerciales mutuas, amén del apoyo logístico español al flujo de más de dos millones de inmigrantes que atraviesan nuestro territorio cada verano procedentes de Centroeuropa. Otras situaciones de aparente incoherencia ya se habían evidenciado respecto a la Unión Europea, como es el caso de la contradicción entre el interés marroquí por aproximarse a ella y disfrutar de algunos de sus beneficios y la cerrada postura del gobierno de Rabat en las negociaciones mantenidas con Bruselas en materia de pesca.

El proceso de voluntario deterioro fue culminado por Marruecos con el acto inamistoso de la ocupación de un pequeño islote (el llamado islote de “Perejil”), cercano a Ceuta, cuya aparente insignificancia hace más evidente la voluntad marroquí de crear un problema. La ocupación fue respondida con el posterior desalojo por tropas españolas de las fuerzas que habían izado la bandera marroquí en el islote. Antes de esta recuperación, tanto la Unión Europea como la OTAN declararon su solidaridad con España y exigieron la inmediata retirada de los soldados marroquíes. Este incidente y la retirada del embajador de Marruecos en Madrid, que se había producido meses antes sin contrapartida española (ya que nuestro embajador en Rabat se mantuvo en esta capital hasta el día mismo de nuestra intervención en el islote) son sólo una muestra de las dificultades con que tropieza el diálogo mediterráneo, impulsado con tanto interés por Europa.

Esta situación sólo puede entenderse en el marco de las tensiones en que se debate actualmente el mundo musulmán. En este sentido, España, con su gran esfuerzo humano, logístico y económico en beneficio de Marruecos, y con su empeño por mantener contra viento y marea unas buenas relaciones con este país y evitar la posibilidad de futuros conflictos indeseables en el estrecho de Gibraltar, no hace sino actuar en favor de Occidente y muy concretamente, de la Unión Europea.

Dignos de reseñar fueron los esfuerzos realizados conjuntamente por la diplomacia del Reino Unido y de España por resolver el contencioso de Gibraltar, que había llegado a una situación insostenible para una Europa que está en trance de construir una unión política, pues esta tarea debe estar presidida por el juego limpio, y en ella no cabe el anacronismo de una relación de país colonizador con país colonizado. Además, el contencioso no sólo imponía su incómoda presencia en las

relaciones entre los dos países, cuyos líderes políticos han dado ya un buen número de pruebas de su buen entendimiento mutuo, sino que estaban constituyendo una verdadera rémora a la hora de establecer acuerdos en el ámbito europeo. La voluntad británica por hacer cambiar la situación pudo constatarse en la firmeza del gobierno de Londres frente al de Gibraltar, pero, una vez desbrozada una buena parte del camino, e incluso habiendo sido aceptada por los británicos una solución de cosoberanía, la pretensión inicial de dejar el asunto saldado para el verano de 2002 tropezó con algunos problemas y hubo de retrasarse, quedando en estado latente.

En relación con el problema de Irak, el gobierno español se situó abiertamente desde el primer momento en apoyo de Estados Unidos, como corresponde a un país que, como España, sufre el azote del terrorismo y es buen aliado de los norteamericanos. Su postura contrastó con la de la generalidad de las naciones europeas que, con la excepción también del Reino Unido, se mantuvieron en actitud de espera de acontecimientos.

En el ámbito interno, las Fuerzas Armadas españolas culminaron el proceso de transformación de sus estructuras para pasar a ser una organización totalmente funcional orientada a facilitar la proyección de fuerza, suprimiéndose las regiones militares, aéreas y marítimas. La Fuerza principal del Ejército, hasta ahora constituida por una Fuerza Permanente y una Reserva Movilizable, pasa a estar formada por la Fuerza de Maniobra, la Fuerza Terrestre y la Fuerza Logística Operativa. También se crea la Inspección General del Ejército. La representación institucional será siempre de las Fuerzas Armadas y no de los ejércitos respectivos, y se ejercerá por los mandos funcionales que en cada caso corresponda. Las fuerzas de los archipiélagos siguen contando con mandos propios, y los de Ceuta y Melilla adquieren el carácter de mandos conjuntos.

A lo largo del año, en España se desarrolló un amplio debate para la revisión estratégica de su defensa, ya dentro del contexto Post-Once de Septiembre, y se realizaron esfuerzos por llegar a un pacto de Estado entre el gobierno y la oposición, cuyas discrepancias se limitaron a dos asuntos: algunos aspectos del sistema de financiación, y número total de efectivos. Los asuntos relacionados con capacidades, industria de defensa y financiación de programas fueron también objeto de estudio y de análisis en busca de soluciones prácticas que superen las dificultades actuales, lo que parece demostrar un interés creciente por estos asuntos, y no sólo en el ámbito militar.

A finales de septiembre se botó la fragata “Álvaro de Bazán”, primera de las F-100 dotadas de sistema Aegis, empezando así a materializarse el programa principal de material de la Armada. El programa de helicópteros de ataque del Ejército de Tierra, uno de los más importantes entre los derivados de los planes de modernización, recibió un impulso decisivo ante la creciente evidencia de que se hace preciso contar con este material cuanto antes. El gobierno español se inclinó finalmente por una solución mixta del “Tigre” de Eurocopter y el “Apache” de Boeing, compaginando así el interés político por entrar en un programa europeo con la necesidad sentida por el Ejército español de contar con un verdadero helicóptero de ataque y no solamente de apoyo al combate. También se realizó la presentación del carro de combate Leopard 2E, con el que se dotará al Ejército español a partir de 2003, y se inició la entrega de helicópteros Sikorski SH-60B para las fragatas de la Armada. En cuanto al comienzo de la entrega de los Eurofighter al Ejército del Aire, ésta se pospuso hasta marzo de 2003, pues se espera que no sufra retraso pese a la destrucción del prototipo en un accidente aéreo.

El proyecto español de constitución de un Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en Bétera (Valencia) superó con brillantez las evaluaciones realizadas por SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers in Europe), y en noviembre demostró haber alcanzado la capacidad operativa plena. De esta forma ya sólo queda pendiente que SHAPE recomiende al Consejo Atlántico su certificación como Cuartel General de Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido de la OTAN (HQ NRDC-S). Esto debe producirse cuando la organización finalice la revisión de su estructura de Fuerzas. El nuevo Cuartel General, que integra personal de Alemania, España, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Turquía, Estados Unidos y Reino Unido, demuestra la capacidad de respuesta del Ejército español a un reto que se había impuesto y cuya superación supone para él un importante salto cualitativo. También pasó su calificación operativa inicial como Cuartel General Marítimo para la OTAN el buque de asalto anfibio “Castilla”.

En contraste con estos acontecimientos, el proyecto de reducción de los cuarteles generales OTAN no desplegados, drásticamente impulsado por Estados Unidos, que puso en tela de juicio la permanencia del de Retamares (Madrid), fue defendida por España con tal insistencia que el detalle de este proyecto no llegó a presentarse en la cumbre de Praga.

CAPÍTULO TERCERO

EUROPA CENTRO-ORIENTAL Y EURASIA

EUROPA CENTRO-ORIENTAL Y EURASIA

Por MARÍA ANGUSTIAS CARACUEL RAYA

INTRODUCCIÓN

El año 2002 ha sido especialmente significativo para los países de Europa centro-oriental por dos motivos fundamentalmente. Por un lado, porque los procesos de negociación para la adhesión a la Unión Europea (UE) entraron en su fase final, de tal forma que ha sido posible decidir a finales de este año cuáles serán los países que se integrarán en la UE en un futuro próximo y, por otro lado, porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha reafirmado su política de puertas abiertas en la cumbre de Praga, celebrada en el mes de noviembre, mostrando su compromiso de concluir las negociaciones para la ampliación con un conjunto de países de esta vasta región geográfica. De ahí que se pueda calificar este “año estratégico” como “año de la ampliación”, para satisfacción de algunos países objeto de este estudio, y decepción de otros.

España, por su parte, ha sido parte activa y protagonista del desarrollo de ambos procesos de ampliación, y en unas circunstancias que no han sido del todo fáciles. Y es que nuestro país asumió la presidencia de la Unión Europea en unos momentos en los cuales el mundo sufría las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre, al mismo tiempo que una fuerte desaceleración económica. Estas dificultades no impidieron que se lograran avances sustanciales en hacer “Más Europa”, lema del programa de su presidencia de la Unión, que abordó específicamente el cumplimiento de los criterios políticos y económicos, y la aplicación del acervo comunitario por parte de los países candidatos.

En efecto, el propósito de la presidencia española ha sido consolidar, impulsar y legitimar el actual proyecto europeo; propósito al que sirvieron las seis grandes prioridades establecidas en su programa, y que estaban en línea con los grandes objetivos de las anteriores presidencias, a saber: la lucha contra el terrorismo en un espacio de libertad, seguridad y justicia; el éxito de la puesta en circulación del euro; el impulso al proceso de Lisboa para lograr una economía europea competitiva y dinámica; la ampliación de la Unión; las relaciones exteriores; más Europa en el mundo, y el debate sobre el futuro de Europa.

Estas prioridades fueron desarrolladas en la intervención del ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, en la presentación de los objetivos en materia de seguridad y defensa, realizada el día 10 de enero de 2002. En particular, se refirió a la necesidad de avanzar en las relaciones UE-OTAN, y reconoció la importancia de trasladar al campo institucional las buenas relaciones entre ambas organizaciones logradas en el campo práctico, especialmente en los Balcanes. Asimismo, la presidencia española puso especial énfasis en alcanzar acuerdos de consulta y de participación de los candidatos y aliados europeos no miembros de la UE, especialmente con Rusia y Ucrania, países cuya potencial contribución a futuras misiones de la Unión en momentos de crisis pudiera ser de gran importancia.

Respecto a los países de Asia, hay que resaltar que éstos continúan su propio camino hacia el capitalismo y la democracia, si bien cada uno de ellos muestra sus fortalezas y debilidades en su búsqueda de desarrollo y seguridad. Aunque el comunismo ha dejado de ser la fuerza política principal en estos países, todavía quedan vestigios de esta política en algunos de sus dirigentes, como una planificación central autoritaria, la propiedad estatal de la industria y ciertos grados de corrupción. De hecho, algunos de estos países continúan sufriendo regímenes autocráticos o represivos que impiden su desarrollo.

Al mismo tiempo, Estados Unidos está aumentando su presencia en Asia central y en otras regiones próximas, debido fundamentalmente al desarrollo de la actual campaña en Afganistán, las nuevas perspectivas económicas que ofrece la zona y la posibilidad de iniciar una nueva campaña en Irak. Si durante la guerra fría el país norteamericano ejerció su gran influencia política, económica y militar en el continente europeo, en el siglo XXI Estados Unidos está girando el timón de su política exterior, dando primacía a un nuevo escenario geopolítico, donde confluyen sus

intereses de seguridad; aplicando una estrategia global, que integra elementos diplomáticos, económicos y militares, por lo que se manifiesta, a comienzos de este nuevo siglo, como la gran hiperpotencia mundial.

LOS PAÍSES BÁLTICOS EN EL UMBRAL DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

La transformación de las estructuras sociales, políticas, económicas y militares de Lituania, Letonia y Estonia en estos últimos años promoverá, sin duda, su integración en la OTAN y en la UE. En este sentido, las relaciones entre los países Bálticos, la Alianza Atlántica y la Unión Europea han continuado guiando la agenda política de los tres países nórdicos en la recta final hacia la plena adhesión y, por otro lado, sus relaciones con Rusia.

La manifestación de una clara voluntad política de los países bálticos a favor de la ampliación de estas instituciones y los esfuerzos realizados en el camino de la aplicación del acervo comunitario, y de las reformas de sus sistemas de defensa, se están manifestando determinantes para la consecución, a corto plazo, de ambos objetivos.

En particular, Lituania defiende que la mejor manera de asegurar sus intereses nacionales es a través de la solidaridad colectiva que representa la Unión Europea. En este contexto, el país ha aceptado cerrar su central nuclear de Ignalina antes de 2009 y buscar otras fuentes de energía que sustituyan la nuclear a cambio de recibir importantes ayudas de la Unión. Por otro lado, Lituania y la región rusa de Kaliningrado siguen colaborando, en el marco de la Dimensión Norte de la Unión Europea, en numerosas áreas, como el medio ambiente, la energía, el transporte y la cooperación interfronteriza, lo que está permitiendo, asimismo, la creación de un clima de confianza en sus relaciones con Moscú.

Por su parte, Letonia ha llevado las negociaciones para la adhesión a la UE de forma positiva y dinámica. Actualmente cuenta con una fuerte economía de mercado y presenta unas condiciones macroeconómicas estables. No obstante, la corrupción sigue siendo una causa de preocupación, por lo que los servicios públicos deben dotarse de los medios necesarios para combatirla. Con todo, Letonia reconoce que la Unión Europea es algo más que una unión regida por principios orientados hacia el mercado, y la define como una unión de valores comunes, que se aplican a través de todo el continente. Por ello, la fortaleza de este país bálti-

co reside en tener una democracia consolidada, firmemente comprometida con los principios que inspiran el funcionamiento de las instituciones europeas.

Estonia ofrece una panorámica similar en su modo de avanzar hacia la UE y de dotarse de una legislación ajustada a la de la Unión. Gracias a la búsqueda del equilibrio en los presupuestos del Estado, se ha conseguido bajar notablemente la inflación e implantar unas reformas económicas, que han fomentado la privatización, una política liberal de precios y un moderado sistema tributario.

Pero lo más importante para los países Bálticos es que, a pesar de que el proceso de integración en la UE está resultando largo, complicado, y en algunos momentos doloroso, estos países saben para qué esforzarse. No cabe duda de que sus condiciones políticas y económicas, además de su perseverancia en alcanzar los objetivos marcados, les ha situado entre los países más prósperos aspirantes al ingreso en la UE, gracias, en gran medida, al aumento del capital extranjero en estas, procedente especialmente de Suecia, Alemania, Dinamarca y Estados Unidos.

En el campo de la seguridad y la defensa, el debate se ha centrado en las exigencias presupuestarias para ingresar en la Alianza Atlántica y en la aplicación del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE), considerado la piedra angular de la seguridad europea, y firmado en París en 1990, cuando todavía los países bálticos formaban parte de la Unión Soviética.

Así, un criterio de la OTAN para la admisión de nuevos miembros descansa en que sus presupuestos de defensa se mantengan en torno al 2% del Producto Nacional Bruto (PNB) en los próximos años. Por otro lado, la cumbre de Praga, celebrada a finales del mes de noviembre, ha cerrado el debate en torno a la ratificación del FACE Adaptado, pues Rusia se negaba a hacerlo hasta que no hubiera un compromiso de los Estados bálticos de respetar su “espíritu”. En este sentido, la declaración de Praga da la bienvenida a la intención de los países que no son parte del Tratado de ratificarlo tan pronto como éste haya entrado en vigor. Su adhesión, como subraya, será fundamental para la estabilidad y la seguridad europeas y, lo que es más importante, se reafirmará el principio de la indivisibilidad de la seguridad al eliminarse finalmente la idea de la existencia de diferentes “zonas de seguridad” en el seno de la OTAN, es decir, entre los Estados que han firmado y ratificado el Tratado (por ejemplo, Polonia) y los que no lo han hecho (como los países bálticos). Con la declaración de

Praga, la Alianza tranquiliza a Moscú de que los Estados Bálticos no serán lugar para el almacenamiento de armas convencionales en su territorio.

EUROPA CENTRO-ORIENTAL: ENTRE LA ESPERANZA Y LA INCERTIDUMBRE DE INTEGRACIÓN

Normalidad y confianza, en lo político, en lo económico y en lo comercial, han venido a representar los países de Europa central y oriental en sus relaciones con España y las organizaciones internacionales europeas, aunque han persistido a lo largo de 2002 ciertos problemas bilaterales entre ellos.

Si bien la OTAN y la UE han llevado a cabo sendos procesos de ampliación, o de *big-bang*, no todos los países de esta área geográfica han sido seleccionados para participar conjuntamente en el seno de ambas instituciones. Y aunque España dio un gran impulso durante su presidencia de la Unión a las negociaciones para la integración en la UE, y apoyó el ingreso de estos países en la OTAN, solamente Polonia, Hungría y la República Checa —miembros de pleno derecho de la Alianza—, Eslovaquia y Eslovenia han sido seleccionados para integrarse en la Unión, mientras Rumanía y Bulgaria tendrán que esperar. En cambio, todos ellos formarán parte de una OTAN ampliada en un futuro próximo.

La fuerza motora que ha conducido a Eslovaquia a la Comunidad Atlántica, entre otros factores, ha sido la atracción ejercida por Polonia y la República Checa sobre este país centroeuropeo, que se ha materializado en la iniciativa de crear un Cuartel General para una brigada trinacional en Topolcany (Eslovaquia), que estará plenamente operativa en el año 2003 y podrá participar, en consecuencia, en futuras misiones de apoyo a la paz de la OTAN y de la Unión Europea. Además, estos países han intensificado sus relaciones con Hungría al firmar un Memorandum de Entendimiento (MOU) el 30 de mayo, en Eslovaquia, por el cual cooperarán en materia de equipamiento de la defensa, si bien los cuatro países esperan armonizar aún más sus capacidades logísticas y de formación, así como compartir los costes de la defensa en el campo de la investigación y el desarrollo.

Sin embargo, a nivel político, han persistido los problemas entre Eslovaquia y Hungría debido a la Ley de Derechos de las minorías magiares en el exterior, que entró en vigor el 1 de enero de 2002. Eslovaquia sigue denunciando la extraterritorialidad de esta ley, que vulnera, en su

opinión, la normativa europea sobre la protección de las minorías nacionales, lo que llegó a motivar la suspensión de una reunión del Grupo de Visegrado, prevista para primeros de marzo, aunque estos cuatro países seguían reafirmando que su espíritu seguía vivo.

Bulgaria, en cambio, sigue siendo reflejo de buenas relaciones interétnicas, lo que puede servir de modelo para otros países de la región. Ello se manifiesta en el decidido apoyo del Partido Minoritario Turco y del Movimiento por los Derechos y Libertades al gobierno de Simeón de Bulgaria. Por otro lado, la reestructuración de sus fuerzas armadas está teniendo un enorme coste económico y social, pues, aunque ya se ha reducido considerablemente el número de efectivos —de 100.000 a los 60.000 actuales—, se espera que para el año 2004 se reduzca en torno a los 45.000.

A pesar de estas dificultades internas de la defensa, Bulgaria sigue estando firmemente comprometida con la seguridad regional, como se manifiesta primordialmente en tres aspectos. En primer lugar, este país sigue participando en las operaciones de apoyo a la paz, lideradas por la OTAN en los Balcanes. En segundo lugar, está proporcionando temporalmente la base aérea de Burgas, en el Mar Negro, en apoyo de la campaña dirigida por Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo. En tercer lugar, Bulgaria ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para destruir alrededor de 100 misiles de fabricación soviética, al considerarse que no tienen el valor militar que tuvieron durante la guerra fría, cuyo papel se centraba en asegurar la frontera sur del país, especialmente entre el antiguo bloque soviético y los países miembros de la OTAN (Turquía y Grecia). En la actualidad, eran motivo más bien de preocupación por parte de los países occidentales ante la eventualidad de que fueran objeto del comercio ilegal de armas y pudieran venderse a Estados débiles, sujetos a embargos comerciales.

Similarmente, Rumanía participa en la operación “Libertad Duradera” y en otras misiones de pacificación de la OTAN, y ha adaptado su legislación interna para aprobar la Ley sobre secretos del Estado, que le reclamaba la Alianza como paso previo para lograr su admisión en la OTAN.

Todas estas circunstancias han motivado que la OTAN considere positivamente las candidaturas de Rumanía y Bulgaria en la cumbre de Praga, lo que contribuirá a reforzar la dimensión meridional de la Alianza. Sin embargo, el equilibrio del flanco sur de la OTAN, que representará la adhesión de ambos países, se ha correspondido con el desequilibrio “meridio-

nal” de la UE, que no los ha nominado, lo que no significa que ambas organizaciones internacionales no continúen realizando una valoración constante de los deberes que tienen que cumplir los nominados y no nominados en su camino hacia la integración.

Por ejemplo, la UE sigue considerando que ambos países deben acelerar sus reformas, reducir sus tasas de inflación e intensificar la lucha contra la corrupción, y les exige esfuerzos en este sentido, al mismo tiempo tienen que mantener sus positivas tendencias macroeconómicas, situadas en un crecimiento económico en torno al 3,5% anual. Una vez logrados estos objetivos, la Unión incorporará a estos candidatos tan pronto como sea posible, aunque se baraja el año 2007 como año de ingreso.

EUROPA SURORIENTAL: ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA DEL ESTADO

Las elecciones en Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia han demostrado que los diversos partidos políticos siguen buscando la consolidación democrática, aunque persisten algunas fuerzas nacionalistas radicales, que tratan de frenar la transición, y grupos armados, que todavía utilizan la violencia como recurso para alcanzar sus objetivos.

Además, la región presenta todavía algunos riesgos para su seguridad, que derivan de un conjunto de causas, como el tráfico ilegal de armas, la falta de desarrollo económico, la desintegración de las estructuras estatales, la existencia de conflictos religiosos y étnicos, el crimen organizado y la inmigración incontrolada. Y es que la naturaleza transnacional de los nuevos riesgos ha hecho que las respuestas únicamente nacionales a los mismos sean ineficaces, por lo que la colaboración de los organismos internacionales, como la OTAN, la UE y la OSCE continúa siendo esencial.

Merecen especial atención las rivalidades interestatales que siguen presentes entre Eslovenia y Croacia, por un lado, y entre este último país y Bosnia-Herzegovina. Los primeros no sólo presentan algunos problemas fronterizos, sino también pesqueros, debido a la falta de acuerdo por los derechos de cada país en el área de Pirán, y que han sido motivo de desavenencias entre sus respectivos dirigentes políticos. Por otra parte, durante el año 2002 aumentaron las acusaciones mutuas por el control de la

frontera croato-bosnia, lo que llegó a desencadenar la intervención de Naciones Unidas, pues ordenó a la policía de frontera serbia que se retirara unos metros más allá de la misma con el fin de liberar estas tensiones.

Y mientras Croacia se preocupa más del establecimiento de unas intensas relaciones exteriores con sus vecinos de Centroeuropa que de las dificultades de su proceso de democratización, Bosnia-Herzegovina sigue centrada en resolver sus problemas internos. Dos ejemplos ilustran esta afirmación. En primer lugar, Croacia se integró el pasado mes de junio en la iniciativa CENCOOP (*Central European Nation's in Peace Support*), en la que participan Austria, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Suiza y Eslovenia. En segundo lugar, la seguridad de Bosnia-Herzegovina sigue mediatizada por la presencia de tropas de la Fuerza de Estabilización (SFOR), liderada por la OTAN, que llegó a la determinación, en la primavera de 2002, de reducir el contingente de la Fuerza de Estabilización (SFOR) de 19.000 a 12.000 efectivos, lo que permitiría, al mismo tiempo, liberar personal para su empleo en otras misiones de pacificación, como en la operación "Libertad Duradera".

Por su parte, la UE también se ha comprometido, durante la presidencia española de la Unión, a realizar la primera misión de policía (EUPM, *European Union Police Mission*) en Bosnia-Herzegovina a partir del 1 de enero de 2003. Esta fuerza, que estará compuesta por 470 policías y 70 expertos civiles, continuará el trabajo de la IPTF (*International Police Task Force*), auspiciada por las Naciones Unidas, y abrirá la posibilidad a que terceros Estados hagan sus contribuciones a la misma. De esta manera, la UE se suma a la ONU, pero en esta ocasión de forma práctica, en los esfuerzos de pacificación como recomendaba el Informe Brahimi del año 2000. Lo que se espera en estos últimos meses es la firme determinación de los responsables políticos y del pueblo de este país para que este objetivo pueda materializarse sobre el terreno, y contribuya, en la medida de lo posible, a la definitiva pacificación de esta república.

Pasos significativos se están dando en este sentido. Sirva de ejemplo que, a lo largo de este año 2002, finalizó el proceso de enmiendas a las constituciones de ambas entidades —la Federación Serbia y la Federación Croata-Musulmana— en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, relativa al estatuto idéntico de los pueblos en todo el territorio de Bosnia-Herzegovina. Por otra parte, algo más que simbólico fue el encuentro en Sarajevo de los presidentes de este país, de Croacia y de la República Federal Yugoslava, donde alcanzaron el com-

promiso político de tratar de superar las diferencias del pasado, centrándose más en el futuro y afrontando los retos de la integración europea.

Teniendo en cuenta la evolución del panorama de seguridad en esta república, el Consejo de Europa dio la bienvenida a Bosnia-Herzegovina en el mes de abril. Mientras, la UE sigue estimando que sus perspectivas de integración en la Unión descansan fundamentalmente en su desarrollo democrático y en la consolidación del Estado de Derecho.

Similares argumentos ha dado la Unión a la ex Yugoslava de Macedonia tras la convocatoria de elecciones generales, celebradas casi un año después de la firma del acuerdo de paz de Ohrid. Aunque los eslavos derrotaron al gobierno nacionalista y dieron su confianza a la coalición “Juntos por Macedonia”, todavía tienen que hacer frente al reto que supone el control de los grupos armados irregulares que operan en su territorio, y que han seguido provocando, a lo largo del año, un importante número de incidentes violentos.

No obstante, la presencia de tropas internacionales lideradas por la OTAN en la operación “Amber Fox” está siendo crucial para prevenir un estallido generalizado de la violencia en esta república ex yugoslava. Aunque su mandato de actuación expiraba a finales de octubre, el Consejo del Atlántico Norte decidió ampliarlo por un tiempo limitado hasta el 15 de diciembre, al mismo tiempo que la UE ha manifestado su voluntad de relevar a la Alianza Atlántica en esta operación militar. Para que ello se lleve a cabo en condiciones óptimas, será fundamental llegar al acuerdo sobre la cesión de medios y capacidades de la Alianza Atlántica para las operaciones lideradas por la Unión Europea, proceso conocido como “Berlín Plus”.

En cualquier caso, lo que se debe evitar es que Europa suroriental se convierta en un segundo hogar para los grupos armados, evitando que células terroristas, como las de Al Qaeda, operen desde esta región. No cabe duda de que los terroristas y los criminales florecen en el caos, y lo que pretenden la OTAN y la UE es sentar las bases para la estabilidad y la prosperidad, para lo cual necesitan trabajar estrechamente con la población y sus dirigentes políticos.

Este mismo objetivo lo comparte el Pacto de Estabilidad para Europa Suroriental, que opera bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), y que está cooperando con la OTAN y la UE en un triple frente: aumentar la conciencia de la pobla-

ción, transmitiendo información; fomentar los contactos regionales a varios niveles, y desarrollar los mecanismos que debiliten las capacidades logísticas de los grupos terroristas.

Este enfoque coordinado e integral del problema está ayudando, pero no resolviendo aún, todos los aspectos relacionados con la seguridad regional, especialmente el control sobre la exportación de armamento a terceros países, incluido Irak.

Y es que desde que la OTAN revelara en el mes de octubre que los gobiernos de la República Federal de Yugoslavia —Serbia y Montenegro— y de Bosnia-Hezegovian estaban incumpliendo el embargo de armas a Irak, las sospechas se han cernido sobre ambos países y, en particular, sobre ocho empresas relacionadas con la defensa, lo que ha desencadenado el cese de algunos responsables políticos y militares.

Aunque no han salido a la luz pública los contactos exactos mantenidos entre estas repúblicas y el régimen iraquí, se debe recordar que la colaboración entre ellos data del año 1976, cuando empresas de la antigua Yugoslavia ayudaron a la construcción de instalaciones militares, sistemas de misiles tierra-aire (SAM), radares, etc. Posteriormente, según algunas fuentes, hubo indicios de que Irak había solicitado al Ejército yugoslavo que desvelara su táctica para enfrentarse a la OTAN en 1999. Por otro lado, las mismas fuentes han desvelado que Belgrado ha colaborado con el departamento de Defensa de Estados Unidos, proporcionando detalles sobre los sistemas de defensa antiaéreos iraquíes y los bunkers construidos bajo supervisión yugoslava.

Esta aparente contradicción entre los que desean un acercamiento a Occidente y los que consideran todavía a la OTAN como el enemigo, es probable que se supere próximamente, a medida que se resuelva la lucha por el poder interno entre el presidente federal, Vojislav Kostunica, que defiende unas ideas nacionalistas conservadoras, y el primer ministro serbio, Zoran Djindic, que apoya cambios más radicales, lo que no significa que ello suponga el retorno del nacionalismo agresivo de la época de Milosevic. En este sentido, se considera que los dos primeros han estado proporcionando información sensible con el fin de dañar a su competidor en el proceso electoral que está viviendo Yugoslavia, por lo que se esperan nuevas revelaciones sobre los vínculos del gobierno yugoslavo con el régimen iraquí.

Por otro lado, las relaciones entre las dos repúblicas del Estado federal (Serbia y Montenegro) han iniciado un nuevo capítulo tras el acuerdo

alcanzado sobre el cambio de denominación de la Federación, que se llamará República Federal de Serbia y Montenegro al menos durante los tres próximos años, y la decisión de redactar una nueva Constitución, que debe ser aprobada por los parlamentos de ambas repúblicas. Por consiguiente, la “nueva unión” significa que ambas entidades continuarán existiendo dentro de un marco federal único, aunque más laxo, en el futuro inmediato.

Como ha manifestado algún dirigente político, la mejor estrategia de salida es una estrategia de entrada, es decir, una estrategia de integración en las instituciones europeas, pues los beneficios que ésta proporciona son mayores que las desventajas. Este mensaje, interpretado en sentido negativo, debe todavía arraigar en Albania, donde Unión Democrática para la Integración, el partido de los ex guerrilleros, que hace un año intentaron alzarse en armas contra el poder democráticamente establecido, ha ganado las recientes elecciones. Si a todo ello se añade que ha nacido una nueva organización en Europa, el Frente Nacional Unido de Albania, que trata de aglutinar la diáspora albanesa en el exterior —principalmente de Suiza, Dinamarca y Alemania— y unir los territorios albaneses de la región, es probable que esta organización termine apoyando al Ejército Nacional Albanés, que defiende la constitución de una “Gran Albania”, también llamada “Chemeria”, que incluiría todo el territorio de Kosovo, parte de Serbia y de la ex república yugoslava de Macedonia, la región occidental de Grecia y casi la mitad de la república de Montenegro.

En sentido positivo, el mensaje de la integración económica puede ayudar a ofrecer nuevas perspectivas de cooperación entre los países de la región, especialmente la firma de nuevos acuerdos de libre comercio. En particular, es oportuno mencionar el acuerdo alcanzado entre Albania y Croacia, auspiciado por el Pacto de Estabilidad, que contribuirá a reactivar la economía y el desarrollo de ambos países. A través de la cooperación sectorial entre los diversos Estados de la región se alcanzará un mayor bienestar social y mejorar las perspectivas de adhesión a las instituciones europeas. De esta manera, se logrará alejar las incertidumbres del pasado más cercano.

LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES: EN BÚSQUEDA DE UN NUEVO MARCO ESTRATÉGICO

Dos acontecimientos han continuando marcando la agenda estratégica de los países de esta región geográfica. Por un lado, el 11 de septiem-

bre de 2001 ha supuesto la creación de un “nuevo alineamiento” de estos países con la Comunidad Internacional en la lucha contra el terrorismo, aunque se han planteado algunas divisiones de lealtades a este respecto, como se verá más adelante y, por otro lado, el 13 de junio de 2002 marcó la defunción definitiva del Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM), que fue considerado por parte de las dos grandes superpotencias de la Guerra Fría, durante sus casi treinta años de existencia, como la piedra angular de su relación estratégica.

Sin embargo, y a pesar de los temores manifestados sobre las repercusiones de ambos acontecimientos en la comunidad atlántico-euroasiática, se ha demostrado que “hay vida” después de estos hechos, y que ha sido posible iniciar un nuevo entendimiento entre la administración norteamericana, Europa y las repúblicas eslavas y centroasiáticas de la ex URSS. En este sentido, la contribución de las instituciones occidentales a la estabilidad en la región se está manifestando proporcional a la ayuda de estos países a aquéllas, especialmente en la lucha contra el terrorismo.

La Federación de Rusia como “Gran Potencia”

Rusia se ha presentado a sí misma durante el año 2002 como un país democrático, cuyo futuro descansa en Europa. En este contexto, su máximo dirigente político, Vladimir Putin, ha tratado de dar los pasos necesarios para guiar a su país en esa dirección, aunque con resultados contrapuestos.

Por un lado, la Federación de Rusia no sólo coincide con Estados Unidos en el análisis teórico de las nuevas amenazas para la seguridad, como el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, sino también en las necesidades prácticas de reforzar la cooperación en el mayor número de ámbitos posibles. Así, el nuevo foro OTAN-Rusia, nacido el 28 de mayo y denominado Consejo del Atlántico Norte-Rusia (CAN-R), constituye una remodelación del Consejo Permanente Conjunto (CPC) y representa una nueva oportunidad para intensificar la cooperación entre los veinte Estados, en pie de igualdad, en diversas áreas relativas a la seguridad y la defensa. Esta nueva asociación estratégica nacida entre la OTAN y Rusia descansa, pues, en la responsabilidad conjunta para adoptar decisiones conjuntas. Y aunque la Federación seguía considerando la ampliación de la Alianza como un asunto interno de ésta, Rusia apostó finalmente por que las decisiones de la OTAN no se adopten sin la aportación de este país.

Otra cuestión que ha afectado a las relaciones transatlánticas, y especialmente a Rusia, ha sido la abrogación del Tratado ABM y el acuerdo alcanzado entre norteamericanos y rusos sobre la reducción de armas nucleares estratégicas. Lo cierto es que esta nueva situación no ha producido una mayor alarma internacional, si bien da mayor libertad de acción a EE.UU. para desarrollar su Iniciativa de Defensa Antimisiles; un ambicioso sistema que persigue alcanzar, tan pronto como sea posible, la protección del territorio norteamericano y de las tropas desplegadas en el exterior, incluidas las de los países aliados y amigos.

Aunque surgieron algunas críticas acerca de que, al sacrificar el Tratado ABM, se desencadenaría una nueva carrera de armamentos, y de que las cabezas nucleares desmanteladas serían almacenadas en vez de destruidas, las partes comenzaron a superar sus diferencias sobre el Tratado de Reducción de Armas Nucleares Estratégicas (START II), y acordaron avanzar hacia un nuevo Tratado START III, que establecerá para el 31 de diciembre de 2007 un techo de entre 2.000-2.500 armas nucleares estratégicas para cada parte e incluirá medidas para facilitar la transparencia en el inventario y en la destrucción de cabezas nucleares estratégicas. Aunque Rusia ha propuesto una reducción todavía mayor (1.500), Estados Unidos ha puesto rápidamente objeciones. En cualquier caso, las negociaciones para desarrollar el START III siguen dependiendo de la ratificación de la Duma Rusa del START II.

Mayor preocupación sigue causando en Europa la situación en Chechenia, que se manifestó con mayor intensidad durante la crisis del teatro moscovita de Dubrovka, tomado por terroristas chechenos con ochocientas personas en su interior. Todo ello vino a confirmar una realidad: el deterioro de las relaciones entre las autoridades de Moscú y los independentistas chechenos, que amenazan con extender el conflicto a otras repúblicas rusas, como Ingushetia, e incluso a Georgia, mientras continúa la represión rusa sobre las bandas chechenas, lo que ha servido en ocasiones para reflejar un peligroso paralelismo entre las acciones de las tropas federales en territorio checheno y el asalto al teatro de Moscú.

La Unión Europea, por su parte, sigue respaldando la integridad territorial de Rusia y acordó con este país, en la cumbre del mes de noviembre, un plan de colaboración estratégica contra el terrorismo. En ese ámbito, debe contemplarse el acuerdo entre Europol y la Federación para el intercambio de información sobre el movimiento de individuos, grupos o redes terroristas, así como el control de sus recursos financieros.

Por otro lado, en el campo de la cooperación militar, debe mencionarse el acuerdo alcanzado pocos meses antes, en la cumbre de Sevilla, sobre las consultas y cooperación entre la UE y Rusia en el campo de la gestión de crisis, que incluye el nombramiento de un oficial ante el Estado Mayor de la UE durante el periodo de no crisis. En cambio, si ésta tiene lugar, Rusia podrá contribuir a la operación de gestión de crisis liderada por la Unión y participar en el planeamiento de la operación, incluso cuando se requiera la utilización de medios y capacidades de la OTAN. Asimismo, la UE, a través del Comité de Contribuyentes, garantizará la participación de Rusia en la operación, con los mismos derechos y obligaciones que los demás países participantes.

La ambición de la Federación de Rusia de participar en las estructuras de seguridad continentales contrasta con la difícil situación que vive su Ejército, que, sin renunciar al servicio militar obligatorio, tratará de aumentar la profesionalización de ciertas unidades de vanguardia, y de orientarse hacia operaciones de combate y contraterroristas. El Plan anunciado para el periodo 2004-2007, y que será elaborado por responsables de los Ministerios de Defensa y de Exteriores, supondrá la creación de un núcleo profesional para las unidades pertenecientes a infantería, paracaidistas e Infantería de Marina. La disponibilidad de fondos y la atracción del personal necesario son los principales elementos que deberá perseguir esta reforma militar.

Bielorrusia: ¿nuevo “Estado fallido”?

Numerosos interrogantes siguen planteándose sobre el futuro de esta república eslava, que durante el año 2002 ha seguido mostrando severos déficits democráticos. En particular, en el campo de los derechos humanos, se sigue reclamando una moratoria sobre la pena de muerte, una mayor independencia judicial y una ley sobre el defensor del pueblo. Por otro lado, la existencia de una democracia plural exige el respeto a la diversidad política, religiosa y cultural, lo que incluye el respeto a la libertad de expresión y la no persecución de sus dirigentes políticos. Sin embargo, las últimas medidas adoptadas por el parlamento bielorruso, como la Ley de Libertad de Conciencia, debilita la libertad religiosa en este país, al mismo tiempo que establece serios controles del gobierno sobre las organizaciones religiosas, haciéndolas sujeto de sanciones en circunstancias que no se delimitan en la ley.

Por todo ello, han sido muy numerosas las ocasiones en que la UE y la OSCE han reiterado su preocupación por la situación interna de

Bielorrusia, especialmente cuando esta última organización observó la ausencia de una actitud positiva por parte de las autoridades de este país, a la hora de permitir la reanudación de la labor del Grupo de Minsk. Para ambas organizaciones, estos acontecimientos han tenido una importancia capital, pues impiden avanzar hacia la consolidación democrática del país y, en consecuencia, hacia progresos económicos y sociales.

En el campo de la seguridad, deben considerarse las repercusiones que tendrá el acuerdo alcanzado el 16 de abril entre Bielorrusia y Rusia, y que han dado alas al Tratado de la Unión, firmado en el año 1999, el cual prevé una política de defensa conjunta para ambos países. Con el nuevo acuerdo, se ha decidido fusionar, a largo plazo, las Fuerzas Armadas en el marco de la Unión Rusia-Bielorrusia.

La evolución política que pueda experimentar Bielorrusia en los próximos años, animada por una Rusia más democrática y una Europa comprometida con su estabilidad, podría alentar su transición democrática. Sin embargo, no debe descartarse que las autoridades de Minsk continúen el proceso de introspección a nivel interno, lo que podría traer graves consecuencias para un país situado en el corazón de la Europa continental.

Ucrania en transición

Las elecciones parlamentarias del mes de mayo en Ucrania fueron consideradas vitales y seguidas con gran expectación por parte de las instituciones occidentales, pues de sus resultados dependía, en cierta medida, la colaboración de éstas con la república. Aunque resultó vencedora la oposición prooccidental de Victor Yushchenko, antiguo primer ministro, la Misión Internacional de Observación constató algunos fallos en la celebración de este proceso, lo que obliga de momento a estar a la expectativa sobre la configuración de una verdadera democracia consolidada en Ucrania.

Más sólida parece, sin embargo, su posición en el marco multilateral, ya que el país continúa defendiendo abiertamente dos grandes prioridades estratégicas: su acercamiento a la Unión Europea y el refuerzo de su asociación distintiva con la OTAN. Y viceversa: la estabilidad interna de Ucrania interesa a todas las organizaciones internacionales europeas y a sus Estados miembros al transcurrir por su territorio el transporte del petróleo del Mar Caspio hacia Occidente.

Al igual que Rusia, Ucrania ha dado un paso significativo en el Consejo Europeo de Sevilla, celebrado en junio, cuando se presentó el acuerdo sobre las modalidades de consultas y cooperación entre la UE y Ucrania relativo a la gestión de crisis, lo que refuerza la idea de la capacidad del país eslavo como contribuyente potencial para las operaciones lideradas por la Unión.

Además, Ucrania había manifestado un mes antes su disposición a adherirse a la OTAN en un futuro a largo plazo. Este anuncio, si bien puso fin a la “neutralidad ucraniana” al mismo tiempo que la Alianza y Rusia comenzaban a resolver sus diferencias sobre el tema de la ampliación, fue desaprobado por Moscú, y siguió minando la tolerancia de Rusia sobre la expansión de la OTAN al antiguo bloque soviético.

A pesar de ello, la cooperación OTAN-Ucrania se ha ido intensificando en dos campos principalmente: en la reforma de sus Fuerzas Armadas y en la contribución de este país a las misiones de pacificación en los Balcanes y al transporte estratégico de tropas europeas a Afganistán.

En este sentido, Ucrania aprobó el Programa Nacional para la Cooperación con la OTAN 2001-2004, además de alcanzar un acuerdo con la OTAN sobre dos Fondos de la Asociación para la Paz (APP). El primero, lanzado oficialmente en el mes de julio, supondrá la destrucción de 400.000 minas antipersonal, mientras el segundo, aprobado en el mes de diciembre, permitirá la destrucción de 133.000 toneladas de municiones, y de un millón y medio de armas cortas y ligeras. Ambas iniciativas constituyen una demostración práctica de la OTAN a favor de la reforma de la defensa en Ucrania.

Por otro lado, el país eslavo sigue contribuyendo a las misiones de pacificación SFOR y KFOR en los Balcanes, y el papel de sus aviones Antonov está siendo esencial para el transporte estratégico de fuerzas europeas a Afganistán. La colaboración se ha visto reforzada por la firma de un MOU con la OTAN, relativo al apoyo de Ucrania a la Alianza como nación anfitriona (HNS, *Host Nation Support*), mediante el cual ambas partes utilizarán sus medios y capacidades para ejercicios y operaciones de gestión de crisis, lo que indudablemente lleva pareja una mayor cooperación política y militar.

Empero, la OTAN ha censurado a Ucrania por la supuesta venta de radares de defensa antiaérea a Irak durante el año 2000, y ha considerado insuficientes los argumentos sobre su cooperación con el régimen ira-

quí, lo que ha sido motivo de fricción durante la última reunión de la Comisión OTAN-Ucrania, celebrada en Praga en el mes de noviembre. Aunque este último país ha manifestado su voluntad de esclarecer el caso, no considera oportuno facilitar el nombre de los países a los que vende equipo militar, por lo que el tema seguirá siendo objeto del debate político en los próximos meses. Sin embargo, no se espera que ello se traduzca en mayores implicaciones para la cooperación militar, habida cuenta de la solidificación de las relaciones OTAN-Ucrania, que se ha ido alcanzando en los últimos años y los enormes intereses que ambas partes tienen en el reforzamiento de sus relaciones mutuas.

Moldavia y su búsqueda de identidad nacional

El año 2002 se puede considerar que ha sido un año de lamentaciones y de reproches para la república de Moldavia. En el ámbito nacional, el país, que declaró su neutralidad en su Constitución de 1994 y, por tanto, no participa de las estructuras militares de la CEI, sigue sin resolver el problema secesionista de la región rusófona de Transdnistria, cuyas autoridades mantienen una actitud obstruccionista para la aplicación completa del Tratado FACE Adaptado antes de final de este año, pese al apoyo financiero y organizativo de la OSCE.

En efecto, sigue sin llegarse a un acuerdo con las autoridades de Moscú sobre la retirada total de equipos militares de esta región, principalmente de la base septentrional de Cobasna, región que no desea una retirada de las tropas rusas mientras no se resuelva la cuestión del futuro político de Transdnistria en Moldavia y, además, las considera garantes de la estabilidad de esta región. Por consiguiente, Rusia sigue superando ampliamente los límites de los equipos limitados por el Tratado FACE Adaptado ante la eventualidad de un posible recurso a la fuerza. Por su parte, las autoridades de Moldavia también han visto renacer las críticas por su fracaso a la hora de proteger a las minorías nacionales en Transdnistria.

A nivel regional, el papel de Moldavia en la GUUAM, iniciativa en la que participa junto con Georgia, Ucrania, Uzbekistán y Armenia, sigue siendo precario. De hecho, el presidente de la República, Vladimir Voronin, manifestó en la última reunión celebrada en Yalta, que su país tenía serias preocupaciones sobre la viabilidad de esta organización. En su opinión, la GUUAM tiene todavía que encontrar su posición en el diálogo entre la UE y la CEI con el fin de hacer su contribución al proceso de integración glo-

bal. Sin embargo, los resultados de la cooperación en el seno de la GUUAM no están en línea con las declaraciones que se realizan en la organización, lo que ha hecho sentir a Moldavia como un país “observador”, más que como un miembro de pleno derecho, debido especialmente a su débil potencial económico. Un ejemplo de ello ha sido su práctica exclusión de los debates sobre los proyectos de transporte de petróleo del Mar Caspio.

Las Repúblicas Caucásicas y sus conflictos anquilosados

Dos son los graves problemas que continúan afectando a Georgia, Armenia y Azerbaiyán e impiden su desarrollo. Por un lado, los movimientos secesionistas de Georgia y sus relaciones con Moscú y, por otro, el conflicto que gira alrededor del territorio de Nagorno-Karabaj.

Respecto a Georgia, hubo un aumento de la tensión en la zona cuando el país denunció la violación del espacio aéreo e incluso el bombardeo de ciudades en el norte por parte de Rusia, que causó importantes daños a civiles. La fuente de estas malas relaciones entre Moscú y Tiflis se encuentra en que Rusia acusa a Georgia de convertirse en un santuario para los terroristas chechenos. Incluso la UE adoptó una , en el mes de agosto, en la que expresaba su preocupación por la actuación de aviones rusos en el país caucásico, al mismo tiempo que hacía un llamamiento para que se respetase su integridad territorial, y se trabajase con un espíritu de transparencia y cooperación para abordar los problemas de seguridad entre ambos países. Estas acciones no han hecho nada más que entorpecer las negociaciones para encontrar una solución al despliegue de fuerzas rusas en las bases de Gudauta, Batumi y Akhalari, pues no se han cumplido las fechas establecidas para su desmantelamiento en el año 2002.

No ha habido tampoco avances sustanciales en la situación del enclave armenio de Nagorno-Karabaj, en Azerbaiyán, a pesar de que Rusia, Francia y Estados Unidos han continuado esforzándose por encontrar una solución al conflicto, que debe incluir la participación de ambas repúblicas. También se ha llegado a culpar a la OSCE por no lograr poner fin al conflicto, después de diez años de la creación del Grupo de Minsk. A pesar de ello, la organización paneuropea ha seguido desarrollando una frenética actividad para reunir a representantes gubernamentales y de sus respectivas sociedades, a través de las Organizaciones No Gubernamen-

tales (ONG) de ambas repúblicas para tratar de alcanzar en éstas un objetivo que debe proyectarse en toda la región, incluida Nagorno-Karabaj: la garantía de libertad religiosa y de información, que brilla por su ausencia todavía en el Cáucaso. En definitiva, la OSCE sigue defendiendo que el continuo diálogo y la mutua comprensión sean los ingredientes que nutran la relación entre ambas repúblicas.

Las Repúblicas Centroasiáticas: nuevas demandas y necesidades de seguridad

Las Repúblicas Centroasiáticas son un ejemplo claro de que las expectativas de una rápida democratización de la parte asiática del bloque postcomunista fueron sobrestimadas. Sin embargo, su democratización sigue siendo esencial para la expansión de la estabilidad, ya que estos Estados, aunque se tratan normalmente como una entidad única, constituyen un conjunto de países que se encuentran en una encrucijada, entre Oriente y Occidente y, por tanto, experimentan una división de lealtades en función de sus diversos intereses de seguridad.

Mientras Kazajstán y Uzbekistán son los países que tratan de alcanzar el liderazgo en la región a través de sus respectivos acuerdos de seguridad —el primero mediante el Tratado de Seguridad Colectiva (TSC) (1), dominado por Moscú, y el segundo mediante la GUUAM, nacida para contrarrestar la influencia de Rusia en la CEI—, Turkmenistán continúa una política de neutralidad y no forma parte de ninguna iniciativa de la CEI, ni regional, como la Organización de Cooperación de Shangai (OCS), que integra a todos estos países y China.

Ahora bien, todas estas estructuras multilaterales carecen del vigor necesario que dé a sus Estados miembros un peso específico sólido en la región, por lo cual tratarán de obtener la mayor ventaja de la rivalidad entre EEUU y Rusia para conseguir este objetivo. Sin embargo, aunque es improbable la desvinculación total de Rusia de los Estados de Asia central, Estados Unidos está sacando ventaja de su potencial político, económico y militar para reforzar sus lazos con estos países, aprovechando el nuevo contexto internacional surgido tras el 11 de septiembre de 2001.

En general, se puede argüir que la situación en la región es relativamente estable. Los escenarios más alarmistas sobre un posible “desbordamiento” de la influencia talibán y de Al Qaeda a estas como consecuencia de la guerra en Afganistán, no se han materializado debido a la

acción determinante de la Comunidad Internacional y al apoyo de los gobiernos locales.

No obstante, la contribución de estas repúblicas a la operación “Libertad Duradera”, liderada por EEUU obedece más a factores de inestabilidad interna, motivada por la presencia de grupos radicales islámicos —como el Hizb ut-Tashrir y el Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU)— y por cierta depresión económica, que a factores de solidaridad internacional.

En este contexto, se ha podido apreciar una disminución de las actividades de ambos grupos guerrilleros en la región, a medida que EEUU ha aumentado su presencia en bases militares de Uzbekistán (Khanabad y Kokayda), Kirguizistán (Manás) y Tayikistán (Dushambé y Kylyab). Por el momento, EEUU se ha comprometido a la modernización de las antiguas bases soviéticas, que costarán al erario público norteamericano entre 200 y 250 millones de dólares cada una de ellas.

Esta colaboración militar de EEUU con las repúblicas centroasiáticas alcanzará la máxima rentabilidad económica si consigue finalmente garantías de acceso a los importantes depósitos de hidrocarburos que tiene la región (petróleo y gas natural), especialmente en el Mar Caspio, objetivo que la Administración Bush trata de obtener colaborando con los regímenes autoritarios de Asia, y que, sin duda, será fuente inmediata de tensión entre Moscú y Washington. Además, de consolidarse en el futuro la presencia norteamericana en estos países y de estabilizarse la situación en Afganistán, EEUU no sólo reforzaría su posición privilegiada en Asia frente a Rusia, sino también frente a China, su principal competidor comercial, que necesitará en el futuro de ingentes recursos energéticos para continuar su desarrollo económico.

Analizando la situación por países, las autoridades de Kazajstán, la república más alejada del actual escenario de conflicto en Afganistán, han seguido una política de centralización del poder, evitando cualquier manifestación de libertad en los medios de comunicación, lo que viola no sólo la Constitución del país, sino también numerosos acuerdos internacionales, firmados con la OSCE y la UE, como el Acuerdo de Asociación y Cooperación. En cambio, el país ha continuado diversificando sus relaciones exteriores y de defensa entre los dos grandes colosos, China y Rusia, y más recientemente con Estados Unidos, cuya asistencia está en su fase inicial, y se limita a la formación militar y al entrenamiento de sus fuerzas armadas en técnicas antiterroristas.

Kirguizistán, por su parte, es un pequeño país que tiene un enorme potencial para desarrollar su producción hidroeléctrica y generar los ingresos necesarios, para hacer frente a sus necesidades. Se ha calculado que dos presas producirían hasta unos 2.200 megavatios de electricidad, lo que permitirá aumentar su independencia energética y exportar energía a China, Uzbekistán y otros países vecinos. Estas presas, además, podrían ayudar a racionalizar el uso de agua en la región. Por otro lado, el país sigue dependiendo de la ayuda militar rusa, aunque la norteamericana está destinada a crecer significativamente en los próximos años, principalmente para mejorar el control fronterizo del país.

Tayikistán, víctima de una guerra civil y principal socio estratégico de Rusia en la reforma de sus modestas fuerzas armadas y en el control de su frontera con Afganistán, se afana por cooperar a nivel regional para hacer frente a las graves amenazas, como el tráfico de drogas y el extremismo transnacional islámico. Así, hospedó en su territorio un conjunto de ejercicios militares que, bajo la denominación de “Antiterror 2002”, reunió a fuerzas de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán y Rusia.

Uzbekistán, por otro lado, sigue mostrando unas fuertes ambiciones regionales, amparadas por unas fuerzas armadas, que son las más preparadas de la región y que sigue potenciando con el fin de defenderse de posibles insurgencias y como medio para combatir el terrorismo regional, que representa el MIU.

A diferencia de Uzbekistán, Turkmenistán tiene unas fuerzas armadas que se caracterizan por una baja capacidad para el combate, una débil moral y su falta de equipamiento. Sin embargo, la represión frente al extremismo dirigido por sus respectivos presidentes, Karimov y Nyazov, ha dado lugar a considerar a ambos gobiernos como los más antidemocráticos de Asia central, pues han utilizado la guerra contra el terrorismo como una excusa para tratar de eliminar en su interior a sus principales disidentes políticos.

No obstante, el principal problema que tienen los países de Asia en su conjunto es la falta de mecanismos de cooperación regional que aborden los problemas de la región de forma colectiva.

Desde el punto de vista económico, estos países, a excepción de Uzbekistán, se encuentran al borde del colapso, mientras continúa floreciendo el tráfico de drogas como su principal fuente de ingresos. A menos que se alcance un desarrollo económico en la región, el extremismo político y religioso puede seguir avanzando.

Aunque Rusia y las instituciones occidentales han aumentado su asistencia individual a estos Estados, es necesario un programa de desarrollo regional para los países de Asia que, bajo los auspicios de una organización internacional, integre los esfuerzos de Naciones Unidas, la OSCE, la UE y la OTAN, y realice los mayores esfuerzos para la coordinación de las actividades en esta área geográfica.

Si del pacto de estabilidad para Europa Suroriental, dirigido por la OSCE, no sólo se están beneficiando los países que sufrieron directamente el conflicto de la desintegración de Yugoslavia, sino todos los países de la región, un nuevo Pacto de Estabilidad para Asia central debería coordinar, a largo plazo, los esfuerzos cooperativos de las Organizaciones Internacionales (incluido el Banco Mundial) para la reconstrucción de esta región, directamente afectada por la crisis de Afganistán. Así, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) reconoció en la cumbre económica de Eurasia, celebrada en el mes de abril, la importancia crítica de la cooperación entre los cinco países en áreas como el comercio, el transporte, la energía y el agua. En definitiva, aunque hay un gran potencial para el desarrollo de la región, todavía el nivel de integración alcanzado no es el adecuado, lo que sigue causando cierta preocupación.

En el campo de la seguridad, el encuentro del Tratado de Seguridad Colectiva (TSC), celebrado en Moscú el 14 de mayo de 2002, supuso la transformación de esta iniciativa de cooperación multilateral en organización. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) dará un nuevo fundamento legal a la nueva estructura. El avance más significativo, sin embargo, se produjo cuando el presidente Putin manifestó su voluntad de que la nueva organización coopere con otras Organizaciones Internacionales, como la OTAN y la OCS, para combatir las nuevas amenazas. Paralelamente, la cumbre de esta última organización, celebrada en San Petersburgo un mes más tarde, ha dado un nuevo impulso a la OCS, pues los Estados miembros firmaron una carta, que le da una nueva base legal y sirve para reforzar la cooperación en materia de seguridad.

A pesar de ello, no hay que olvidar que los Estados de Asia siguen siendo vulnerables a posibles actuaciones del MIU y de Al Qaeda, y sus fuerzas armadas, en su mayoría débiles y ávidas de reformas, continuarán buscando el apoyo de las potencias regionales y extrarregionales, fundamentalmente de EEUU. Sin embargo, la fragilidad de sus economías continúa minando el deseo de reemplazar el obsoleto equipo militar y los sis-

temas de armas soviéticos por otros modernos, de ahí la importancia de las compensaciones en el campo económico por la cooperación militar.

LA CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA A LA ESTABILIDAD DE LA REGIÓN EUROASIÁTICA

La lucha contra el terrorismo, las misiones de pacificación y el fomento de las medidas de confianza y seguridad han sido las grandes prioridades de España en su firme propósito de contribuir a la paz y la estabilidad de la región eurasiática, lo que le ha llevado a actuar simultáneamente, y en diversos marcos multilaterales de cooperación, en teatros muy alejados geográficamente entre sí, desde los Balcanes a Asia.

En el ámbito de la UE, España logró sacar adelante, en el Consejo Europeo de Sevilla del mes de junio, una importante declaración sobre “La contribución de la PESC, incluida la PESD, en la lucha contra el terrorismo”, en la que, además de enfocar el problema del terrorismo de forma global, estableció claras líneas de acción para sus Estados miembros y nuevas pautas de actuación en sus relaciones exteriores con “terceros países”, la mayoría de los cuales se encuentran en esta área geográfica. Así, la declaración expresa el propósito de la Unión de hacer que el diálogo político con terceros países se centre en la lucha contra el terrorismo, en la no proliferación y en el control de armamentos; de proporcionar ayuda a los mismos, a efectos de reforzar su capacidad para responder con eficacia a la amenaza internacional del terrorismo; de incluir cláusulas antiterroristas en los acuerdos de la UE con terceros países; y de proceder a una nueva evaluación de las relaciones con éstos, a la luz de la actitud de los mismos hacia el terrorismo, tomando, consecuentemente, las medidas apropiadas.

Por otro lado, España mantiene su presencia en las misiones de pacificación, lideradas por la OTAN, en Bosnia-Herzegovina (SFOR) y Kosovo (KFOR), contribuyendo así a realizar una miríada de misiones, desde la aplicación de los acuerdos de paz, al mantenimiento de la ley y el orden, y el desarrollo de las tareas humanitarias. Con todo, ante la evolución satisfactoria de la seguridad en la región, el 16 de noviembre se produjo en Bosnia-Herzegovina una importante reducción de nuestro contingente en la División Multinacional Suroriental (MND-SE), específicamente de las unidades de Ingenieros y de Infantería de Marina. Por otro lado, y en el marco de la operación “Libertad Duradera”, liderada por EEUU, España

forma parte de la coalición internacional contra el terrorismo. Su presencia en Asia se manifiesta en Manás (Kirguizistán), donde se han desplegado medios de transporte aéreo táctico (un C-130 con 50 efectivos), y 2 helicópteros COUGAR del Ejército de Tierra, con 55 efectivos, y que deben sumarse a otros medios navales, una unidad médica y oficiales de enlace, desplegados en Cuarteles Generales y en toda la zona del conflicto.

Finalmente, en el ámbito de la OSCE, España ha sido la sede en el mes de febrero de un importante seminario, que ha reunido a numerosos representantes de esta organización para debatir un tema que afecta a toda Europa y a Asia: la protección de la calidad del agua. El seminario, celebrado en Zamora, ha servido para crear conciencia de los factores potencialmente desestabilizadores para la dimensión económica y medioambiental de sus Estados miembros. Asimismo, las instituciones españolas han recibido delegaciones parlamentarias de la de Yugoslavia, que se han interesado principalmente por las funciones y tareas del defensor del pueblo.

En definitiva, a través de la mejor comprensión de las experiencias y de los desafíos que afectan a nuestras sociedades, se podrán establecer nuevas relaciones entre los diversos Estados de esta extensa región geográfica, meta hacia la que se orienta la acción exterior de España.

CAPÍTULO CUARTO
EL MEDITERRÁNEO

EL MEDITERRÁNEO

Por María Dolores Algora Weber

El año 2002 ha estado marcado en todas las esferas mundiales por las consecuencias del 11-S. El Mediterráneo no sólo no ha sido una excepción, sino que por el contrario, ha sido protagonista y testigo de los nuevos planteamientos del orden mundial.

Durante el transcurso del año, la civilización islámica —sus Estados y sus gentes— se ha convertido en el punto de mira, o más bien, en muchos momentos, en “cabeza de turco” de todos los peligros que amenazan a la seguridad internacional. En este sentido, en el Mediterráneo meridional como escenario del mundo árabe islámico y, por su evidente conexión, en el mundo asiático musulmán en su conjunto, hemos asistido a una progresiva manifestación de los efectos causados por los atentados de Nueva York.

El primer impacto que se ha vivido en el Mediterráneo ha recaído sobre la propia percepción que los Estados ribereños tienen de unos y otros. La desconfianza a todos los niveles fue la reacción más inmediata que siguió a los meses de los atentados. Sin embargo, superada la conmoción inicial, el segundo impacto se ha centrado en la necesidad de una reubicación en el Mediterráneo. Un replanteamiento que nos lleve a entender cuáles son los valores y objetivos que perseguimos en esta área estratégica, tanto en el norte como en el sur. Un planteamiento que nos permita distinguir situaciones y tomar posiciones en el amplio espectro de realidades que presentan nuestras orillas, especialmente la del sur. En el llamado mundo de la “globalización” ha quedado más patente que nunca la necesidad de diferenciar y conocer para evitar caer en el retroceso de los

logros que habíamos alcanzado, o al menos trazado como metas, durante toda la década de los noventa.

El acercamiento al mundo árabe ha dejado de ser únicamente una condición necesaria para el desarrollo de las relaciones mediterráneas. En el último año se ha dado un paso superior, se ha convertido en una obligación urgente para el mantenimiento de la seguridad y estabilidad en el Mediterráneo, en Europa y en el orden internacional.

De aquí que podamos analizar cómo se han agravado algunos de los contenciosos latentes en el mundo árabe musulmán, y cómo las posiciones y alianzas tradicionales se han transformado.

El año 2002 ha sido, por tanto, un año de confusión, de reorientación y de reacción. Las circunstancias que hemos visto en el Mediterráneo han sido buena muestra de esta nueva realidad.

El 11-S suscitó la evidencia de que la acción norteamericana debía reorientarse en el mundo árabe. Sin embargo, lejos de esta revisión de posiciones, hemos asistido a una postura de firmeza y agresividad diplomática, que si bien ha ocasionado el respaldo del presidente George W. Bush en el interior de su país, en el exterior ha desconcertado a la sociedad internacional, que asiste perpleja a lo que algunos empiezan a denominar la “balcanización del mundo árabe”.

Por otro lado, a la vista de la evolución de los acontecimientos, ha quedado también claro a lo largo de los meses, el daño que Ben Laden y Al Qaeda han causado no sólo a Estados Unidos, sino a la sociedad internacional en su conjunto y muy en particular al mundo islámico, víctima de un enjuiciamiento moral y global desde entonces.

En este sentido los distintos Estados europeos han tenido un papel fundamental. Los conflictos del Mediterráneo han servido para mostrar las fisuras internas de la Unión Europea. Se han destapado claramente posiciones, que al menos en el plano de las declaraciones formales, han evidenciado la debilidad de la Política Exterior de Seguridad y Defensa. Sin embargo, a pesar de este defecto, los gobiernos europeos han tenido una función relevante en la estabilidad internacional. Recordemos, sólo a modo de introducción, que en los dos conflictos más importantes de Oriente Próximo, Estados Unidos no ha recibido el apoyo incondicional que podía haber esperado de sus aliados europeos. En los graves acontecimientos en los territorios palestinos, fue precisamente la Unión Europea, en los primeros meses del año, la que forzó la diplomacia para

la constitución del “cuarteto” internacional, evitando la acción unilateral norteamericana. Del mismo modo, los Estados europeos han presionado para que las operaciones sobre Iraq respetaran las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Quizás los gobiernos europeos no tengan una posición de fuerza en el escenario mundial, pero sí parecen empezar a dar muestras de que nuestros intereses estratégicos están *en* el mundo árabe y no *contra* éste.

En estos meses, no sin razón, hemos asistido a un debate en la opinión pública generado por la reacción de las distintas sociedades europeas. El debate de la oposición o la colaboración con la política internacional norteamericana. Parece obvia la apuesta por la cooperación en una política marcada por el objetivo de la lucha antiterrorista, sin embargo se están produciendo cambios importantes, que pretenden frenar la actuación hegemónica del gobierno de Washington. En este sentido, quizás la Unión Europea, se haya adelantado a Estados Unidos a la hora de tomar conciencia de la nueva realidad internacional.

La impresión es que Estados Unidos que ganó la Guerra Fría, está empezando a perder la posguerra desde el 11-S. Parece haberse quedado anclado en un concepto clásico al estilo de la “política de contención”, sin percatarse del desfase que ello está produciendo en las relaciones internacionales desde este año. Aunque desde la Casa Blanca se predica que el peligro y amenaza real no está en los Estados sino en el terrorismo, no se actúa siempre conforme a ello. Bush sigue planteándose el orden mundial en términos de confrontación en Oriente Próximo y con ello no va a poder combatir la violencia.

Los atentados de Al Qaeda, sumados a la posición que Estados Unidos mantiene en Iraq y Palestina, está acelerando el “despertar”, la reacción de las sociedades de la región. Estamos viendo como los pueblos árabes, cada vez con más fuerza, de una forma u otra —desde la Intifada a las urnas—, ponen en entredicho a sus propios gobiernos desde el Masreq al Magreb. En este año ha aumentado la brecha entre la sociedad civil árabe y una clase política con la que no se identifican. Esta circunstancia no ha pasado desapercibida para los gobiernos árabes, que al menos en su fachada exterior, han cambiado algunas de sus posiciones internacionales. Como caso singular y trascendental, el de Arabia Saudí, con toda su proyección asiática y próximo oriental.

Esta realidad del mundo árabe, que vive en las riberas del Mediterráneo pero también en el interior de Europa y Estados Unidos, no

se puede combatir más que a través de un esfuerzo de mediación. No queda más remedio que superar todos los prejuicios que ha traído el 11-S. En ese sentido, la reacción a estos sucesos traumáticos debe consolidarse urgentemente en el Mediterráneo, convertido en el “tubo de ensayo” de la sociedad internacional.

Esto no significa negar la existencia de un epicentro terrorista, que desde Asia central se extiende con dos direcciones. Una hacia el norte rumbo al Mar Negro y otra hacia el este rumbo al Mediterráneo. El Mediterráneo es una pieza más en una “fila de fichas de dominó”, que desde Afganistán pasa al Oriente Próximo, al Magreb y a Europa en su conjunto. La fórmula de la estabilidad ya no está sólo en la intervención militar y en la hiperacción de las agencias de inteligencia internacionales, sino también en el entendimiento y el desarrollo, para lo que habrá que valerse de los medios legítimos de la sociedad internacional.

La vecindad geográfica está permitiendo a Europa tomar conciencia de esto. Por eso en este año, gobiernos como el francés o el alemán han intentado abrir los ojos de la administración norteamericana. Se trata de hacerles asimilar que el freno a la situación iraquí es tan urgente como el freno a la situación palestina, que no consiste en demoler la autoridad política, sino en resolver las circunstancias en las que viven los pueblos. Ha quedado patente que Estados Unidos necesita asumir esta visión del orden mundial si pretende recuperar un liderazgo cada vez más a la baja.

Esa es la presión que se ejerce desde Europa. Los asuntos del Mediterráneo están sirviendo para que Washington se someta a la legitimidad internacional. Esta es la única vía para recuperar su credibilidad como líder mundial al que se le exige una razón moral en las relaciones internacionales y la única vía también para evitar la actuación norteamericana solamente amparada en su supremacía económica y tecnológica.

Dicho esto se entiende, que no se trata en oponerse sistemáticamente a Estados Unidos y mucho menos a que se combata el terrorismo internacional allá dónde esté, sino que la colaboración está condicionada a una cuestión de forma legal, de medios, de fórmulas para buscar soluciones y, sobre todo, de planteamientos del orden mundial que esperamos tener en el futuro.

Posiblemente el papel de los gobiernos europeos no pase de ahí. No estará a la cabeza de la toma de decisiones internacionales. Es muy probable que la Política Exterior de Seguridad y Defensa de la Unión Europea,

se vea dividida y arrastrada por la política norteamericana, pero al menos en este año, ha contribuido a contener una hegemonía unipolar que está a la espera de poder revelarse con toda su plenitud en la escena mundial.

Pasemos, pues, a los hechos concretos del Mediterráneo que nos han permitido llegar a este análisis.

ORIENTE PRÓXIMO: DEL ORDEN MEDITERRÁNEO AL ORDEN MUNDIAL

Ninguno de los dos principales conflictos del Mediterráneo oriental es nuevo, sin embargo sí han alcanzado una nueva dimensión a raíz del 11-S. En lo sustancial se han producido cambios importantes, como el agravamiento de la violencia en el caso palestino o la contestación del gobierno iraquí al embargo internacional, pero lo más destacado ha sido la nueva ubicación en el escenario de la seguridad internacional.

En ese sentido, detrás de la “Doctrina Bush”, es decir, de la política norteamericana internacional basada en la lucha antiterrorista, da la impresión de que se esconden viejas teorías geopolíticas al estilo de Mackinder. Da la impresión de que el nuevo orden mundial vuelve a resucitar de las cenizas de la Guerra Fría una teoría similar a la de la “Tierra Corazón” adaptada a la realidad del siglo XXI. Ha cambiado el concepto de poder de las potencias y el carácter de los recursos naturales que proporcionan dicho poder. Esto nos lleva a un cierto desplazamiento en las zonas geográficas que lo determinan, pero la esencia doctrinal sigue siendo la misma. De este modo, Asia central y el Oriente Próximo se han convertido en la condición para el dominio del mundo.

El petróleo de Chechenia y sus zonas de acceso, el de Iraq, de Irán y de Arabia Saudí se ha convertido en la piedra clave del nuevo orden. Unos recursos que en el caso del Cáucaso la Federación Rusa sigue protegiendo como asunto interno y que en el resto de la región Estados Unidos ve amenazados como consecuencia del relanzamiento del islamismo radical que ha provocado los atentados del World Trade Center.

Esto explica que durante este año, se haya disparado la obsesión norteamericana por “resolver” el tema de Iraq. Cuestión que ha ido ganando prioridad a medida que se han ido complicando las posibilidades de alcanzar dicho objetivo. El tema palestino, que todavía suscitó algunas acciones en el primer semestre, ha ido quedando supeditado al iraquí. El esquema parece sencillo, pero también inocente.

Al igual que pasara con la Guerra del Golfo en el inicio de los noventa, se supone que la solución definitiva al embargo de Iraq despejara el campo para el conflicto palestino. Sin embargo, la Casa Blanca no parece percibir que ya las circunstancias no son las mismas.

El final de la Segunda Guerra del Golfo sirvió para impulsar el proceso de paz en el Oriente Próximo porque la oleada islamista había perdido fuerza después de la muerte del Ayatollah Jomeini en 1989. El mundo árabe musulmán se encontraba predispuesto a una solución global de las circunstancias que no encontraron respuesta en la explosión islámica de los años ochenta. Pero esto ya no es así.

Los años noventa atravesaron por su momento de euforia internacional en el Mediterráneo, cuando pusieron todas las esperanzas en el proceso de paz, pero eso también pasó. La década ha terminado con una nueva frustración para la causa palestina y el pueblo árabe en su conjunto. Esta situación se ha interpretado desde el interior del mundo árabe islámico como fruto de la incapacidad de Estados Unidos para ejercer una función verdaderamente conciliadora entre los sectores palestinos e israelíes. Mucho más desde el estallido de la segunda Intifada, la imposibilidad de firmar los Acuerdos de Camp David y la impunidad de Israel desde el 11-S. Ahora el islamismo no está a la baja, sino al alza. Ya no es un islamismo desde arriba, sino que toman fuerza los movimientos islámicos desde abajo, cuya propagación es mucho más rápida y firme. Por este motivo, ya no va a resultar tan consecuente el final de la situación iraquí con la solución palestina.

Por otro lado, la clara inclusión de Oriente Próximo en el escenario de control del orden mundial está llevando al distanciamiento de los procesos del Mediterráneo. Durante mucho tiempo se ha cuestionado la conveniencia o no, más bien la posibilidad o no, de desvincular el Proceso de Barcelona del Proceso de Paz del Oriente Próximo. Es evidente que, ante el fracaso de la mediación internacional en Israel y la inclusión de esta zona en el marco de otros objetivos mundiales, gana terreno la tesis de que es necesario separar por completo las relaciones con el Magreb de las del Masreq. Lo que no queda nada claro es si esa fractura es real desde el plano de los movimientos sociales árabes a los que estamos asistiendo en el último año, pues lo que sí es cierto es que el antiamericanismo, y por extensión antioccidentalismo, está creciendo a igual velocidad en el centro asiático que en el norte de África. Su mejor expresión es el empuje de los sectores fundamentalistas, que reclaman el Islam como forma de identidad propia frente a Occidente.

Desafortunadamente —habrá quién cierre los ojos para no verlo—, el orden mundial que hemos emprendido está consolidando el mensaje de Ben Laden. El “eje del mal” del presidente Bush, incluyendo a Iraq e Irán —pilar del mundo musulmán—, está favoreciendo los argumentos que precisamente hay que combatir. No estamos en el “choque de civilizaciones” que parece deducirse del axioma norteamericano, estamos en los efectos de un acto terrorista ocasionado por unos fanáticos musulmanes.

Por tanto, la responsabilidad europea y su proyección en el Mediterráneo, es uno de los retos más importantes que tiene que abordar la Política Exterior de Seguridad y Defensa.

La “cuestión iraquí”

Ya hemos explicado el contexto que en el orden internacional ha llevado al renacimiento de la “cuestión iraquí”. Argumentos a los que se podrían añadir otras explicaciones de índole interno de la política norteamericana. Hay quienes ven en este objetivo una vía de reforzamiento del liderazgo interno de George Bush. Se trata de suplir el éxito que no se pudo alcanzar al no capturar a Ben Laden tras la operación de Afganistán, ofreciendo a la opinión pública un elemento de cohesión que permita mantener el poder del presidente y, de paso, el lema que, popularmente, ha prosperado en los últimos meses de “Estados Unidos, estamos unidos”.

Al margen de estos episodios de la política interna norteamericana, que juegan un papel importante, también es cierto que debemos evitar la tentación de “victimizar” a Sadam Hussein. El régimen de Iraq no es una víctima, es un verdugo del pueblo iraquí. En este sentido tendrá que actuar la sociedad internacional, pero en interés de los iraquíes, no en el de las potencias mundiales.

Luego, insistimos, el problema que tiene Estados Unidos no es el objetivo, es la forma de alcanzarlo. La acción unilateral, por encima de las decisiones del Consejo de Seguridad, es la que causa confusión, la que eleva la tensión internacional e impide solucionar la cuestión.

El ataque a Iraq no está directamente vinculado a los atentados de septiembre de 2001, pues la administración norteamericana ya tenía prevista una operación con anterioridad. Pero los acontecimientos se precipitaron desde que en los meses finales del año comenzaran a circular las

noticias de un eventual ataque contra el régimen de Bagdad para mayo de 2002.

Los bombardeos de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre la zona de seguridad establecida por las Naciones Unidas se han producido en varias ocasiones durante los años del aislamiento iraquí, pero la intervención planificada tendría un carácter distinto en esta ocasión. Se trataría de derrocar a Sadam Hussein.

En marzo Estados Unidos, amparado en el margen que los atentados le habían otorgado en la sociedad internacional, al situar en sus filas incluso a sus más detractores tradicionales, envió al vicepresidente Cheney a una gira por Oriente Próximo. El mandatario norteamericano esperaba poder confirmar los apoyos árabes en un ataque contra Bagdad, pero sus propuestas fueron rechazadas, incluso por uno de sus fieles aliados como es el caso de Arabia Saudí.

A partir de este momento comenzó el desconcierto de la Casa Blanca, que no sólo tropezó con la resistencia árabe a una operación militar, sino que además vio como se producían fracturas en el propio seno de la Unión Europea, donde Alemania se pronunció rotundamente en contra de una participación, y Francia condicionó su presencia a las decisiones del Consejo de Seguridad. Con esta posición coincidieron España e Italia. Como era de esperar, Gran Bretaña, fue el único apoyo incondicional que encontró Estados Unidos entre los grandes de Europa.

En este contexto, en el mundo árabe se produjeron avances internos, muy lejos de la voluntad norteamericana. A finales de ese mismo mes de marzo se celebró en Beirut la cumbre de la Liga Árabe. En el transcurso de estas sesiones los gobiernos árabes pusieron fin por su cuenta a la Guerra del Golfo, produciéndose un acercamiento entre Arabia Saudí, Kuwait e Iraq, que fue respaldado por todos los miembros de la organización. Se llegó así a una clara demostración del daño que entre los árabes causó la guerra hace una década y su voluntad de superar esta brecha poniendo en funcionamiento la unidad y sentimiento de la “umma” árabe, poco considerada desde los análisis y cálculos occidentales.

Sin embargo, el respaldo al régimen iraquí encontró su límite posteriormente cuando, en el mes de abril, Sadam Hussein propuso utilizar el petróleo como arma de guerra, cortando los suministros a los países occidentales durante unas semanas. No contó con la respuesta positiva del resto de los Estados árabes. Tampoco accedió a ello el régimen de Irán, a

menos que se tratara de una acción conjunta de los Estados productores de la región.

En aquellos momentos, la “cuestión palestina”, que atravesaba uno de los peores momentos de los diez años del Proceso de Paz para el Oriente Próximo, fue sin duda el argumento de más peso para evitar una crispación todavía mayor en las relaciones entre el mundo árabe y Occidente. No podemos olvidar que en la misma Cumbre de Beirut se había aprobado por unanimidad el Plan Saudí de apoyo a la causa palestina.

Durante el mes de julio volvió a encenderse la llama con el nuevo anuncio de un ataque norteamericano. La decisión pareció tan firme y de ejecución tan inminente, que en Londres llegaron a reunirse los sectores de la oposición exterior al régimen del dictador con el fin de preparar un nuevo gobierno que se hiciera con la situación, una vez producido el derrocamiento.

La amenaza norteamericana de emprender una acción unilateral con el apoyo de Gran Bretaña desató la diplomacia de las cancillerías europeas. El presidente Bush utilizó todos los argumentos posibles que le pudieran asegurar el respaldo de la Unión Europea. De este modo, durante los meses del otoño asistimos a la “necesidad de derrocar a Sadam Hussein”, a la “necesidad de enviar inspectores de las Naciones Unidas”, a la “necesidad de frenar la fabricación de armas de destrucción masiva” o a la “necesidad del desarme del régimen de Bagdad”. Una confusión de planteamientos, que en cualquier caso, todos llevaban a un mismo vértice: el ataque a Iraq.

Finalmente, Estados Unidos ha logrado persuadir a los Estados europeos y árabes de la amenaza que puede suponer Iraq para la seguridad internacional, pero ha tenido que aceptar todos los matices y pasos exigidos por la comunidad internacional, para contar con su respaldo. Incluso Turquía, que al iniciarse el año apoyaba un ataque unilateral norteamericano, acabó por sumarse a la posición de las Naciones Unidas.

De este modo, lo primero que ha tenido que admitir la administración norteamericana es que el supuesto peligro iraquí proviene de su capacidad de fabricación de armas de destrucción masiva y de la voluntad de utilizarlas. Esta cuestión no implicaba un ataque directo, sino una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (R.1441), por la cual se debía permitir el regreso de los inspectores a Iraq sin condiciones y sin obstáculos en su función. En el mes de noviembre, tras una fuerte

tensión internacional y contra el pronóstico norteamericano, Sadam Hussein aceptó la resolución.

Aunque esta resolución no termina con los problemas internos del régimen iraquí, al menos, por el momento está evitando un conflicto internacional que muy probablemente hubiera llevado a un mayor fortalecimiento de Sadam Hussein en el poder o a la creación de una situación de desorden político en el interior de la república con evidentes implicaciones internacionales. Recordemos que ni está clara, ni es sencilla la situación que se produciría tras una eventual caída del presidente iraquí. Se crearía una situación muy incierta y no exenta de riesgos importantes para la comunidad internacional.

La “cuestión palestina”

La situación en los territorios palestinos a lo largo de este año ha sido una muestra evidente del desgaste de la mediación norteamericana y del fracaso del Proceso de Paz para Oriente Próximo. Ninguno de los actores internacionales ha desaparecido del escenario, sin embargo los frutos no sólo no llegan a madurar, sino que parecen secarse.

El proceso, que siempre contó con dificultades, empezó a retroceder aceleradamente desde hace dos años. El estallido de la segunda Intifada en septiembre del año 2000, desatado por la presencia de Ariel Sharon en la Explanada de las Mezquitas, puso de manifiesto la fuerza del pueblo palestino y sacó a la luz la crisis política en el seno de la Autoridad Nacional Palestina. Dos circunstancias que han llegado a su máximo grado de expresión a lo largo de este año.

Por otra parte, también hace dos años, esta vez en diciembre, el presidente Arafat rechazaba definitivamente el Plan Clinton, que constituía la última oportunidad de aceptar lo que ya se había acordado en Camp David durante aquel verano. La negativa del presidente palestino significó el fracaso de la conciliación norteamericana. Desde ese momento, Estados Unidos entró en una carrera de desgaste, que si ya dejó su huella durante el año 2001, coincidiendo con el relevo en el gobierno tanto en Washington como en Tel Aviv, en 2002 ha llegado a unos extremos completamente inadmisibles. Ha llegado a lo que muchos no quieren admitir: el conflicto abierto entre palestinos e israelíes. Sin olvidar la ruptura interna que esto ha ocasionado en las administraciones políticas de los dos bandos.

Cada vez es más evidente que Estados Unidos entendió los Acuerdos de Camp David como el último intento de restablecer la paz. Ese es el mensaje que han tenido que asumir los palestinos desde entonces. En este contexto, el 11-S ha servido de telón de fondo para una decisión que ya estaba tomada. Se han desencadenado unas circunstancias que no ha dudado en aprovechar el gobierno de Sharon, convirtiendo a los palestinos en blanco de lo que él ha interpretado —bajo su óptica radical— como la lucha contra el terrorismo.

Esta actuación israelí, se ha visto favorecida por el nuevo enfoque internacional. Como venimos comentando, Estados Unidos ha cambiado de planteamiento y vincula la paz en los territorios palestinos con la solución del problema iraquí. Espera adquirir fuerza en la mediación cuando haya resuelto esta última cuestión. Esto está llevando a la impunidad completa de Israel en sus actuaciones en los territorios.

Por otra parte, el terrorismo palestino ha crecido como expresión de la frustración y la impotencia. A los grupos fundamentalistas ya existentes desde los años ochenta —el caso de Hamas—, se han sumado nuevos actores en los últimos dos años —las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa. Estos sectores radicales cuentan cada vez con sectores de población más amplios, que la propia Autoridad Nacional Palestina es incapaz de controlar. De ahí el creciente terrorismo, basado en la utilización de hombres bomba, que se escapa de las decisiones de Arafat en gran medida.

El terrorismo fundamentalista no es un factor nuevo en el Oriente Próximo, pero estamos asistiendo a un fenómeno de “divinización” de los atentados, que los justifica y ensalza a los ojos de algunos sectores palestinos. La reacción de Israel se ha hecho cada vez más violenta e ineficaz. El ejército israelí ha vuelto a ocupar los territorios palestinos, dando muestras del error y horror que, en determinadas condiciones, puede suponer utilizar la fuerza militar como instrumento para combatir el terrorismo —especialmente cuando bajo este término se engloban muchas situaciones que no corresponden. Incluso a lo largo del año, se ha procedido a la construcción de un muro que separa a los territorios árabes de los israelíes.

Estas circunstancias han dado pie a un círculo vicioso que ha llevado a la crisis tanto al gobierno de Yasser Arafat como al de Ariel Sharon. Ninguno de los dirigentes ha podido cumplir las promesas esperadas por los pueblos, ni la de consumir un Estado palestino independiente, ni la de devolver la seguridad a los israelíes, respectivamente.

En el plano de los hechos concretos, señalemos que el año se inició con una situación de enfrentamiento abierto en el que la propia policía de la Autoridad Nacional Palestina se oponía a la presencia del ejército israelí en los territorios. Asimismo, pudimos observar desde entonces un cambio de estrategia en la Intifada, que pasó a un mayor grado de sofisticación al emplear algunos “misiles” de fabricación casera y lanzarse al ataque de los puestos de la policía israelí.

Este cambio en la lucha callejera llevó al primer ministro Ariel Sharon a emprender una dura represión contra los palestinos, ocupando nuevamente los territorios con la utilización de tanques y helicópteros “Apache”. Durante la primavera asistimos al desarrollo de la llamada “operación muro de defensa”, con el objetivo claro de acoso y derribo de Yasser Arafat en su cuartel general de Ramalla. Acontecimientos que en pocas semanas fueron seguidos por el encierro en la Basílica de la Natividad en Belén de un grupo de palestinos, calificados como terroristas por el gobierno israelí y sitiados durante casi un mes en el interior del edificio. Durante las semanas comprendidas entre febrero y mayo, la población árabe de las distintas ciudades padeció varios periodos bajo un toque de queda, que ha provocado la situación de carestía con que termina el año en Palestina. Estos hechos han encendido el rencor de la población y han provocado una cadena de atentados en Israel, imposibles de evitar con el uso de la fuerza. Los “hombres bomba” palestinos se han multiplicado, ocasionando importantes cifras de víctimas israelíes.

Ante la evolución de los acontecimientos la diplomacia internacional ha ejercido una presión, que si bien en los primeros meses dio algún resultado, luego se ha mostrado completamente impotente. En el primer semestre, Aznar hubo de implicarse y seguir las negociaciones de cerca como consecuencia de la Presidencia española de la Unión Europea.

Esta coincidencia de hechos hizo que en aquellos meses los nombres que se barajaran en la agenda internacional respecto a Oriente Próximo fueran todos españoles. Desde el presidente Aznar y su ministro de Asuntos Exteriores Piqué, pasando por el representante de la Unión Europea para el Proceso de Paz, Moratinos, hasta el representante de la PESK, Solana.

La importancia de la “cuestión palestina” llevó al ministro Piqué a emprender una gira por Oriente Próximo, en compañía de Miguel Angel Moratinos, nada más iniciarse la presidencia española.

De la reunión de ministros de la Unión Europea, que tuvo lugar en Cáceres los primeros días de febrero, salió la posibilidad de reconocer un Estado palestino. Declaración, que en menos de una semana, fue aplazada para un futuro indefinido, dado el agravamiento de la violencia en los territorios.

Simon Peres, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, visitó Madrid en medio de este contexto de conflicto abierto, solicitando de Aznar una implicación mayor de la Unión Europea. Esta entrevista evidenciaba ya la crisis interna que se estaba agudizando en el seno de la política israelí, en un gobierno de coalición nacional de difícil supervivencia.

Un paso importante y novedoso, que en su momento despertó cierta esperanza en cuanto a la presión internacional, fue la resolución condenatoria contra Israel del Consejo de Seguridad (R.1402), aprobada en marzo. Esta resolución exigía la retirada del ejército de los territorios palestinos. Por primera vez Estados Unidos votó a favor, siendo con ello evidente el replanteamiento del orden mundial al que parece empujar el 11-S. Sin embargo, de las declaraciones no se pasó a los hechos.

A finales de ese mismo mes, la cumbre de la Liga Árabe en Beirut aprobó unánimemente el Plan Saudí de apoyo a los palestinos, después de forzar mucho el consenso entre los Estados árabes asistentes (diez de los veintidós invitados). El presidente Arafat no pudo presentarse por estar confinado en los territorios palestinos, también hay que destacar la ausencia del presidente egipcio Mubarak y de el rey de Jordania Abadullah II. Aznar, en calidad de presidente de la Unión Europea, participó en la cumbre árabe, ratificando la posición resultante.

El plan no añadía grandes novedades a la exigencia de vuelta a las fronteras de 1967, el reconocimiento de un Estado independiente, la retirada del ejército y el reinicio de las negociaciones para ello. Sin embargo, no deja de ser importante más que por su contenido, por la implicación de Arabia Saudí en el proceso de paz. Paso cualitativo que, sin duda, dejará su huella en las futuras relaciones de Riad con Washington, pero que no ha dejado de tener su efecto en el nuevo contexto en el que se encuentra la administración norteamericana actualmente en esta región.

A pesar de todos los esfuerzos de la diplomacia internacional, se mantuvo la violencia de los acontecimientos antes descritos. En este marco el presidente Sharon negó la posibilidad de una entrevista entre Aznar y Arafat. El presidente Bush llegó a amenazar a su homólogo israelí con

acciones contra su Estado si no cumplía la resolución de las Naciones Unidas, pero el caso a estas advertencias fue nulo.

Ante la gravedad de los hechos, se procedió a la creación del llamado “cuarteto de Moncloa”, que aunó los esfuerzos de todos los agentes internacionales, los Estados Unidos, la Federación Rusa, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Una vez más, podemos considerar que esta asociación de voluntades pesó más por su trascendencia de cara al orden mundial que por sus resultados objetivos en cuanto a la situación que se estaba produciendo en Palestina.

Este frente conjunto dio paso, por primera vez, a un enfoque global y multilateral de la “cuestión palestina”, que se consiguió gracias a la insistencia de la Unión Europea. En cierta medida, esta fusión diplomática ha contribuido a salvar la credibilidad de la sociedad internacional, cada vez más sometida a la voluntad de “los grandes”. Al menos, en lo formal, podemos decir que las Naciones Unidas tuvieron su oportunidad de recuperar cierta relevancia en su papel mundial.

En lo que se refiere a la Unión Europea, si de algo ha servido esta iniciativa ha sido para evitar la anulación de la parte palestina. Es claro que si la Autoridad Nacional Palestina, por muy cuestionado que haya sido Arafat, ha sobrevivido a la crisis de los meses iniciales del año, ha sido por la intercesión de la Unión Europea. Su peso diplomático no ha dado para más, pero nadie podrá decir que esto ha sido poco. De cara al interior de Europa, estas circunstancias han dificultado la presidencia española, que hubo de dedicar gran parte de su actividad en los asuntos de Oriente Próximo.

Éste ha sido prácticamente el último esfuerzo de la diplomacia internacional. Aunque el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, consiguió restablecer las conversaciones entre el presidente Arafat y Sharon, éstas se vieron enseguida perturbadas por múltiples circunstancias, como la detención y enjuiciamiento de Maruan Barghuti —brazo derecho de Arafat—, las investigaciones sobre los “crímenes de Yenin”, etc. Todo ha llevado al deterioro de la situación, tanto en lo que se refiere a las negociaciones entre palestinos e israelíes como en lo relativo a la situación interna de ambos gobiernos.

En el seno del gobierno israelí, la ruptura dentro del propio Partido del Likud, tuvo su inicio en mayo. Benjamin Netanyahu lanzó un pulso a Ariel Sharon oponiéndose a su política. El resultado fue que el Likud acabó

declarando no reconocer el derecho a existir de un Estado palestino. Esta posición volvió a provocar el rechazo de todas las cancillerías europeas. Posteriormente, la situación ha ido empeorando, hasta que a finales de octubre, el Partido Laborista retiró su apoyo al gobierno de unidad nacional, obligando a Ariel Sharon a formar un nuevo gabinete en el que tuvo que hacer concesiones a los sectores más radicales integrando elementos de estos, por ejemplo, el general Saul Mofaz, responsable de la represión de la Intifada, lo que no permite pensar en que se vaya a suavizar la línea dura de la actual política. Netanyahu forzó la situación para que se produjeran elecciones anticipadas en Israel.

Por su parte, en mayo Yasser Arafat tuvo que asumir ante el parlamento palestino sus propios errores de estrategia y dejó la puerta abierta a una gran reforma. Sin embargo, la Autoridad Nacional Palestina no pudo sobrevivir a la presión de Estados Unidos, y un mes después el presidente Bush se mostró decidido a la creación de un Estado palestino, pasando por el desplazamiento político de Arafat. Inmediatamente se anunció la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales y legislativas para enero de 2003. Es evidente que la figura del “rais” atraviesa uno de los momentos más bajos de su credibilidad y ya no cuenta con el respaldo de muchos de los diputados palestinos.

A pesar de este anuncio, nada parece aclararse definitivamente en el conflicto. La concurrencia o no de Arafat a las elecciones será un factor clave para hacer posibles pronósticos sobre el futuro de la región. En cualquier caso, la celebración de los comicios sólo sería posible si se produce la retirada del ejército israelí de los territorios palestinos, pero no hay síntomas de que esto vaya a suceder. Por otro lado, unas elecciones israelíes a la vista también son un factor a tener en cuenta para dilucidar qué podrá ocurrir en Palestina en los próximos meses.

La situación se ha enquistado a lo largo de 2002. Los cambios políticos en ambos sectores pueden contribuir a “desmitificar” el conflicto, pues tanto Arafat como Sharon arrastran una carga histórica en la región que impide avanzar hacia nuevas posiciones. Con la presencia de los dos líderes Oriente Próximo seguirá mirando hacia el pasado inevitablemente. Se necesita una renovación de personajes para resolver el futuro. Por otra parte, el peso de la comunidad internacional, actuando en conjunto, debe ser mucho mayor que el actual. Lo que no sabemos es si eso será posible mientras haya otras prioridades internacionales en la misma región.

Las relaciones con Irán

Aunque la República de Irán se aleja geográficamente del Mediterráneo, su peso como Estado islámico ejerce una influencia notoria sobre sus vecinos árabes. En este año, en el que estamos asistiendo a un nuevo planteamiento del orden internacional, es inevitable su inclusión en este apartado.

La condena iraní de los atentados de Nueva York fue fundamental para evitar un levantamiento islámico internacional. El gobierno de Jatami no se dejó embaucar por el objetivo de Al Qaeda de promover una sublevación islámica contra Occidente. La posición iraní podía haber alentado un conflicto que, de haberse producido, habría corrido el peligro de propagarse con rapidez por los países asiáticos musulmanes y por los árabes. Sin embargo, la república islámica actuó con la moderación propia de una potencia mundial.

Es sorprendente que la posición iraní no fuese apreciada en su justa medida. En su discurso sobre el estado de la nación el presidente Bush no tuvo ningún reparo en incluir a la República Islámica de Irán en el llamado “eje del mal”, provocando la irritación del gobierno de Jatami y erosionando las relaciones de éste con Estados Unidos.

Bajo esta óptica de las relaciones internacionales, no es de extrañar que la Unión Europea haya tratado de salvar sus intereses por su cuenta, en un claro intento de desmarcarse de la política norteamericana respecto a Irán.

En este contexto debemos considerar la visita del presidente Jatami a España, que tuvo lugar a finales de octubre.

EL PROCESO EUROMEDITERRÁNEO

En el mes de abril se celebró la V Conferencia Ministerial Euromediterránea del Proceso de Barcelona, que tuvo lugar en Valencia. La situación que acabamos de analizar del conflicto del Oriente Próximo fue un condicionante decisivo en las negociaciones que se mantuvieron.

La primera dificultad provino del boicot que hicieron al encuentro Siria y Líbano como consecuencia de la participación de Israel. Fueron los quince países europeos los que insistieron en la necesidad de la presencia israelí, esperando superar la situación actual y proyectar las conclu-

siones de la conferencia hacia el futuro. Al negarse a participar en cualquier caso, el gobierno de Beirut pospuso la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea.

En este contexto, la conferencia se conformaba prácticamente con convertirse en un foro de diálogo que permitiera introducir alguna solución en el conflicto del Mediterráneo oriental y facilitar los contactos, aun no siendo ésta su misión.

La celebración en sí constituyó ya un primer paso, aunque también se logró finalmente que los veinticinco Estados asistentes aprobaran un Plan de Acción. Este plan consistió en el enunciado de unas intenciones que en lo político, en lo social y en lo económico deben llevar progresivamente a un acercamiento de ambas orillas del Mediterráneo. De estos aspectos, quizás sean los más destacables por lo novedoso, la creación de una asamblea parlamentaria euromediterránea, la inclusión del terrorismo como preocupación fundamental —efecto del 11-S— y la cooperación en materia de justicia y asuntos internos.

Sin embargo, no olvidemos que nos movemos en el plano de las intenciones. En las conclusiones de la Presidencia, ya se recogió la necesidad, cada vez más acuciante, de ratificar y desarrollar los compromisos del foro euromediterráneo, precisamente por las circunstancias de conflicto por las que se atraviesa.

La situación de Oriente Próximo resta credibilidad a esta declaración de voluntades. Surge la duda de si se podrán alcanzar los verdaderos objetivos con los que nació este proceso en 1995. Desde luego, estamos muy lejos de crear un “área de paz y estabilidad”, sobre todo si no revalorizamos el papel de la Unión Europea como actor político y lo limitamos al de agente financiero. En cuanto a los intentos de “comprensión mutua”, es condición imprescindible poner cuanto antes los medios para despejar los prejuicios antimusulmanes que ha despertado el nuevo panorama internacional.

Junto al conflicto de Oriente Próximo, que planea por todo el Mediterráneo hasta el Océano Atlántico, el otro gran obstáculo para el desarrollo de la región son movimientos migratorios masivos y acelerados que se vienen produciendo en los últimos años y que han seguido creciendo en 2002. La inmigración clandestina que procede del Magreb, y que se dirige muy especialmente hacia España como puerta que es de Europa, resulta del acentuado desnivel económico entre las dos orillas.

Es, además, campo de actuación para las mafias, que constituyen uno de los factores más importantes de inestabilidad para los países emisores y receptores, pero sobre todo, uno de los terrenos mejor abonados para la violación de los derechos humanos. Esta realidad ha llevado al compromiso de convocar una nueva Conferencia Ministerial sobre Migraciones e Integración Social de Emigrantes para la segunda mitad de 2003.

La gestión correcta y real de estas declaraciones es uno de los objetivos más urgente que tiene que abordar la Unión Europea. Aunque sea en el plano de las voluntades, es evidente que en Europa se está tomando clara conciencia de la trascendencia que tiene el Mediterráneo para la paz y seguridad internacional. La ejecución todavía deja bastante que desear, pero las críticas que ello merezca no pueden impedir seguir trabajando en un proceso cada vez más necesario.

EL TRIÁNGULO MAGREBÍ (MARRUECOS, ARGELIA, EL SAHARA) Y ESPAÑA

En una visión del panorama del Magreb en el transcurso del año, podríamos analizar de forma independiente los cambios que se han producido en la zona. Sin embargo, el hecho de que en gran medida estos cambios hayan condicionado las relaciones que España mantiene con los distintos actores regionales, nos lleva a analizarlos desde un planteamiento conjunto y en conexión con la acción del gobierno de Madrid.

El Sahara Occidental

Es evidente que la crisis diplomática por la que atraviesa España con Marruecos está en conexión con la posición del gobierno español respecto al Sahara Occidental.

Las Naciones Unidas han intentado rescatar al contencioso saharauí de la vía muerta en la que había entrado hace tiempo; sin embargo no se ha llegado a una solución de la cuestión a pesar de los esfuerzos internacionales.

Tras varios intentos realizados por el Consejo de Seguridad para finalizar con el mandato de la MINURSO, se fue prorrogando la fecha de retirada sin que ésta pudiera producirse finalmente, habiendo quedado fijada para enero de 2003.

Un año más, los continuos aplazamientos han servido para que el enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas, James Baker, presentase al Consejo de Seguridad un programa con cuatro alternativas de posibles situaciones para el futuro del Sahara.

En febrero, Kofi Annan dio a conocer el Informe Baker, incitando a la toma de posiciones entre los principales actores internacionales. Sus propuestas recogían las siguientes alternativas: 1) continuar con el Plan de Arreglo, que prevé un referéndum de autodeterminación; 2) desarrollar y adaptar el Acuerdo Marco, que prevé un régimen de autonomía bajo soberanía marroquí; 3) la partición del territorio en dos partes entre marroquíes y saharauis y 4) retirada de la MINURSO.

El aspecto más novedoso era realmente la presión que se ejercía sobre las partes para sacar el contencioso del anquilosamiento en el que se encuentra. Por primera vez se preveía que, ante la falta de acuerdo, el Consejo de Seguridad podría imponer la segunda o tercera alternativa. Al mismo tiempo, la tercera opción también aparecía contemplada por primera vez entre las posibles soluciones.

A partir de esas propuestas empezaron a definirse los Estados miembros del Consejo de Seguridad. En la idea de la partición del territorio vieron el riesgo de desestabilización de la región en conjunto, aunque los saharauis estaban dispuestos a negociar sobre esta base. Con ello, las opciones que quedaron fueron la del Plan de Arreglo o la del Acuerdo Marco, respecto a las cuales cada una de las partes se mostró contraria a aceptar la que resultara desfavorable a sus intereses. El rey Mohamed VI se mostró dispuesto a no perder ni un solo ápice del territorio del Sahara Occidental, y el Frente Polisario anunció su disposición a entrar en una guerra si Marruecos se lo anexionaba.

Estados Unidos y Francia se mostraron favorables a la solución de incluir al Sahara Occidental como una autonomía integrada en el Reino de Marruecos, planeando detrás de esta posición las futuras explotaciones de petróleo de la región. Gran Bretaña, como Estado presidente del Consejo de Seguridad, abogó por un proyecto de resolución que respetara el derecho de autodeterminación del pueblo saharauí, aunque es de esperar, que si llegara el momento, cediera a la posición norteamericana. La Federación Rusa también propuso el mantenimiento del Plan de Arreglo. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad estuvieron muy divididos en sus posiciones.

Estas circunstancias llevaron a un aplazamiento de la retirada de la MINURSO primero hasta finales de abril, luego a julio y finalmente a enero del 2003, tal como antes indicamos.

En este contexto se desarrolló la presidencia española de la Unión Europea. Desde el primer momento, el gobierno de Aznar estuvo decidido a consensuar una estrategia común entre los quince para resolver el contencioso. Sin embargo, las posiciones europeas estuvieron encontradas, como hemos explicado. España, por su parte, mantuvo su postura tradicional insistiendo en la celebración de un referéndum para el Sahara Occidental y oponiéndose a cualquier solución impuesta al conflicto al margen de su naturaleza.

Finalmente el representante español ante las Naciones Unidas, Inocencio Arias, acabó por asegurar que el gobierno de Madrid se acogería a la solución que dictase el organismo internacional. El ministro de Asuntos Exteriores, Piqué, se atrevió a ir más lejos en sus declaraciones. Aseguró que aunque España se atendería a las decisiones del Consejo de Seguridad, el gobierno español no podría sobrepasar dos límites: primero, la responsabilidad histórica; y segundo, la opinión pública española.

La realidad es que España se ha ido quedando sola en sus posiciones respecto al Sahara Occidental, mientras que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña han constituido un frente común a favor de las tesis marroquíes. Por otra parte, también es cierto, que a medida que más se pospone la solución de la ex-colonia española, Marruecos pierde garantías en cuanto a sus propósitos de anexión y las Naciones Unidas retoman la opción del referéndum.

En cualquier caso, es evidente que el rey Mohamed VI está dispuesto a mantener su postura firme en todo lo relativo al territorio. No sólo lo ha visitado en más de una ocasión en el transcurso del año, sino que además, en el mes de noviembre, al margen de las resoluciones de las Naciones Unidas, ha dado instrucciones a su gobierno para que establezca un conjunto de medidas para desarrollar el Sahara Occidental como territorio marroquí.

Marruecos

En medio de este contexto en torno a la cuestión saharauí, ha seguido prolongándose la crisis diplomática entre España y Marruecos a lo largo

del año. La llamada a consultas del embajador marroquí tuvo lugar en octubre de 2001. Posteriormente con la “crisis de Perejil”, en julio 2002, el gobierno de Madrid, retiró su embajador. No se ha vuelto a producir el intercambio de jefes de misión hasta la fecha.

Ya en su momento el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Rabat, Mohamed Benaissa, explicó ante el parlamento marroquí que los motivos de la retirada del embajador era la actitud de España tomada ante dos cuestiones claves: la inmigración y el Sahara Occidental.

En cuanto al primer tema, en los dos últimos años, España se ha visto obligada a incrementar las medidas para el control de la inmigración clandestina procedente de Marruecos por un lado, y por otro, a reformar la Ley de Extranjería endureciendo la legislación en este sentido.

En lo referente al tema del Sahara, la posición del gobierno de Madrid no ha variado ante las presiones internacionales. Ni mucho menos lo ha hecho ante las declaraciones altisonantes de Benaissa, quien no dudó en acusar de chantaje a España, cuando el ministro Piqué se mostró dispuesto a estudiar el asunto del Sahara y señaló como condición necesaria para llevar a cabo las conversaciones la normalización diplomática.

La crisis no se solucionó, sino que por el contrario los meses en los que España ocupó la presidencia europea se fue agravando. En junio, a un grupo de autoridades españolas y periodistas se les negó la entrada en el país. A comienzos de julio, la prensa marroquí en árabe —el diario “Al `Alam”— acusaba al gobierno de Aznar de quererse vengar de la ocupación del Sahara en 1975 y de la falta de acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea. Estos incidentes llegaron a su punto culminante, pocos días después, al desencadenarse la llamada “crisis de Perejil”, cogiendo recién estrenada en el cargo la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio. En este momento se retiró de Rabat al embajador español Arias Salgado.

Aunque, tanto desde Moncloa como desde el Ministerio se trató de desvincular la cuestión del Sahara Occidental de la crisis provocada por la ocupación marroquí del islote de Perejil, todo parecía apuntar a que no eran hechos separados.

La “crisis de Perejil” puede admitir diferentes interpretaciones. La más fácil a primera vista, puede que sea la más difundida; es decir, una provocación o amenaza de Marruecos hacia España, como reflejo de los múltiples contenciosos pendientes en las relaciones bilaterales, en los que

desde la óptica marroquí, se incluye Ceuta y Melilla. Sin embargo, esta tesis encierra contradicciones importantes, dejando paso a otras interpretaciones, quizás más coherentes, aunque poco valoradas. En este caso, estaríamos hablando de un golpe de fuerza hacia el interior de Marruecos.

Quizás el mensaje no fuera para el gobierno de Madrid, sino para Mohamed VI, desde las fuerzas que en el interior —los militares, en este caso— se resisten a perder sus privilegios políticos y sociales en el clima de reformas que pretende el monarca. Tampoco olvidemos el clima preelectoral que por entonces se vivía en el reino alauí.

Desde luego, no dejan de ser significativos dos datos en el transcurso de los acontecimientos del 11 de julio: primero, según parece, la ocupación del islote por parte de la Gendarmería Real sorprendió a las propias autoridades marroquíes. Después se ha tratado de cambiar esta versión, situando la decisión del propio monarca detrás de los hechos. Segundo, es muy contradictorio que la celebración de la boda real se aplazara en el mes de abril, como consecuencia del agravamiento de la situación en los territorios palestinos, y que posteriormente, en julio, el día anterior a los festejos el rey desencadenara una crisis con España. En todo caso, quizás, Marruecos no esperara una respuesta tan firme y tan unánime por parte de las fuerzas políticas españolas como la que se dio.

Al margen de los objetivos de la “crisis de Perejil”, conviene detenerse en los resultados. Pocas cosas han cambiado en el Mediterráneo ante un hecho que casi constituyó una nota a pie de página en el marco de relaciones actuales. De momento, fue más importante para la situación bilateral entre el gobierno de Madrid y el de Rabat, que para el conjunto de Estados ribereños, tan alertados últimamente con el mito del conflicto entre culturas. Sin embargo, a largo plazo, no debe considerarse como un asunto hispano-marroquí únicamente, sino como unas circunstancias que implican a la Unión Europea en su conjunto.

La crisis sirvió para demostrar una vez más la debilidad de la Política Exterior de la Unión Europea, de la que costó arrancar una posición firme y unánime. Aunque la postura oficial ofreció el apoyo a España, no faltó la tibieza de algún país como Francia, que prefirió mantener una postura pragmática en beneficio propio.

Mucho más importante se reveló la situación en el Mediterráneo para Estados Unidos. Para el gobierno de Washington, el contencioso entre España y Marruecos supuso una difícil toma de posición entre un aliado

de la OTAN y uno de los Estados en los que mantiene intereses estratégicos y energéticos. De hecho, se recurrió a su mediación en los momentos que mayor tensión alcanzó la situación.

Sin embargo, las consecuencias internas tanto para España como para Marruecos han sido considerables. En España, el presidente Aznar reforzó su liderazgo de cara a la opinión pública. Los principales partidos políticos fueron capaces de limar sus diferencias en materia de política interna, a favor de una política de Estado en el exterior —no olvidemos la polémica que en diciembre de 2001, suscitó el viaje de Rodríguez Zapatero a Rabat.

Por otro lado, la firmeza con la que respondió el Estado español con el empleo de las fuerzas armadas, ante una amenaza a la soberanía territorial española, lanzó un mensaje claro a nuestro vecino del sur en relación con las plazas de Ceuta y Melilla. Por último, la crisis ha contribuido a fomentar la conciencia de defensa en exceso adormecida entre los españoles, al tiempo que ha demostrado la necesidad de tener unas fuerzas armadas preparadas para una intervención convencional, distinta a las operaciones de apoyo al mantenimiento de la paz. En este sentido, ha constituido una llamada de atención sobre los recursos materiales y humanos necesarios para la seguridad y defensa de España.

Marruecos, por su parte, parece que intentó con este incidente territorial, presionar hacia sus propios intereses y forzar la posición de España frente a sus discrepancias del Sahara Occidental. Asimismo dejó ver su permanente pretensión de soberanía sobre Ceuta y Melilla, ciudades autónomas españolas del norte de África. Estas reivindicaciones territoriales, como es habitual, se repitieron con motivo de los discursos de la conmemoración del Trono en julio y del vigésimo séptimo aniversario de la Marcha Verde en noviembre. Sin embargo, en gran medida, ha perdido el pulso bilateral con el gobierno español, que al fin y al cabo, como era de esperar, agotada la vía diplomática, no sólo reaccionó, sino que contó con el respaldo Europeo y de la OTAN.

De cara al interior del reino alauí, la figura de Mohamed VI se vio engrandecida por los medios de comunicación marroquíes, suscitando la adhesión de su pueblo. Este hecho que no deja de ser importante en un reino donde todavía la figura de Hassan II ocupa un puesto de mayor peso que la de su sucesor.

En definitiva, la “crisis de Perejil” dejó una puerta abierta a las múltiples especulaciones sobre las tensiones internas por las que atraviesa el gobierno de Rabat, entre las elites influyentes y el propio monarca.

Por estos motivos, y al margen del incidente de Perejil, no nos puede sorprender observar que en el interior de Marruecos se están produciendo cambios importantes que dejan su huella en la acción exterior. En ese sentido, no puede pasar desapercibido el resultado de las últimas elecciones generales que tuvieron lugar a finales de octubre.

El índice de participación en los comicios no superó el 52% según las cifras oficiales. De lo que se puede deducir las escasas expectativas de cambio que espera la población marroquí de los resultados electorales. A pesar de los intentos de transparencia y legalidad en los que insistió el Majzen, dos limitaciones condicionaron las elecciones. Por una parte, la negación del derecho al voto a los tres millones de inmigrantes que residen fuera de Marruecos, y por otra, la restricción de las circunscripciones en las que se permitió la presentación de candidaturas islamistas. Tampoco parece comprensible que algunos de los territorios pertenecientes al antiguo Sahara español fueran incluidos en el mapa político definido para el proceso electoral, interpretándose de hecho como divisiones internas de Marruecos.

Por lo demás, pese a las posibles irregularidades, es importante considerar que Marruecos tiene un sistema político que se aproxima al de las democracias occidentales, lo que hay que valorar positivamente a la espera de superar la crisis diplomática bilateral. En cualquier caso, sin duda, hubiera sido muy deseable una mayor participación ciudadana.

Como era de esperar, el Partido de la Unión Socialista de Fuerzas Populares y el Istiqlal se disputaron el mayor número de escaños del parlamento. Debe considerarse una novedad los treinta escaños reservados para mujeres en el hemicycle, pero lo más significativo ha sido el ascenso de los sectores islamistas, la triplicación de escaños del Partido Justicia y Desarrollo, muy al hilo de lo que ha ocurrido en otros países musulmanes en el último año. A la cabeza del gobierno se ha puesto a Driss Yetu, con un perfil muy distinto al de sus antecesores y en el que se han volcado importantes esperanzas de cara a la evolución de la política marroquí.

También están estos datos en consonancia con la progresiva contestación social que se está produciendo en el interior de Marruecos. Los sectores islamistas han recogido, en gran medida, los votos procedentes

del malestar resultante de la difícil situación económica de nuestro vecino del sur. Una situación cuyo reflejo al exterior es la progresiva y acelerada inmigración clandestina que arroja a las costas españolas.

Argelia

Dentro de este triángulo de relaciones no podemos olvidar a Argelia. Aunque el gobierno español ha insistido notablemente en que la relación con Argelia es independiente de la actual crisis con Marruecos, para el gobierno de Rabat no ha sido así, lo cual no contribuye a mejorar nuestras relaciones.

Argelia firmó un acuerdo de asociación con la Unión Europea en la conferencia Euromediterránea de Valencia en abril, al mismo tiempo que estrechó su cooperación con la OTAN en el nuevo marco de seguridad y defensa de la región. Este Estado magrebí también celebró elecciones legislativas en mayo, pero contrariamente a lo sucedido en Marruecos, confirmó un retroceso de los sectores islamistas, aunque el índice de participación electoral fue muy bajo.

Esto llevó al presidente Aznar a intensificar las relaciones bilaterales con su homólogo Abdelaziz Buteflika, lo que culminó con la firma bilateral de un Tratado de amistad, cooperación y buena vecindad en octubre. Del entendimiento con Argelia cabe esperar una mayor cooperación económica que permita garantizar los recursos energéticos, así como una mejor colaboración en la lucha contra la inmigración ilegal.

En este contexto de aproximación, y de cara al puesto que España ocupará en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir de 2003, el gobierno de Argel no dejó de insistir ante el presidente Aznar para que España se mantenga en la defensa del referéndum del Sahara, circunstancia que cierra el círculo de relaciones que estamos comentando.

Libia no forma parte del triángulo magrebí que estamos analizando. Lo único que señalamos de este Estado, es que a lo largo del año, se ha confirmado la nueva orientación de Gadafi hacia la Unión Africana. En el mes de octubre, con motivo del aniversario de la república, el presidente libio condenó los atentados del 11-S.

TURQUÍA ENTRE EL CONTENCIOSO DE CHIPRE Y LA UNIÓN EUROPEA

Otro de los contenciosos del Mediterráneo oriental está centrado en la situación interna de la República de Chipre y sus relaciones con la Unión Europea. Ambas cuestiones afectan directamente a la República de Turquía.

Como hemos venido comentado en otros panoramas estratégicos anteriores, es un contencioso que se arrastra desde los años sesenta, pero ha venido a agravarse desde finales de los años noventa, cuando se ha planteado la candidatura de Chipre como Estado miembro de la Unión Europea.

El año 2002 ha sido el año de la frustración para las aspiraciones de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC). A pesar de que las Naciones Unidas habían aconsejado que se produjera la unificación del Estado chipriota, antes del ingreso de la república en la Unión Europea, esto no parece que vaya a tener lugar. En el viaje que realizó Aznar a Nicosia durante el mes de febrero, ya declaró que siendo preferible la resolución de los problemas internos de la isla, no sería una condición imprescindible para estimar la candidatura para la entrada en la unión.

Este vaticinio del presidente español, como presidente de turno de la Unión Europea, ha venido a confirmarse en el mes de octubre. Mientras que la República de Chipre —léase, el presidente grecochipriota Glafkos Clérides—, respaldada por Grecia, ha recibido el espaldarazo definitivo de Europa, el sector turcochipriota sigue sin ver reconocidas sus aspiraciones.

De este modo, la República de Chipre pasará a formar parte de la Unión Europea en 2004, afectando esta vinculación únicamente a los habitantes del sur de la isla (600.000 habitantes), mientras que el norte (200.000) no podrá beneficiarse del ingreso.

El presidente turcochipriota, Rauf Denktash, seguirá mientras tanto buscando la fórmula para la solución al contencioso interno. Seguirá defendiendo la soberanía de la RTNC, bajo un futuro Estado confederado en el que se compartan las materias de política exterior y defensa. Posibilidad que desde este año va perdiendo fuerza, frente a la futura creación de un Estado federal, como dictaban los acuerdos de 1963.

El único paso adelante dado en este año, fue la posibilidad de admitir el ingreso de RTNC, como candidata a la Unión Europea, con antelación y al margen del futuro de la República de Turquía. Sin embargo, esta salida que Denktash ofrece no parece nada viable. Primero, porque la auto-proclamada república turcochipriota, sólo cuenta con el reconocimiento de Turquía; y segundo, porque es el propio gobierno de Ankara el que ha encontrado la puerta cerrada de Europa.

En efecto, el contencioso chipriota no ha encontrado soluciones en este año. Peor aun, su único valedor internacional ha recibido igualmente el rechazo a sus aspiraciones europeas, complicando el panorama estratégico de forma importante.

No le sirvieron de nada las reformas internas que hizo el gobierno turco a lo largo del año anterior, para hacerse meritorio de la confianza europea. En octubre quedó excluido de los diez países recomendados para la ampliación del 2004.

La exclusión de Ankara parece estar relacionada con los requisitos económicos y políticos, que la Comisión Europea ha trazado como condiciones mínimas para el ingreso. Sin embargo, la situación ha despertado algunos de los fantasmas adormecidos en el panorama europeo.

En este sentido, la negación a la adhesión ha suscitado la duda de si en el fondo lo que hay es un rechazo a la integración de un Estado musulmán en el seno de Europa. Esta circunstancia se vería acentuada y unida al incremento demográfico que implica la presencia turca.

No se ha rechazado completamente a Turquía, pero ha quedado aplazada su candidatura al “club de los Quince”.

El alejamiento que Bruselas ha impuesto a la república turca, no ha sido visto con buenos ojos por parte de Estados Unidos. La administración norteamericana ha manifestado su claro malestar por el rechazo de quien ha sido su principal bastión defensivo en el flanco oriental del Mediterráneo. Se confirma la profunda contradicción y ambigüedad que supone la pertenencia de Turquía a la OTAN, mientras queda fuera de la Unión Europea.

A esta situación exterior no ha ayudado la situación interna. En las elecciones de noviembre, el primer ministro Bulent Ecevit ha sido desplazado completamente de la escena política por el líder islamista del Partido Justicia y Desarrollo, Recep Tayeb Erdogan.

Los islamistas turcos pretenden dar una imagen a Europa muy distinta de otros partidos en esta línea. Pretenden mantener la división entre política y religión, mostrándose como una especie de “demócratas cristianos” al estilo musulmán. Sin embargo, ni el pasado turco más inmediato, ni las presentes circunstancias internacionales, sobre las que planea la desconfianza nacida del 11-S, parecen elementos que inviten a dar una oportunidad al gobierno de Ankara.

El 2003 será un año importante para despejar el panorama que se ha gestado en los últimos meses en esta zona. Un panorama con raíces profundas, pero sin duda, con necesidad de adaptarse a circunstancias nuevas.

CAPÍTULO QUINTO
IBEROAMÉRICA

IBEROAMÉRICA

Por MARCELINO DE DUEÑAS FONTÁN

GENERALIDADES

Iberoamérica, con sus 20 millones de kilómetros cuadrados y sus 507 millones de habitantes, se debate en la incertidumbre que rodea su futuro como unidad estratégica. Las fuerzas centrífugas más importantes, que retrasan su integración y su consolidación como gran potencia, proceden de los celos de sus gentes, fraccionadas en 19 naciones, y la ausencia de capacidad para identificar los asuntos de mayor interés. Hay, sin embargo, fuerzas centrípetas muy significativas, que deben facilitar la deseable integración: en primer lugar, la cultura común y la implantación de dos lenguas hermanas, el portugués y el español; además, la religión, mayoritariamente cristiana y, finalmente, ese fenómeno cuya existencia prácticamente se está empezando a reconocer y que, aunque combatido hasta el vandalismo por los que aún mantienen ideologías caducas, el tiempo se encargará de demostrar que es un factor de progreso general: la globalización.

El año 2002 ha sido un año de luces y de sombras. Entre las sombras se encuentran los focos de inestabilidad económica, que han venido afectando principalmente a Argentina y, aunque en menor medida, a Brasil y a Uruguay, y de inestabilidad política, localizados fundamentalmente en Colombia, donde la guerra abierta parece casi inevitable, pero también en Cuba y en Venezuela. Asimismo se encuentra una aceptación muy limitada y dudosa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Entre las luces pueden identificarse los mejores horizontes que se adivinan tras

los diferentes procesos electorales, con una generación que aflora que parece cada vez más dispuesta a combatir la corrupción, así como los pasos, todavía vacilantes, que se están dando en busca de asociaciones económicas y políticas supranacionales.

Ya van quedando menos años para la creación, prevista en 2005, del *Area de Libre Comercio de las Américas* (ALCA), tras la cual el papel de Estados Unidos pasará a tener, si cabe, una mayor preponderancia en la zona. Pero ello no debe conducir a ninguna conclusión desfavorable, pues todo lo que contribuya a facilitar el acceso al bienestar, la prosperidad y el progreso social de Iberoamérica, y la creación del ALCA lo hará, debe aceptarse sin reservas. Sin embargo, la deseable creación de la *Comunidad Iberoamericana de Naciones* será sin duda el hito más importante en el devenir de estos pueblos.

SITUACIÓN EN MÉXICO

México, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados y más de cien millones de habitantes, es decir la décima parte de la extensión y la quinta parte de la población de toda Iberoamérica, es una potencia muy importante no sólo desde el punto de vista económico y humano, sino también en el aspecto cultural. Su posición fronteriza con Estados Unidos, país con el que mantiene un importante tratado comercial que incluye también a Canadá, el *Area de Libre Comercio de América del Norte* (ALCAN, o NAFTA en inglés), favorece en forma importante el comercio exterior.

Durante el año se reforzaron claramente las relaciones de cooperación de México con España, tanto en el campo empresarial como en el de la lucha contra el terrorismo. Las relaciones con Cuba tuvieron un claro deterioro, desde el tímido acercamiento que se produjo en febrero, con ocasión de la visita del presidente Fox a La Habana, hasta la nueva crisis iniciada a finales de marzo, por la supuesta connivencia de México con Estados Unidos para forzar la no asistencia de Cuba a la conferencia organizada por la ONU en Monterrey, y hasta la votación contra Cuba en Ginebra en relación con su falta de respeto de los derechos humanos.

La quinta visita del Papa a *México*, a principios de agosto, en la que fue canonizado el indio Juan Diego y beatificados en la basílica de Guadalupe dos indios zapotecas de Oaxaca, sirvió a la vez para constatar el fervor popular y como exaltación de las culturas indígenas.

En el mes de abril se produjo el hecho insólito de que el Senado vetó a Fox su proyectado viaje a Estados Unidos y Canadá, tras lo que el presidente, en un discurso acre, denunció la oposición destructiva que los partidos de oposición estaban practicando para impedir su programa de reformas. En la Cumbre de la UE con Iberoamérica y el Caribe celebrada en mayo en Madrid, volvió a repetir sus amargas quejas sobre el particular. En julio tuvo que resignarse a comprobar cómo una rebelión de campesinos impedía la construcción de un aeropuerto.

Los partidos de la oposición, por su parte, no tuvieron grandes aciertos. Por un lado, las elecciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de finales de febrero fueron muy irregulares y, tras ellas, Roberto Madrazo fue proclamado líder del partido lo que facilitó el regreso a México del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, que se había autoexiliado. Por otro lado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se perdió en las elecciones de abril en disputas internas entre los partidarios de Rosario Robles y los de Cuahitémoc Cárdenas, en vez de orientar su acción a la construcción de un verdadero Estado de derecho.

Otros asuntos de interés fueron el cerco judicial, en julio, al ex presidente Echeverría, inculpado en la matanza de Tlatelolco en 1968, la identificación en agosto de los restos del guerrillero Lucio Cabañas, muerto por el Ejército en la guerra sucia de los años 70 y, en noviembre, la condena de dos generales por narcotráfico que, además, tienen pendiente un nuevo juicio por su participación en la citada guerra sucia. Parece clara la mejoría de la salud democrática de este gran país.

La composición del PNB de México depende en un 5% del sector primario, en un 26% de la industria y en un 69% del sector de servicios. Desde el punto de vista social, el índice de paro es muy bajo, sólo del 3%, el crecimiento de la población es bastante alto, del 1,47%, y la esperanza de vida al nacer, de 72 años. El 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. El índice de alfabetización es del 90%, un valor aceptable.

Pese a los indicadores adversos, la riqueza en recursos naturales y el buen desarrollo de su industria permiten a México encarar con optimismo su futuro desde el punto de vista económico. Tras ocho años de pertenencia al *Area de Libre Comercio de América del Norte*, su comercio exterior sigue en franca expansión. Los expertos indican que ha desbancado a Brasil como primera economía de Iberoamérica. El crecimiento del PIB real se ha venido revisando a la baja y se espera que termine el año en el

1,1% (en 2001 fue negativo del 0,3%) y la inflación en el 5,1% (en 2001 fue del 4,4%). Su deuda exterior, aunque asumible, es importante (172.000 millones de dólares) si bien ha iniciado un ligero descenso. La balanza comercial será deficitaria en 9.000 millones de dólares. El riesgo-país global, como índice del grado de confianza que otorga la comunidad internacional a su economía, es bastante bueno.

SITUACIÓN EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

América Central y el Caribe es una zona integrada por seis naciones, de las que todas tienen costas a los dos océanos, menos El Salvador a la que sólo baña el Pacífico, y dos son insulares atlánticas, la República Dominicana y Cuba. En general, todas ellas comparten una situación climática claramente adversa, y una especial abundancia de movimientos sísmicos y volcanes.

En lo económico, su Producto Nacional Bruto depende en un 15% del sector primario, en un 30% de la industria y en un 55% del sector de servicios, lo que resulta claramente indeseable dado su desarrollo relativamente escaso y su índice de paro medio del 13%. En el aspecto social, aparte de las grandes desigualdades existentes, existe un 45% de la población por debajo del umbral de la pobreza y el índice de alfabetización apenas supera el 80%. La esperanza media de vida al nacer es de 72 años y el índice de crecimiento de la población del 1,7%.

Es difícil vaticinar sobre el futuro de este conjunto de naciones y en especial sobre el plazo necesario para su integración en las zonas político-económicas que se están configurando, aunque con toda seguridad se acabará produciendo. Su situación excéntrica respecto de la ALCAN la hace especialmente atractiva para su integración en dicha Área.

Se trata, en todo caso, de una zona de Iberoamérica con alta volatilidad política y, por consiguiente, donde puede resultar muy laborioso el asentamiento real de la democracia; aunque Costa Rica y, en menor medida, Panamá, parecen haberlo alcanzado. Su extensión total (672.000 kilómetros cuadrados) aunque superior a la de España es tan sólo de algo más del 3% del total de Iberoamérica, en tanto que su población, de 56,5 millones de habitantes, alcanza el 11,2% del total, es decir, se trata de una zona de bastante mayor densidad de población que el resto de Iberoamérica.

En *Guatemala*, tuvo especial relevancia la visita efectuada por el Papa a finales de julio, durante la cual canonizó a Pedro de Betancourt. También en julio, integrantes de la fundación Intervida denunciaron la insoportable situación de explotación de los trabajadores del campo, que viven en condiciones de práctica esclavitud, especialmente duras para la mujer, que se ve sometida a toda clase de vejaciones por parte de los “finqueros” si quiere mantener su puesto de trabajo, en el que en muchos casos su jornal no supera el dólar diario.

El 15 de mayo, coincidiendo con la Cumbre de la Unión Europea, Iberoamérica y el Caribe, se inauguró en el Centro Cultural de la Villa de Madrid la excepcional muestra *País del quetzal*, que expuso piezas de enorme valor de un período que cubre 27 siglos de cultura maya y 3 de cultura hispana. La muestra estuvo abierta hasta el 21 de julio, en que se trasladó a Viena.

En septiembre una riada de lodo, que arrastró a su paso piedras, rocas y troncos de árboles, causó importantes estragos a 155 kilómetros de la capital de Guatemala y tuvo un saldo de al menos 23 personas muertas, en su mayoría niños.

Las principales entradas de divisas de Guatemala proceden de la agricultura, el turismo y las remesas de emigrantes. El desarrollo iniciado hace seis años, tras los acuerdos de paz con la “guerrilla”, se viene manteniendo, aunque en términos moderados. Se espera que el crecimiento del PIB real sea este año del 2,5%, inferior al de 2001, y que la inflación sea del 6,0% (en 2001 fue del 5,5%). Su deuda externa se mantendrá en unos 5.000 millones de dólares, es decir, un valor bajo. El déficit de la balanza comercial será de 1.500 millones de dólares, similar al de 2001. De todos modos, el riesgo-país global sigue siendo alto.

El nuevo presidente de *Honduras*, Ricardo Maduro, tomó posesión de su cargo el 28 de enero, en relevo de Carlos Flores. Asistió a la ceremonia el Príncipe de Asturias, que aprovechó su estancia en el país para visitar las reconstrucciones llevadas a cabo tras el huracán “Mitch”, de 1998, cuyos efectos, unidos a la sequía de los últimos años, todavía se siguen sintiendo en forma importante.

Se espera que el crecimiento del PIB real sea del orden del 1% (en 2001 fue del 2%) y que la inflación sea del 12,5%, ligeramente superior a la de 2001. Su deuda externa se mantendrá en unos 5.800 millones de dólares y su balanza comercial tendrá un saldo positivo similar al de 2001, de unos 100 millones de dólares. Su riesgo-país global es muy alto.

En su fugaz visita a *El Salvador*, realizada a finales de marzo, el presidente de Estados Unidos, George Bush, ofreció un acuerdo de libre comercio a todos los países de Centroamérica, incluido Belice. Los representantes centroamericanos pidieron a Bush la extensión del permiso temporal de residencia en Estados Unidos para cientos de miles de emigrantes, sobre todo salvadoreños y nicaragüenses, que están a punto de agotar su estancia autorizada en dicho país.

El Salvador parece sometido a la pesada carga de estar reconstruyéndose permanentemente tras las sucesivas catástrofes que se producen. A pesar de la fuerte demanda externa, su desarrollo es muy lento. Se espera que el PIB real crezca este año alrededor del 2%, algo menos que en 2001, y que la inflación alcance el 3,8%, valor similar al de 2001. Su deuda externa se mantendrá en unos 4.700 millones de dólares, que es un valor moderado, y su balanza comercial será deficitaria en 1.600 millones de dólares, algo menos que en 2001. Su riesgo-país global es moderadamente alto.

En *Nicaragua*, el 10 de enero, es decir días después del fallecimiento del poeta Pablo Antonio Cuadra, considerado la voz poética de Centroamérica, tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente Enrique Bolaños, que relevó en el cargo a Arnoldo Alemán, ceremonia a la que asistió el Príncipe de Asturias.

El ex presidente Alemán fue nombrado presidente del Congreso y, en el mes de abril, fue expulsado del cargo tras ser acusado formalmente de los delitos de fraude y asociación ilícita para delinquir en perjuicio del Estado.

Nicaragua parece haber recuperado en parte el flujo normal de sus exportaciones agrícolas, aunque sigue acusando la disminución de la ayuda financiera recibida de la comunidad internacional. Se espera que este año el crecimiento del PIB real sea del 2,5% (en 2001 fue del 3%) y la inflación del 9%, algo superior a la de 2001. La deuda externa se mantendrá en 6.100 millones de dólares y la balanza comercial arrojará un saldo próximo a cero (el de 2001 fue negativo de 1000 millones de dólares). El riesgo-país global es muy alto.

Las previstas elecciones presidenciales de *Costa Rica* tuvieron lugar en dos vueltas, en febrero y abril, en ellas resultó vencedor el candidato conservador Abel Pacheco, del gubernamental Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), tras imponerse a su oponente socialdemócrata Ronaldo

Araya, del Partido de Liberación Nacional (PLN). El 8 de mayo el nuevo presidente relevó en el cargo a su antecesor Miguel Angel Rodríguez, en una ceremonia a la que asistió el Príncipe de Asturias.

Costa Rica cuenta con una buena agricultura y unas fábricas de montaje de microprocesadores que están contribuyendo a su desarrollo económico, si bien las reformas en curso, con importantes privatizaciones, se llevan con demasiada lentitud. Se espera que el crecimiento del PIB real sea del 2%, similar al de 2001 y que la inflación sea del 9,8%, similar a la de 2001. La deuda exterior se mantiene en 4.500 millones de dólares y el saldo de la balanza comercial será positivo de unos 800 millones de dólares, semejante al de 2001. Su riesgo-país global es moderadamente alto.

En *Panamá*, la presidencia de Mireya Moscoso sigue transcurriendo con completa normalidad. Ya se ha cumplido el tercer año de control panameño del Canal.

El país dispone de un buen sector de servicios, en el que la actividad portuaria del canal desempeña un papel importante, aunque su economía es muy dependiente de las oscilaciones de los precios de los productos agrícolas y del petróleo. El crecimiento del PIB real será del 2%, inferior al de 2001, y la inflación también del 2%, algo por encima de la de 2001. La deuda externa se mantiene en 7.500 millones de dólares, que es un valor alto. La balanza comercial será deficitaria en 2.000 millones de dólares, algo menos que en 2001. El riesgo-país global es moderadamente alto.

En la *República Dominicana*, la presidencia del socialdemócrata Hipólito Mejía, que asumió el cargo en agosto de 2000, sigue transcurriendo con completa normalidad.

El país está realizando importantes reformas estructurales y cuenta con un sector de turismo muy desarrollado, que a su vez hace boyante al sector de la construcción. Su economía se ve muy influenciada por las oscilaciones del precio del petróleo, del que es un país importador. El crecimiento del PIB real será del 2%, similar a la de 2001, y la inflación del 7%, algo por encima de la de 2001. Su deuda externa se mantiene sensiblemente en unos 5.000 millones de dólares, y su balanza comercial será deficitaria en unos 3.500 millones de dólares, valor similar al de 2001. Su riesgo-país global es moderadamente alto.

Las relaciones de *Cuba* con España estuvieron muy influenciadas por la existencia de un número apreciable de terroristas de ETA que se encuentran refugiados en la isla, desde donde se han venido dedicando,

con el conocimiento y la connivencia del gobierno cubano, a desarrollar sus actividades lesivas para los intereses españoles y a apoyar las acciones terroristas de los grupos colombianos FARC y ELN. El número de los cubanos que, a lo largo del año, pidieron asilo político o se introdujo ilegalmente en España fue muy considerable.

Los roces con Estados Unidos fueron frecuentes durante todo el año. En marzo se celebró una reunión en Miami, a la que asistieron legisladores, académicos y altos funcionarios norteamericanos, en la que se pidió insistentemente una reorientación en la política exterior hacia Cuba y el fin del embargo. Según la embajadora Sally Cowad, republicana, en la política hacia Cuba *“en ocasiones nos hemos encontrado apoyados solamente por Israel y las Islas Marshall”*. Ni siquiera la visita del ex presidente Carter a Cuba en el mes de mayo sirvió como elemento de distensión, pues la rígida aplicación por Estados Unidos de la “cláusula democrática”, que ciertamente no se aplicó en el caso de otras dictaduras, impide la relajación de las duras medidas en vigor.

En lo que se refiere a la posible democratización del sistema, no parece muy probable que se produzca en vida de Castro, vistas las teatrales medidas que tomó en junio para conseguir millones de firmas destinadas a apoyar una reforma de la Constitución que asegurase la perdurabilidad del régimen comunista.

Cuba prosigue, sin embargo, su lento proceso de apertura económica y reformas estructurales. Cuenta con unos importantes sectores agrícola y turístico y con abundantes recursos de petróleo y níquel, así como con una mano de obra bien cualificada. El crecimiento del PIB real será del 3,5%, similar al de 2001, y la inflación del 2% (en 2001 fue algo inferior). La deuda externa se mantiene en 13.200 millones de dólares y la balanza comercial será deficitaria en unos 3.000 millones de dólares, algo menos que en 2001. El riesgo-país global es muy alto.

SITUACIÓN EN LA COMUNIDAD ANDINA

La *Comunidad Andina* está integrada por cinco naciones que geográficamente ocupan la zona norte de América del Sur. De ellas Bolivia es interior, Perú y Ecuador están bañadas por el Pacífico, Colombia por los dos océanos y Venezuela por el Atlántico. Aunque con grandes recursos naturales, su inestabilidad política, especialmente acusada en la actualidad en Colombia, a causa del terrorismo, y en Venezuela, a

causa de la política gubernamental, dificulta cualquier iniciativa integradora.

Como bloque, su conjunto es muy importante. Su extensión total, de 4,7 millones de kilómetros cuadrados, equivale a unas diez veces España y a la cuarta parte del total de Iberoamérica. Su población de 116 millones de habitantes es equivalente a tres veces la población española y representa el 23% del total de Iberoamérica. Su mejor futuro posible sería, sin duda, su asociación con el *MERCOSUR*.

La composición del PNB en el conjunto de la zona depende en un 13% del sector primario, en un 32% del sector industrial y en un 55% del sector de servicios. El paro es del 12%. El índice medio de crecimiento de la población es del 1,75% y la esperanza de vida al nacer de 72 años. El índice de alfabetización es de alrededor del 90% en el conjunto de los países, con su valor más bajo (83%) en Bolivia. El 65% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, dato éste que resulta sobrecogedor.

En *Venezuela*, Chávez siguió su progresión hacia una dictadura de corte castrista, disfrazada de “bolivarismo”, causando con ello una importante división interna entre los que lo apoyaban, nostálgicos de ideologías fracasadas en las que pretendían encontrar la solución de sus males, y el resto de la población, que incluía no sólo a sus opositores sino también a una buena mayoría de los ciudadanos que en su día le habían dado su voto, a los sindicatos y a una parte importante de los militares.

Las huelgas generales de abril dieron paso a una revuelta popular generalizada que dio lugar en dos días a la dimisión y posterior reclusión de Chávez y a su esperpéntico regreso al poder. En la memoria del pueblo quedó grabada, sin duda, la imagen de la matanza de los pistoleros que el 11 de abril, dirigidos por asesinos castristas que contaron con la inestimable colaboración de terroristas españoles (ETA) y colombianos (FARC), causaron estragos entre la población que se manifestaba, con un saldo de unos cincuenta muertos, en lo que después se conoció como la “Masacre del Silencio”. El líder de la oposición, Pedro Carmona Estanga, se autoexilió en Colombia.

Durante los meses siguientes se produjeron importantes manifestaciones populares que fueron rechazadas por Chávez haciendo uso de la Guardia Nacional. En agosto Chávez mantuvo un importante enfrentamiento con el Tribunal Supremo, que se resistía a aplicar la lógica “chavista” a los amotinados de abril. En octubre tuvo que reprimir, sacando los

tanques a la calle, las manifestaciones que se produjeron en Caracas, que llegaron a superar el millón de personas. En noviembre, el frente común de la oposición y los militares dio lugar a que se intensificasen unos rumores que iban desde un inminente golpe de Estado hasta una guerra civil. Chávez intervino la policía metropolitana en Caracas, cuestión que dio lugar a las más airadas protestas. La situación sólo tiene una solución posible: las urnas.

A pesar de sus importantes recursos naturales (sobre todo petróleo, pero también gas y minerales) y de las reformas estructurales que se han realizado, el desarrollo económico de Venezuela está muy influenciado por su fuerte dependencia del petróleo, y las oscilaciones en el precio del crudo, y por su inestabilidad política. El PIB real se espera que tenga este año un decrecimiento del 5,3% (en 2001 se produjo un crecimiento del 2,7%) y que la inflación alcance el 32,8% (en 2001 fue del 12,3%). Su deuda externa, de 33.500 millones de dólares, aunque alta, resulta soportable y su valor se mantiene. Su balanza comercial será positiva, de 10.700 millones de dólares, valor ligeramente superior al de 2001. El riesgo-país global es alto.

En *Colombia* prosiguieron los esfuerzos de paz durante los meses de enero y febrero, mientras las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dosificaban sus acciones terroristas para sesgar las conversaciones a su favor. El 20 de febrero, el presidente Pastrana consideró agotadas todas las vías de negociación y ordenó el bombardeo de la *zona de distensión*, poniendo fin con ello a la cesión hecha a la guerrilla en 1998 de 43.000 kilómetros cuadrados.

Las acciones terroristas de las FARC se sucedieron prácticamente sin interrupción a lo largo del año, aumentando en forma importante su lista de asesinatos y secuestros. Entre las acciones más importantes figura el dinamitado en el mes de enero de 30 torres de energía eléctrica que creó un importante problema energético en Colombia; el secuestro el 20 de febrero de un avión con 37 personas a bordo; el secuestro el 22 de febrero de la candidata independiente Ingrid Betancourt; los cerca de 200 asesinatos en el resto del año; la bomba de 200 kilos colocada en Florencia para atentar contra Pastrana en su visita a Italia, que fue felizmente localizada y desactivada; los atentados en la toma de posesión de la presidencia por Alvaro Uribe, las amenazas a 1.098 alcaldes que hicieron dimitir a 120, y el secuestro el 11 de noviembre del Arzobispo de Zipaquirá, Monseñor Jorge Jiménez, presidente del Consejo Episcopal

Latinoamericano, que fue liberado días después en una brillante operación militar. Sobre el asesinato el 16 de marzo del Arzobispo de Cali, Monseñor Isaías Duarte Cancino, se ignora su autoría.

Por su parte, las acciones terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron mucho más limitadas y la más importante fue el secuestro de 27 personas el 21 de agosto en un parque nacional. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de extrema derecha, anunciaron su disolución para romper definitivamente con el narcotráfico, si bien quedarán divididas en una serie de grupúsculos sin un mando superior común. Puede que lleguen pronto a un alto el fuego definitivo.

Las acciones militares gubernamentales empezaron a cosechar algunos éxitos claros que son un índice de su mejora cualitativa, tras el rearme iniciado en enero, y del efecto del Plan Colombia. Buenas muestras de ello son el bombardeo de la *zona de distensión* en febrero, de las que expulsaron a las FARC, los buenos resultados de diversos enfrentamientos con dichas fuerzas y la brillante liberación de Monseñor Jiménez en noviembre, a los tres días de su secuestro.

Las elecciones legislativas se celebraron el 10 de marzo bajo la amenaza de las FARC. Tanto el partido Liberal como el Conservador vieron disminuir su representación en ambas Cámaras a favor de movimientos independientes de derecha y de izquierda, lo que se interpretó como un castigo a los partidos tradicionales. En todo caso, resultó claro que el liberal Alvaro Uribe tenía muchas posibilidades de ser el próximo presidente de Colombia.

Las elecciones presidenciales, celebradas el 26 de mayo, confirmaron plenamente las impresiones anteriores al resultar ganador el candidato liberal Alvaro Uribe Vélez sin necesidad de una segunda vuelta. Aunque se temía que adoptase una postura excesivamente dura, optó desde sus primeras declaraciones por la moderación y solicitó a la ONU su mediación en el conflicto con los terroristas. En su toma de posesión el 7 de agosto, en que relevó a Andrés Pastrana, estuvo presente el Príncipe de Asturias. Se produjeron diversos atentados por parte de las FARC, pero afortunadamente los más importantes fueron abortados. La respuesta de Uribe a los atentados no se hizo esperar: el día ocho dispuso la creación de un millón de informantes civiles y el día 12 decretó el “estado de conmoción interior” (equivalente al estado de excepción) en toda Colombia por noventa días, que fue prorrogado el 9 de noviembre en otros noventa.

Colombia dispone de excelentes recursos naturales, sobre todo hidrocarburos y minas, y un buen sector agrícola. Ha realizado importantes reformas estructurales y recibe ayuda de la comunidad internacional. Sin embargo, la tensión social causada por el terrorismo y por el elevado nivel de desempleo condiciona claramente su desarrollo económico. El crecimiento de su PIB real se espera sea del 1,2% (en 2001 fue del 1,6%) y la inflación del 6% (en 2001 fue del 7,7%). Su deuda externa es muy elevada, de 33.000 millones de dólares, aunque se ha reducido algo. Su balanza comercial será ligeramente positiva, de unos 800 millones de dólares (en 2001 fue de 500). El riesgo-país global es moderadamente alto.

En *Perú* se produjeron entre enero y marzo varios brotes terroristas a cargo de diversos grupos entre los que con toda probabilidad figuran Sendero Luminoso y el Movimiento “Tupamaro”. Sin embargo, las principales fuentes de conmoción social fueron, sin duda, el enfrentamiento de enero en el NE del país entre indígenas amazónicos *aguarunas* y colonos a los que acusaban de apoderarse de sus tierras, que se saldaron con unas 30 personas muertas, y las revueltas de junio en Arequipa, Tacna y otros lugares del sur de Perú, en contra de las privatizaciones abordadas por el gobierno de Toledo.

El desgaste de Toledo, originado fundamentalmente por la oposición de diversos sectores a sus medidas liberalizadoras, fue muy importante. Además de tener que superar una crisis de Gobierno en julio, su partido, Perú Posible, sufrió un gran descalabro en las elecciones regionales y municipales que se celebraron el 17 de noviembre, al ser derrotado, al menos en 10 regiones, por los “apristas” de Alán García, e igualmente en los ayuntamientos, incluido el de Lima, que pasó a manos de Luis Castañeda, de la alianza conservadora Unidad Nacional.

Sin embargo, el tiempo se encargará de reconocer el rotundo éxito del presidente al conseguir que todos los partidos políticos y fuerzas sociales de Perú firmasen el 22 de julio el *Acuerdo Nacional de Gobernabilidad*, para lo que contó con la inestimable ayuda del ex presidente del Consejo de Ministros Roberto Dañino. El acuerdo tiene el objetivo de consolidar la democracia, aliviar la pobreza y lograr un crecimiento económico sostenido con equidad, por medio de un conjunto de 20 políticas de estado que serán vinculantes para los gobiernos de los próximos veinte años.

Otras cuestiones de interés fueron el fallecimiento del que fue presidente de Perú entre 1963 y 1968 y entre 1980 y 1985 Fernando Belaunde Terry, la condena en julio de Alvaro Montesinos a nueve años de cárcel y

las repetidas declaraciones grotescas de Fujimori, desde Japón, de que se presentará a las elecciones de 2006. Por el lado positivo, hay que mencionar la concesión del premio español de literatura Planeta al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique.

Perú cuenta con importantes yacimientos de gas y con grandes recursos de minería y pesca. Recibe apoyo de la comunidad internacional y ha realizado importantes ajustes estructurales, que deben influir claramente en su desarrollo económico. Sin embargo, tiene por delante el reto importante de combatir la pobreza y las desigualdades sociales. Se espera que el crecimiento del PIB real sea del 3,5% (en 2001 fue del 0,2%) y la inflación sea del 1,2% (en 2001 fue negativa del 0,1%). Su deuda externa es de 29.500 millones de dólares y, aunque muy alta y con un servicio anual muy elevado, se ha reducido algo. El saldo de su balanza comercial será positivo de unos 200 millones de dólares (en 2001 fue negativo de 100). El riesgo-país global es alto.

Las elecciones presidenciales previstas en *Ecuador* se desarrollaron en dos vueltas. En la primera, celebrada en octubre, se perfilaron las dos opciones ideológicas contrapuestas que se enfrentarían en una segunda vuelta en noviembre: la encabezada por Lucio Gutiérrez, ex coronel golpista, y la encabezada por el multimillonario empresario agrícola Alvaro Noboa. En la segunda, que tuvo lugar el 24 de noviembre salió elegido, por un estrecho margen y gracias al voto indígena, Lucio Gutiérrez. Aunque inicialmente tachado de “chavista”, si es capaz de mantenerse en una postura moderada, su presidencia será, sin duda, muy beneficiosa para el país.

Ecuador cuenta con importantes recursos naturales, de petróleo, agricultura y pesca, y recibe apoyo de la comunidad internacional. Sigue sin conseguir, sin embargo, el apoyo político necesario para llevar a cabo las reformas estructurales que necesita, y ello contribuye a agravar el empobrecimiento de la población. Con todo, sus indicadores económicos, gracias a su implantada dolarización, son aceptables. El crecimiento de su PIB real se espera que sea del 3% (en 2001 fue del 5,6%) y la inflación del 11,2% (en 2001 fue del 22,4%). La deuda externa está estabilizada en 13,5 millones de dólares. Su balanza comercial se espera que sea ligeramente negativa, en unos 800 millones de dólares (en 2001 fue también negativa en 500). Su riesgo-país global es muy alto.

En *Bolivia*, las elecciones presidenciales, celebradas en dos vueltas en los meses de junio y agosto, dieron la victoria al ex presidente Gonzalo

Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), frente a sus oponentes Manfred Reyes Villa, de Nueva Fuerza Republicana (NFR), Evo Morales, líder de los campesinos productores de hoja de coca, del Movimiento al Socialismo (MAS), y otros candidatos de partidos con menor apoyo popular. El día 6 de agosto tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión de Sánchez de Lozada, que relevó en la presidencia a Jorge Fernando Quiroga Ramírez. Asistió el Príncipe de Asturias.

En mayo falleció, a los 75 años de edad, el ex presidente Hugo Banzer que gobernó el país primero como dictador, entre 1971 y 1978, y después como demócrata, entre 1997 y 2001, en que a causa de un cáncer tuvo que dimitir.

En un informe publicado por la prensa el mes de agosto se afirma que, aunque muy lentamente, el cultivo del palmito está ganando terreno al de hoja de coca gracias, en forma importante, a la cooperación española. El proceso de ganarle la guerra a la droga se aceleraría tremendamente si el mercado norteamericano abriese sus fronteras.

Bolivia cuenta con grandes recursos mineros y de hidrocarburos, que atraen la inversión extranjera. Los reajustes económicos que se realizaron hace más de diez años han facilitado la relativa estabilidad actual. Mantiene una relación especial con el MERCOSUR, lo que le da acceso a los importantes mercados brasileño y argentino. El crecimiento de su PIB real se espera que sea del 1,9% (en 2001 fue del 1,2%) y la inflación del 1,8% (en 2001 fue del 0,9). Su deuda externa, de 4.300 millones de dólares, es muy alta en términos relativos, aunque se ha reducido ligeramente. Su balanza comercial será negativa, de unos 500 millones de dólares, aproximadamente como en 2001. Su riesgo-país global es alto.

SITUACIÓN EN MERCOSUR MÁS CHILE

Sin duda se trata de la zona de mayor entidad dentro de Iberoamérica. De los cinco países que comprende uno, Paraguay, es interior, en tanto que tres están en la costa atlántica (Brasil, Uruguay y Argentina) y uno en la del Pacífico (Chile).

Su extensión, de más de 12,6 millones de kilómetros cuadrados, equivale a 25 veces España y supone más del 63% de la extensión de toda Iberoamérica. Su población, de 234 millones de habitantes equivale a casi seis veces la población española y a algo más del 46% de la iberoameri-

cana. Aunque su densidad de población es baja, menos de la cuarta parte de la española, su alto índice demográfico hará que tenga un crecimiento importante en pocos años.

La composición del PNB de la zona, como promedio, depende en un 10% del sector primario, en un 30% de la industria y en un 60% del sector de servicios. El índice de paro ronda el 10% en el conjunto de los países, aunque en Argentina, Paraguay y Uruguay tiene valores más altos (respectivamente del 25, 18 y 15%). El crecimiento de la población es próximo al 1% en el conjunto de los países, valor bastante moderado, si bien en Paraguay alcanza el 2,57%, y la esperanza de vida al nacer es de unos 75 años en todos los países menos en Brasil, que es de 64 años. El índice de alfabetización supera en todos los países el 90%, excepto en Brasil que es del 83%. El tanto por ciento de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza es bajo en Uruguay (6%), alto en Brasil y Chile (22%) y muy alto en Argentina y Paraguay (37%).

El año 2002 ha sido muy comprometido para la economía de *Brasil*, por dos razones fundamentales: la crisis económica argentina y la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones de octubre. Todo ello, además, en un escenario de recesión económica en los bloques más importantes, Estados Unidos y la Unión Europea, que condujo, a mediados de año, a la depreciación del real y a un aumento alarmante de la prima de riesgo-país. El apoyo prometido por Estados Unidos, tras la visita del secretario del Tesoro Paul O'Neill a Brasil en agosto, facilitó el anhelado acuerdo con el FMI y acabó aportando cierta tranquilidad. Tras ello, el presidente Cardoso consiguió un valioso pacto con los principales candidatos a las elecciones del octubre que aseguró el respeto a las condiciones exigidas por el FMI para seguir prestando su ayuda.

El período preelectoral fue largo y en él se fueron afianzando las expectativas del candidato del izquierdista partido del Trabajo, Luiz Inacio "Lula" da Silva, a quien las encuestas situaban en segundo lugar, tras el centroizquierdista Ciro Gómes y por delante del oficialista José Serra y del populista Anthony Garotinho. La evolución hacia posturas más moderadas que las iniciales permitió a Lula da Silva ir mejorando sus posibilidades hasta convertirse, tras los debates televisados con los demás candidatos, en claro favorito. Los resultados de las elecciones del 6 de octubre le dieron la victoria, pero no con margen suficiente. Tras la segunda vuelta, del 27 de octubre, en las que renovó su victoria con el 61% de los votos, resultó el presidente más votado en la historia de Brasil. Se hará cargo de

la presidencia el 1 de enero de 2003. Sus declaraciones de “*honrar todos los contratos firmados por el Gobierno de Brasil*” y de que no habrá “*cam - bios con sobresaltos*” terminaron de despejar cualquier duda sobre el futuro económico del país. El lema de “*queremos un país decente*” había triunfado.

Brasil dispone de grandes riquezas naturales y de una economía diversificada. Cuenta, por otra parte, con apoyo de la comunidad financiera internacional. Las diversas depreciaciones del real han contribuido a la estabilización de la moneda y a favorecer la balanza comercial. La nueva etapa política que se inicia, con la presidencia de Lula da Silva, debe permitir culminar las reformas ya iniciadas, pues su interrupción sería muy contraproducente para la economía de la nación. En este año se espera que el crecimiento del PIB real sea del 1,3% (en 2001 fue del 1,5) y la inflación del 7,6%, similar a la de 2001. La deuda externa, aunque en ligero descenso, tiene un valor muy alto: 235.000 millones de dólares. El saldo de la balanza comercial, gracias a las depreciaciones, será positivo de 11.200 millones de dólares, muy superior al de 2001 que fue de 2.700. El riesgo-país global es, en todo caso, alto.

El año comenzó para *Argentina* entre continuas “caceroladas”, en protesta por la política económica del Gobierno de Eduardo Duhalde, que poco después decidió poner fin a la “dolarización”, suprimiendo la paridad del peso con el dólar, lo que dio lugar a una progresiva y acusada depreciación del peso. El caótico proceso que siguió tuvo como causas principales la congelación de los depósitos, conocida como el “corralito”, decretada para evitar la bancarrota, el reconocimiento de la incapacidad argentina para hacer frente al servicio de la deuda externa y la imposibilidad de poner en marcha, para no aumentar más aún la tensión social, un programa económico creíble para el FMI y la UE.

La inflación galopante que se desató hizo encarecerse la cesta de la compra, a finales de marzo, en un 50%. El hambre hizo su aparición y con ella los saqueos y actos de vandalismo en todo el país. El cumplimiento de las condiciones impuestas por el FMI sólo resultaba posible con un pacto del Gobierno con las provincias. En abril dimitió como ministro de Economía Jorge Remes Lenicov y se hizo cargo del departamento Roberto Lavagna.

A lo largo del mes de mayo empezaron a cumplirse las condiciones exigidas por el FMI para llegar a un acuerdo: Duhalde consiguió ganarse primero la confianza de los gobernadores peronistas y después el apoyo

parlamentario necesario para derogar la ley de Subversión Económica y modificar la ley de Quiebras. A pesar de este progreso, en junio se produjeron violentas manifestaciones que fueron brutalmente repelidas por la Policía y ocasionaron dos muertos y una multitud de heridos.

Las duras negociaciones con el FMI prosiguieron en los meses siguientes y en ellas el Fondo puso como condición que se alcanzase un acuerdo de consenso político. Una circunstancia favorable fue el anuncio hecho por Duhalde, tras acordarlo con los gobernadores, de dar una fecha definitiva para las elecciones presidenciales: el 27 de abril de 2003.

A finales de noviembre, la imagen de Argentina es la de un pueblo resignado, que no acaba de comprender cómo un país con una gran riqueza de recursos puede estar en situación semejante. En la mente de la población prevalece una idea: la clase política es corrupta en un cien por cien. “*Que se vayan todos*”, fue el lema más común durante el triste año que termina. Mientras tanto, las noticias de los niños muertos por desnutrición en Tucumán, muestra sin duda de los que también habrá en otros muchos lugares, siguen sobrecogiendo al mundo. Solamente la lenta aproximación, que parece apreciarse en noviembre, a las condiciones mínimas que exige el FMI para un acuerdo, abre una puerta a la esperanza.

Argentina dispone de grandes recursos naturales, unos sectores agrícola y alimentario desarrollados y una mano de obra cualificada. El deterioro de su situación política y social, así como la evolución desfavorable de su situación económica y su incapacidad para hacer frente al servicio de su deuda externa la han hecho interrumpir su proceso de dolarización y, por otra parte, la han llevado a perder casi totalmente el apoyo financiero internacional. Su PIB real parece que tendrá este año un decrecimiento del 11,3% (en el 2001 el decrecimiento fue del 4,45) y la inflación puede alcanzar el 58% (en 2001 llegó a ser negativa del 1,55). Su deuda externa se mantiene en un valor muy elevado, de 158.000 millones de dólares, y su servicio equivale al 75% de las exportaciones. Su balanza comercial tendrá un saldo positivo de unos 17.000 millones de dólares (en 2001 fue de 6,3 miles de millones), y éste es el único dato favorable. El riesgo-país global es muy alto.

La decisión en *Uruguay*, en junio, de adoptar la libre flotación de la moneda y abandonar el sistema de bandas en vigor desde 1992, hizo que se agudizase la crisis económica y social que existía en el país, con la reproducción de situaciones similares a las de Argentina y Brasil. Las con-

secuencias fueron el aumento de la cotización del dólar en un 40%, el disparo de la inflación y la paralización de la actividad bancaria.

El FMI condicionaba su posible ayuda a la limitación de los retiros de depósitos a plazo fijo, lo que creó una enorme tensión social. Como en Argentina, se empezaron a producir saqueos y actos vandálicos. La incertidumbre se mantuvo hasta principios de agosto, en que se iniciaron las reformas necesarias para conseguir la ayuda del FMI, lo que permitió que las ayudas pasasen de los 1.500 millones de dólares concedidos en mayo a 3.800 millones. A pesar de que ello contribuyó a que se calmasen algo los ánimos, se estima que los resultados económicos de 2002 serán muy pobres.

Uruguay dispone de una economía diversificada, con unos importantes sectores agrícola y de servicios, así como una mano de obra cualificada y una cierta estabilidad política; aunque están pendientes de completar las reformas estructurales que aseguren su desarrollo económico. En este año, por contagio de las perturbaciones sufridas en la Argentina, se ha alterado sensiblemente la natural bonanza de la economía uruguaya. Se espera que el PIB real tenga un decrecimiento del 10% (en 2001 decreció un 3,1%) y que la inflación llegue al 35% (en 2001 fue del 3,6%). Su deuda externa parece que se reducirá hasta los 7.000 millones de dólares y el saldo de su balanza comercial, que suele ser deficitario por la preponderancia del sector agrícola, parece que quedará prácticamente en cero. Su riesgo-país global es moderadamente bueno.

En *Paraguay*, el presidente Luis González Macchi fue objeto de aporatosas protestas de la oposición, que reclamaba su renuncia, ante el deterioro de la situación económica y social del país. Hubo una clara participación de seguidores del ex general golpista Lino Oviedo. Las manifestaciones contaron con el apoyo del vicepresidente liberal Julio César Franco, que ocupa el cargo desde hace dos años gracias al apoyo "oviedista" y pretende suceder a González Macchi. El día 15 de julio el Gobierno decretó el estado de excepción en todo el país y propició con ello la brutal represión de los manifestantes y la intervención de las Fuerzas Armadas. El saldo final fue de dos muertos y más de cien heridos. La situación se vio con bastante recelo desde los países vecinos, Argentina, Brasil y Bolivia, que reforzaron sus fronteras con Paraguay. El día 17 el Gobierno levantó el estado de excepción. La actuación de Julio César Franco puede haber condicionado seriamente su futuro político. A finales de noviembre, las dimisiones de los téc-

nicos del equipo económico del Gobierno, por las continuas intervenciones de los políticos en sus tareas, llevaron al país al borde de la suspensión de pagos.

Paraguay cuenta con una economía saneada y abierta, con unos buenos sectores agrícola y ganadero y con importantes recursos hidroeléctricos. Su desarrollo económico ha venido estando limitado en los últimos años por su relativa inestabilidad política y por el retraso en la puesta en práctica de las necesarias reformas estructurales. El crecimiento del PIB real este año será muy próximo a cero (en 2001 fue cero) y la inflación del 20% (en 2001 fue del 13%). Su deuda externa, de 3.000 millones de dólares, ha disminuido ligeramente. El saldo de su balanza comercial será prácticamente cero (en 2001 fue negativo de 500 millones de dólares). Su riesgo-país global es alto.

Chile consiguió, durante la cumbre de la UE, Iberoamérica y el Caribe del mes de mayo, firmar un tratado de libre comercio con la UE, lo que es un éxito muy importante, en tanto que ni el MERCOSUR ni la Comunidad Andina consiguieron ni siquiera un compromiso en el mismo sentido. Lo siguiente que pretende conseguir Chile es un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Aunque la Corte Suprema confirmó en julio el sobreseimiento del caso Pinochet, que renunció a su cargo de senador vitalicio, parece que la Justicia puede volver a considerar su desafuero. En todo caso, en agosto fueron condenados 16 de sus ex jefes militares por el asesinato de un líder sindical en 1982. La ministra de Defensa ha defendido, con toda razón, que debe restituirse al presidente el poder de nombrar a los Comandantes en Jefe.

Chile dispone de grandes recursos minerales y pesqueros, una economía saneada y un sistema político estable. Sus resultados económicos están muy determinados por las exportaciones de cobre y las importaciones de petróleo. Arrastra, por otra parte un importante problema de desempleo. El crecimiento del PIB real se espera sea del 2,2% (en 2001 fue del 2,85) y la inflación del 3,3% (en 2001 fue del 2,6%). Su deuda externa se mantiene sensiblemente en 37.000 millones de dólares. El saldo de su balanza comercial será positivo de 2.800 millones de dólares, algo más que en 2001. Su riesgo-país global es bueno.

EL ESFUERZO MILITAR

Los datos que se incluyen en este apartado proceden del anuario “Military Balance 2001-2002” y, en general, están referidos a 2001. En los indicadores que se aportan no se tiene en cuenta la estructura de los gastos de defensa. No se facilitan datos de Costa Rica ni de Panamá por no disponer de Fuerzas Armadas. Las clasificaciones que se proporcionan tienen una finalidad meramente comparativa.

Las diversas crisis económicas locales, con mayor o menor relación con la grave situación argentina y, por otra parte, la ausencia de conflictos, salvo en el caso de Colombia, han tenido la consecuencia de unos claros estancamientos de los presupuestos de Defensa.

En *Brasil* se ha puesto en marcha el *Plan Phoenix* para la modernización de la Fuerza Aérea, que contará con un total de 3.500 millones de dólares repartidos entre los próximos ocho años, de los que 700 millones se dedicarán a la construcción de 24 aviones de combate modernos. Parece que la empresa brasileña *Embraer*, vinculada a la industria francesa, se hará cargo de la mayoría de las construcciones. Por otra parte, el viejo portaaviones *Minas Gerais* ha sido al fin sustituido por el recientemente adquirido a Francia *Foch*, que había sido retirado del servicio, y que ha sido rebautizado como *Sao Paolo*, que tiene unas prestaciones claramente mejores que las de su predecesor.

Colombia ha visto incrementarse el paquete inicial de ayuda militar de Estados Unidos, de 1.300 millones de dólares, en otros 500 millones con el fin de reforzar la lucha contra el narcotráfico. La parte más costosa del paquete, 18 helicópteros UH-60 *Black Hawk*, se recibió a finales de 2001.

En *México*, quizás ante el incremento de las exportaciones de petróleo a Estados Unidos, se ha visto facilitada la firma de un contrato con la empresa brasileña *Embraer* para la construcción de un avión de Alerta Aérea Temprana y Control (AEW&C) y dos Aviones de Patrulla Marítima EMB-15.

El *esfuerzo económico* en Defensa, normalmente tiene una gran relación con el Producto Nacional Bruto (PNB) y la extensión de las naciones. Las naciones de Iberoamérica realizan los siguientes esfuerzos:

- Alto (más de 1.000 millones de dólares al año): Brasil 8.800, Argentina 3.100, México 3.000, Chile y Colombia 2.100, y Venezuela 1.960.

- Medio (entre 1.000 y 500 millones de dólares al año): Perú 827.
- Bajo (menos de 500 millones de dólares al año): Ecuador 400, Uruguay 367, Bolivia 130, El Salvador 112, Guatemala 108, República Dominicana 103, Paraguay 81, Honduras 35, Cuba 33 y Nicaragua 27.

El *esfuerzo económico relativo*, o tanto por ciento del PNB que cada país dedica a la Defensa, refleja el interés que se concede a ésta. Los esfuerzos son los siguientes:

- Alto (por encima del 2%): Uruguay 2,60; Colombia 2,59; Chile 2,41; Venezuela 2,16; y Ecuador 2,00.
- Medio (entre el 2 y el 1,5%): Ninguno.
- Bajo (por debajo del 1,5%): Bolivia 1,38; Brasil 1,37; Perú 1,25; Argentina 1,10; El Salvador 1,06; Nicaragua 0,87; Paraguay 0,85; República Dominicana 0,76; Guatemala 0,73; Honduras 0,60; México 0,54 y Cuba 0,20.

El *esfuerzo humano* en Defensa se refiere al total del personal de las Fuerzas Armadas. Los esfuerzos, en miles de personas, son los siguientes:

- Alto (más de 100): Brasil 288, México 193, Colombia 158 y Perú 100.
- Medio (entre 100 y 50): Chile 87, Venezuela 82, Argentina 70 y Ecuador 59.
- Bajo (menos de 50): Cuba 46, Bolivia 32, Guatemala 31, República Dominicana 25, Uruguay 24, Paraguay 19, El Salvador 17, Nicaragua 16 y Honduras 8.

El *esfuerzo humano relativo* lo expresamos como el total del personal militar en tanto por mil de la población total de cada país. Refleja también el interés que se concede a la Defensa. Los esfuerzos son los siguientes.

- Alto (más de tres militares por cada mil habitantes): Uruguay 7,1; Chile 5,7; Ecuador 4,6; Cuba 4,1; Perú 3,8; Bolivia 3,7; Colombia 3,6; Venezuela y Paraguay 3,3; y Nicaragua 3,1.
- Medio/alto (entre tres y dos): República Dominicana 2,8; Guatemala 2,7; y El Salvador 2,6.

- Medio (entre dos y uno): México y Argentina 1,9; Brasil 1,7; y Honduras 1,3.

Como indicador de la *calidad del equipamiento* elegimos arbitrariamente un quinto de la relación del gasto de Defensa al número total del personal militar. Los niveles son los siguientes.

- Alto (más de 4.000 dólares por persona y año): Argentina 8.850, Brasil 6.120, Chile 4.800 y Venezuela 4.700.
- Medio (entre 4.000 y 2.000): México 3.100, Uruguay 3.070 y Colombia 2.660.
- Bajo (menos de 2.000): Perú 1.650, Ecuador 1.350, El Salvador 1.330, Paraguay 870, Honduras y República Dominicana 840, Bolivia 830, Guatemala 690, Nicaragua 340 y Cuba 140.

Aunque los indicadores facilitados de los esfuerzos militares de los países de Iberoamérica tienen cierto grado de incertidumbre, de su comparación con los mismos indicadores de 2001 se deduce que los esfuerzos relativos, tanto económicos como humanos, en líneas generales no han variado y lo mismo sucede con la calidad del equipamiento.

LAS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA

En el mes de abril se acordaron entre Chile y la UE las bases de un amplio acuerdo de libre cambio. El compromiso se firmó en la cumbre de Madrid, el 17 de mayo. Se refiere a la eliminación progresiva, en siete años, de aranceles, limitaciones y cuotas en los intercambios comerciales.

En vísperas de la cumbre de Madrid, el presidente Aznar se reunió con el presidente norteamericano, Bush, en Camp David, para intercambiar puntos de vista y coordinar las políticas de los respectivos gobiernos en diversos aspectos, entre los que destacan Iberoamérica, y la delicada situación económica de algunos países, y la lucha contra el terrorismo.

La II Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe se celebró en Madrid los días 17 y 18 de mayo, con asistencia de 52 delegaciones. Castro y Chávez enviaron sendos representantes. El orden del día incluía asuntos de gran interés, como los derechos humanos, la democracia, la cooperación contra el terrorismo y el narcotráfico, el comercio entre la UE e Iberoamérica, los procesos de integración, el retraso tecnológico y el desarrollo sostenible.

Aunque pudo firmarse el citado acuerdo de la UE con Chile, segundo de la UE tras el de México, se constató la imposibilidad que existe por el momento de suscribir otro acuerdo similar con el MERCOSUR, a pesar del interés que tienen ambas partes. Se decidió mantener reuniones cada seis meses para impulsar las negociaciones necesarias. Hubo movilizaciones de grupos antiglobalización que, como es habitual, contaron con el apoyo de los partidos de más a la izquierda. Una de las claves del compromiso de Madrid fue la expresión de la voluntad de alcanzar acuerdos de cooperación de la UE con Centroamérica y con la Comunidad Andina. Las negociaciones se iniciarán en 2004 y 2005, respectivamente.

Estados Unidos prosigue, sin precipitaciones arriesgadas, su proceso de creación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que debe culminarse en 2005. A dicho efecto ha mantenido durante el año contactos con diversos países iberoamericanos, entre los que destacan los habidos con Brasil, Argentina y Uruguay.

Por otra parte, el presidente Bush promulgó el 6 de agosto la llamada *Autoridad de Promoción Comercial*, herramienta conocida como “fast track”, que le permite, durante cinco años, negociar acuerdos comerciales con países de la región, con ciertas garantías de apoyo parlamentario. Asimismo, la ley renueva el *Tratado de Preferencias Comerciales Andinas*, que concede un trato arancelario especial a determinados productos procedentes de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, países que a su vez se comprometen a colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos adoptó medidas similares en relación con los intercambios comerciales con Guatemala.

LA XII CUMBRE IBEROAMERICANA

La XII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno se celebró en Punta Cana (Playa Bávaro, República Dominicana) los días 16 y 17 de noviembre, con asistencia de Su Majestad el Rey y los representantes de los 21 países asistentes, incluidos Portugal y España. No asistieron, y en consecuencia fueron representados, los presidentes de Cuba, Fidel Castro, Panamá, Mireya Moscoso y Perú, Alejandro Toledo.

La Declaración de Punta Cana se ocupa fundamentalmente de tres asuntos principales. En primer lugar, incluye la exigencia de todas las naciones iberoamericanas para que tanto la Unión Europea como Estados Unidos eliminen las barreras proteccionistas existentes, en

absoluto liberales, que en el caso europeo está previsto se prolonguen hasta el año 2013. En segundo lugar, todos los participantes subrayaron su voluntad, como les había solicitado el Rey Don Juan Carlos, de un mayor compromiso y una mayor coordinación ante la amenaza terrorista en todas sus formas, incluidos los primeros brotes fundamentalistas islámicos que se han detectado en Sudamérica. Finalmente se aprecia la necesidad de evaluar los flujos migratorios desde los países iberoamericanos hacia la Unión Europea, y muy en concreto hacia España y Portugal, naciones receptoras a las que se solicita una equilibrada política de acogida.

Por otra parte, se aprobó por unanimidad, y fue muy celebrada, la propuesta presentada por el presidente español, José María Aznar, que comprende un paquete de medidas tendentes a revitalizar las cumbres. Para poner en práctica dichas medidas, el presidente de Brasil, Francisco Henrique Cardoso, al dejar su cargo el próximo 1 de enero, asumirá la presidencia de un grupo de trabajo que deberá presentar a la próxima cumbre, que se celebrará en Bolivia en noviembre de 2003, informes sobre varios asuntos objeto de estudio. El primero es la postura ante los países que quieren formar parte de la Comunidad Iberoamericana, entre los que se encuentra Puerto Rico. En segundo lugar, debe estudiarse la transformación de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, que tiene su sede en Madrid, en una Secretaría permanente, que tenga un carácter más operativo, y que a la vez pueda dotar a la Comunidad de una representación única en los grandes foros internacionales. Por último, debe revisarse la organización actual de las cumbres para acomodarla progresivamente a un esquema más semejante al de la Unión Europea y, en particular, deben fomentarse las reuniones sectoriales de ministros y la cooperación iberoamericana para el desarrollo.

ESPAÑA E IBEROAMÉRICA

En el año 2002, lo mismo que en los anteriores, el nivel de las relaciones entre España y los países de Iberoamérica ha sido alto.

Sus Majestades los Reyes concedieron el 16 de mayo una audiencia a los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la Cumbre de Madrid. Los días 15 y 16 de noviembre asistieron a la XII Cumbre Iberoamericana que se celebró en la República Dominicana e, inmediatamente después, entre los días 17 y 20, realizaron un viaje de Estado a México.

Su Majestad el Rey recibió el 29 de abril al ministro de Asuntos Exteriores de Brasil. El 8 de noviembre inauguró en Toledo el Foro Iberoamérica. En el aspecto cultural, el 24 de abril entregó el Premio Cervantes de literatura al escritor colombiano Alvaro Mutis.

El Príncipe de Asturias asistió a las tomas de posesión de los presidentes de Nicaragua, el 10 de enero, Honduras, el 28 de enero, Costa Rica, el 8 de mayo, Bolivia, el 6 de agosto, y Colombia, el 7 de agosto. Asimismo, el 21 de octubre inauguró en Salamanca la “XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventudes” y el “X aniversario de la Organización Iberoamericana de la Juventud”. El 10 de noviembre clausuró en Toledo el Foro Iberoamérica, en el que matizó la importancia que supone para España ser punto de referencia entre Iberoamérica y la UE. El 20 de noviembre inauguró en Madrid el Foro Europeo de Empresas Iberoamericanas.

Con independencia de la relación habitual existente, y el contacto telefónico casi diario con distintos presidentes iberoamericanos, las actividades del presidente Aznar relacionadas con Iberoamérica fueron especialmente intensas sobre todo con ocasión de su presidencia, durante el primer semestre, de la Unión Europea, aunque también con motivo de su participación en diversos foros internacionales representando a España. En todas sus actividades, siempre que hubo lugar para ello, abogó por facilitar la ayuda internacional a Argentina y a otros países iberoamericanos afectados por la crisis económica. En este sentido, fueron importantes sus participaciones en las reuniones del *Foro de la ONU para la Financiación del Desarrollo*, que se celebraron en Monterrey (México) a finales de marzo, la *Cumbre Mundial de la Alimentación*, que se celebró en Roma en junio, la *Cumbre del G-8*, celebrada en Kananaskis (Canadá) a finales del mismo mes de junio, y la *Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible*, o “Cumbre de la Tierra”, que se celebró en Johannesburgo (Unión Sudafricana) en septiembre, como continuación de la Cumbre de Río de 1992.

En enero se puso en marcha en Madrid una fundación cuya vinculación con Iberoamérica está llamada a ser muy estrecha: el *Instituto Elcano*. Creado como centro de análisis y propuestas al Gobierno en materia internacional y estratégica, sin duda jugará un papel decisivo en el asentamiento de Iberoamérica en el mundo que conforma el mapa del bienestar, que es coincidente con el de la democracia y el liberalismo.

El *Curso de Altos Estudios Estratégicos* para oficiales superiores iberoamericanos, organizado por el Centro Superior de Estudios de la

Defensa Nacional (CESEDEN) y que se celebró en Madrid en el primer trimestre fue, según el ministro español de Defensa “*un primer paso*” del futuro común de los Ejércitos de la Comunidad Iberoamericana, con el objeto de que sus militares “*puedan pensar y proyectar juntos*” desde el principio compartido de “*la paz, la justicia, la libertad y la solidaridad de sus pueblos*”.

El día 7 de mayo se celebró en Madrid la *X Cumbre de Alcaldes de ciudades iberoamericanas* —26 ciudades capitales iberoamericanas, Madrid y Barcelona— institución que cumple veinte años de existencia y en la que se intercambian experiencias que siempre resultan de gran interés.

El 13 de mayo se celebró la reunión de constitución del *Club de Madrid*, cuya creación se había comprometido en la *Conferencia sobre la Transición y Consolidación Democrática*, en octubre de 2001. Es un foro que contará con la participación de ex presidentes y con personajes políticos importantes de 27 países, entre los que hay una importante participación iberoamericana, cuyo objetivo será apoyar los procesos de transición democrática. La presidencia se reserva a Fernando Henrique Cardoso, para cuando deje la presidencia de *Brasil*.

OBSERVACIONES FINALES

En el año que termina, los factores más preocupantes de Iberoamérica han sido la situación social de la Comunidad Andina y de Centroamérica y el Caribe donde, respectivamente, el 65 y el 45 por ciento de sus poblaciones viven bajo el umbral de la pobreza (con menos de un dólar per cápita diario), la grave crisis económica de los países del MERCOSUR, los conflictos políticos de Colombia y Venezuela, y la dictadura de Castro en Cuba.

El bloqueo económico de Estados Unidos sobre Cuba es cada vez más impopular, incluso entre muchos altos funcionarios e intelectuales norteamericanos, que lo consideran contraproducente e injusto.

La “globalización”, a través de sus mecanismos y sus economías de escala, es un factor de progreso. Los que se oponen a ella, normalmente desde posturas nostálgicas del marxismo-leninismo, aparte de ignorar su clara aportación, no acaban de admitir que el sistema que los inspira, aparte de una férrea dictadura tan execrable como la nazi pero que produjo diez veces el número de muertos de ésta (100 millones por 10 millo-

nes), mantuvo en la miseria durante más de setenta años a buena parte de la humanidad.

El proyecto norteamericano del ALCA no debe impedir, sino complementar, otras opciones de libre comercio para los países de Iberoamérica, especialmente hacia la Unión Europea.

Los sistemas populistas con frecuencia no restringen en forma adecuada el gasto público ni contienen la deuda externa. Ello conduce a situaciones en que los países en los que están implantados no pueden hacer frente al servicio de sus deudas y se ven inmersos en una espiral que lleva al colapso a sus economías.

Durante el año, y como consecuencia del impulso norteamericano, se ha mejorado notablemente la coordinación de la lucha antiterrorista entre Estados Unidos, Iberoamérica y la Unión Europea. Los efectos se harán notar a ambos lados del Atlántico.

Se aprecia en muchos países iberoamericanos una clara desilusión hacia sus todavía incipientes democracias, que no han sido capaces de erradicar la corrupción. A muchos iberoamericanos les importan más sus economías familiares que los viejos debates ideológicos y que disponer de un sistema de libertades.

La aguda crisis económica que atraviesan los países del MERCOSUR sólo podrá superarse si se adoptan unas medidas estructurales que resulten convincentes al FMI.

La incertidumbre sobre la actuación política de algunos presidentes elegidos este año, que en principio parecen afines a Chávez, causa preocupación dentro y fuera de Iberoamérica.

El año 2002 ha sido muy favorable para México y para Chile. Para México porque su economía parece situar al país como primera potencia de Iberoamérica, y para Chile porque, aun con dificultad, está superando la transición, por haber obtenido unos buenos resultados económicos, y por haber suscrito un importante acuerdo comercial con la Unión Europea.

España, en coordinación con Portugal, debe seguir siendo el punto de referencia entre Iberoamérica y la Unión Europea.

CAPÍTULO SEXTO

ÁFRICA

ÁFRICA

Por ALEJANDRO CUERDA ORTEGA

En el año transcurrido (2002) no han sido muchas las noticias llegadas del África Subsahariana que hayan concentrado la atención mundial. La mayoría de ellas pesimistas, como suele ser lo habitual, tampoco han conmovido especialmente al mundo desarrollado, que no las recibe como novedades y tarda poco en olvidarlas. Muchas personas, en Occidente, se preguntan si vale la pena esforzarse para mejorar la suerte de ese continente en permanente sufrimiento, que ve lejano, a pesar de que el mundo entero se ha hecho hoy pequeño y próximo; pero esa África Negra es la de 650 millones de seres humanos que esperan; muchos de ellos, el sustento del día; otros, la llegada de la ayuda de los poderosos; otros más, la ocasión de huir al mundo blanco, o tan solo a las grandes ciudades próximas, que crecen, así, de forma descontrolada, en enormes bolsas de pobreza; otros, ciertamente, esperan alguna mejora en sus vidas o en su entorno, quizá no gran cosa, pero probablemente ilusionados, porque la población africana es mayoritariamente joven y se contenta con poco; y muchos de ellos ya sólo esperan el final de su existencia, porque son 340 millones los que viven con menos de un dólar al día y 24.000 los que mueren de hambre en el mundo, también cada día.

Es bien sabido que, en las precarias condiciones en que viven muchos pueblos del África Negra, cualquier alteración climática importante supone una amenaza para la vida de miles de personas, que sólo cuentan con los frágiles productos de la tierra. Es el caso, esta vez, del África austral, donde inundaciones primero y sequías después han arrasado las cosechas y 13 millones de personas, un 43% de la población, han estado ame-

nazadas de muerte por hambre. Se han producido llamamientos de los organismos mundiales competentes, en especial la ONU, para un socorro alimentario de urgencia. En septiembre, y especialmente en Malawi, los muertos se contaban por decenas de miles.

Pero esa fragilidad e incertidumbre sobre la elemental función que es alimentarse cada día se ha quebrado también otras veces, y en distintos lugares, por muchas otras razones, como son las guerras, la explotación de los débiles, el expolio de las riquezas, las persecuciones políticas, las plagas, las enfermedades que paralizan y la mala administración y la corrupción que va unida; es el citado caso de Malawi, donde 3,2 millones de personas padecen esa hambruna, que se vio incrementada por la venta fraudulenta de las reservas de cereales del gobierno a Kenia y a funcionarios de la administración a precios por debajo del coste, con pérdida de 40 millones de dólares. También el problema del hambre en la zona se ha agravado por el rechazo de varios países afectados a recibir cereales genéticamente modificados que les ofrecía el Programa Mundial de Alimentos (WFP) de las NNUU.

También se han sucedido los conflictos y enfrentamientos, las guerras, los desplazamientos masivos, la violencia como única dialéctica, que pueden verse en el siguiente resumen del África Subsahariana en el año 2002:

- *Angola*: La guerra, que duraba ya 27 años, llegó hasta abril, en que se firmó la paz. Continúa la insurrección de los guerrilleros del enclave de Cabinda. El país está devastado.
- *Burundi*: Continúa la cruel guerra civil, pese a los esfuerzos de NNUU y de N. Mandela.
- *República Centroafricana*: En octubre se reproducían viejos enfrentamientos, sofocados por las tropas del gobierno con ayuda de Libia.
- *Costa de Marfil*: Sublevación militar en septiembre con 340 muertos. En octubre se acordaba un alto el fuego. El país queda dividido en dos zonas, norte y sur.
- *República Democrática del Congo*: La cruel guerra de cuatro años podría haber llegado a su fin con la firma de la paz en julio con Ruanda. Se han retirado las tropas invasoras de cinco naciones, pero en el país abundan las facciones rebeldes, los odios, las armas y las riquezas, una combinación inquietante para un gobierno muy débil.

- *Guinea-Conakry*: Constantes escaramuzas de guerrillas en la frontera con Sierra Leona y Liberia.
- *Liberia*: Enfrentamientos entre el gobierno y la guerrilla LURD (Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia). En septiembre y octubre se intenta la paz. 165.000 desplazados.
- *Senegal*: Prosigue la insurrección independentista de Casamance.
- *Sierra Leona*: La sangrienta guerra civil contra el FRU (Frente Revolucionario Unificado) parece abocar su final. La ONU gestiona la retirada de MINUSIL (17.500 soldados). Hay miles de refugiados en campos de concentración y centenares de mutilados.
- *Somalia*: País dividido y dominado por los “señores de la guerra. En octubre se intentaba una reconciliación muy difícil. Siguen las venganzas y enfrentamientos esporádicos.
- *Sudán*: 19 años de guerra del Norte musulmán contra el Sur cristiano. Se acuerdan treguas que duran horas. Presión pacificadora de EEUU. En octubre, nuevo “alto el fuego”.
- *Uganda*: Diez años de acciones guerrilleras y matanzas apoyadas por Sudán.

Pero, hecha ya esa referencia a los aspectos negativos, que posiblemente haya que admitir como constantes del África Subsahariana por muchas generaciones venideras, ha de señalarse que son también muchas las circunstancias que alientan a la esperanza de evolución pacífica y de desarrollo, los signos de la paz; y lo que es realmente valioso y prometedor, la reiterada manifestación de organismos y dirigentes africanos de que han de abandonarse los egoísmos, los odios, los regímenes dictatoriales, la corrupción, la violación de los derechos humanos (DDHH); la imperiosa necesidad de volver las miradas y los esfuerzos hacia el pueblo y sus necesidades básicas; un empeño conjunto y solidario para lanzar las naciones al desarrollo, a la mejora de la producción y el comercio, reforzando la sociedad civil y rescatando la identidad africana, lo específico de su sociedad, sus valores y principios.

El 30 de julio se firmaba la paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo (RD Congo) y dos meses más tarde se retiraban las tropas extranjeras. Va adelante, aunque con enormes dificultades, el proceso de reconstrucción de la paz y de la nación en una Angola devastada por 23 años de guerra civil. Se mantiene la solución del conflicto

entre Etiopía y Eritrea, otro de los anteriores horrores de África; también en Mozambique, que ha pasado de 16 años de contienda civil y de una posguerra marcada por enormes dificultades e inundaciones que estremecieron al mundo a un poderoso desarrollo. Se advierten signos positivos de paz en Sudán, en Costa de Marfil y en la caótica Somalia entre sus 22 facciones discordantes y enfrentadas. Son muestras claras de un proceso de pacificación en el continente que se debe tener en cuenta y apoyar con empeño.

En otro orden de cosas, la creación de la Unión Africana (UA) ha despertado ilusiones y esperanzas, al igual que el programa “Nueva Asociación para el Desarrollo Africano” (NEPAD), de los que más adelante se hablará. El continente necesitaba una gran causa unificadora de las fuerzas políticas, económicas y sociales y esos dos organismos lo son; ambos han de ser madurados, completados y llevados adelante con ilusión y esfuerzo, pero sus primeros pasos constituyen una promesa y en ellos ha de depositarse confianza y prestarles un decidido respaldo, como si se tratase de una última oportunidad para que África comience a caminar sola. Sorprende el entusiasmo compartido que han despertado y la extensión y resonancia que están teniendo las llamadas al buen gobierno.

Y no puede dejar de señalarse la buena noticia de que el desierto comienza a perder terreno en el Sahel, comprobado por comparación de fotografías de satélites; un aumento de verdor en zonas del sur de Mauritania, noroeste de Níger, norte de Burkina Faso, centro de Chad y parte de Sudán y Eritrea, lo que es realidad esperanzadora que ha permitido la vuelta de muchas familias de agricultores a las faenas del campo y a contar con un medio de vida.

Finalizando el año, y también estas referencias al África Negra, llega la noticia alentadora de que en la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) celebrada en Sidney (15 noviembre 2002) se alcanzó un acuerdo a favor de la producción y comercialización de medicamentos genéricos para combatir epidemias en el tercer mundo que, como el SIDA, la malaria o la tuberculosis, suponen un azote mortal para millones de personas. Esos pobres infectados no tenían otra actitud que la de esperar la muerte, casi siempre en el desamparo, por falta de medios para adquirir las costosas medicinas disponibles en el mundo desarrollado.

Por la valerosa decisión de la India y de Brasil, se había logrado que se autorizase la producción, en forma genérica, a muy bajo coste, de esas

medicinas patentadas para su exclusivo empleo en los países pobres, pero no se podían comercializar; por tal razón, las naciones carentes de laboratorios de medicamentos seguían privadas de ellas. Esa es la prohibición desaparecida; a partir de ahora, con los debidos controles, los países menos favorecidos por la fortuna y castigados por esas devastadoras enfermedades sí podrán adquirirlas para sus enfermos a precios muy bajos. El acuerdo deberá ser ratificado en la próxima reunión de la OMC, en Ginebra, a finales de año, pero nadie duda de que así será, pues ya ha llegado la noticia a millones de moribundos que ahora conocen la esperanza.

Finalizo estas observaciones iniciales con la afirmación de que el África Negra sí progresa; millones de hambrientos se han salvado; se han abierto muchos hospitales, escuelas y pozos de agua; la esperanza de vida ha aumentado en cuatro o cinco años; los gobiernos dictatoriales se ven acosados y aislados, y abren la mano; en muchas naciones ya se puede pedir y reclamar sin temor. Falta mucho aún por cambiar, por suprimir, una inmensa labor de educación y formación; pero sí vale la pena que el mundo occidental se siga esforzando por estos cientos de millones de seres humanos que no quieren volver a ser colonias, pero aún no saben andar solos.

PRESENCIA OCCIDENTAL EN ÁFRICA

- *EEUU de Norteamérica.* — A lo largo del año, ha continuado manifestando interés por África, siguiendo la apertura que inició Clinton de forma decidida y que parece respalda el secretario de Estado Colin Powell en la forma que aquel definió: “Trade, not aid” (“comercio, ayuda no”). En mayo, EEUU aprobaba la “Ley de Oportunidades y Crecimiento para África” (AGOA), que produjo la primera reunión de George W. Bush, en Filadelfia, a finales de octubre 2001, con 30 países africanos y altos cargos de la administración norteamericana. Washington considera esta ley ventajosa, al promover el libre comercio y la apertura de mercados.

Bush dijo a los dirigentes africanos que “ninguna nación ha entrado por el sendero del rápido desarrollo sin abrir primero su economía a los mercados mundiales”. La ley permite a los países subsaharianos la exportación de sus mercancías a los EEUU en unas condiciones teóricamente ventajosas, aunque muchos observadores no ven esas ventajas. Para benefi-

ciarse de esa ley, los países africanos deben cumplir una serie de condiciones: eliminar la ayuda y el control de precios de determinados productos, intensificar los procesos de privatización en marcha y suprimir todas las barreras a las exportaciones e inversiones norteamericanas. Pero, aunque un país cumpla con todos esos criterios, tampoco tiene garantizada la exportación a Norteamérica, ya que esta puede negar el trato comercial preferente a alguno de esos productos africanos si considera que está en competición con otros iguales suyos o daña de algún modo sus intereses comerciales; entre esos productos vetados están, por ejemplo, el café y el azúcar, tradicionales cultivos africanos; y los textiles, si no están confeccionados con tejidos o hilos de procedencia norteamericana.

Otras consideraciones de la AGOA son de carácter político; los países africanos aspirantes a los beneficios de la ley han de respetar los DDHH y tener un buen gobierno democrático, a juicio de la administración Bush; el criterio de Washington para aceptar o no a un gobierno no parece muy claro ya que, por un lado, figuran en la lista de elegibles Ruanda, Uganda, Gabón, Guinea-Conakry, Chad y Madagascar, cuyo funcionamiento democrático es muy dudoso; y por otro, figuran como rechazados Costa de Marfil y Angola, que continúan siendo dos de los principales proveedores africanos de Norteamérica.

Pese a todo, el intercambio comercial va en aumento, habiéndose producido, en el año 2000, un incremento de exportaciones africanas a EEUU del 67,2%, y de EEUU a África solamente del 6,4%. Pero ha de saberse que los productos exportados por África son principalmente materias primas, como petróleo, metales valiosos, diamantes o hierro. Y el lema de Clinton se cumple, "trade, not aid", pues realmente el comercio aumenta y las ayudas no cesan de disminuir: la respuesta de EEUU a Kofi Annan, a su petición de ayuda para crear un fondo de lucha contra el SIDA, que se estima debe estar entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, ha sido más bien escasa: 200 millones; y, de momento, no ha dado muestras de pretender reducir la deuda de los países africanos, que ronda la cifra de 300.000 millones de dólares.

Pero, ciertamente, Norteamérica parece decidida a mantener su presencia comercial en África; en abril, EEUU firmaba un acuerdo con ocho países africanos para animar las inversiones y promover reformas económicas, al tiempo que manifestaba su intención de disminuir las barreras comerciales a las exportaciones del continente negro, verdadera palanca para facilitar su desarrollo e insistente petición de sus líderes.

Y no se limita solamente al campo comercial o, quizá, su interés por lo comercial le lleva a interesarse también por otros problemas africanos: en el primer semestre de este año, el entonces secretario del Tesoro de los EEUU, Paul O'Neill, realizó una gira de doce días por cuatro países africanos —Ghana, Sudáfrica, Uganda y Etiopía— al final de la cual manifestó estar “muy impresionado y conmovido por todo lo visto y dispuesto a promover una actitud de colaboración con los países africanos”. Mas tarde, el presidente Bush aprobaba una ayuda de 500 millones de dólares para la lucha contra el SIDA en África. También concedía otra ayuda a Mali de 375 millones de dólares en el marco de un nuevo plan de cooperación (2003–2012) para salud, educación, descentralización administrativa y comunicaciones. Y es de mencionar la frecuencia de visitas de altas delegaciones norteamericanas a Sudán, en una valiosa labor de mediación pacificadora, en relación con la guerra civil que allí se desarrolla desde hace 19 años; bien es cierto que Sudán presenta otros aspectos de gran interés por su riqueza en petróleo y su cercanía a los focos del terrorismo islámico. Y ha de añadirse su permanente disposición a invitar y recibir a líderes africanos para hablar de democracia.

Hay, sin embargo, un aspecto de tonos sombríos en la política norteamericana en África, que contradice sus campañas de democratización y buenos deseos; este es su relación con Ruanda y Uganda. EEUU no ha tenido fuerzas en el continente africano en los últimos nueve años. Después del fracaso de la operación “Restore Hope” en Somalia, en 1993, no ha querido aventurarse a enviar nuevas tropas; ni siquiera lo hizo con motivo de las matanzas masivas en Ruanda al año siguiente, pese a que había indicios claros de que se preparaba una masacre; e hizo lo posible porque tampoco las NNUU interviniesen; y tampoco más tarde, en 1996, cuando se atacaron los campos de refugiados en el noreste de Zaire. Y, ya en tiempos recientes, la administración norteamericana no ha dudado en respaldar, incluso con asistencia militar, la ocupación de territorios que estas dos naciones han mantenido, durante años, en la zona oriental de la RD Congo; ocupación, por la fuerza de las armas, que ha sido la causa principal de desestabilización y de muchas atrocidades y que sólo se explica por el expolio de riquezas minerales que efectuaban y de las que se beneficiaban compañías norteamericanas y europeas.

Sin embargo, los sucesos del 11 de septiembre parecen haberles impulsado a reconsiderar esa actitud de no-intervención en África: tiene unos 800 soldados en Yibuti, en la base de origen francés “Camp Lemonnier”, unidades especiales antiterroristas; y fuerzas navales en estre-

cha y permanente vigilancia ante Somalia, donde sospecha la presencia de refugiados de Al Qaeda. También ha reactivado con Kenia el programa ACRI (African Crisis Reaction Initiative), lanzado por Clinton en 1996 para la formación y equipamiento de tropas africanas de intervención; altos cargos de las administraciones norteamericana y británica visitaron, a principios de año, al presidente de Kenia Daniel Arap Moi, al objeto de estudiar el posible establecimiento de una base anglo-norteamericana desde donde combatir el terrorismo asentado en Somalia; parece que Italia pretende sumarse también a esta iniciativa.

Tales iniciativas han supuesto nuevas preocupaciones para el Secretario General de las NNUU, Kofi Annan, que ve cómo la guerra de occidente contra el terrorismo no se circunscribe a los límites geográficos de Afganistán, como constaba en la correspondiente resolución del Consejo de Seguridad, sino que amenaza con extenderse a otras naciones.

- *Naciones europeas.* - A diferencia de Norteamérica, la diplomacia de los países europeos en África, con alguna excepción, casi ha desaparecido; y sus intereses por prestarle ayuda están bajo mínimos. Casi todas las naciones han disminuido su porcentaje de PIB para ayuda al desarrollo; acordado en las NNUU (1970) en un 0,7%, hoy día apenas alcanza la mitad de esa cuantía como media. Francia, la ex-potencia colonial más activa hasta ahora en el continente africano, aún manteniendo ese título, hace ya algunos años que inició su retirada, cuando empezó a percibir que era más una fuente de trastornos que una relación beneficiosa. En 1998 hizo oficial esa retirada por medio de una reforma institucional de su cooperación y el cierre de sus bases militares en algunos países africanos; buena parte tuvieron en esa decisión las consecuencias del genocidio ruandés de 1994, que pusieron en cuestión la política francesa en la región de los Grandes Lagos.

Francia parece, hoy en día, haber cedido claramente ante Norteamérica, aunque sin abandonar sus antiguos contactos ni el orgullo por su larga relación con aquel mundo y la defensa de la especificidad africana. El presidente Chirac invitaba a París, en febrero, a 13 jefes de Estado africanos con la intención de alentar la nueva iniciativa común de desarrollo NEPAD; en esa reunión se mostró preocupado por la escasa ayuda internacional que recibe África, que calificó de "inaceptable"; no se comprende bien esa preocupación cuando la propia Francia ha recortado su ayuda desde el 0,56% que entregaba en 1994 hasta el 0,34% de hoy.

Tampoco España se ha significado particularmente en este año por su dedicación a los problemas que aquejan al África Subsahariana; su esforzada dedicación a la presidencia de turno de la UE en la primera mitad de año, el enfriamiento de la economía europea en general y, sobre todo, sus esfuerzos financieros para lograr el equilibrio presupuestario —que finalmente logró— le restaron capacidad para dedicar mayores cuantías dinerarias a la ayuda al desarrollo (AOD) del tercer mundo. En los últimos años, España venía asignando a la AOD un escaso porcentaje del PIB, un 0,22; en este año ha incrementado en alguna décima esa asignación, aunque sigue siendo escasa. De esa ayuda, sólo el 19% se dedica a países del África Subsahariana. Lamentablemente, las penurias y urgencias que afligen a algunos países en desarrollo no dan margen para poder absorber carencias coyunturales en la economía de los países avanzados.

Como realidad destacable, aunque se están tratando aquí cuestiones de Europa, vale la pena mencionar cómo *China* se muestra activa en el continente africano; aunque no en el campo humanitario, sino en el puramente comercial y de expansión industrial, está acaparando proyectos y construcciones de infraestructura, en varios países, siempre que tiene ocasión. Sin mencionar sus actividades de años anteriores, que han sido varias, en octubre iniciaba la construcción de una presa en Etiopía con un coste de 224 millones de dólares.

- *La Unión Europea (UE)*.- A diferencia de las naciones europeas, consideradas aisladamente, la UE, como organismo multinacional, sí mantiene sus ayudas a países africanos necesitados, y quizá ésta sea la excusa para que sus naciones miembros se consideren justificadas en su recortada generosidad. La más temprana y significativa de esas ayudas se producía en 21 de enero con el PIN (Programa Indicativo Nacional) a la RD Congo por valor global de 120 millones de euros, que supone la vuelta oficial a la ayuda al desarrollo de esta nación, suspendida en 1991 a causa de las graves perturbaciones en el proceso democrático. Esta cuantía completa la suma de 200 millones de euros concedidos para ayuda humanitaria y rehabilitación del país.

Otras actuaciones han sido: diversos contactos y acuerdo de pesca con Senegal, el socio más importante de la UE en África Occidental, en junio (16 millones de euros al año). Ayuda humani-

taria de 95.000 toneladas de alimentos a Malawi. A Madagascar, 577 millones de euros en 5 años, un incremento del 40%, durante la visita de Romano Prodi al nuevo presidente Ravalomanana. En abril, el Consorcio Europeo para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria realizó una gira por diversos países de Africa Occidental, reuniéndose con las correspondientes autoridades gubernamentales. Firma de un PIN con Cabo Verde dotado con 39 millones de euros para el período 2002-2007. Igualmente con Mauritania por 191 millones de euros; y otros.

Aparte de estos casos puntuales de ayuda material, también la UE, como tal organización con aspiraciones en política exterior, procura estar presente en las crisis y conflictos africanos, como mediadora, árbitro, consejera o promotora de los DDHH y de la infancia, muchas veces con notable éxito, como en el caso del seminario celebrado en Gabón, en septiembre, para la lucha contra el tráfico de niños.

Volviendo al caso de las naciones europeas consideradas aisladamente, su desinterés por África, y más dolorosamente ante su urgente y crítica situación de necesidad de alimentos, quedó tristemente demostrada con motivo de la II Cumbre Mundial de la Alimentación, convocada por la FAO (Food and Agriculture Organization), en Roma, en junio pasado. La primera cumbre se había celebrado en 1996, también en Roma, y en ella se firmaron una serie de compromisos con los que se quería reducir a la mitad, 400 millones, el número de personas hambrientas en el mundo para el año 2015, que hoy son 840 millones. La FAO presentó, en esta segunda cumbre, datos que venían a demostrar que el programa lanzado seis años antes está resultando un fracaso; la cifra de los afectados por el hambre se ha reducido, hasta hoy, en tan solo 30 millones, muy poco para el objetivo de reducir 420 millones en 20 años, que quedará como otra promesa incumplida por los países poderosos y un nuevo desengaño para los desheredados del mundo.

Se trataba ahora —junio de 2002— de recapitular sobre lo sucedido y poner remedios para relanzar el programa. Pero el mundo desarrollado pareció no estar interesado en el tema; frente al centenar de jefes de estado y de gobierno del tercer mundo presentes en la reunión, del poderoso mundo occidental solo se dignaron asistir dos: el anfitrión de la cumbre, Silvio Berlusconi, y el presi-

dente español, José María Aznar, por entonces presidente de turno de la UE. Es obligado mencionar que en ese día, como sucede a diario, fallecieron otras 24.000 personas de hambre. La credibilidad de Occidente quedaba seriamente dañada.

El presidente de Sudáfrica Thabo Mbeki, expresaba en voz alta su decepción:

Todos los líderes de Europa occidental y de Norteamérica estaban aquí, en Roma, hace dos semanas, para discutir sobre la OTAN. Todos ellos, sin excepción, acudieron; pero no han venido ahora. Imagino que es porque no creen que el problema de más de 800 millones de personas que sufren de hambre sea importante.

El propio Director General de la FAO, Jacques Diouf, decía:

¿Cuántos jefes de Estado y de gobierno de países de la OCDE se han molestado en viajar a esta cumbre de los pobres? ¡Sólo dos, de un total de 29! Ese es el indicador de la prioridad que se da a la tragedia del hambre.

Procede dejar constancia de que la delegación de EEUU en esta cumbre —con la tácita complicidad de la UE— se opuso a que en la declaración final constase la expresión “el derecho de todos los seres humanos a la alimentación”. Y también, que ninguno de los países occidentales que por entonces se encontraba en África, en actividades de extracción de materias primas no renovables, ha abandonado la explotación de esos recursos

EMIGRACIÓN A ESPAÑA

El aspecto de la relación España-África que ha alcanzado mayores cotas de intensidad, esta vez en el sentido de perturbación y de esfuerzo de inusuales proporciones con bajo rendimiento, ha sido el de la inmigración ilegal. En el año transcurrido, España se ha visto literalmente aboradada por una continua llegada de inmigrantes clandestinos procedentes de las costas africanas; en sorprendente desafío a la hostilidad de la noche, al ámbito marítimo que la mayoría desconoce, a la cerrada vigilancia de las fuerzas de seguridad del gobierno español, a las inclemencias meteorológicas y a su fácil localización posterior, por la imposibilidad de ocultar sus rasgos raciales, se arriesgaban en embarcaciones rudimentarias y frágiles para alcanzar la costa de España, que es la de Europa. Es

claro que vienen apremiados por la necesidad, huyendo de la miseria de sus pueblos, pero el tributo de ahogados y desaparecidos alcanza cifras impresionantes.

Para mayor crudeza de estos dolientes episodios, que aún continúan, esas pobres gentes, que arriesgan todo por una mejora en sus vidas o las de sus familias que dejan atrás, han de abonar a los clanes y mafias de la emigración, por esa arriesgada e insufrible travesía, cantidades dinerarias desmesuradas. La forma en que logran reunir esas cuantías, que naturalmente han de abonar de forma inexcusable y por anticipado, es algo muy difícil de comprender; viene a suponer el equivalente al salario de 5 ó 6 meses del penoso trabajo que sólo unos pocos “afortunados” lograrán más tarde; pero en sus países de origen o de tránsito, donde han de conseguirlo para tener opción al viaje en “patera”, puede suponer el ahorro de 5 ó 6 años de esfuerzo y privaciones.

Cuando a todas estas penalidades se suma la circunstancia de que han de recorrer kilómetros, a veces miles, en las más precarias condiciones, para llegar a los lugares de embarque clandestino, la peripecia de estos desgraciados se convierte en algo inhumano. Sin embargo, como se decía al principio, la cuantía y frecuencia de estas llegadas suele calificarse de avalancha.

Cualquier persona, y también el gobierno español, tiende a apiadarse de estos seres humanos empujados a tanta penalidad por la miseria y la desesperación; pero eso no puede llevar a una entrada libre y descontrolada. África tiene 800 millones de habitantes y posiblemente más de la mitad quisieran vivir en Europa; aunque solo fuera la décima parte, su asimilación sería imposible. Resulta imprescindible una regulación de la inmigración y un control de las llegadas; el gobierno español ha emprendido y adoptado todo un abanico de medidas para desarrollar ambos cometidos y para lograr la pacífica integración social de los inmigrantes. Ha de tenerse en cuenta que no hay sólo un flujo africano sino también otro hispanoamericano, de similar densidad, aunque de muy distintas características, y otro de Europa del Este, con sus particularidades específicas pero también importante.

España establece, cada año, el cupo de inmigración asimilable en relación con los puestos de trabajo existentes y los elementos sociales disponibles para su integración, que en el 2002 ha sido de 32.000 personas. Habida cuenta de la existencia, en territorio nacional, de un considerable número de inmigrantes irregulares, sin control ni asistencia social alguna,

del orden de los 350.000, de los que el 70% son víctimas de explotación laboral, el gobierno ha llevado adelante, en los dos últimos años, cuatro procesos de regularización extraordinaria; como consecuencia, 428.924 extranjeros han logrado la legalización y, con ello, el permiso de residencia y el acceso al mercado de trabajo. Otros 250.000 han quedado fuera de ese proceso, no quedándoles otra opción que volver a sus países de origen, e intentar entrar de nuevo en España dentro de los contingentes anuales establecidos.

Al iniciarse el año, el número total de extranjeros con permiso de residencia se elevaba a la cifra de 1.243.919, un 3,11% de la población española, de los que 323.705 son africanos, un 0,81% del censo nacional. Es cuantía que ciertamente no resulta alarmante en sí misma, pero también es cierto que se ha producido en muy poco tiempo, que de ellos hay 102.595 en paro laboral, que aún existen 250.000 fuera de toda legalidad y que el ritmo de llegada sigue siendo muy alto, con un incremento del 34,72% en el último año; a Madrid llegan unos 9.000 cada mes.

Es evidente que esta cuestión de la inmigración ilegal, que tiene una faceta trágica en forma de vidas humanas perdidas, con lamentable frecuencia, en aguas del Estrecho; que suscita el rechazo de la sociedad próxima a los núcleos de extranjeros ilegales y que exige esfuerzos de integridad creciente para controlar las llegadas masivas, no tendría lugar de no existir las mafias del tráfico clandestino. El control de ese tráfico humano no debe hacerse solamente en los puntos de llegada, sino en las propias naciones de origen, ofreciéndoles, a cambio, puestos de trabajo para sus ciudadanos en las cuantías que las circunstancias permitan. A tal fin, el gobierno español ha firmado, o tiene en trámite, convenios con Marruecos, Argelia, Nigeria, Mauritania, Mali, Senegal, Costa de Marfil, Cabo Verde, Angola y Ghana.

LA CUMBRE DE MONTERREY

La última sesión cumbre de la Conferencia Mundial de las NNUU para Ayuda al Desarrollo fue inaugurada en Monterrey (México) el 18 de marzo. Vaya por delante que la reunión terminó sin que se concretasen compromisos formales de ayuda, pero hubo novedades que pueden suponer un cambio trascendental de criterios.

Esta conferencia —como ya es sabido— se proponía solicitar una aportación financiera extraordinaria que permitiese reducir a la mitad la

pobreza del mundo para el año 2015, pero Norteamérica, en la persona de su presidente Bush, anunció que quería cambiar los criterios para un nuevo pacto, al que se adhirió la UE. Según manifestó, no habrá más dinero sin cambios en la estructura política y económica de los países pobres:

Durante décadas —dijo— el éxito de la ayuda al desarrollo se medía por la cuantía de los recursos que se prestaban, no por los resultados que se obtenían. Ahora, derrochar dinero en un entorno fracasado ayuda poco a los pobres e incluso puede retrasar el progreso o las reformas.

Concretó su propuesta en que para disminuir la pobreza hay que desarrollar el comercio; puso como ejemplo a Corea del Sur, China y Chile “países en donde el comercio ha reemplazado a la desesperación, abriendo oportunidades a millones de sus ciudadanos”. Una propuesta que sorprendió a muchos de los presentes, pero la realidad es que, al final, todos firmaron el “Consenso de Monterrey”, con la excepción de Fidel Castro de Cuba. En apoyo inmediato de la nueva política, la UE y EEUU prometieron ayudas de 8.000 y 5.600 millones de euros respectivamente, cifras importantes, aunque apenas suponen un 20% de lo que se necesita cada año. Los países europeos también se mostraron dispuestos a incrementar sus donaciones. La ayuda que España concederá, en el período 2001–2004 está cifrada en 7.000 millones de euros, más de 1.700 millones anuales, que supone un 0,28% del PIB, debiendo llegar al 0,33 en 2006.

LA CUMBRE DE JOHANNESBURGO

A finales de agosto se celebró en Johannesburgo la cumbre sobre el Desarrollo Sostenible o “Cumbre de la Tierra”. Ha sido la mayor conferencia en la historia de la ONU, con la participación de más de 1.500 ministros de todo el mundo y unos 100 jefes de Estado y de gobierno; el presidente de EEUU no asistió. Esta vez sí, la UE mostró destacable interés en representación y argumentos; ciertamente, eran dos los grandes temas a tratar: la eliminación de la pobreza y la lucha contra el deterioro del medio ambiente, por lo que no puede decirse que la activa participación de la UE se debiera a uno solo de ellos.

Se trataba de dar continuidad a la cumbre anterior (1992) celebrada en Río de Janeiro; aquella cumbre de Río despertó grandes expectativas y de ella se salió con el convencimiento de que las naciones desarrolladas estaban seriamente dispuestas a ayudar a los países pobres en su lucha

contra la pobreza, pero las resoluciones adoptadas solo se quedaron en buenas intenciones, que no se han llevado a la práctica.

En esta ocasión, la UE había preparado sus intervenciones y propuestas con empeño y convencimiento de la necesidad de avanzar decididamente en ambos frentes, en poner remedio eficaz para la desaparición de las enormes bolsas de pobreza existentes en el mundo y en afianzar su liderazgo en la defensa de la naturaleza y contra el cambio climático provocado, como quedó plasmado en el Protocolo de Kioto. Sólo se hará referencia aquí a la primera de esas aspiraciones, pobreza, agua, salud, agricultura; que tan directamente atañen a la situación en África.

Era una cita clave para alcanzar acuerdos concretos que permitiesen cumplir el objetivo fundamental de lo que se ha dado en llamar la Declaración del Milenio: reducir a la mitad, en el tiempo que queda hasta el año 2015, el número de personas que viven en la más extrema pobreza. La UE centró sus mayores empeños en el problema del agua, ante la realidad de que millones de personas mueren cada año por no tener acceso al agua potable y 1/3 de la población mundial vive en países con agua insuficiente para hacer frente a sus necesidades básicas de consumo e higiene. Su objetivo fue que en el año 2015 haya quedado reducido a la mitad el número de personas sin agua, asignando a este objetivo la cantidad de 1,4 billones de euros a invertir en 2003, con aumento en los siguientes años.

En esta ocasión, los países africanos, y también muchos de los otros asistentes, no perdieron la ocasión de manifestar a Norteamérica su descontento por su política, que consideraban insolidaria con los grandes problemas de la humanidad. Colin Powell, Secretario de Estado, al frente de su delegación, tuvo que escuchar sonoras protestas al iniciar su discurso y algunos de los presentes abandonaron la sala; no se trataba solamente de que el país más poderoso del mundo dirigía la palabra a los representantes de 815 millones de hambrientos; o que su presidente hubiese optado por no estar presente en el “foro del hambre”; es que, además, la política norteamericana de subsidios a sus agricultores supone una grave dificultad para el comercio de la producción agrícola y textil de los países del tercer mundo; que EEUU no había querido firmar el Protocolo de Kioto; y que es la nación que menos esfuerzo dedica a la ayuda al desarrollo, con solo un 0,11% de su PIB.

Pero Norteamérica supo apagar las críticas con dinero para los más necesitados y presentó cinco iniciativas de ayuda con respaldo financiero: canalización del agua, con 970 millones de dólares en 3 años; acceso

a la energía, con 43 millones en 2003; lucha contra el hambre en África, a la que asignó 90 millones de dólares en 2003; protección de las selvas del Congo, con 53 millones en 4 años; y lucha contra el SIDA, tuberculosis y paludismo, con un respaldo de 1.200 millones de dólares en 2003.

Esta cumbre de Johannesburgo tuvo escaso éxito en sus aspiraciones, como viene sucediendo; “resultados muy ambiguos”, dijo Kofi Annan; sin embargo, se alcanzó el compromiso del agua entre gobiernos y empresas: salvar de la sed a la mitad de los que carecen de ella para el año 2015.

NUEVOS ORGANISMOS EN ÁFRICA

- *La Unión Africana (UA)*.- Fue inaugurada oficialmente en Durban (Sudáfrica), el 9 de julio de este año, ante 40 presidentes de Estado o Gobierno y el Secretario General de las NNUU. Promovida principalmente por Muhamar el Gadafi de Libia, tomando como referencia la UE, y después de un largo período de negociaciones y acuerdos, iniciaba su andadura esta nueva organización multinacional, que substituye a la antigua Organización para la Unidad Africana (OUA), que ese día, y en ese escenario, celebraba su 38ª y última cumbre.

La OUA fue fundada en 1963 con vocación panafricana y con gran ilusión por los “padres” de la emancipación colonial. Su existencia, sin embargo, había ido languideciendo hasta la inoperancia casi absoluta y de espaldas a la realidad. En palabras de Yoweri Museveni, presidente de Uganda, se había convertido en “un sindicato de dictadores y delincuentes”. La OUA nunca se esforzó en promover la libertad y el progreso, ni la emancipación política y económica de África, que eran los fines que presidieron su fundación. Con la excusa de “no-injerencia en asuntos internos”, no consiguió prevenir ni terminar con uno solo de los muchos conflictos que han atormentado, tan frecuentemente, al continente negro; ni pasó de la retórica en las guerras de liberación que sostuvieron algunos países contra sus metrópolis; ni defendió las libertades, llegando a ser integrada, e incluso presidida, por notorios dictadores y genocidas.

La nueva UA pretende copiar el modelo de la UE, aunque no ha establecido ninguna condición obligatoria y excluyente en cuanto al carácter democrático de sus miembros, sin la cual no podrá lle-

gar nunca a esa ansiada semejanza. Sí ha previsto un comité para comprobar el grado de democracia y de respeto de los DDHH de sus Estados-miembro, pero también se ha establecido que la pertenencia a dicho comité es voluntaria y sólo sus componentes podrán ser controlados; Gadafi se ha apresurado a declarar que a él no le vigilará nadie.

Sin embargo, la recién nacida UA ha tomado ya algunas decisiones de gran calado y la primera ha sido abordar el problema de la corrupción, que parece le está costando al continente alrededor de 148.000 millones de dólares al año. En septiembre se aprobaba en Addis Abeba (Etiopía) un proyecto, en estudio desde hace un año, por el que se invita a todos los funcionarios a declarar sus bienes al tomar posesión del cargo y a una conducta ética; deberá ser ratificado por los Jefes de Estado en la próxima cumbre, a celebrar en Maputo (Mozambique) en 2003.

Ciertamente, existe una voluntad seria, por parte de algunos líderes, de solucionar los grandes problemas crónicos del mundo africano, pero también existen dudas sobre la posibilidad de lograrlo, habida cuenta de la serie de vicios, modos y arbitrarias imposiciones que han sido, durante muchos años, el modo de gobernar. Kofi Annan ha sugerido a los dirigentes africanos evitar toda complacencia; les ha recordado la inmensidad del continente, el subdesarrollo económico, sus deudas y su herencia de guerras; y les invitó a ratificar el proyecto de un parlamento que dé, a la UA, un poder legislativo.

La recién nacida UA tendrá un período de transición y rodaje de un año. Los documentos presentados hablan de estructuración y del reglamento interno de los 4 órganos principales: la Conferencia de Jefes de Estado, el Consejo Ministerial Ejecutivo, la Comisión y el Comité de Representantes Permanentes. Tendrá también su propio Parlamento, su Banco Central, un Consejo de Seguridad y una Fuerza para el mantenimiento de la paz. Se apoyará en la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD).

Marruecos, uno de los fundadores de la OUA, se ha negado a integrarse en la asociación mientras esta admita en su seno a la República Árabe Saharaui Democrática con rango de nación independiente.

- *Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD)*. Parece que esta nueva asociación, NEPAD, arranca con buen pie. Creada en el

año 2001, en el seno de la naciente UA, por iniciativa de varios líderes africanos alentados por el presidente sudafricano T. Mbeki, se inspiró en el “Plan Marshall” norteamericano para la reconstrucción de Europa tras la II Guerra Mundial. Su propósito no es el aumento de la ayuda humanitaria que reciben sino promover las inversiones extranjeras en el continente, favoreciendo al propio tiempo la salida de los productos africanos al mercado mundial. Los cuatro países miembros que forman la dirección son Sudáfrica, Argelia, Nigeria y Senegal.

El optimismo que acompaña sus primeros pasos se debe a que ha encontrado una particular buena acogida en los principales organismos mundiales, quizá porque, por primera vez, se trata de promocionar nuevos mercados africanos en lugar de la acostumbrada petición de ayuda humanitaria. El 25 de marzo se reunían en Abuja (Nigeria) sus dirigentes para establecer las prioridades de la NEPAD y acoplarlas a los programas de desarrollo de la comunidad internacional, para su posterior presentación en la cumbre del G8 en Canadá. Se definieron cuatro sectores prioritarios: la agricultura y el acceso a los mercados internacionales; infraestructuras (agua, transporte, energía y tecnología de la información); flujo de capitales y desarrollo humano (sanidad y educación).

Entre el 15 y 16 de abril se celebró en Dakar (Senegal) una conferencia sobre la financiación de la NEPAD, con la participación de 30 dirigentes africanos y 800 representantes de organismos internacionales y empresas privadas, 50 de ellas norteamericanas. El Banco Mundial se manifestó muy interesado, apoyando las recientes decisiones de Monterrey. Pero, al ser la financiación del plan la piedra angular de su instauración y puesta en marcha, fue en el mes de junio, en la cumbre del “Grupo de los Ocho” (G8), en Canadá, cuando logró la NEPAD el primer éxito significativo; ante la insistencia solidaria del primer ministro canadiense y las promesas de apoyo por parte de EEUU, los representantes de los ocho países más ricos de la tierra reconocieron que no pueden seguir siendo pasivos observadores de la gran miseria que azota a millones de africanos y se decidieron a respaldar a la NEPAD.

Los líderes del G8 pidieron a los cuatro Jefes de Estado africanos presentes que preparasen un plan para lanzar la asociación, advirtiéndoles que su esfuerzo se limitaría únicamente a naciones africanas que abriesen sus puertas a la inversión extranjera y que, en lo suce-

sivo, defiendan principios de buen gobierno con sistemas democráticos y respeto de los derechos humanos. También dejaron claro que las aportaciones que hiciesen estarían controladas al máximo, para evitar la repetición de algunos casos anteriores de despilfarro e ineffectividad.

Suscribieron un plan de financiación que establecía que la mitad de la AOD comprometida en Monterrey, 12.000 millones de dólares, se dedicase al conjunto de los 53 países africanos; además, concretaron un esfuerzo suplementario de 1.000 millones de dólares para reducirles la deuda exterior y avanzar en el camino de su anulación total a los países más endeudados y a los más afectados por la caída de los precios de las materias primas. Las donaciones fueron encabezadas, en cuantía, por Japón y Norteamérica. Era sólo el comienzo, aunque muy alentador. A mediados de septiembre, la Asamblea General de las NNUU dedicó una sesión especial a África y, más concretamente, a examinar la NEPAD.

EL PETRÓLEO EN ÁFRICA

No es novedad de este año la existencia de petróleo en África, pero sí lo es la aparición de nuevos pozos —con las consiguientes negociaciones de explotación— el trazado de un oleoducto de extensión internacional y algunos litigios por delimitación de líneas fronterizas poco claras, que hasta ahora no habían constituido motivo de fricción ni de recurso a una corte internacional, pero que, al aparecer petróleo en ellas, se han convertido en posibles focos de crisis. Pero, por encima de estas circunstancias, que no llegarían por sí solas a concentrar la atención mundial, procede señalar la alteración que ha supuesto en el campo de los intereses estratégicos de algunas grandes potencias, que parecen decididas a mover sus fichas para ocupar posiciones de preferencia que les garanticen el aprovisionamiento de estas nuevas fuentes de energía.

Es el caso que los nuevos yacimientos aparecidos se encuentran en el entorno del Golfo de Guinea, donde ya existía una importante producción, pero ahora, con las bolsas encontradas, se incrementa el carácter de objetivo estratégico que ya tenía la zona. Ese interés se multiplica ante la consideración de que el Oriente Próximo, hasta ahora fuente básica del suministro a Occidente, es una región políticamente inestable, en permanente conflicto, con dirigentes cada vez más exigentes y volubles y que,

en algunos casos, no ocultan su animosidad creciente hacia el mundo occidental y, más concretamente, hacia EEUU. Para hacer la región aún más inasequible o insegura, el terrorismo islámico parece haber implantado allí sus cuarteles, sin un claro rechazo por parte de los países vecinos y con proclamas y contundentes amenazas de daño a los intereses norteamericanos y de sus aliados. Estas circunstancias negativas no se dan en el caso del petróleo africano.

El cálculo de reservas de crudo en el Golfo de Guinea, hasta Angola, es el siguiente: *Nigeria*, 28.000 millones de barriles; *Angola*, 7.000 millones; *Sao Tomé y Príncipe*, 4.000 millones; *Gabón*, 2.500 millones; *Congo-Brazaville*, 1.500 millones; *Chad*, 1.000 millones, que comenzará pronto a bombear 200.000 barriles diarios por un oleoducto de 1.070 kms. que, a través de Camerún, alcanza la costa; *Guinea Ecuatorial*, 500 millones de barriles y *Camerún*, 400 millones. Es decir, unas reservas localizadas y medidas de unos 45.000 millones de barriles, sin contar con el que también existe, en menores cantidades, en Costa de Marfil, RD Congo y Benín, todos ellos en la misma zona.

Esa cantidad es, aproximadamente, solo 1/6 de los 261.000 millones de barriles de Arabia Saudí, pero manifiestan los expertos que las oportunidades de expansión son muy altas; Guinea Ecuatorial ha pasado, en seis años, de 17.000 barriles de producción diaria a 300.000; y sigue apareciendo petróleo en Mauritania, desde el año 2001, y en la República Centroafricana; y Marruecos acaba de conceder una controvertida licencia de prospección en aguas en disputa del Sahara Occidental.

Además de la existencia de esas cantidades y de las buenas perspectivas de incremento, el petróleo tiene aquí otras ventajas: es de buena calidad, "alto grado", con poca cantidad de azufre, lo que facilita su refinado; se encuentra concentrado en el Golfo de Guinea, es decir, frente al Atlántico abierto, sin estrechos o pasos restringidos que afecten al transporte marítimo de algún modo, como es el caso de Suez, Mar Rojo, Bab-el-Mandeb, Ormuz y Gibraltar en el caso del petróleo de Oriente Próximo; abundan las perforaciones y explotaciones marítimas, por medio de plataformas flotantes, lo que supone una mejor vigilancia, protección y control, tanto de las plataformas como de los petroleros que realizan el transporte.

Las compañías explotadoras Total-Fina-Elf, Royal Dutch Shell, Texaco, Agip y otras menores llevan ya mucho tiempo en la región, pero los acaparadores de las nuevas explotaciones son los gigantes nortea-

americanos Exxon Mobil y Chevron y la independiente Amerada Hess. Las firmas americanas han sido especialmente complacientes con los dirigentes de los países de reciente producción, como Guinea Ecuatorial. El petróleo africano, incluido el del norte del continente, cubre un 15% de las necesidades norteamericanas y se espera llegue a un 25% en el 2015, una de las fuentes de petróleo y gas de mayor crecimiento para aquel mercado.

Toda esa considerable producción de petróleo proporciona a esos empobrecidos países africanos, además de una alta contaminación y daños irreparables al medio ambiente, miles de millones de dólares que debieran de repercutir en la atención de áreas tan necesitadas como la educación, infraestructuras y salud, lo que en demasiados casos no ha ocurrido. Nigeria ha exportado petróleo por valor de 320.000 millones de dólares en los últimos 30 años, pero apenas pueden encontrarse otras mejoras en infraestructuras que algunas carreteras descuidadas y varios polideportivos. Unos de sus últimos dirigentes, el general Sani Abacha, que falleció en 1998, se cree hizo una fortuna personal superior a los 4.000 millones de dólares.

Angola es otro caso: a primeros de octubre pasado, un informe del FMI daba a conocer que habían desaparecido 4.000 millones de dólares del presupuesto del estado en los últimos cinco años. Se teme que esa enorme masa de dinero que está entrando en África provoque la codicia de los dictadores.

COMENTARIO

Hay que mantener la esperanza de que África no va a ser siempre un problema y que va a salir de la precaria situación que conocemos. Cuenta para ello con enormes recursos humanos y sus materias primas son codiciadas por muchos países desarrollados. Su joven población —más del 50% del África Negra tiene menos de 20 años— es un factor de esperanza. Pero sin ayuda, África no puede construir un futuro mejor. Hay que admitir que, aunque algunas intervenciones externas han sido valiosas, otras han contribuido a la desorganización y la corrupción. Hay muchos africanos empeñados en superar las dificultades sociales y económicas que retrasan el desarrollo del continente. La educación a todos los niveles es, sin duda, la clave para el futuro de África.

DOS GUERRAS ACABAN (DE MOMENTO) Y UNA EMPIEZA

Angola (1.246.700 Km)

El 22 de febrero caía muerto, en combate contra las fuerzas del gobierno, Jonás Savimbi, el mítico líder del movimiento UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola). Había luchado durante 27 años contra el MPLA (Movimiento Popular de Liberación de Angola) y su líder, y presidente de la nación, José Eduardo Dos Santos.

El MPLA había sido un movimiento marxista apoyado por la URSS y por Cuba. UNITA nació para lograr la independencia de Portugal y, una vez Angola libre, recibió las simpatías y el apoyo del mundo occidental, particularmente de Norteamérica, en su lucha contra el comunismo. Hace ya muchos años que cesaron aquellos apoyos y simpatías; en algún caso, cambiaron de bando, como ocurrió con Norteamérica, se dice que cuando apareció petróleo en inmensas cantidades en el feudo de Dos Santos. Pero continuó una guerra devastadora que sumió al país en el dolor y la miseria más crueles.

La noticia de la caída de Savimbi hizo salir a las gentes a la calle, vestidas de blanco de fiesta, en las ciudades dominadas por el gobierno; pero en toda la nación surgió la esperanza de que podría haber llegado al fin la paz, y se vieron juntas las banderas de UNITA y del MPLA. El 12 de marzo caía también Antonio Dembo, sucesor de Savimbi. Al día siguiente, el gobierno ordenaba suspender las acciones contra UNITA y pedía negociar, prometiendo una amnistía si dejaban las armas; dos días después se alcanzaban los primeros acuerdos. El 31 de marzo se firmaba el alto el fuego y enseguida el Parlamento aprobaba una ley de amnistía para los rebeldes. El 4 de abril se proclamaba la paz.

Finalizaba así una guerra despiadada que ha durado 27 años, con abundante disposición de material bélico en ambos bandos, que el MPLA financiaba con la venta de petróleo y UNITA con la de diamantes. Las posturas irreconciliables, la pronta rotura de los intentos de tregua por la intransigencia de Dos Santos y los odios acumulados por el inmenso daño sufrido en ambas partes no dejaban otro margen a la esperanza que la muerte de alguno de los dos líderes, como así ha ocurrido.

Abandonadas las armas, queda el siguiente resultado: un millón de muertos en una población de 13 millones de habitantes; 4 millones de huidos y desplazados dentro de la nación, que ya se han puesto en movi-

miento en busca de lo que pueda quedar de sus propiedades. Un país devastado, arrasado, sembrado con 4 ó 5 millones de minas que impiden el imprescindible cultivo de los campos y provocan unas 60 bajas al día, entre heridos y muertos. El 78% de la población rural vive en la pobreza y en la mayoría de los núcleos de población no queda otra actividad que escarbar en la basura; y a esas ciudades se acercan miles de hambrientos con la esperanza de encontrar algo que les permita subsistir; muchos mueren de hambre cada día. Angola ocupa hoy el último lugar del mundo en supervivencia infantil, con unos 300 niños fallecidos antes de los 5 años de cada mil nacidos vivos.

Las NNUU, la UE, las ONG; y muchos otros organismos internacionales han lanzado llamamientos pidiendo socorros urgentes. El Banco Mundial prometía en septiembre 120 millones de dólares para ayudar a la reconstrucción. El WFP (Programa Mundial de Alimentos) asistió en septiembre a 1,5 millones de angoleños y en octubre a 1,8 millones; las personas que precisan asistencia diaria y urgente son 4 millones. El país necesitaba en julio 171 millones dólares con urgencia para atender a lo más apremiante. La UE comenzó ya en Mayo a entregar ayudas por valor de 125 millones de euros; las ONG iniciaron las vacunaciones de 172.000 niños.

Referencia aparte merece el caso de las tropas desmovilizadas de UNITA; se trata de unos 55.000 combatientes. Según el Protocolo de Lusaka, que establece las condiciones para la paz, unos 5.000 soldados y mandos de UNITA han de ser integrados en el ejército nacional. Es imprescindible lograr la pronta reinserción en la sociedad de los restantes 50.000.

Para ello, el gobierno ha creado un Servicio Especial para la Reconstrucción Nacional, una de cuyas prioridades es proporcionar alojamiento a los combatientes de UNITA y sus familias; y también dedica su atención, como es de obligada lógica, a la resolución de los problemas de las víctimas de la guerra, adquisición de víveres y útiles agrícolas, y rehabilitación de la infraestructura, en especial los hospitales. Hoy UNITA es tan solo un partido político desarbolado y sin apoyos.

Al propio tiempo, no descuida el enclave de Cabinda —separado del territorio nacional, entre el Congo/Brazaville y la RD Congo— con una considerable riqueza en petróleo y que combate desde hace varios años contra la metrópoli por su independencia. También la ONU ha creado una comisión conjunta para apoyar y controlar el proceso de paz, así como

para hacerlo compatible con las medidas correctoras de la crítica situación humanitaria.

Angola es hoy mucho más pobre que cuando alcanzó la independencia; finalizados estos 27 años de guerra, se encuentra en situación de extrema necesidad. Pero es que han sido también 23 años de gobierno incompetente y corrupto. Pese a las enormes riquezas naturales de esta nación en petróleo, oro y diamantes, el Banco de Angola no tiene hoy ni oro ni divisas; la inflación es del orden del 325%, su PIB per cápita, al cambio corriente, es de unos 700 dólares, y gran parte de la población subsiste con el socorro mundial. La inmensa masa de dinero que ha recibido por la venta de petróleo parece haberse destinado, en su mayoría, a financiar la guerra y a depósitos incontrolados.

Con la atención de los organismos mundiales centrada en Angola y con el anuncio de elecciones, se oyen ahora proclamas de buen gobierno. Ciertamente, con la finalización de la guerra han desaparecido las excusas de la compra de material bélico que permitieron enriquecimientos cuantiosos. Si realmente llega a Angola un gobierno limpio y transparente, las investigaciones sobre el pasado inmediato pueden proporcionar a Jonás Savimbi la victoria que no obtuvo en vida.

República Democrática del Congo (RD Congo)

Como es sabido, con el asesinato de Laurent Desiré Kabila, el 17 de enero de 2001, fue designado su hijo Joseph Kabila como sucesor. El nuevo presidente inauguró su mandato entrevistándose con los Jefes de Estado de las tres naciones que habían apadrinado los acuerdos de alto el fuego de Lusaka de 1999 (EEUU, Francia y Bélgica) y al Secretario General de las NN UU; a todos ellos declaró su intención de instaurar la paz en la RD Congo y señaló como principal inconveniente la presencia de tropas extranjeras de seis naciones en su territorio, pidiéndoles ayudasen a su retirada, especialmente de Uganda y Ruanda, que luchaban contra su gobierno con 30.000 soldados.

Desde entonces no han cesado las tensiones, enfrentamientos y matanzas en aquel país. Joseph Kabila ha estado sometido a toda clase de presiones; su gobierno se ha caracterizado por la inestabilidad y la debilidad para poner coto a tantos desmanes. Una de las condiciones indispensables para recuperar la paz era establecer un diálogo entre todas las partes enfrentadas y la población civil, tratando de llegar a acuerdos

que hiciesen posible la convivencia, el llamado “diálogo intercongolesno”; Kabila ha intentado esos encuentros, que han sufrido toda clase de interrupciones, cancelaciones y desplantes.

Las NNUU no han sabido, o no han podido, actuar de forma clara, decidida y contundente en favor de la paz. No se pueden encontrar fácilmente argumentos para justificar esa pasividad; no se trataba, tan siquiera, de una injerencia en asuntos internos, pues, en primer lugar, abundaban las razones humanitarias; en segundo lugar, se había producido una invasión en fuerza en una nación soberana (Uganda y Ruanda); y finalmente, el presidente de la nación había pedido auxilio a las NNUU.

El Consejo de Seguridad de las NNUU se había limitado, aún el año 2001, a pedir la retirada de las tropas de los muchos grupos rebeldes enfrentados, y de las fuerzas de Uganda y Ruanda, a 15 kms. de sus posiciones sobre la línea del frente, lo que, con notable morosidad, finalmente se produjo para el mes de mayo de aquel año; poco significaba aquel cambio de posiciones para las verdaderas razones de su presencia en la RD Congo, que no eran otras que continuar con el expolio de sus riquezas. Incluso Angola y Zimbabue, que teóricamente estaban de parte del gobierno de Kinshasa, desde que fueron llamadas en su auxilio por Laurent D. Kabila, se resistieron al abandono de sus posiciones por las mismas causas inconfesables de Uganda y Ruanda.

Al comienzo del año 2002, con el mal presagio de la erupción del volcán Nyiragongo, que destruyó el 80% de la ciudad de Goma, precisamente en la zona fronteriza con Uganda, se mantenía aún en aquella región ocupada la triste situación de sufrimiento, masacre y desprecio de los fundamentales derechos de gentes ante la inoperancia de la comunidad internacional y con la complicidad interesada de algunos países occidentales, que obtenían beneficios de lo que allí estaba sucediendo. Finalmente, Uganda anunció la retirada de 10.000 de sus hombres, pero Paul Kagame de Ruanda mantuvo su pertinaz presencia en territorio congolesno, en abierto rechazo de las demandas internacionales y continuando su actividad depredadora.

Las atrocidades cometidas por las fuerzas de Ruanda en mayo de este año, en la zona de Kisangani, conmovieron de nuevo al mundo y fueron motivo de denuncia del gobierno de Kinshasa ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la Haya, al que pidió declarase a la nación invasora culpable de genocidio de 3,5 millones de congolesnos y la retirada inmediata de sus territorios. Kigali (Ruanda) no ha reconocido

nunca al TIJ y 15 días más tarde este se declaraba no competente en el caso y se abstenía de ordenar medida alguna. Las NNUU pidieron el establecimiento de un corredor de socorro humanitario en la zona y en Julio se reunían los dirigentes de la RD Congo y de Ruanda con Kofi Annan, en Sudáfrica, para intentar un acuerdo.

Junto a estos desmanes se dieron, en ocasiones, actuaciones contra los propios funcionarios de las NNUU presentes, con expulsiones del territorio, incluido el enviado especial del Secretario General para asuntos humanitarios, que fue declarado “persona no grata”, acusado de colaboración con las autoridades de Kinshasa; el Consejo de Seguridad se limitó a pedir el cese del hostigamiento de sus funcionarios.

Mientras todo esto sucedía, el proceso para la paz acordado en Lusaka (Zambia) intentaba mantenerse vivo, aunque con pasos cortos e inseguros, meritoriamente alentado por Sudáfrica, promotora también del citado acuerdo. Aparte de prescribir el inmediato cese de hostilidades, el desarme de los contendientes y la lógica retirada de todas las fuerzas extranjeras del territorio congoleño —descaradamente ignorada durante 21 meses— señalaba la indispensable celebración del “diálogo intercongoleño”, que había de reunir a los jefes de todos los grupos existentes en el escenario de los conflictos y a representantes de los estamentos civiles.

En enero de este año, Bélgica, antigua potencia colonizadora y, en buena parte, responsable de muchos de los sucesos de su historia posterior, organizaba en Bruselas una mesa redonda con los partidos políticos, sociedad civil congoleña y partes no beligerantes. Acudieron 85 representantes y delegados de la ONU, de la OUA y de la UE. Los reunidos llegaron a un pleno consenso sobre las elecciones a realizar, las instituciones de la transición, la futura constitución y el ejército nacional.

El 25 de febrero se abría este diálogo intercongoleño en Sun City (Sudáfrica) después de prolijas dificultades, recusaciones y exigencias; dos días más tarde se rompían las conversaciones, para reiniciarse al día siguiente. Los violentos combates en curso se esgrimían como circunstancia inaceptable para la continuación del diálogo, pidiéndose la expulsión de la sala de los funcionarios de Uganda y Ruanda. Por fin, el 6 de marzo se inicia el diálogo político en sesión plenaria, con 360 participantes y observadores de la ONU, OUA, Sudáfrica y Zambia. Dejando a un lado las muchas dificultades y enfrentamientos, ha de resumirse que los escollos en que se bloquea el proceso son el gobierno de transición y el nuevo ejército, en particular porque todos quieren los puestos principales.

La propuesta mayoritaria, y de apoyo internacional, de que sea Joseph Kabila el presidente de la transición, así como las mil otras cláusulas y particularidades negociadas, merecen por fin la aprobación de Uganda y sus partidarios en julio, en Pretoria y, lo que es el triunfo del proceso, también de Ruanda y los suyos posteriormente. Concluyen así ocho difíciles semanas de negociación y controversia. El 30 de julio, los presidentes de la RD Congo y Ruanda se daban la mano, cerrando oficialmente el acuerdo de retirada de tropas en el plazo de 90 días.

Logrado este gran paso básico e imprescindible, se quiere pasar inmediatamente a la fase de puesta en práctica de lo convenido, advirtiendo pronto las dificultades que presenta su ejecución. Ninguno de los acuerdos alcanzados, ni siquiera el protocolo inicial de Lusaka, establece cláusulas de desarrollo, cuando ciertamente existen algunas cuestiones de la máxima relevancia que no pueden ser improvisadas, como la desmovilización de fuerzas y la salida de tropas extranjeras. El contingente de las NNUU no tiene capacidad de control ni tampoco el mandato para obligar al desarme forzoso; tampoco el pequeño y desorganizado ejército congoleño.

Otra cuestión de la máxima gravedad es la aparición de un peligroso vacío de poder en las zonas que abandonan los ejércitos de Uganda y Ruanda. No hay efectivos para controlar ese enorme espacio plagado de guerrilleros e inundado de armas y deseos de venganza. El Secretario General de la ONU propuso en septiembre incrementar el contingente de MONUC a 8.700 hombres, lo que sigue siendo claramente insuficiente; en Sierra Leona, de tamaño 30 veces menor, la UNAMSIL dispuso de 18.000 hombres para igual cometido. El temor a que se desate la anarquía y la violencia lleva a las NNUU a pedir a Uganda que retenga una fuerza en la RD Congo.

Por fin se inicia la retirada de tropas extranjeras y el desmantelamiento de bases militares, entre el 28 de agosto, que inicia Zimbabue, y el 5 de octubre, en que Ruanda y la ONU anuncian el fin de la presencia militar extranjera en la RD Congo. Han salido tropas de Angola, Zimbabue, Burundi, Uganda y Ruanda, y se han replegado los guerrilleros may-may, hemas y lendus. El pueblo congoleño, atormentado durante cuatro años, contempló con satisfacción y cierto temor la salida de caravanas de tropas, artillería pesada, blindados, helicópteros y cientos de vehículos. El 29 de octubre, el nuevo gobierno de unión nacional iniciaba sus actividades. El proceso de paz se pone en marcha lentamente, con enorme fragilidad y multitud de problemas, rodeado de amenazas y ante la indiferencia internacional.

Costa de Marfil

Al comenzar el año, la situación era de relativa calma. Un “Foro de Reconciliación Nacional” estaba mediando entre unos y otros. La situación económica había mejorado, se recibían algunas ayudas de organismos internacionales y el “Club de París” cancelaba 911 millones de dólares de su deuda y escalonaba los pagos pendientes; es de suponer que estos apoyos del exterior tenían el objetivo de reducir la tensión existente. Incluso se produjo una reunión de los cuatro personajes principales: el presidente Gbagbo, Outtara, el general Gueï y el presidente depuesto Bedie, lo que, aparentemente, produjo un efecto de moderación de las diferencias. Pero nada de esto fue suficiente para una plena reconciliación.

En julio, con motivo de unas elecciones para consejeros departamentales, volvieron a surgir las diferencias políticas, que llevaron a posturas más radicales, aunque no llegó a quebrarse la paz. Pero en septiembre surgieron los enfrentamientos sangrientos: el día 19, encontrándose el presidente de visita oficial en Italia, se produjo una sublevación de 750 militares en la que apareció muerto el general Gueï, el ministro del interior y 80 personas en la capital económica Abidjan, además de 150 heridos. Los amotinados fueron reducidos en la capital, pero se hicieron fuertes en Bouaké, segunda ciudad del país. El primer ministro se apresuró a declarar el fracaso de la intentona, con lo que el presidente Gbagbo continuó su visita en Italia. Desde el gobierno se señaló al fallecido general Gueï como el instigador del golpe.

Pero la rebelión no estaba sofocada. Los sublevados retuvieron Bouaké y además tomaron Korhogo, en el norte, dominio de Alassane Outtara, por entonces refugiado en la embajada de Francia en Abidjan. El gobierno comenzó a hablar de una “agresión exterior” y de una “guerra de ocupación”, dando a entender, sin declararlo, que detrás estaba Burkina Faso. Ante el temor por la suerte de sus compatriotas, Francia anunció el envío de más tropas, 70 paracaidistas, para reforzar el contingente de 600 hombres que ya tenía en Costa de Marfil, pero aclarando que no quería participar en la revuelta en ningún sentido. Para entonces, el número de muertos se elevaba ya a 270 y el de heridos a 300; los disturbios se incrementan y se producen centenares de incendios de casas, entre ellas la del principal opositor Outtara.

El 27 de septiembre, 8 días después del golpe de estado, el presidente Gbagbo regresa a la nación, que encuentra partida en dos, un sur leal

y un 40% del suelo patrio, al norte, en manos de los rebeldes. Burkina Faso, al norte, cerró sus fronteras para evitar verse implicada en los disturbios, aunque sus nacionales en Costa de Marfil estaban sufriendo represalias. La realidad es que Abidjan la señala como promotora de los incidentes. El presidente burkinabés, Campoaré, niega toda implicación y dice que asumirá sus responsabilidades si las autoridades marfileñas no garantizan la seguridad de sus súbditos, pero su embajada es asaltada y también las casas y tiendas de los burkinabeses, que en número de 200.000 abandonan la ciudad. La destrucción y el saqueo se generalizan. EEUU ordena a sus ciudadanos abandonar el país.

Nigeria, Ghana y Togo declaran su solidaridad con el gobierno de Costa de Marfil, como también lo hace la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) que ofrece mediar entre las partes y enviar un contingente de mantenimiento de la paz. A finales de septiembre, la CEDEAO, asistida por oficiales franceses, norteamericanos y británicos, se reúne con los mandos del ejército marfileño y con los de los sublevados, para mediar entre ellos y proponer el despliegue de una fuerza de interposición que controle un pretendido alto el fuego. Pero el presidente Gbagbo piensa de otra manera y está decidido a aplastar la sublevación; declara zonas de guerra las ocupadas por los sublevados y ordena a su ejército una contraofensiva para recuperar Bouaké, acción que en dos días fracasa. Sudáfrica envía 200 mercenarios para proteger al presidente y Angola también envía hombres y dos blindados.

A primeros de octubre se celebraban reuniones de los dos bandos en Lomé (Togo), donde se comprueba la intransigencia de ambos; los rebeldes no ceden ni el gobierno tampoco. Hay riesgo de implicaciones religiosas ya que el presidente siempre ha sido intolerante con las tendencias islámicas y los musulmanes se han puesto inmediatamente de parte de los sublevados. Lo que parece cierto es este conflicto perjudicará seriamente la frágil economía de Costa de Marfil y sus cultivos de cacao, del que es primer productor mundial.

Guinea Ecuatorial

La antigua colonia de España en África. Según datos del año 2000, en los últimos cinco años el crecimiento de su PIB fue del 48,2%, un ritmo impresionante debido a la entrada en producción de sus importantes yaci-

mientos de petróleo. Sin embargo, la pobreza afecta al 75% de la población y parece que la corrupción se ha disparado; según el Banco Mundial, el enorme incremento de la renta en los últimos años solamente se ha concentrado en el 5% de la población.

Su presidente, Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde 1979, ha bloqueado toda reforma tendente a liberalizar el régimen y hay abundantes denuncias de violaciones de los derechos humanos; la ONG norteamericana “Freedom House” ha situado a Guinea Ecuatorial en el cuarto lugar entre los once países con menos libertades del mundo. Pero su extraordinaria riqueza en petróleo ha vuelto indulgentes a algunas grandes potencias, como EEUU, que explota allí el crudo. En cuanto a España, después de años de frías relaciones y de actitudes inamistosas por parte del presidente ecuatoriano, en el 2001 reanudaba unos tímidos contactos.

El 14 de marzo saltaba la noticia de que las autoridades de Guinea habían procedido a la detención de 144 personas, acusadas de intento de golpe de estado. El presidente Obiang Nguema se ha rodeado siempre de una protección personal pretoriana, además de haber constituido un régimen policial y una red de información que alcanza a todos los rincones, por reservados que se hayan pretendido. En tales circunstancias, la información publicada por el ministro del interior para justificar esas detenciones de que *el Gobierno está soportando, en estos últimos días, provocaciones y actos de violencia por parte de la oposición radical* es difícilmente creíble, por la práctica imposibilidad de que haya podido fraguarse un movimiento disidente de tal entidad sin que la densa red de inteligencia haya detectado sus iniciales contactos y compromisos.

A las múltiples detenciones efectuadas, encabezadas por altos cargos políticos y militares recientemente destituidos, ha seguido un silencio absoluto por parte del Gobierno, al que se ha acusado de llevar adelante “una oleada de detenciones sin orden judicial”. Amnistía Internacional advertía, a finales de marzo, que los detenidos permanecían incomunicados y con peligro de ser torturados y ejecutados, lo que negó el portavoz del Gobierno.

El 23 de mayo comenzaba el juicio, al que asistió en observación una delegación española. El ministerio fiscal pidió ocho penas de muerte o de 30 años de reclusión por intento de atentado contra el presidente de la nación y de golpe de estado. Los abogados de la defensa se quejaron de graves anomalías. Finalmente resultaron 68 personas condenadas a penas de prisión entre seis y veinte años y 76 absueltas.

En otro orden de cosas, en abril se firmaba, entre Guinea Ecuatorial y Cuba, un proyecto de cooperación para la construcción en Malabo de la primera fábrica de productos alimenticios. También en ese mes, la Comisión de Derechos Humanos de las NNUU retiró a su representante en Guinea Ecuatorial ante la escasa colaboración del Gobierno de Malabo, animando al ejecutivo de Obiang Nguema a poner en marcha un plan de acción nacional sobre derechos humanos, con la asistencia técnica de la Alta Comisión.

En el ámbito del desarrollo social, es de señalar el panorama de profundas y humillantes diferencias que ofrece la capital Malabo entre la población autóctona, de 50.000 habitantes, y la parte acomodada, unas 500 personas que se han ido instalando a partir de la aparición del petróleo. En el primer caso se advierten calles sin asfaltar, desagües al aire, casas de tablas con techos de zinc, carencia de servicio de recogida de basuras y de transporte público, iluminación escasa y pobreza ostensible. La otra zona está compuesta por chalets, hoteles y coches de lujo y por grandes espacios verdes, con entrada restringida, a la que solo pueden acceder los guineanos que desempeñan allí oficios y trabajos domésticos, de limpieza, hostelería o cuidado de jardines.

CAPÍTULO SÉPTIMO

ÁSIA

ASIA

Por FERNANDO DELAGE CARRETERO

INTRODUCCIÓN

La tensión entre India y Pakistán, el terrorismo islamista en Indonesia y Filipinas, los indicios de reforma económica en Corea del Norte y el reconocimiento de su programa nuclear, y la sucesión en el liderazgo chino han sido los principales focos de interés para la seguridad asiática en 2002. Todos ellos reflejan la doble transformación —interna y regional— del continente. De una a otra parte de Asia, permanecen abiertos diversos procesos nacionales de transición política y económica, cuyas implicaciones para la paz y la seguridad en la región son innegables. Por otro lado, los últimos doce meses confirmaron un sutil reajuste del equilibrio entre las grandes potencias, resultante de la emergencia china e india, de la prolongada crisis japonesa, así como del acercamiento ruso a Estados Unidos.

La fluidez y complejidad de la seguridad regional se han acentuado, sin que hayan desaparecido las principales amenazas a la paz: en junio hubo un riesgo cierto de conflicto armado en Cachemira, mientras continúa la tensión en el estrecho de Taiwan y en la península coreana. A ellas hay que sumar la inestabilidad de Pakistán e Indonesia, agravadas por el ascenso electoral de las fuerzas islamistas en el primer caso, y por el atentado terrorista en Bali, en el segundo. El año transcurrido permite observar, no obstante, un renovado interés por resolver colectivamente los problemas de seguridad. La inquietud por el creciente poder chino, la voluntad de Pekín de ganarse la confianza de sus vecinos, la urgencia de Pyongyang de contar con algún canal diplomático, y la necesidad norteamericana de colaboración en la guerra antiterrorista han producido el

efecto de consolidar el Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ARF), única organización multilateral en este terreno.

Prácticamente todos los países asiáticos se sumaron a Estados Unidos en su denuncia del terrorismo, pero se comparte en la región una inquietud por la política de Washington. Aunque de manera más discreta que los europeos, los aliados asiáticos de Estados Unidos —Japón y Corea del Sur en particular— manifiestan sus dudas sobre su unilateralismo, su estrategia norcoreana y su alarmismo sobre China, al tiempo que buscan una mayor autonomía diplomática propia. La paradoja de que Washington mantenga bajo control sus relaciones con Pekín, mientras aumentan las diferencias con sus aliados es llamativa: justamente lo contrario es lo que pretendía el presidente Bush al llegar a la Casa Blanca.

Con el fin de reducir el protagonismo que China había tenido en la política exterior de la administración Clinton, el equipo republicano aspiraba a crear un nuevo equilibrio en Asia. Bush quería restaurar la fortaleza de sus relaciones con Japón y Corea del Sur, a los que, tras el 11 de septiembre, añadió la India y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). Durante la campaña electoral de 2000, Bush no dejó de referirse a China como “competidor estratégico”, término que nunca ha empleado sin embargo desde su acceso a la presidencia. Pero la revisión cuatrienal de la defensa (Quadrennial Defense Review Report), adoptada el 30 de septiembre de 2001, venía a recoger la misma idea al señalar la posibilidad de que emerja en Asia “un competidor militar con formidables recursos”, e indicar que “el litoral de Asia oriental —de la bahía de Bengala al mar de Japón— representa un especial desafío”. El 11-S puede explicar la menor tensión entre Pekín y Washington, asunto sobre el que se volverá más adelante, pero la percepción norteamericana de los riesgos de la emergencia china no ha desaparecido, como reflejaron otros documentos a lo largo del año.

La guerra contra el terrorismo y la supuesta vinculación de grupos radicales del sureste asiático con Al Qaeda —confirmada tras el atentado en la isla indonesia de Bali del 12 de octubre, atribuido a la Jemaa Islamiya— han reforzado las relaciones de seguridad de Estados Unidos con la región. Desde las tropas enviadas a Filipinas en enero, a la inteligencia conjunta con Singapur y Malasia, y la renovada relación con las fuerzas armadas de Indonesia, Washington cuenta hoy con una colaboración militar no vista desde el fin de la guerra fría. El Sureste asiático se ha convertido, después de años de abandono, en una nueva prioridad estra-

tégica de Estados Unidos, pero en la región se advierte del riesgo de una mayor inestabilidad en el futuro. En palabras de un antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, Surin Pitsuwan, los “compromisos” resultantes de esta estrategia pueden marcar “un retroceso para el proceso de democratización y el movimiento a favor de los derechos humanos” en Asia.

Con independencia del impacto del 11-S y de la evolución de la política norteamericana, las grandes fuerzas en movimiento en Asia siguen su curso. El análisis de los acontecimientos del último año debe partir del siguiente marco general:

- *Inestabilidad política interna.* La condición principal de la paz y la seguridad asiática es la propia estabilidad política nacional, incierta en diversos países de la región. En el noreste asiático, China afronta el mayor relevo en su liderazgo desde la fundación de la República Popular en 1949; Japón continúa inmerso en la crisis de su sistema político y económico, aunque el primer ministro Junichiro Koizumi mantiene un considerable apoyo popular; y en Corea del Sur las elecciones de diciembre pusieron fin al segundo y último mandato del presidente Kim Dae Jung y, probablemente, a su estrategia de acercamiento al Norte (conocida como “*sunshine policy*”). Si se confirmaran, los indicios de apertura económica de Corea del Norte serían una de las principales noticias del año, aunque más por sus consecuencias diplomáticas que por una inmediata reforma política.

Desde la perspectiva política interna, el problema de mayor calado en el sureste asiático es Indonesia, donde la recuperación económica parece estancada, continúa registrándose un alto nivel de violencia y está en juego no sólo su frágil democracia sino la propia integridad territorial del país. La confirmación, con el atentado de Bali, de la existencia de grupos terroristas abre graves interrogantes sobre la gobernabilidad del archipiélago y la capacidad de la presidenta Megawati Sukarnoputri para afrontar el desafío. Su tamaño, población, situación geográfica y recursos hacen de la inestabilidad indonesia el principal problema de seguridad a medio plazo para la región. Filipinas y Tailandia siguen lidiando con la debilidad de sus instituciones democráticas, mientras que Malasia se acerca a una nueva etapa nacional tras anunciarse en junio la retirada en 2003, tras veinte años en el poder, del primer ministro Mahathir Mohamed. En Asia meridional, la situación interna de

Pakistán constituye otro de los mayores riesgos a la seguridad regional, como se examinará más adelante.

- *Incertidumbre económica.* Numerosos regímenes asiáticos —sobre todo China y los países del sureste asiático— han hecho depender su legitimidad del crecimiento económico, de ahí que éste sea un elemento clave de la estabilidad política. Las estimaciones del Banco Mundial para la República Popular China son de un crecimiento del 7,4% del PIB en 2002 (y del 7,5% en 2003), pero pese a esa extraordinaria cifra siguen sin corregirse graves problemas estructurales, como la morosidad del sistema financiero (que probablemente supera el 35% del PIB), la quiebra técnica de más de la mitad de las empresas estatales, los reducidos ingresos fiscales (17% del PIB en 2001) y la insuficiente creación de empleo (ocho millones al año, cuando harían falta unos 20 millones). La transición a una verdadera economía de mercado aún no se ha completado y la ejecución de los compromisos contraídos al adherirse a la Organización Mundial de Comercio (OMC) puede provocar problemas sociales.

En el sureste de la región, el Banco Asiático de Desarrollo estima un crecimiento medio del 3,8% del PIB en 2002 (y 4,6% en 2003), debido sobre todo al consumo y al tirón en las exportaciones. Las inversiones siguen, por el contrario, sin recuperarse desde la crisis financiera de finales de los años noventa. Las mayores preocupaciones son la salud económica de Estados Unidos, dada la dependencia de la región de sus exportaciones a ese mercado; el déficit fiscal, alarmante en casos como el de Filipinas; y la morosidad de los sistemas financieros en casi todas las economías de la zona.

Japón continúa sin salir de la recesión, aunque ello no afecte de momento a su estabilidad política ni a la seguridad regional (quizá sí, a medio plazo, al sistema financiero mundial). Corea del Sur se confirma, en cambio, como la gran sorpresa, con unas estimaciones de crecimiento del 6% en 2002 (y 5,8% en 2003), además de haber acometido una genuina transformación estructural de su economía. India y Pakistán, por último, crecerán un 4% y un 3,6% en 2002, respectivamente; cifras respetables pero insuficientes cuando 300 millones de indios y 56 millones de paquistaníes viven con menos de un dólar al día.

- *Modernización militar y proliferación.* Los gastos de defensa no muestran signos de reducirse en la región. Dos de los seis mayores presupuestos de defensa del mundo están en Asia —los de Japón y China—, mientras que esta última e India registran desde hace varios años un incremento en sus gastos de defensa muy superiores a sus tasas de crecimiento económico anual. Pero la preocupación más inmediata es la relativa a la proliferación de misiles y de armas de destrucción masiva, especialmente tras el reconocimiento en octubre por Corea del Norte de que, en violación del acuerdo de Ginebra de 1994, no abandonó su programa de armamento nuclear, desarrollado con la ayuda de Pakistán. Según Pekín, Pyongyang podría tener cuatro o cinco bombas nucleares, mientras que el Pentágono estima que Corea del Norte cuenta con más de 100 misiles Rodong (con un alcance de unos 1.600 kilómetros). China, por su parte, continúa aumentando el número de misiles desplegados en el estrecho de Taiwan (más de 300 hasta la fecha) y desarrolla, como Corea del Norte, cohetes de alcance intercontinental.
- *Impulso del regionalismo.* La experiencia de la crisis financiera de 1997-98, la excesiva dependencia del mercado de Estados Unidos para sus exportaciones y la necesidad de contar con mecanismos de autodefensa en la era de la globalización han impulsado la dinámica regionalista en Asia. Mientras se negocia la ampliación de la Unión Europea y la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, los países asiáticos consideran necesario crear su propio bloque continental y, de ese modo, reforzar su peso en las negociaciones multilaterales de comercio. Al mismo tiempo, la creciente competencia entre China y Japón por la influencia en la región también está produciendo el efecto de un mayor acercamiento de ambos a los países de la ASEAN, integrando así al noreste y sureste asiáticos en nuevas fórmulas de colaboración regional.

La cumbre anual de la ASEAN y de ASEAN+3 (los diez miembros de la ASEAN más China, Japón y Corea del Sur), celebrada en noviembre en la capital de Camboya, Phnom Penh, confirmó esos avances. Se formalizó la propuesta china de crear un área de libre comercio con la ASEAN en un plazo de diez años, que será la mayor del mundo, y que ampliará la propia Área de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA), impulsada de nuevo en enero, pese a las enor-

mes diferencias económicas dentro de la propia organización. Japón se vio obligado a contrarrestar la iniciativa de Pekín con la propuesta de una asociación económica con la ASEAN, presentada por Koizumi en enero, con ocasión de su visita a Singapur, país con el que Tokio firmó el primer acuerdo de libre comercio de su historia.

Esa mayor integración económica, resultante de los flujos de comercio e inversiones en la región, no debe hacer perder de vista sus implicaciones políticas y diplomáticas. A la ya mencionada consolidación del ARF hay que añadir el creciente activismo multilateral de Pekín y la progresiva convergencia estratégica de los intereses de China, Japón y Corea del Sur sobre la seguridad regional.

NORESTE ASIÁTICO

China

El ingreso de la República Popular en la OMC a finales de 2001 y sus efectos sobre la política de reforma económica, así como el acceso de una nueva generación al poder tras la celebración en noviembre de 2002 del XVI Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh), marcan un período de transición en el que las cuestiones internas absorben la atención de sus dirigentes. Pero el ascenso económico chino sigue su curso, del mismo modo que tampoco se ha detenido su proceso de modernización militar. El conjunto de Asia oriental, además de Estados Unidos, da por descontado en sus cálculos estratégicos la realidad de una nueva superpotencia, aunque no puedan adivinarse aún sus intenciones. En el último año al menos, la política exterior china ha mostrado un notable pragmatismo y moderación, visible en sus relaciones con Washington, en su defensa de los procesos multilaterales y en sus relaciones con Japón, Corea del Sur y la ASEAN. La prioridad del crecimiento y la realidad de la interdependencia económica desaconsejan sin duda cualquier otra alternativa.

Tras el XVI Congreso del PCCh, Jiang Zemin cedió la secretaría general del partido a Hu Jintao (quien también le sucederá en la presidencia de la república en marzo de 2003); y se renovaron los principales órganos, incluyendo el Comité Permanente del Buró Político, que se amplía de siete a nueve miembros, reflejando de este modo el paso a una dirección colec-

tiva frente al liderazgo personal de otras épocas. El Congreso se inauguró el 8 de noviembre —aunque estaba previsto para septiembre— después de semanas de especulaciones sobre las supuestas intenciones de Jiang de mantenerse en el poder. Se confirmó que Jiang mantendrá la presidencia de la Comisión Central Militar (la misma posición que mantuvo Deng Xiaoping durante dos años después de retirarse del Comité Permanente) y una más que notable influencia tras haber situado en este último órgano hasta a cinco leales suyos. Destaca entre ellos Zeng Qinghong, una figura a la que habrá que prestar atención durante los próximos años y que asumirá responsabilidades en el terreno de la política exterior y de seguridad. El sucesor de Jiang al frente del partido, Hu Jintao, de 59 años de edad, es una figura poco conocida, que responde sin embargo a un perfil clásico de los dirigentes chinos. En otoño de 2001 visitó varios países europeos y, del 27 de abril al 3 de mayo de 2002, Estados Unidos.

El XVI Congreso debía afrontar, además de la renovación en su liderazgo, una nueva plataforma ideológica que adaptara su doctrina oficial a la transformación de la sociedad y la economía chinas. Jiang logró que se adoptara oficialmente su teoría de las “tres representaciones”, para convertirla en un tercer pilar doctrinal del comunismo chino junto al pensamiento de Mao y la teoría de Deng. Según sus principios, el partido debe representar los intereses de las clases medias y los empresarios, además de su tradicional base de apoyo en el proletariado.

La apretada agenda interna ha restado protagonismo a su diplomacia, en la que se ha apreciado sin embargo un esfuerzo por transmitir una imagen de moderación. Con Estados Unidos en particular, China ha mantenido desde el 11-S una relación positiva. Pekín votó a favor de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad contra el terrorismo, envió una delegación de expertos en contraterrorismo a Washington, reforzó la seguridad en su frontera con Afganistán y congeló depósitos bancarios vinculados a organizaciones extremistas. Pero es innegable que China tiene su propio interés en mantener esta actitud de cooperación: Pekín quiere aparecer como un miembro responsable de la comunidad internacional, comparte con Estados Unidos una preocupación por la estabilidad de Asia central y meridional —especialmente en relación con Pakistán, cuyo programa nuclear contó con la ayuda de China— y tiene su propio problema terrorista en la región de Xinjiang. (Según el viceprimer ministro Qian Qichen, unos 1.000 musulmanes chinos fueron entrenados por Al Qaeda en Afganistán).

La reacción china no oculta, sin embargo, sus percepciones de fondo. Pekín sólo puede observar con preocupación cómo Estados Unidos ha reforzado su alianza con Japón, estrechado sus relaciones con la India, renovado sus relaciones de defensa en el sureste asiático y establecido bases en Asia central. El cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia también representa un desafío para la política exterior china. Pekín construyó gradualmente una estrategia de acercamiento a las repúblicas de Asia central y a Moscú, ambas vitales para sus necesidades diplomáticas y energéticas, de la que son buena muestra la institucionalización en junio de 2001 de la Organización de Cooperación de Shanghai y el tratado de amistad y cooperación firmado con Rusia un mes más tarde. China buscaba una manera de equilibrar el poder de Estados Unidos y reducir su influencia en la región. Tras el acuerdo nuclear ruso-norteamericano de 24 de mayo de 2002, la pretendida “asociación estratégica” entre Pekín y Moscú ha perdido toda credibilidad. Pero lejos de verse sujeta a una política de aislamiento, China se ha embarcado en una activa diplomacia asiática que ha contribuido a mejorar sus relaciones con Corea del Sur, Japón y, sobre todo, la ASEAN. El ya mencionado acuerdo entre Pekín y los diez miembros de la ASEAN para concluir en diez años la que será mayor área de libre comercio del mundo, responde a una sofisticada estrategia china, que tendrá asimismo notables efectos positivos para la seguridad regional.

En un año de transición política, el objetivo de Pekín ha sido asegurarse de que Estados Unidos no lo considere como un potencial adversario. La guerra contra el terrorismo ofreció a ambos un objetivo común sobre el que construir una mayor cooperación, pero como reveló la visita de Bush a Pekín (del 21 al 22 de febrero), no han desaparecido las resistencias a entablar un verdadero diálogo estratégico. De hecho, dos estudios anunciados en Washington en verano hacían de nuevo hincapié en el desafío que representa China para Estados Unidos. El primero de ellos, un informe del Pentágono al Congreso hecho público el 12 de julio, afirmaba que la República Popular está modernizando rápidamente sus fuerzas armadas con el fin de contrarrestar el poder norteamericano en el Pacífico y presionar a Taiwan para que acepte la reunificación. El segundo, fechado tres días más tarde, es un informe de una comisión nombrada por el Congreso, la US-China Security Review Commission, que sugería la adopción de medidas para frenar los avances estratégicos y económicos de Pekín.

El informe del Pentágono, que constituye el primer análisis de las fuerzas armadas chinas de la administración Bush, llega a conclusiones no muy distintas de las mantenidas en la época de Clinton, aunque describe en un tono más agresivo las ambiciones de Pekín y la potencial amenaza que representa. El documento estima que la República Popular gasta unos 65.000 millones de dólares al año en la modernización de su ejército (las cifras oficiales anunciadas en marzo son de 20.000 millones) y asegura que está reforzando su arsenal balístico: China estaría sustituyendo sus 20 misiles intercontinentales DF-5, que pueden alcanzar la parte occidental de Estados Unidos, con una versión de aún mayor alcance; y añadiendo cada año unos 50 misiles de corto alcance a un arsenal que ya supera las 350 unidades, la mayor parte desplegados en la provincia de Fujian, frente al estrecho de Taiwan.

En contraste con épocas anteriores, las quejas oficiales chinas contra esos informes pasaron desapercibidas, reflejo de hasta qué punto las circunstancias del 11-S han transformado la atmósfera de la relación bilateral. Mientras que China había estado obsesionada desde el fin de la guerra fría con un mundo unipolar bajo hegemonía norteamericana, ahora es consciente de su incapacidad financiera y tecnológica para competir estratégicamente con Estados Unidos. Su estabilidad interna requiere, por otro lado, mantener su crecimiento, lo que a su vez exige estrechas relaciones económicas con los norteamericanos. Washington, por su parte, necesita a China en su campaña contra el terrorismo, para conseguir una resolución del Consejo de Seguridad contra Irak y para resolver la crisis planteada por Pyongyang en octubre al reconocer la existencia de su programa de armamento nuclear.

Esa coincidencia de intereses se reflejó en la visita de Jiang Zemin al rancho de George W. Bush en Crawford, Tejas, el 25 de octubre, y días después en la cumbre del foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC), en Los Cabos, México. A largo plazo, sin embargo, la evolución de sus relaciones continuará marcada por una profunda desconfianza mutua. Estados Unidos parece dispuesto a cooperar con China, pero quiere ser la potencia militar dominante. Pekín no muestra intenciones de desafiar la presencia militar norteamericana en Asia, pero continuará buscando una mayor influencia política y económica, fomentando la creación de un sistema de seguridad regional que pudiera restar fuerza a la red de acuerdos bilaterales que mantiene Washington.

Taiwan

El clima de distensión en las relaciones chino-norteamericanas también se ha reflejado en el problema de Taiwan. Estados Unidos no ha modificado el acuerdo de venta de armamento de 2001, aunque hay ciertas dudas sobre qué sistemas se transferirán finalmente. El ministro de Defensa taiwanés viajó a Florida en marzo (la visita de más alto nivel desde 1979, aunque no tuviera carácter oficial), e incluso el Congreso designó a Taiwan en septiembre como un “non-NATO ally” a pesar de la ausencia de relaciones bilaterales formales. Altos cargos del Pentágono, incluyendo al subsecretario Paul Wolfowitz, renovaron públicamente el compromiso anunciado por el presidente Bush en abril de 2001 de proteger la isla “cueste lo que cueste” y manifestaron su preocupación por el reforzamiento militar chino en el estrecho. La reacción de Pekín apenas se escuchó.

Las cosas se agitaron de nuevo el 3 de agosto, cuando en una alocución transmitida por video a un grupo de simpatizantes (“the World Association of Taiwanese Associations”) en Tokio, el presidente taiwanés, Chen Shui-bian, realizó su más provocativa declaración desde que accediera al poder en mayo de 2000. Chen afirmó que “ambos, Taiwan y China, son un país a cada lado del estrecho” y apuntó que el futuro de Taiwan debería decidirse en un referéndum, una “línea roja” que se había comprometido con anterioridad a no cruzar. China inmediatamente indicó que ese referéndum conduciría al desastre, aunque la polémica se apaciguó a los pocos días.

Las declaraciones de Chen probablemente deban interpretarse en clave interna. Los gestos hacia Pekín —las promesas de que Taipei no declarará la independencia, no celebrará un referéndum al respecto ni formalizará la definición del anterior presidente Lee Teng-hui de las relaciones a ambos lados del estrecho como relaciones “de estado a estado”, al tiempo que se han suprimido los límites a las inversiones en el continente— han beneficiado a la República Popular sin que ésta haya ofrecido nada a cambio. Quizá Chen quiera recuperar parte del apoyo popular perdido con un mensaje de firmeza.

Japón

En abril se cumplió un año de la elección de Junichiro Koizumi como primer ministro, sin que su programa reformista haya avanzado un ápice.

En octubre se presentó el último plan de saneamiento del sistema financiero (la morosidad de la banca sumaba la gigantesca cifra de 45.000 millones de dólares al terminar el año fiscal en marzo), que fue de nuevo paralizado por el propio gobierno, dadas las resistencias del Partido Liberal Democrático y diversos grupos de intereses. El inmovilismo en la vida política interna explica un mayor activismo exterior, como reflejó de manera muy especial la visita de Koizumi a Pyongyang el 17 de septiembre, aunque es el transformado equilibrio estratégico asiático el que obliga a Japón a adoptar una posición internacional más independiente. Si hasta finales de los años noventa su política exterior estaba determinada básicamente por sus intereses económicos y su alianza con Estados Unidos, en la actualidad responde a la transformación del entorno regional de seguridad, como consecuencia sobre todo de la creciente influencia china y de la amenaza que representa para su seguridad Corea del Norte.

Los dirigentes japoneses tienen que reorientar su política exterior desde el fin de la guerra fría, sin tener claro qué dirección tomar. ¿Define la alianza con Estados Unidos la totalidad de su estrategia? ¿Debe el país orientarse más hacia Asia? ¿Basta con tener un discurso que se apoye en las Naciones Unidas, el multilateralismo o el regionalismo económico? Las circunstancias económicas y estratégicas de los años noventa han producido el efecto de aumentar las presiones para que Japón clarifique su posición y objetivos internacionales a fin de mantener su influencia en una era caracterizada por su pérdida de poder relativo. El año transcurrido mostró indicios de ese renovado debate y de la búsqueda de una mayor autonomía en tres áreas: la ampliación del papel de las fuerzas de auto-defensa; un nuevo equilibrio en su relación con Estados Unidos mediante su apertura unilateral a Corea del Norte; y la cooperación, y al mismo tiempo competencia, con China en el contexto regional.

Como consecuencia de los atentados terroristas del 11-S, Japón ha comenzado a transformar el papel de su ejército. En octubre de 2001, la Dieta aprobó un conjunto de leyes que permite a sus fuerzas proporcionar apoyo logístico a las tropas norteamericanas que realicen operaciones militares en el marco de la guerra antiterrorista. Un mes después, Tokio envió dos destructores y un buque de apoyo al Océano Índico, en lo que constituyó su primera incursión militar en la región desde la segunda guerra mundial. Japón se ve obligado a evitar la indecisión que caracterizó su respuesta durante la guerra del Golfo en 1990-91. Por ello, aunque limitada a dos años de vigencia y aplicables tan sólo a la lucha contra el terrorismo, la nueva legislación supone un precedente que rompe con la tradi-

cional posición japonesa (y estira al máximo las limitaciones constitucionales de sus fuerzas armadas). Son indicación de un giro en la actitud del gobierno, y quizá también de la opinión pública, así como de una mejora en la capacidad de respuesta a las crisis internacionales. En marzo de 2002 se conoció la existencia de nuevas propuestas legislativas orientadas en esa dirección.

Otra prioridad japonesa es la búsqueda de un nuevo equilibrio en su relación con Washington. Como ya se mencionó, Bush llegó a la Casa Blanca con la intención de hacer de Japón el pilar de la política de Estados Unidos en Asia, y Tokio (del 17 al 19 de febrero) fue la primera parada en su primer viaje oficial a la región. Japón aprecia ese interés después del relativo olvido que sufrió durante la administración Clinton, pero es consciente de que su percepción de los problemas internacionales no tiene por qué coincidir siempre con la de Washington. Esas divergencias se pusieron de relieve durante los últimos meses en relación con la guerra antiterrorista, Oriente Próximo y Corea del Norte.

Como ocurre con sus aliados europeos, Japón cuestiona la política unilateral de Estados Unidos y el recurso a la fuerza militar como único método para afrontar el terrorismo. Por esa razón, Tokio ha hecho hincapié en su ayuda económica a los países de Asia central y al proceso de construcción nacional de Afganistán. La celebración en enero en Japón de la conferencia de donantes reflejó esa prioridad.

Esa distinta manera de enfocar el problema se puso también de relieve en el caso de Oriente Próximo, dados los intereses económicos y estratégicos de Tokio. Cerca del 80% de las importaciones japonesas de petróleo proceden de la región, por lo que su política no es en absoluto coincidente con la de Washington. Desde hace años ofrece ayuda de cooperación a los países árabes, a la Autoridad Palestina y mantiene, incluso, unas estrechas relaciones con Irán. La consecuencia es que Japón rechaza el discurso sobre el “eje del mal”, la política de Washington sobre el proceso de paz y no comparte la definición norteamericana del problema iraquí.

Pero quizá es en la propia seguridad regional donde con mayor claridad se ha reflejado esa búsqueda de independencia. El viaje de Koizumi a Pyongyang en septiembre fue quizá la primera vez en casi medio siglo que Tokio adoptaba una iniciativa diplomática de esa relevancia sin consultar a Washington. El reconocimiento norcoreano del secuestro de ciudadanos japoneses en los años ochenta y las revelaciones, semanas des-

pués, sobre su programa nuclear restaron fuerza al paso dado por Koizumi, pero no modificaron la realidad de los diferentes puntos de vista que Washington y sus aliados asiáticos mantienen sobre el régimen de Kim Jong Il.

En cuanto a China, existe la percepción desde finales de los años noventa de que el crecimiento económico de la República Popular, y la simultánea crisis japonesa, han agudizado la competencia entre los dos países por el liderazgo regional. La manera en que ambos buscan una mayor influencia en la ASEAN, a través de sus respectivas propuestas de acuerdos de asociación económica, ha sido el ejemplo más claro durante 2002. Pero la preocupación de Tokio por la emergencia china carece del alarmismo necesario como para adoptar una política dirigida a frenar su ascenso. El último año ha mostrado, por el contrario, una moderación muy notable por ambas partes. El denominado “problema de la historia” sigue vivo y Koizumi tuvo que cancelar su viaje a Pekín para conmemorar el 29 de septiembre el 30° aniversario de la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países, después de que China protestara por su visita al templo de Yasukuni en Tokio, dedicado a la memoria de los héroes de guerra. Al mismo tiempo, y por segundo año consecutivo, Japón ha reducido en un 25 por cien su ayuda al desarrollo a China. Pero mientras no resulten evidentes las intenciones hegemónicas de la República Popular, Japón se guía por un realismo político para el que no le faltan razones.

Pese a su ritmo de crecimiento, la economía china representa apenas la cuarta parte de la japonesa. Su nivel de desarrollo se traduce, además, en que ambas economías sean complementarias más que competidoras, por no mencionar la oportunidad que representa China como mercado y como base industrial para los intereses japoneses, cuyas inversiones en la República Popular han aumentado un 64 por cien en los dos últimos años. Mientras que Estados Unidos sí es considerado como un rival económico, China es vista como un socio difícil, pero indispensable para la cooperación regional. Esa evolución de los intereses japoneses en China se ha traducido asimismo en un más estrecho diálogo político, tanto bilateral como en el marco de ASEAN+3. La ya mencionada cumbre de noviembre en Phnom Penh reflejó ese acercamiento, que también puede interpretarse como una opción estratégica de Tokio para reforzar su posición con respecto a Estados Unidos.

Las dos Coreas

Aunque la cumbre intercoreana de junio de 2000 despertó grandes expectativas sobre una disminución de la tensión e, incluso, sobre la reunificación a medio plazo de la península, poco se avanzó durante los dos años siguientes. La llegada del presidente Bush a la Casa Blanca venía precedida por las intenciones del nuevo equipo republicano de abandonar la política norcoreana de la administración Clinton, aunque tras varios meses de reflexión se anunció, en junio de 2001, la disposición de Washington a dialogar con Pyongyang “sin condiciones previas”.

De ahí la sorpresa de que Bush incluyera a Corea del Norte en el “eje del mal” al que se refirió en su discurso sobre el estado de la Unión el 30 de enero de 2002. Al hacerlo, Estados Unidos no sólo congelaba toda posibilidad de negociación con Pyongyang, sino que minaba la política de uno de sus más firmes aliados en Asia: el presidente surcoreano, Kim Dae Jung, debilitando su posición política interna en su último año de gobierno. Pyongyang, por su parte, calificó el discurso de Bush como “casi una declaración de guerra” y amenazó con reforzar sus capacidades militares. Los meses siguientes depararían un gran número de sorpresas.

Bush llegó el 19 de febrero en visita oficial a Seúl, donde intentó suavizar sus declaraciones anteriores ante el creciente antiamericanismo de la opinión pública surcoreana. Bush hizo una nueva oferta de diálogo al Norte, rechazada por Pyongyang como “pretexto para la invasión”. Sin embargo, pocas semanas después el régimen de Kim Jong Il restableció la comunicación con Seúl, interrumpida desde octubre de 2001. A principios de abril, Corea del Norte recibió a un enviado especial de Kim Dae Jung, con quien se acordó restablecer las conversaciones con Washington, el proceso de reagrupamiento familiar e impulsar la cooperación económica entre los dos países.

Dos meses más tarde, un nuevo incidente estuvo a punto de paralizar los contactos. El 29 de junio un choque naval en aguas del mar Amarillo enfrentó a las dos Coreas (según Pyongyang, buques del Sur habían penetrado en sus aguas territoriales). Este tipo de choques, frecuentes en el pasado por el desacuerdo sobre las líneas de delimitación marítima entre ambas repúblicas, no se habían producido desde 1999. Su consecuencia inmediata fue la de entorpecer el diálogo entre el Norte y Estados Unidos: el 2 de julio, el departamento de Estado anunció que cancelaba el previsto viaje de un enviado a Pyongyang.

Sin embargo, en un anuncio que cogió por sorpresa a los observadores, Corea del Norte manifestó el 25 de julio sus disculpas por el incidente naval, así como su disposición a reanudar las conversaciones con Seúl. La declaración se hizo días después de que empezaran a circular informaciones sobre la adopción de reformas económicas. Aparentemente, Kim Jong Il habría decidido introducir algunos elementos de mercado y acabar con el sistema de racionamientos. Algunos analistas encontraron semejanzas con los comienzos de la reforma china a finales de los años setenta, al fijarse un aumento de los salarios y de los precios de los productos de primera necesidad y realizarse los primeros pasos de apertura al exterior mediante la creación de una zona económica especial en la frontera con China. Esos cambios son los primeros indicios de una transformación probablemente inevitable. Pero los problemas de seguridad seguirían concentrando la atención durante las siguientes semanas.

El 31 de julio, durante la reunión del ARF en Brunei, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, y el ministro norcoreano de Asuntos Exteriores, Paek Nam Sun, mantuvieron el primer contacto oficial entre los dos países desde que Bush llegara a la Casa Blanca. Paek aseguró que habían acordado retomar las conversaciones, mientras que Powell insistió en que la agenda debería incluir las exportaciones de misiles, el despliegue de fuerzas convencionales en la frontera con el sur y el seguimiento del acuerdo de 1994 sobre congelación de su programa nuclear (asuntos ausentes de los contactos con la administración Clinton).

La séptima ronda de conversaciones ministeriales intercoreanas (12-14 agosto), las primeras celebradas en nueve meses, sirvió para reanudar el proceso de diálogo. Del 20 al 24 de agosto, Kim Jong Il visitó el Extremo Oriente ruso, donde trató de informarse sobre las reformas económicas llevadas a cabo por el presidente Putin. Pero la siguiente sorpresa fue el anuncio hecho el 30 de agosto por el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, de que viajaría a Pyongyang el 17 de septiembre en un intento de normalizar las relaciones bilaterales tras décadas de enfrentamiento. La visita, ya analizada en el epígrafe anterior, parecía responder a los intentos de apertura norcoreanos, aunque quizá no eran más que un movimiento táctico: el acoso de Washington al régimen ha forzado a éste a intentar romper su aislamiento diplomático mediante el acercamiento a sus vecinos, Corea del Sur, China, Japón y Rusia.

Toda interpretación de sus intenciones quedó, sin embargo, en suspenso cuando el 17 de octubre Estados Unidos informó que, durante la

visita a Pyongyang del secretario de Estado adjunto para Asia y Asuntos del Pacífico, James Kelly, a principios de mes, sus interlocutores —presionados por la inteligencia que le mostraron los norteamericanos— reconocieron haber mantenido en secreto, en violación del *Agreed Framework* de 1994, un programa de enriquecimiento de uranio. La noticia no sólo altera el equilibrio asiático, sino que situó a la administración Bush ante dos crisis simultáneas con países que desarrollan armas de destrucción masiva: Iraq y Corea del Norte (lo que quizá explique por qué Estados Unidos se guardó la información durante dos semanas).

Tras las revelaciones, el Acuerdo Marco de 1994 se ha convertido en letra muerta y ha acabado con la escasa credibilidad que pudiera tener el régimen norcoreano. Pyongyang puede haber reconocido su proyecto nuclear para terminar con su aislamiento económico y político. Quizá haya aprendido de la India y Pakistán que su rearme es lo que mejor garantiza su seguridad. Tal vez se trate de una maniobra dirigida a elevar el listón de sus demandas en unas negociaciones con Estados Unidos. La incertidumbre sobre sus motivaciones complica la actitud de Washington y explica sus dudas: Corea del Norte representa un riesgo para el que no valen fórmulas como las defendidas para cambiar el régimen de Bagdad. Especialmente cuando Seúl, a pesar de la noticia, no ha interrumpido el diálogo: la mayoría de los surcoreanos creen que las armas de Pyongyang tienen una función disuasoria contra Estados Unidos y no representan una amenaza ofensiva para ellos. (La actitud surcoreana podrá cambiar, no obstante, tras las elecciones del 19 de diciembre, en las que parte como favorito el conservador Lee Hoi Chang, enemigo de la política de acercamiento al Norte).

Washington, sin instrumentos militares a los que recurrir, no tiene más opción que plantear a Corea del Norte que ésta: o abandona sus armas nucleares o hará frente a su completo aislamiento económico. A pesar de su capacidad defensiva, su economía es extraordinariamente vulnerable: la supervivencia del régimen depende de los alimentos, dinero, fertilizantes y fuel-oil enviados por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Sin embargo, la retirada de ayuda es un arma de doble filo: podría desencadenar una crisis humanitaria que crearía gravísimos problemas para el Sur (éste es también el mayor riesgo desde el punto de vista de Pekín y Tokio); lo que es peor, un régimen que se sienta acorralado podría recurrir a alguna acción militar.

El 30 de octubre, en la primera ronda de conversaciones para normalizar las relaciones con Japón, en Kuala Lumpur, Corea del Norte no sólo

renunció a abandonar su programa nuclear, sino que amenazó con reanudar sus ensayos de misiles si las negociaciones no avanzan (durante la visita de Koizumi se había comprometido a mantener su moratoria voluntaria de 1999). El 14 de noviembre Washington respondió al chantaje nuclear norcoreano renunciando al diálogo y siguiendo el camino de las sanciones: no habría más envíos de fuel-oil a partir de diciembre.

La confrontación no es inevitable, pero la retórica de uno y otro lado han provocado una nueva escalada de tensión. Es un desafortunado desenlace: dada la evolución del contexto regional y de los aparentes intentos de reforma económica, habría razones para pensar que la admisión norcoreana de su programa nuclear podría marcar la primera reorientación estratégica del país en medio siglo e, irónicamente, contribuir a disminuir la inestabilidad en la península.

SURESTE ASIÁTICO

Aunque Estados Unidos calificó el sureste asiático como “segundo frente” de la lucha antiterrorista, no todos los especialistas estaban convencidos de la vinculación de los grupos radicales de la región a Al Qaeda. El atentado en la isla indonesia de Bali el 12 de octubre, que causó 180 muertos y más de 300 heridos, puso fin al escepticismo de muchos. Los terroristas cuentan con escaso apoyo popular y con la oposición de la mayoría de las organizaciones islamistas, pero lo cierto, en cualquier caso, es que el problema existe y se confunde con los movimientos separatistas y los conflictos étnicos y religiosos en la región, por no mencionar la inestabilidad social provocada por las dificultades económicas y las tensiones del proceso de democratización. Los problemas de la gobernabilidad se han acentuado, muy especialmente en Indonesia, donde el gobierno no parece suficientemente capacitado para afrontar sus crecientes problemas.

El sureste asiático cuenta con una población islámica que representa el veinte por cien del total mundial. En tres países constituyen la mayoría: Indonesia (200 millones, 88% de la población), Malasia (14 millones, 60%) y Brunei (230.000, 67%). En Singapur, Filipinas y Tailandia son minoría (15%, 5% y 4%, respectivamente), pero en los dos últimos casos hay grupos islámicos en armas contra el gobierno central desde hace décadas. Un reciente estudio del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de Malasia señalaba que el sureste asiático ha sido la región del mundo con menor número de atentados terroristas de 1984 a 1996. Pero desde el

verano de 2001 comenzó a detenerse —en Singapur, Malaisia y Filipinas— a miembros de grupos militantes de los que se sospechaban sus vinculaciones con la red de Ben Laden. Los países de la ASEAN comenzaron entonces a discutir el problema y a buscar políticas comunes, al tiempo que Washington, tras años de relativa indiferencia, convirtió la región en una prioridad estratégica. La administración Bush envió 660 soldados al sur de Filipinas a finales de enero para entrenar a sus fuerzas de seguridad en la lucha contra los extremistas, ha reforzado la cooperación en materia de inteligencia con Singapur y Malaisia y busca reanudar la colaboración con las fuerzas armadas indonesias (prohibida por el propio Congreso norteamericano hasta que no se juzgue a los militares acusados de violaciones de derechos humanos). El principal objetivo de Estados Unidos es el de impedir que el sureste asiático se convierta en un refugio para Al Qaeda después del desmantelamiento de sus redes en Asia central.

El 7 de mayo, Malaisia, Indonesia y Filipinas firmaron un acuerdo sobre medidas de lucha contra el terrorismo, enfocadas sobre todo a mejorar el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad. Una reunión ministerial de la ASEAN en Kuala Lumpur (21-22 de mayo) adoptó un plan de acción común contra el terrorismo, al que se sumó la declaración acordada en la reunión del ARF en Brunei (1 de agosto) por Estados Unidos y los miembros de la ASEAN. Se decidió crear una red de inteligencia contrterrorista, cuya sede estará en Honolulu, en el mando del Pacífico de las fuerzas norteamericanas.

El atentado de Bali no hará sino exacerbar los problemas nacionales de Indonesia. A las dificultades económicas (sólo la deuda externa supone 130.000 millones de dólares, equivalente a la totalidad de su PIB) y políticas —la fragilidad de sus instituciones y las presiones secesionistas— se suma la batalla contra los terroristas. Antes del 12 de octubre, la respuesta del gobierno fue dubitativa. Al contrario que en Malaisia, Singapur o Filipinas, la presidenta Megawati evitó actuar con decisión contra los grupos extremistas. Sólo como consecuencia de las presiones internacionales comenzó a mostrar una mayor firmeza que condujo, en mayo, al arresto de Jaffar Umar Thalib, líder de Laskar Jihad, uno de los principales movimientos islamistas, cuyas actividades violentas contra los cristianos en las Molucas y en Sulawesi no habían sido perseguidas por las autoridades. Sólo después del atentado de Bali se detuvo a Abu Bakar Bashir, líder espiritual de la Jemaa Islamiya, a la que se responsabiliza del atentado, y a Habib Rizieq Shihab, cabeza visible del Frente de los Defensores Islámicos, otro grupo violento. A pesar de las repetidas adver-

tencias de Estados Unidos y Singapur sobre su planificación de diversas acciones terroristas, el gobierno indonesio no había reconocido hasta entonces la existencia de la Jemaa Islamiya. El 15 de octubre, Laskar Jihad anunció su disolución y, poco después, Megawati firmó dos decretos antiterroristas con el apoyo de las dos principales organizaciones islámicas del país, Nahdlatul Ulama y Muhammadiyah.

En Filipinas, los atentados en Zamboanga, a la semana siguiente de Bali, revelaron que el grupo Abu Sayyaf sigue activo a pesar de la lucha antiterrorista y de la ayuda de Estados Unidos (la mayoría de sus soldados abandonaron el archipiélago el 31 de julio). El Frente Moro de Liberación Islámica, en guerra con el gobierno central desde hace más de veinte años en la isla de Mindanao, ha recuperado incluso posiciones. La presidenta Gloria Magapagal Arroyo ha negociado con habilidad un nuevo paquete de ayudas financieras con Washington, pero se encuentra ante un complejo panorama nacional, dados los problemas económicos y la fragilidad de la democracia filipina. Su cruzada a favor de “paz y orden” no ha acabado con la violencia secesionista en el sur del país, que las fuerzas de seguridad afrontan con muy escasos medios.

En Malaisia, donde se ha detenido a más de 70 miembros de su principal grupo extremista (Kumpulan Mujahideen Malaysia, KMM), la lucha contra el terrorismo ha contribuido al reforzamiento de la alianza gobernante, UMNO, y del propio primer ministro, Mahathir Mohamed. La frustración ciudadana con la corrupción y con las tendencias autoritarias de UMNO hizo aumentar el voto al fundamentalista Partido Islámico de Malaisia (PAS), convertido en primer partido de la oposición tras las elecciones de 1999. La preocupación por el fenómeno islamista ha hecho que el gobierno haya recuperado buena parte de ese apoyo perdido, lo que, a su vez, permitió a Mahathir anunciar por sorpresa, el 22 de junio, su retirada de la política en octubre de 2003.

Las probadas conexiones entre los grupos terroristas de los tres países hace pensar en la existencia de una red, en cuyo centro estaría la Jemaa Islamiya, que defiende la creación de una unión islámica de Indonesia, Malaisia y el sur de Filipinas. El atentado de Bali es considerado, por ello, como un preocupante aviso. Indicó, en primer lugar, que el objetivo de los terroristas se está trasladando de los intereses locales a los extranjeros. En segundo lugar, el ataque parecía pensado para dañar todo lo posible al gobierno moderado de Indonesia y, de ese modo, provocar una inestabilidad que se extendería a todo el Sureste asiático.

La repercusión del atentado sobre la industria turística es enorme, al tiempo que las inversiones extranjeras —vitales para la región y aún no recuperadas desde la crisis financiera de finales de los años noventa— desviarán su curso hacia China, un creciente competidor económico de los países de la ASEAN (lo que explica la ya comentada propuesta de creación de un área de libre comercio entre ambos). Por otro lado, el riesgo de fragmentación de Indonesia no deja de afectar a los países vecinos, especialmente Filipinas y Malasia, tanto por el efecto contagio sobre su respectiva población musulmana, como por la oleada de refugiados a la que tendrían que hacer frente. En esas condiciones, combatir las circunstancias sociales y económicas que favorecen la movilización de grupos radicales se convierte en una tarea aún más difícil. Los problemas de gobernabilidad en el Sureste asiático complicarán un panorama de seguridad regional hasta este año bastante estable.

ASIA MERIDIONAL

India

La vida política india siguió marcada en 2002 por la violencia entre hindúes y musulmanes (con más de 1.200 muertos en el estado de Gujarat en marzo), los difíciles equilibrios internos de la coalición gobernante y los lentos avances en las reformas económicas. Pese a la popularidad del primer ministro, Atal Behari Vajpayee, su partido (el Bharatiya Janata Party, BJP) perdió la mayoría en tres estados, al tiempo que no ha conseguido atajar la corrupción ni ofrecer mejores resultados económicos que gobiernos anteriores.

En febrero, el Partido del Congreso —en el poder en la India desde la independencia hasta 1999— derrotó a la alianza del BJP con Ahali-Dal en Punjab y al BJP en Uttaranchal. Mayor importancia tuvieron las elecciones en Uttar Pradesh, el mayor estado de la India (166 millones de habitantes), donde tampoco consiguió el BJP la mayoría. El proceso electoral señaló así la recuperación del Partido del Congreso, que ahora controla 14 estados, mientras que el BJP y sus aliados sólo cuentan con cuatro. No se descarta que el partido de los Ghandi recupere el poder en las elecciones de 2004, aunque siempre aliado a otros grupos: la atomización de la política india desde los años noventa hace prácticamente imposible que ninguno de los dos grandes partidos pueda conseguir mayorías absolutas por sí solos en el futuro.

La economía afronta la pesada carga del déficit público, equivalente al diez por cien del PIB, y al más bajo crecimiento industrial de la última década. El impacto político de los problemas económicos se ha visto atenuado por un crecimiento del cuatro por cien en 2002, debido básicamente a una recuperación de la agricultura. Pero la diversidad de intereses en juego complica la formación de un consenso nacional sobre las reformas estructurales. La realidad de un sector público que representa más del 25 por cien del PIB y emplea a dos tercios de la población, reduce todo margen de maniobra. Otro dato preocupante es la caída en las inversiones extranjeras: apenas 4.000 millones de dólares en 2001 (compárese con los 47.000 millones recibidos por China).

En política exterior, la estrategia del gobierno nacionalista orientada a la consecución de un status de gran potencia para la India se ha plasmado en un acercamiento a Estados Unidos. Ese objetivo coincidía con la voluntad de la administración Bush de desarrollar una estrecha alianza con Nueva Delhi, a la que se consideraba como socio más fiable que Islamabad, y con quien se compartía además un interés en frenar las ambiciones estratégicas de Pekín. La guerra contra el terrorismo, que obligó a Estados Unidos a contar con el gobierno paquistaní, preocupó a las autoridades indias, que tuvieron que contemplar cómo el país al que responsabilizan de ataques terroristas contra su territorio fuera elogiado como aliado de Washington. Pero pese a esas reservas, la campaña anti-terrorista y su evolución durante el último año han producido el mayor acercamiento entre Estados Unidos y la India desde la presidencia de Kennedy, celebrando incluso (en mayo) sus primeras maniobras militares conjuntas en cuarenta años.

Pakistán

La estabilidad estratégica a largo plazo del subcontinente indio depende en buena medida de que el general Pervez Musharraf continúe en el poder. Su posición es cada vez más precaria, especialmente después de que traicionara sus promesas de transición a la democracia.

El 5 de abril, Musharraf anunció que convocaría un referéndum para extender su mandato durante cinco años. La consulta, celebrada el 30 del mismo mes, contó con una participación de entre el 10 y el 20 por cien del electorado según observadores independientes, aunque las cifras dadas por el gobierno fueron del 50 por cien de participación y un 97 por cien a

favor del general. La controversia por el referéndum y la pérdida de popularidad de Musharraf no le desvió de su política de consolidarse en el poder: el 21 de agosto añadió 29 enmiendas a la Constitución de 1973 por decreto presidencial, que no podrá modificar el Parlamento. Se creó un nuevo Consejo de Seguridad, con capacidad de supervisar al gobierno salido de las urnas, y los nombramientos tanto de ministros, como de magistrados u oficiales del ejército, dependerán directamente del presidente.

Todos los partidos se opusieron a las medidas, que abrían el camino a que las fuerzas armadas decidieran el resultado de las elecciones convocadas para el 10 de octubre. Los comicios confirmaron, en realidad, el ascenso de los partidos islamistas: la coalición Muttahida Majlis-e-Amal (MMA), con 50 diputados, se convirtió en la tercera fuerza política de Pakistán, tras la escisión de la Liga Musulmana de Pakistán que apoya a Musharraf (PML-Q) y el Partido Popular de Pakistán (PPP) de la ex primera ministra Benazir Bhutto. Los partidos religiosos, además de convertirse en clave para la formación del gobierno, controlan dos de los cuatro gobiernos provinciales: Baluchistán y la Provincia del Noroeste, ambos fronterizos con Afganistán.

Los islamistas, cuya campaña consistió en denunciar la política de Estados Unidos, se beneficiaron del ataque de Musharraf contra los partidos laicos, opuestos a sus reformas de la Constitución y al referéndum de abril. Como resultado de las elecciones, Musharraf no sólo ha visto debilitada su posición, sino que el auge de los grupos fundamentalistas agrava la estabilidad nacional.

Igualmente peligrosa es la reaparición de células de Al Qaeda, con el apoyo de grupos extremistas dentro de las propias fuerzas armadas y los servicios de inteligencia. Un país inestable y en permanente enfrentamiento con la India podría ofrecer a los fundamentalistas la oportunidad que buscan para establecer un estado islámico. El aumento de la opresión en medio de dificultades económicas y de ausencia de alternativas democráticas refuerza a los radicales. El 40% de la población, unos 56 millones, viven por debajo de la pobreza: 15 millones más desde el golpe de estado del general Musharraf en 1999. Los tres peores escenarios que afronta Pakistán son que la línea dura de los militares se haga con el poder, que sean los fundamentalistas quienes lo ocupen, o que el país entre en un período de caos, creando —después de Afganistán— un nuevo estado fallido en la región.

Cachemira

La verdadera obsesión de Musharraf, como de sus antecesores al frente de Pakistán, es Cachemira. Desde 1989, los servicios de inteligencia paquistaníes (ISI) han estado apoyando a los radicales cachemires que defienden su independencia de la India. Este permanente problema en las relaciones bilaterales se vio agravado como consecuencia del 11-S. Nueva Delhi, que siempre intentó que se definiera como terroristas a los separatistas cachemires, trató de vincular su campaña con la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo global. Para Washington, el apoyo indio era importante, aunque también le colocaba en una difícil situación de cara a Pakistán, socio fundamental para acabar con Al Qaeda y con el gobierno de los talibán en Afganistán. Prevenir un agravamiento de la tensión entre Delhi e Islamabad se convirtió en una prioridad de Washington a lo largo del año.

Después del atentado terrorista contra el Parlamento indio el 13 de diciembre 2001 por dos grupos vinculados a los servicios paquistaníes, Jaish-e-Mohammed y Lashkar-e-Taiba, Nueva Delhi anunció que declararía la guerra a menos que Islamabad diera pruebas de haber terminado con el apoyo a las acciones terroristas contra la India. Se fijó un plazo (hasta primavera) y, mientras tanto, la India se embarcó en una estrategia de “diplomacia coercitiva”, orientada a aumentar la presión sobre Islamabad sin tener que recurrir al uso de la fuerza. Nueva Delhi cortó el tráfico aéreo, ferroviario y por carretera entre los dos países, retiró a su representante diplomático en Islamabad y aumentó las fuerzas desplegadas en la frontera con Pakistán.

La concentración de hasta un millón de soldados a ambos lados de la frontera y la escalada de tensión hicieron muy cercana la posibilidad de una guerra en junio. Musharraf no cumplió la mayor parte de las demandas indias, pero el riesgo de conflicto entre dos potencias nucleares y el impacto de la crisis sobre la lucha contra Al Qaeda forzó a la administración Bush a actuar. Su intervención constante y las repetidas visitas de altos cargos, incluyendo los secretarios de Estado y de Defensa, logró contener a Nueva Delhi, aunque Washington no ha podido dejar de mantener la presión sobre el gobierno indio desde entonces.

Las elecciones de Cachemira, que terminaron a principios de octubre, produjeron una nueva sorpresa: la derrota del partido dominante desde los años cincuenta, la Conferencia Nacional de Jammu y Cachemira, integrado en la coalición que gobierna el país. El resultado eliminaba toda

posibilidad de acusar a Nueva Delhi de haberlo predeterminado. Es más, Vajpayee se ha ofrecido a dialogar con todas las fuerzas políticas cachemires sobre el futuro de la región, después de unas elecciones libres que han permitido creer en la posibilidad de autogobierno bajo la India.

El 16 de octubre, Nueva Delhi retiró miles de tropas de la frontera (excepto en la línea de control que divide Cachemira), movimiento seguido al día siguiente por un anuncio similar por parte de Islamabad. Pero la India indicó que no tenía intenciones de reanudar el diálogo con Pakistán mientras no cesen las incursiones en su territorio. A pesar de la desmovilización militar, toda negociación tendrá que esperar a las conversaciones de Nueva Delhi con los militantes de Cachemira y, quizá, a la existencia de un gobierno civil en Islamabad (el ejército no abandonará su objetivo de hacerse con la provincia india).

CONCLUSIONES

Cachemira, el terrorismo islamista en el Sureste asiático y los problemas de Corea del Norte y Taiwan no desaparecerán en 2003. Pero todos ellos ilustran la diversa naturaleza de los problemas de seguridad —y su evolución— en los tres escenarios estratégicos asiáticos.

- Mientras en el subcontinente indio Nueva Delhi e Islamabad continúan inmersos en un enfrentamiento que nació con su independencia y que simboliza Cachemira, la tensión entre ambos ha dejado de ser una cuestión bilateral para adquirir una dimensión regional y global al tratarse de potencias nucleares. La situación política interna de Pakistán constituye un factor añadido de alarma.
- En el Sureste asiático, países que solían definir sus problemas de seguridad desde una perspectiva interna, ven ahora cómo la aparición de grupos terroristas les obliga a reconsiderar sus conceptos estratégicos. De la preocupación por la estabilidad nacional han pasado a organizarse de manera conjunta para afrontar amenazas de naturaleza transnacional.
- En el noreste de la región, la península coreana y Taiwan son una reliquia de la guerra fría y la causa principal de una política tradicional de equilibrio de poder, que evoluciona, no obstante, en función del crecimiento chino y de la pérdida relativa de poder de Japón. Sin embargo, sin renunciar a sus prioridades nacionales, Pekín y Tokio —junto a Seúl— muestran una progresiva conver-

gencia estratégica que, a medio plazo, pudiera dar paso a un nuevo equilibrio político y militar. Su extensión al Sureste asiático sería una consecuencia inevitable, creando un espacio de seguridad que obligaría a Estados Unidos a redefinir su papel como garante de la estabilidad regional.

EPÍLOGO

EPÍLOGO

LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA

Por JAVIER PARDO DE SANTAYANA

La última cumbre del año se saldó con dos grandes éxitos, que corresponden a dos hechos trascendentales para la construcción europea.

El Consejo Europeo de Copenhague, celebrado los días 12 y 13 de diciembre, dio luz verde a la mayor ampliación conocida a lo largo de este complejo proceso, confirmando los resultados de la cumbre de octubre en Bruselas. Esta ampliación se materializará el 1 de mayo de 2004 y convertirá a la Unión en una potencia constituida por veinticinco países que suman una población de cuatrocientos cincuenta millones de habitantes. Polonia, el único país “grande” de los diez candidatos nominados, se hizo valer elevando sus exigencias hasta el punto de que la presidencia danesa hubo de recordarla que podría acabar siendo excluida del grupo. Al final la Unión cerró el trato otorgando a los polacos concesiones sustanciales. En cuanto a Rumanía y Bulgaria, quedaron para el año 2007 como estaba previsto. Por lo que se refiere a Turquía, ésta hubo de conformarse con una fórmula que antes había considerado inaceptable para su opinión pública, y según la cual la fecha de inicio de las negociaciones se establecerá una vez que, en diciembre de 2004, haya demostrado satisfacer los requisitos democráticos exigidos por la Unión.

La aceptación de esta fórmula por el gobierno turco es indicativa de una actitud con la que se pretende superar las reticencias que pudiera haber causado el terremoto político causado por la llegada al poder en Ankara de un partido islamista. Para mayor abundamiento, Turquía levantó sus reservas sobre “Berlín Plus”, y éste es, precisamente, el segundo

gran éxito de la cumbre de Copenhague, pues permite nada menos que la continuación del proceso de creación de la dimensión europea de seguridad y defensa, la posibilidad de que la Fuerza militar europea alcance su condición de operatividad en 2003 y que la Unión asuma finalmente la responsabilidad de las operaciones en los Balcanes, y muy concretamente, tal como se pretendía, de la “Amber Fox” en Macedonia. En cambio, no se llegó a tiempo de solucionar el problema de la reunificación de Chipre, y aunque Ankara se comprometió a adoptar una posición constructiva, la adhesión a la Unión sigue limitándose por ahora a la parte greco-chipriota de la isla.

En cuanto al problema de Iraq, la Unión se mantuvo a la expectativa de los acontecimientos, sin establecer por el momento una postura común. Alemania matizó la promesa electoral de no implicación en un eventual ataque anunciando la posible entrega en su caso de misiles “Patriot” a Israel y la autorización de vuelo y tránsito para las bases norteamericanas en su país.

En la operación “Libertad Duradera”, desarrollada en el océano Índico, buques de guerra españoles persiguieron al “So San”, un barco sin bandera e incluido en la lista de sospechosos, al que apresaron tras una fuga que exigió realizar varios disparos de advertencia. Bajo una carga de cemento, la embarcación ocultaba otra no documentada consistente en productos químicos y quince misiles “Scud” procedentes de Corea del Norte, uno de los países considerados por los Estados Unidos como pertenecientes al “eje del mal”. El destino de la carga era precisamente Oriente Próximo, es decir, una zona especialmente conflictiva y caliente por la posibilidad de que se realice una operación militar sobre Irak.

El interés norteamericano por mantener a Yemen como país amigo prevaleció sobre otras consideraciones cuando éste reclamó la carga, cerrándose la operación con la liberación del barco. Queda por saber cómo puede justificarse en este momento el despliegue de unos misiles “Scud” en un territorio tan inestable como aquél, por lo que la captura del “So San” proyecta algunas dudas respecto a la coherencia aplicada por Washington en la lucha contra la proliferación de las armas de destrucción masiva.

Las relaciones entre España y Marruecos, tensas durante una buena parte de 2002, experimentaron una ligera mejoría gracias a dos acontecimientos concretos: la devolución por parte del ministro de Asuntos Exteriores marroquí de la visita que hizo a Rabat su colega española poco

después de la crisis del islote de Perejil, y el ofrecimiento de caladeros por el monarca alauí con ocasión de la catástrofe que el accidente del petrolero “Prestige” produjo sobre las costas del norte de España. La presencia de España en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir del 1 de enero de 2003 puede tener bastante relación con estos movimientos de aproximación.

La activa reacción del gobierno español y de la comisaria europea de Transportes permitió que la cumbre de Copenhague llegase a tiempo de abordar el problema de la amenaza que representa la circulación próxima a las costas de barcos que transportan cargas potencialmente contaminantes y no reúnen las mínimas condiciones de seguridad, aprobándose un paquete de medidas encaminado a aumentar la seguridad del transporte marítimo de mercancías peligrosas. Entretanto, numerosos buques de la Unión Europea cooperaron con los españoles en las operaciones destinadas a paliar los efectos de la catástrofe del “Prestige”. Francia y España se pusieron inmediatamente de acuerdo para tomar medidas encaminadas a prohibir la circulación de barcos sospechosos a distancias próximas a las costas, y Portugal e Italia se sumaron enseguida a esta decisión.

Precisamente la defensa contra las agresiones al medio ambiente fue una de las novedades de la Revisión Estratégica de la Defensa, presentada por el gobierno español al Congreso el 19 de diciembre y cuyo horizonte se extiende hasta 2015. Esta revisión contempla las nuevas amenazas, especialmente el terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva, matizando la forma en que aquéllas afectan al empleo de las fuerzas armadas, y crea la figura de una Fuerza Conjunta de Reacción Rápida.

En el aspecto económico la gran noticia llegó el 5 de diciembre, fecha en que por fin se produjo la reducción de los tipos de interés, que habían permanecido intactos durante más de un año. La rebaja de medio punto, que situó dichos tipos en el 2,75, debe interpretarse como una decisión encaminada a activar la economía de Francia y de Alemania, y especialmente de esta última, que acentuó su atonía a medida que avanzaba el año. Para España constituye un motivo de preocupación, pues su problema no es propiamente el crecimiento, que sigue superando considerablemente a la media de los países de la Unión, sino la inflación, favorecida por la decisión tomada por el Banco Central Europeo, que rebajó también sus previsiones de crecimiento para la zona euro y pronosticó un aplaza-

miento del despegue económico hasta 2004 como consecuencia del grado de incertidumbre existente, que se refleja en una situación calificada por el mismo banco como “decepcionante”.

EUROPA CENTRO-ORIENTAL Y EURASIA

Por MARÍA ANGUSTIAS CARACUEL RAYA

Durante el mes de diciembre de 2002, los Balcanes y la Federación de Rusia han sido los principales focos de atención en el campo de la seguridad por motivos y circunstancias de muy diversa naturaleza, los cuales nos permiten abrigar sentimientos contrapuestos.

Por un lado, las elecciones presidenciales celebradas en Serbia y Montenegro, los días 8 y 22 respectivamente, han puesto de manifiesto la necesidad de realizar nuevas convocatorias en ambas repúblicas, debido a la imposibilidad de alcanzar el umbral del 50 por ciento de participación electoral. Como han revelado las conclusiones de los informes de la OSCE y de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, será necesario considerar, a corto plazo, la eliminación de este requisito en futuras consultas electorales, teniendo en cuenta el enorme coste que suponen estos fracasos para la confianza de los ciudadanos y la credibilidad internacional de ambas repúblicas yugoslavas.

En cambio, otros hechos más positivos han acontecido en la península balcánica. Por un lado, se ha alcanzado un acuerdo sobre Prevlaka, gracias a las negociaciones directas mantenidas por Croacia y la República Federal Yugoslava, que han contado también con la participación de autoridades montenegrinas y la supervisión del Secretario General/Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana. Por otro lado, se ha firmado un acuerdo de libre comercio entre Croacia y Yugoslavia, que contempla la supresión de las tasas aduaneras para el 2007. Ambos acuerdos no sólo contribuirán a reforzar la normalización de las relaciones políticas entre ambos países, sino también a elevar sus perspectivas de cooperación en el campo económico al aumentar sus intercambios comerciales y las inversiones, fomentando así la estabilidad regional.

Ha sido, sin embargo, la situación de la República ex yugoslava de Macedonia (ARYM) la que ha demandado una mayor atención por parte de las organizaciones regionales europeas y de sus Estados miembros, ante la eventualidad de que la UE asumiera la misión “Amber Fox”, liderada por la OTAN. Sin embargo, el esperado acuerdo entre la Alianza Atlántica y la UE, que permitirá el acceso garantizado de ésta última a las capacidades de planeamiento de la primera, se demoró hasta el día 16, fecha en que expiraba el mandato de la OTAN en Macedonia, y una vez celebrado el Consejo Europeo de Copenhague la semana anterior.

Aunque la UE había manifestado entonces su disposición a hacerse cargo de la operación militar en la ARYM lo antes posible (párrafo 28) y de liderar una operación militar en Bosnia como continuación de SFOR (párrafo 29), la falta de este acuerdo permanente entre la UE y la OTAN ha motivado que la Alianza prolongue su actuación en este país, respondiendo así a la solicitud de presidente Trajkovski. La nueva operación, denominada “Armonía Aliada”, tendrá un doble objetivo: apoyar la labor de los supervisores internacionales y asistir al gobierno de Macedonia a garantizar la seguridad del país. Es de esperar, por tanto, que, una vez que termine este mandato de la OTAN y concluya la elaboración de las opciones militares y de los correspondientes planes por parte de la UE, ésta asuma finalmente el protagonismo en la zona, ayudando a minimizar cualquier peligro potencial de desestabilización.

Este fenómeno, no obstante, se ha manifestado más claramente en Chechenia durante el mes de diciembre, especialmente tras los atentados perpetrados por terroristas kamikazes en la capital de Grozni, donde han muerto más de sesenta personas, y en la ciudad chechena de Argún, aunque no hubo, en esta ocasión, víctimas mortales. En definitiva, la situación en Chechenia sigue deteriorándose y corre el riesgo de entrar nuevamente en una espiral de violencia acción-reacción de difícil superación, mientras continúan las acusaciones entre el gobierno federal y la guerrilla chechena sobre las violaciones de derechos humanos y la vinculación de los esta última al terrorismo internacional.

Según han reconocido las autoridades rusas este mismo mes de diciembre, el número de bajas ocasionadas desde el año 1999 con motivo de la intervención militar de Moscú en la república independentista asciende a 14.316 por parte de los rebeldes chechenos y 4.700 por parte de las tropas federales. Sin embargo, no hay datos sobre la población civil, si bien se calcula que más de 140.000 refugiados chechenos se

encuentran en campamentos de Ingushetia, sufriendo las consecuencias de un conflicto al que no ven fin.

Aunque el Plan de Paz diseñado por Moscú para la república separatista prevé la celebración de un referéndum constitucional en marzo, al que deberían seguir la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales, resultará difícil conseguir el denominado “proceso de normalización” en la república si el Plan no permite la participación de sectores chechenos que no respaldan la violencia.

En este contexto, el papel de las Organizaciones Internacionales sigue siendo limitado. Desde la firma del Acta Fundacional en mayo de 1997, la OTAN y Rusia dejaron claro que uno de los principios que regularían las relaciones entre ambas partes sería el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los Estados. La misma posición ha mantenido la Unión Europea. A pesar de ello, sus respectivos secretarios generales, Lord Robertson y Javier Solana siguen tratando de ejercer su influencia política, haciendo especial énfasis en defender que los medios utilizados para resolver un conflicto deben ser siempre proporcionados, y ello debe servir no sólo para el conflicto de Chechenia, sino también para cualquier conflicto en el que tenga lugar una acción militar. En particular, Lord Robertson señaló, en su viaje a Moscú el día 9, que el uso de la fuerza militar debe estar acompañado de una estrategia política, pues, de no ser así, se fracasaría en el intento de resolver este conflicto.

A la OSCE, en cambio, se le presenta una excelente oportunidad para dar un nuevo impulso a la búsqueda de una solución duradera para la república norcaucásica, sobre todo si continúa defendiendo uno de los propósitos del Grupo de Asistencia, creado por la organización el 11 de abril de 1995 y cuyo mandato expiró el 31 de diciembre de 2002, a saber:

to promote the peaceful resolution of the crisis and the stabilization of the situation in the Chechen Republic, in conformity with the principle of the territorial integrity of the Russian Federation and in accordance with OSCE principles and “pursue dialogue and negotiations, as appropriate”, with a view to establishing cease-fire and eliminating source of tension.

En definitiva, una nueva decisión de la OSCE que refuerce al Grupo de Asistencia a Chechenia se presume esencial para que el Plan de paz, auspiciado por Moscú, se lleve a cabo con las garantías de satisfacer, en la medida de lo posible, las aspiraciones de ambas partes. La opinión pública internacional así lo demanda. De perderse esta nueva oportunidad en

el 2003, se llegaría a un límite muy peligroso que, si se cruza, convertiría a Chechenia, como han manifestado algunos analistas, en una segunda Palestina frente a Israel, pero en Rusia.

EL MEDITERRÁNEO

Por M^a DOLORES ALGORA WEBER

La situación en el Oriente Próximo, en lo que se refiere a la “cuestión iraquí” y la “cuestión palestina”, ha seguido agravándose con misma escalada de crispación y violencia de los meses anteriores.

Los inspectores de la Comisión de Verificación de las Naciones Unidas y la Agencia Internacional de Energía Atómica comenzaron su trabajo en los últimos días de noviembre y lo han seguido realizando en diciembre, sin haber encontrado rastros de la fabricación y almacenamiento de armas de destrucción masiva.

No obstante, los resultados de la labor de inspección han suscitado diferentes reacciones que han contribuido a elevar la tensión internacional. A pesar de que Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, terminó el mes declarando que no existían argumentos que justificasen un ataque a Iraq. La posición mantenida por los Estados Unidos no ha estado en consonancia con estas conclusiones.

La presentación del informe iraquí sobre los arsenales de armas ante el Consejo de Seguridad fue recibido con enorme escepticismo por parte de la administración norteamericana, que no dejó en manifestar sus dudas en cuanto a la veracidad de los datos y la omisión de cuestiones importantes. Pocos días después, Hans Blix, jefe de la comisión de inspectores, aseguraba que la información entregada por el régimen de Bagdad era tan sólo un poco más amplia de la conocida en 1998, cuando tuvieron que salir los inspectores del país.

Sadam Hussein, por una parte, ha cooperado para que los inspectores pudieran realizar su trabajo sin interrupciones; pero, por otro lado, los ha acusado de espiar al servicio de Estados Unidos e Israel, especialmente cuando se han solicitado listas de científicos que hubieran estado vinculados a los programas de armamentos.

Estas circunstancias han servido de telón de fondo para que el presidente Bush ponga en marcha los preparativos bélicos para desencadenar un ataque contra Iraq, dejando la decisión de su fecha de inicio para finales de enero o principios de febrero de 2003. Las tropas estadounidenses han sido trasladadas a la región del Golfo a la espera de su activación. Gran Bretaña y Francia también han comenzado sus provisiones.

El gobierno de Moscú ha endurecido sus relaciones con el régimen de Sadam Hussein como consecuencia de la recesión de contratos a tres de las principales compañías petroleras rusas. Este hecho que no juega a favor de Iraq, considerando la amenaza que para Bagdad puede significar la retirada del apoyo de la Federación Rusa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por su parte, Arabia Saudí, otra de las claves del panorama estratégico regional, aunque no se aleja de la posición norteamericana, en estos días no ha dejado de sorprender al restablecer con el gobierno iraquí la comunicación interrumpida desde la Guerra del Golfo de 1991. Todo parece apuntar a la voluntad de mediación saudí antes del estallido de un conflicto.

En relación con estas circunstancias, la oposición iraquí a Sadam Hussein se ha reunido en Londres, logrando alcanzar un acuerdo de mínimos en cuanto al futuro de Iraq, una vez derrocado el actual régimen. A pesar de la división entre los cincuenta grupos de carácter político y religioso, se ha podido llegar a la decisión de crear un comité que actué como gobierno provisional, de lo que será un gobierno multiétnico, democrático y federal. En cualquier caso, habrá que esperar para comprobar si la voluntad de mantener un Estado iraquí unido, no acabará por desvanecerse en una posible posguerra.

En definitiva, se ha ido consolidando en la opinión pública internacional la idea de que tarde o temprano habrá algún tipo de conflicto contra Iraq, a pesar del horizonte muy poco claro que todavía se aprecia en las diferentes posiciones internacionales.

La "cuestión palestina" ha seguido manchada por la oleada de atentados suicidas palestinos y la respuesta israelí en los territorios de la Autoridad Nacional.

Al comenzar el mes, el primer ministro Ariel Sharon volvió a retomar la decisión de crear un Estado palestino. Sin embargo, el plan ofrecido por el político israelí fue rechazado por Yasser Arafat, pues según manifestó el portavoz en las negociaciones, Saeb Erekat, se volvía a ofrecer un acuerdo interino sobre el futuro de Palestina.

Yasser Arafat pidió a la red Al Qaeda y a Osama Ben Laden que dejen de ocultarse tras la causa palestina, pues la incitación de los jóvenes a llevar a cabo atentados contra la población israelí, actúa en contra de los intereses palestinos.

Hemos seguido asistiendo a la ocupación de los territorios palestinos por parte del ejército israelí, valiéndose de excavadoras, tanques y helicópteros y ocasionando víctimas civiles inocentes. En cifras el año termina con algo más de 2.778 muertos desde el inicio de la segunda Intifada en septiembre de 2000, de los cuales 2.049 fueron palestinos y 680 israelíes.

El llamado Cuarteto de Madrid (Estados Unidos, Rusia, Unión Europea y Naciones Unidas) ha vuelto a pedir el fin de la violencia y la retirada israelí de los territorios palestinos, sin embargo no ha pasado del plano de las declaraciones.

El presidente palestino en este contexto ha suspendido con carácter indefinido la celebración de las elecciones previstas para enero de 2003, pues las condiciones actuales hacen imposible la celebración de los comicios.

Estados Unidos sigue centrando su atención en el tema iraquí y ante un posible conflicto generalizado en el Oriente Próximo y Oriente Medio, una vez más, ejerce su respaldo al Estado de Israel poniendo al límite la legislación internacional. Durante este mes el Consejo de Seguridad ha emitido una resolución condenatoria de Israel por la muerte de tres miembros de las Naciones Unidas en los territorios palestinos durante el mes de noviembre. La resolución acusaba al gobierno israelí del uso desproporcionado de la fuerza y la destrucción de un depósito del Programa de Alimentos de las Naciones Unidas en Gaza, resultando muertos tres responsables del organismo internacional. Aprobada la resolución en el Consejo de Seguridad por doce votos, incluido el de Gran Bretaña, Estados Unidos decidió ejercer su derecho a veto, dejando en evidencia la legislación de los Convenios de Ginebra sobre víctimas civiles de organismos de carácter humanitario. Por otra parte, G. Bush ha rebajado el estatuto de la oficina de la OLP en Estados Unidos, dejándolo pendiente de revisión en el transcurso de seis meses.

En otro orden de cuestiones, durante el mes de diciembre también hemos asistido a la ciertos avances en lo que se refiere al panorama turco, tanto en lo referido a su política interna como a su relación con la Unión Europea.

El parlamento turco ha votado a favor de una enmienda constitucional, ratificada por el presidente de la república A.N. Sezer, que permita el ascenso de R.C. Erdogan al cargo de primer ministro. Así ha quedado solucionada la situación sobrevenida a raíz de las elecciones del mes de noviembre, en las cuales alcanzó la victoria el Partido Justicia y Desarrollo, pero quedó imposibilitado para su puesto el líder principal al pesar sobre él desde 1998 una condena que le prohibía ocupar cualquier cargo público por incitación al odio religioso. En febrero de 2003 podrá sustituir en el cargo al actual primer ministro Abdullah Gul.

En cuanto a las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, el gobierno de Ankara ha aprovechado la Cumbre de Copenhague para obtener del Consejo de Europa una fecha para la evaluación de su candidatura. Después de intensas gestiones diplomáticas con los responsables europeos, Turquía ha conseguido comprometer la fecha de diciembre de 2004, aunque sus intenciones han quedado claras al anunciar su voluntad de realizar todos los esfuerzos para que los criterios de la Unión Europea se hayan alcanzado mucho antes, en octubre de 2003.

La situación de Turquía ha impulsado el tema de la “cuestión de Chipre”. El gobierno turco se ha mostrado dispuesto a resolver la división de la isla, esperando una respuesta satisfactoria de sus futuros socios europeos. Sin embargo, aunque ha sido bien recibida esta decisión, se ha evitado que sirva de condición o palanca de presión sobre la Unión Europea, que no ha considerado la unificación como condición imprescindible para el ingreso de la República de Chipre. Grecia, por su parte, también ha flexibilizado su posición respecto a este contencioso, accediendo a acogerse al Plan de Arreglo que en estos momentos tienen previstas las Naciones Unidas.

Las relaciones bilaterales de España con Marruecos han experimentado una mejora durante el mes de diciembre. Los respectivos ministros de Asuntos Exteriores, Ana Palacio y Mohamed Benaissa, se reunieron en Madrid. Con este encuentro quedó satisfecha la visita que debía haberse realizado en el mes de septiembre. Fue clara la voluntad de normalizar las relaciones entre ambos Estados, aunque no se ha determinado la fecha para el retorno de los embajadores.

A raíz de la catástrofe ecológica que ha supuesto el hundimiento del petrolero “Prestige” en las costas gallegas, el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha abierto los caladeros marroquíes a los pesqueros españoles para que puedan faenar en sus aguas. El gobierno de Madrid lo ha entendido

como un gesto de buena voluntad, que esperemos surta sus efectos en la mejora de las relaciones con el gobierno de Rabat.

IBEROAMÉRICA

Por MARCELINO DE DUEÑAS FONTÁN

Durante el mes de diciembre tuvieron especial relevancia los sucesos en *Venezuela*. La cuarta huelga general a que hizo frente Chávez en el plazo de un año se inició el día 2 y tiene carácter indefinido, de modo que continúa al terminarse 2002. Convocada por los partidos de oposición, agrupados en la Coordinadora Democrática, fue secundada por los principales sindicatos de empresarios, Fedecámaras, y de trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). La huelga pretende encontrar una salida pacífica, democrática y electoral a la grave crisis que asola el país: violencia, corrupción, una funesta gestión económica y una clase política desacreditada.

La oposición había presentado más de tres millones de firmas solicitando un referéndum sobre la continuidad de Chávez, a lo que éste se opone. Sin embargo, el Consejo Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, aprobó convocar el referéndum consultivo el 2 de febrero. La pregunta será: “¿Está usted de acuerdo en solicitar al presidente de la República, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, que de manera inmediata renuncie voluntariamente a su cargo?”.

El Secretario General de la OEA y ex presidente de Venezuela César Gaviria, poniendo en práctica una iniciativa de la OEA, asumió la presidencia de una mesa de negociación cuyo objetivo es pactar entre las partes una salida electoral.

La presión creciente en las calles animó a Chávez a utilizar, el día 6, un número indeterminado de pistoleros y francotiradores, que hicieron fuego contra los manifestantes y causaron varias víctimas.

El prestigioso periodista español Luis María Ansón, en un breve artículo en el periódico *La Razón*, que dirige, del día 8 de diciembre, titulado “*Chávez, el castrista asesino*”, indica que es la segunda vez que Chávez

envía a los pistoleros de los *círculos bolivarianos* a dispersar a tiros una manifestación popular. Denuncia los procedimientos estalinistas de Chávez, claramente expuestos en sus directrices: “No se permite defender ninguna ideología que fortalezca a la ya desaparecida democracia”, “A los que se oponen hay que combatirles con las armas del terror”. Define a Chávez como protector de etarras, mecenas de la guerrilla colombiana y el hombre que ha armado a los *círculos bolivarianos*, milicianos procomunistas dispuestos a matar para no perder sus prebendas.

Para contrarrestar el efecto de la huelga en la economía de Venezuela, sobre todo en el importante sector petrolífero, Chávez ordenó al Ejército el asalto a los buques petroleros, lo que contribuyó a alejar algo el espectro de la hambruna. El día 16 la Policía utilizó fuego real contra la primera manifestación conocida como “*trancazo*”, de bloqueo de Caracas, de la que hubo varias ediciones posteriores.

Para ganar tiempo, Chávez insiste en que el plebiscito derogatorio debe celebrarse, de acuerdo con la Constitución, a mediados de su mandato, es decir, en agosto de 2003. Ignora con ello que la ley puede también modificarse para adelantar la consulta, pues es igualmente cierto que él ha introducido modificaciones sustanciales en la Constitución desde su llegada al poder para adaptarla a sus prácticas totalitarias, incluida la invasión de los poderes legislativo y judicial.

El Secretario General de los sindicatos venezolanos (CTV), Manuel Cova, en entrevista concedida a ABC publicada el día 23 de diciembre explica, contradiciendo claramente las tesis de los nostálgicos del comunismo, que en Venezuela hay un 70 por ciento de pobres y que el apoyo a Chávez no llega al 25 por ciento, por lo que no es cierto que todos los pobres lo voten. Quizás el 50% de los pobres sea una cifra más realista. Según declaró a la BBC el ex ministro de Exteriores Miguel Angel Burelli Rivas al menos el 80% de los venezolanos está contra Chávez.

De momento, se sigue manteniendo el apoyo de los militares a Chávez. Las Fuerzas Armadas, que han estado tradicionalmente por encima de las rivalidades de partido, parecen ahora politizadas, aunque no está claro cuál puede ser su actitud si llega a producirse un enfrentamiento civil.

Aunque la mesa negociadora puede estar próxima a alcanzar una solución pactada, lo cierto es que la oposición se prepara para la toma por el

pueblo del Palacio presidencial de Miraflores, para la que baraja las fechas del 23 de enero y el 2 de febrero, en coincidencia esta segunda con el previsto referéndum consultivo, cuya celebración se duda pueda llevarse a cabo.

Otras cuestiones de interés producidas durante el mes de diciembre afectaron a *Argentina, Brasil, México y Ecuador*.

En *Argentina*, el 2 de diciembre el Gobierno puso fin al “corralito”, y los argentinos pudieron empezar a retirar casi los dos tercios de los depósitos que se encontraban congelados (unos 5.800 millones de dólares), si bien sigue bloqueado el “corralón”, que se refiere a los depósitos transformados en depósitos a plazo fijo (algo más de 3.000 millones de dólares). La tranquilidad general y la estabilidad del peso fueron las notas más destacadas. Al terminarse el año, parece que el acuerdo con el FMI está muy próximo.

En *Brasil*, Luiz Inacio Lula da Silva tomó posesión como presidente de la República el 1 de enero. Asistieron a la ceremonia gran número de dignatarios iberoamericanos y el Príncipe de Asturias.

El 11 de diciembre, tras once años de negociaciones, *Chile* y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para firmar un Tratado Bilateral de Libre Comercio (TLC). El acuerdo abre las puertas a un futuro espacio de libre comercio (ALCA) en todo el continente, que se empezará a negociar en 2003 y se espera esté concluido en 2005.

El presidente electo de *Ecuador*, coronel retirado Lucio Gutiérrez, realizó una visita a España y el día 20 de diciembre fue recibido por Su Majestad el Rey y por el presidente Aznar. En declaraciones hechas en Madrid se definió como apartidista, dialogante, patriota, social y profundamente cristiano. Añadió que sus valores son los que enseña la religión cristiana: la libertad, la justicia y la paz. Confesó que le molestaban las comparaciones maliciosas con Hugo Chávez y que ni siquiera había hablado con él por teléfono, ni con Castro.

Esperemos que no surjan nuevos dirigentes que cedan a tentaciones totalitarias y que en los países en los que existen dichos sistemas se dé paso pronto a opciones democráticas.

ÁFRICA

Por ALEJANDRO CUERDA ORTEGA

República Democrática del Congo (RDC)

Después de los iniciales acuerdos alcanzados en julio entre el presidente de la nación, Joseph Kabila, y los de Uganda y Ruanda, y con los líderes de los distintos partidos y facciones enfrentados, el 18 de diciembre se firmaba, también en Pretoria, un nuevo acuerdo para la pacificación y democratización del país. En él se establece un período de transición de dos años, durante el cual seguirá Kabila siendo el presidente de la nación y compartirá la dirección del país con cuatro vicepresidentes designados del siguiente modo: dos, representantes de los dos partidos principales, el RCD (Agrupación Congoleña para la Democracia) y el MLC (Movimiento para la Liberación del Congo); un representante de la oposición no armada y uno por la sociedad civil. Además, los firmantes se repartían las carteras del gobierno de transición a razón de siete por cada uno de ellos y recibían la misión adicional y básica de preparar la celebración de elecciones generales para el 2004.

La precariedad y fragilidad de esta situación, ya comentada anteriormente, quedó confirmada por nuevas manifestaciones de mal presagio: el líder del RCD, Adolfo Onusumba, solicitó mil soldados bajo su control para garantizar la seguridad de su grupo, lo que el Jefe de la MONUC calificó de “receta para el caos”; y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, en una entrevista que le realizaba el “Financial Times”, preguntado sobre la posibilidad de la vuelta de su ejército a la RD Congo, respondía: “No lo excluyo; y no pediremos permiso a nadie para hacerlo. Los hechos sobre el terreno dictarán nuestra acción”, alegando, de nuevo, razones de seguridad para su nación mientras existan disidentes ruandeses refugiados en la nación vecina.

Costa de Marfil

Al finalizar el año continuaba la situación de inestabilidad iniciada con el levantamiento militar e intento de golpe de estado de septiembre, con acusaciones de culpabilidad por ambas partes. Después de varios intentos de la CEDEAO y de Francia por alcanzar un acuerdo de paz, el 1 de

noviembre, en Lomé (Togo) y alentados por el presidente de esta nación, Eyadema, los insurrectos y el gobierno llegaron a un principio de acuerdo para amnistiar a los 750 militares amotinados, manteniéndoles en sus empleos. Pero no quedó resuelta la grave situación de la región norte del país, en poder de los rebeldes y del Islam; y aún más difícil de lograr resultaban las condiciones impuestas por los disidentes al exigir la dimisión del presidente Gbagbo, la redacción de una nueva constitución y la celebración de elecciones.

Nueve días más tarde volvían a romperse las conversaciones y a reanudarse los enfrentamientos armados, que continuaban a final del año; el 31 de diciembre, un ataque de un helicóptero del gobierno causaba la muerte de doce personas, rompiendo así una débil tregua acordada días antes para esos días navideños.

Francia ha seguido manteniendo su apoyo al gobierno de Gbagbo y ha logrado que se acepte su propuesta de un nuevo encuentro de todas las partes, en París, el 15 de enero próximo.

Guinea Ecuatorial

El 15 de diciembre celebró elecciones presidenciales, anticipadas por Teodoro Obiang Nguema a esta fecha las que estaban previstas para el año 2003. Pocas dudas existían, antes de su celebración, sobre el resultado de las mismas, plenamente favorable a su dirigente, a la vista de las circunstancias concurrentes: las elecciones anteriores las había ganado con un 99% de votos favorables; un régimen de estrecho control y vigilancia de los disidentes; el líder de la oposición encarcelado seis meses antes, juntamente con otros 60 adversarios políticos; restricciones de entrada a la prensa internacional; y sospechosa declaración por el gobierno del censo oficial de habitantes, que arrojaba la cuantía de 1.014.999 habitantes, cuando en el año anterior se daba por buena la cifra de 500.000.

Tres horas después de abiertos los colegios electorales, los 4 partidos de la oposición anunciaron su retirada del sufragio alegando anomalías e irregularidades, entre otras el que en el 90% de las mesas se realizase la votación de forma pública y no secreta, lo que supuso que el recuento de votos fuese 100% favorable a Obiang Nguema en la mayoría de los colegios electorales y que, en algún caso, el presidente de la mesa fuese arrestado al tratar de imponer el voto secreto.

El ministro del Interior y presidente de la Junta Electoral, después de calificar de “ilegal” la retirada de la oposición, anunciaba el resultado de un 99% favorable al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, lo que supone otros siete años de mandato para Teodoro Obiang Nguema.

Kenia

El final del año en esta nación ha proporcionado dos noticias de marcado interés: el 28 de noviembre se producía un ataque terrorista en Mombasa contra un avión israelí, en el momento de su despegue, con dos misiles que no lo alcanzaron, y contra un hotel regularmente utilizado por turistas israelíes, en el que murieron 13 personas y hubo más de 80 heridos. Estas acciones fueron reivindicadas por el grupo terrorista Al Qaeda, que en repetidas ocasiones ha amenazado los intereses israelíes tanto como los norteamericanos.

Es de recordar que ya en agosto de 1998 fueron atacadas las embajadas de los EEUU en Nairobi y en Dar-es-Salam, causando entonces 224 muertos, acciones que igualmente fueron adjudicadas al grupo Al Qaeda. La elección de Kenia por estos terroristas se explica no solamente por la presencia habitual allí de israelíes sino por su proximidad a las zonas y naciones donde se sabe existen facciones de esta organización criminal, como es el Cuerno de África y Yemen.

La otra noticia es que en 27 de diciembre se celebraron en Kenia elecciones presidenciales para poner fin al mandato ininterrumpido de 24 años de Daniel Arap Moi. Pese a los múltiples casos de corrupción que convivían con el gobierno de Arap Moi, Kenia se distinguía, entre las naciones vecinas, por su estabilidad política y su pacífica vida social, algo sorprendente al estar rodeada de naciones largamente atormentadas por la inestabilidad o los crueles conflictos armados, como son los casos de Somalia, Sudán, RD Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Etiopía, Eritrea y Zimbabue.

Los dos aspirantes a la presidencia de la nación, Uhuru Kenyatta —hijo del primer presidente del país y candidato del cesante Arap Moi— y el favorito Mwai Kibaki, de 71 años, son personas de talante moderado y que habían hecho de la lucha contra la corrupción la bandera de sus campañas electorales, así como de su decidida voluntad de sanear la maltrecha economía nacional; se calcula que más de la mitad de su población, de 30 millones de habitantes, sobrevive con menos de un euro al día, y que el 10% está infectada por el SIDA.

Las elecciones se desarrollaron de forma pacífica y ejemplar. Antes de finalizar el recuento ya se daba por vencedor a Kibaki, como así resultó, con un 63% de los votos, poniendo fin a la larga hegemonía del partido KANU (Unión Nacional Africana de Kenia). En sus iniciales declaraciones dijo “lo primero es acabar con la corrupción, mostrar nuestro patrimonio y de dónde procede, establecer una institución anticorrupción y reducir el tamaño del funcionariado”.

La UE ha mostrado su satisfacción por el resultado y ha manifestado que reanudará en breve la ayuda a este país africano.

El control de la inmigración en España

Al finalizar 2002, el gobierno español ha dado a conocer algunos datos de interés referidos a la inmigración africana: 74.000 inmigrantes ilegales han sido objeto de devolución a sus países de origen, lo que supone un incremento del 58% con respecto al año anterior. Asimismo fueron desarticuladas 735 redes de traficantes de seres humanos, con 2.070 integrantes de estas redes arrestados, un incremento del 69,25% sobre 2001.

ASIA

Por FERNANDO DELAGE CARRETERO

Durante las últimas semanas de 2002, la tensión en la península coreana fue la principal preocupación con respecto a la seguridad asiática. El 12 de diciembre, Pyongyang anunció la reactivación de su programa nuclear, congelado desde 1994. El anuncio se produjo como respuesta a la decisión de Estados Unidos de suspender los envíos de fuel-oil a Corea del Norte, tras la admisión por ésta (en octubre) de haber continuado en secreto con un programa de enriquecimiento de uranio.

Los observadores coinciden en interpretar la decisión como un intento de forzar a Estados Unidos a volver a la mesa de negociaciones: “Depende totalmente de EE UU que construyamos o no nuestras instalaciones nucleares”, decía el comunicado oficial. Pero Washington continúa rechazando todo diálogo mientras Pyongyang no se comprometa a su desarme nuclear; mientras tanto EEUU mantendrá su política de sanciones. Para algunos

analistas, la quiebra económica de Corea del Norte es la manera más rápida y segura de obtener su desarme, pero plantea también considerables riesgos: Pyongyang podría recurrir al uso de la fuerza si se siente amenazado. Alguna fórmula de compromiso parece inevitable, aunque la cuestión es quién dará primero marcha atrás en su escalada retórica.

La declaración se produjo días antes de las elecciones presidenciales de Corea del Sur, el 19 de diciembre, donde los principales candidatos se diferenciaban por sus actitudes hacia el Norte. El vencedor fue Roh Moo Hyun, del gobernante Partido Democrático del Milenio, que mantendrá la política de acercamiento (*sunshine policy*) hacia Pyongyang impulsada desde 1997 por su antecesor, Kim Dae Jung. Estados Unidos confiaba en que el ganador fuera el candidato de la oposición, Lee Hoi Chang, partidario de una línea más dura hacia el régimen norcoreano. Ese apoyo de Washington probablemente haya contribuido a reforzar el clima de creciente antiamericanismo que se respira en el país y orientado a los votantes más jóvenes hacia Roh, defensor de una mayor independencia en política exterior.

La tensión continuó en las semanas siguientes con el despliegue por Corea del Norte de ametralladoras en la zona desmilitarizada —en violación del acuerdo de armisticio que puso fin a la guerra de Corea en 1953— y con el abandono el 31 de diciembre de los tres inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica que se encontraban en el país: Pyongyang anunció que desmantelaba los precintos y las cámaras de vigilancia instaladas por la AIEA en sus centrales nucleares, además de amenazar con su retirada del tratado de no proliferación nuclear.

China, Corea del Sur y Japón insistieron en la necesaria desnuclearización de la península, pero todos ellos aseguraron que mantendrían sus propios canales de diálogo con el régimen de Kim Jong Il (ni Pekín ni Seúl quieren afrontar la crisis humanitaria que provocaría un colapso económico de Corea del Norte). Ésta acusaba a Estados Unidos de colocar la península al borde del abismo y aseguraba disponer de “medios de defensa y ataque capaces de vencer al enemigo”. Así las cosas, crecía la preocupación de que Washington tenga que hacer frente a un segundo frente militar cuando se encuentra embarcado en los preparativos para un posible ataque contra Irak. El 7 de enero, mientras Pyongyang calificaba las sanciones norteamericanas como una declaración de guerra, el departamento de Estado de Estados Unidos, tras una reunión con diplomáticos japoneses y surcoreanos, reiteraba su disposición a dialogar si Corea del Norte renuncia a sus bombas atómicas.

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

Coordinador: D. JAVIER PARDO DE SANTAYANA Y COLOMA

*Teniente General del Ejército de Tierra (2ª Reserva)
Diplomado de Estado Mayor por las Escuelas española y
norteamericana.*

*Diplomado de Estado Mayor por las Escuelas española y
norteamericana.*

*Fue el primer Jefe de la Misión española ante el
Comandante Supremo de Europa, Jefe del Estado Mayor
Conjunto, Jefe de Tropas y Gobernador Militar de Las
Palmas de Gran Canaria, Jefe de la Región Militar
Pirenaica Occidental y Director del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional.*

*Es conferenciante sobre temas internacionales, estratégi -
cos y militares, articulista y colaborador de destacadas
publicaciones militares y culturales y colaborador del
IEEE.*

Vocal de EuroDéfense-España.

Secretario: D. FERNANDO DE LA GUARDIA SALVETTI

*Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada (Rv.)
Diplomado en Guerra Naval y Estado Mayor Conjunto en
España y EEUU.*

Ha sido Chairman del Naval Board (NATO)

*Actualmente, destinado en el Instituto Español de
Estudios Estratégicos.*

*Ha escrito artículos y análisis fundamentalmente navales
en revistas de historia naval.*

Vocales: D. RAMÓN ARMENGOD LÓPEZ

Embajador de España

Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas.

*Embajador de España en Kuwait y Emiratos Árabes
Unidos (1972-1976); Cónsul General en Jerusalén (1981-
1984); Embajador de España en Jordania (1987-1991);
Director de la Escuela Diplomática (1991-1994).*

*Profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la U.C.M. y de la Escuela Diplomática.
Miembro del Club de Roma y Vicerrector de la Sociedad de Estudios Internacionales.*

D^a MARÍA ANGUSTIAS CARACUEL RAYA

*Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido investigadora de la Asamblea del Atlántico Norte, del Instituto de Estudios de Seguridad de la UEO y de la OTAN.
Ha participado en el programa de estudios de seguridad de la United States Information Agency (USIA) del Departamento de Estado de EEUU, y en el programa TEMPUS (Trans-European Mobility Program for University Studies) de la UE en países de Europa Centro-Oriental.
Actualmente, es Analista Internacional de Seguridad y Defensa en la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL).
Ha escrito diversos libros y artículos sobre seguridad y defensa europea.*

D^a MARÍA DOLORES ALGORA WEBER

*Doctora en historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid.
Profesora Adjunta de Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU.
Diplomada en el Curso de Relaciones Internacionales de la Sociedad de Altos Estudios Internacionales.
Master en Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario “Gutierrez Mellado” de la UNED.
Observadora de la Unión Europea en las elecciones palestinas (1996) y Supervisora de la OSCE en Bosnia Herzegovina (1996, 1997 y 1998).
Es autora del libro “Relaciones Hispano-Árabes durante el Régimen de Franco. La ruptura del aislamiento internacional: 1946-1950”. (Madrid, 1996).*

D. FERNANDO DELAGE CARRETERO

*Subdirector de la Revista "Política Exterior".
Profesor de Seguridad en Asia-Pacífico en el Instituto
Universitario General Gutierrez Mellado.
Enseña regularmente sobre Asia en la Universidad
Complutense, En la Escuela Diplomática y en la Escuela
de las Fuerzas Armadas.
Ha sido durante 2002 profesor invitado en la Universidad
Nacional de Yokohama (Japón).
Es autor de diversas publicaciones.
Ha sido coeditor de la publicación "El nuevo orden inter -
nacional en Asia-Pacífico" (2002).*

D. MARCELINO DUEÑAS FONTÁN

*Contralmirante del Cuerpo General de la Armada (Rv.).
Diplomado en Guerra Naval.
Ha sido Subdirector General de Asistencia Sanitaria y
Acción Social (Ministerio de Defensa).
Jefe del Órgano Auxiliar de la Jefatura de Apoyo
Logístico y Director de Infraestructura de la Armada.
Actualmente es colaborador del IEEE.*

D. ALEJANDRO CUERDA ORTEGA

*Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada (Rv.).
Diplomado en Guerra Naval y Estado Mayor Conjunto.
Ha realizado el Curso de Mando Naval en el Colegio de
Guerra de la USN, en Newport (R.I.) USA y el del
Colegio de Defensa de la OTAN (Roma).
Ha sido Secretario del Comité Permanente Hispano-
Norteamericano y Agregado Naval en Londres.
Ha estado destinado en el Instituto Español de Estudios
Estratégicos (1992-1999) y actualmente es colaborador
del mismo.*

ÍNDICE

	<u>Página</u>
SUMARIO.....	9
INTRODUCCIÓN	11
<i>Capítulo I</i>	
PANORAMA ESTRATÉGICO MUNDIAL 2002/2003	15
Preámbulo	17
La grandeza de Norteamérica.....	18
– Consecuencias del 11 de septiembre de 2001	20
La relación Europa-Norteamérica en 2002	23
– Las percepciones contrapuestas mutuas	25
Conclusión.....	28
Acontecimientos en el año 2002.....	28
Política exterior de España en el año 2002	30
– La presidencia española de la U.E.	30
– Formulación actual de la política exterior de España	35
<i>Capítulo II</i>	
LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA.....	41
Impresión general	43
La Cumbre de Barcelona (15 y 16 de marzo)	52
La Cumbre de Sevilla (21 y 22 de junio)	54
La Cumbre de Bruselas (24 y 25 de octubre) y la presentación de los trabajos de la Convención	58
El año estratégico español	59

Capítulo III

EUROPA CENTRO-ORIENTAL Y EURASIA	63
Introducción.....	65
Los países bálticos en el umbral de las instituciones europeas	67
Europa Centro-Oriental: entre la esperanza y la incertidumbre de integración	69
Europa Suroriental: entre la consolidación democrática y la lucha por la supervivencia del Estado	71
La Comunidad de Estados Independientes: en búsqueda de un nuevo marco estratégico.....	75
– La Federación de Rusia como “Gran Potencia”	76
– Bielorrusia: ¿nuevo “Estado fallido”?	78
– Ucrania en transición	79
– Moldavia y su búsqueda de identidad nacional.....	81
– Las Repúblicas Caucásicas y sus conflictos anquilosados.....	82
– Las Repúblicas Centroasiáticas: nuevas demandas y necesidades de seguridad.....	83
La contribución de España a la estabilidad de la región euroasiática	87

Capítulo IV

EL MEDITERRÁNEO	89
Oriente próximo: del orden Mediterráneo al orden mundial.....	95
– La “cuestión iraquí”	97
– La “cuestión palestina”.....	100
– Las relaciones con Irán.....	106
El proceso euromediterráneo	106
El triángulo magrebí (Marruecos, Argelia, El Sahara) y España	108
– El Sahara Occidental	108
– Marruecos.....	110
– Argelia.....	115
Turquía entre el contencioso de Chipre y la Unión Europea	116

Capítulo V

IBEROAMÉRICA	119
Generalidades	121
Situación en México	122

Situación en América Central y el Caribe	124
Situación en la comunidad andina	128
Situación en Mercosur más Chile	134
El esfuerzo militar	140
Las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea	142
La XII Cumbre Iberoamericana	143
España e Iberoamérica	144
Observaciones finales	146

Capítulo VI

ÁFRICA	149
Presencia occidental en África	155
Emigración a España	161
La Cumbre de Monterrey	163
La Cumbre de Johannesburgo	164
Nuevos organismos en África	166
El petróleo en África	169
Comentario	171
Dos guerras acaban (de momento) y una empieza	172
— Angola.....	172
— República Democrática del Congo (RD Congo).....	174
— Costa de Marfil	178
Guinea Ecuatorial	179

Capítulo VII

ASIA.....	183
Introducción.....	185
Noreste Asiático	190
— China.....	190
— Taiwan	194
— Japón	194
— Las dos Coreas.....	198
Sureste Asiático.....	201
Asia meridional	204
— India	204
— Pakistán	205

	<i><u>Página</u></i>
– Cachemira.....	207
Conclusiones.....	208
EPÍLOGO.....	211
COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO	231